

ELECCIONES, PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS EN PERSPECTIVA COMPARADA

Juan Bautista Lucca, Cintia Pinillos,
María Laura Sartor Schiavoni
y Esteban Iglesias
COMPILADORES

Organiza: Cátedra de Elecciones y Partidos Políticos. Cátedra de Política Comparada I y Centro de Estudios Comparados (CEC)





Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada /
Santiago Tomás Antunes ... [et al.] ; Compilación de Cintia Pinillos ... [et al.]. -
1a ed. - Rosario : UNR Editora, 2024.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-702-653-5

1. Elecciones. 2. Partidos Políticos. 3. Ciencia Política. I. Antunes, Santiago
Tomás II. Pinillos, Cintia, comp.

**DISEÑO DE TAPA, EDITORIAL
Y DIAGRAMACIÓN**

Eugenia Reboiro

eugenia.reboiro@gmail.com



ÍNDICE

PRÓLOGO: Partidos políticos, elecciones y el riesgo de obsolescencia democrática Marcelo Mella Polanco	6
SECCIÓN I: ELECCIONES	11
La reconfiguración del panorama electoral mexicano y su impacto en 2024 Jaime Aragon Falomir	12
La agenda electoral en la campaña presidencial de Argentina 2023 Lisa Cavanagh, Julia Davalle, Juan Manuel Cabrera y Mariana Vera	24
La derecha radical como opción electoral competitiva en Argentina 2023 Esteban Iglesias	43
Las elecciones argentinas para gobernador/a durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019) Juan Bautista Lucca	57
¿El regreso del bi-coalicionismo? Reconfiguración partidaria y alternancia: una mirada al proceso electoral santafesino del 2023 María Laura Sartor Schiavoni y Enrique Tschieder	84
SECCIÓN II: PARTIDOS	100

El Movimiento Al Socialismo: de la oposición al gobierno Santiago Tomás Antunes	101
“Rusia Unida” como un caso de Partido Hegemónico Juan Manuel Cabrera	113
La Izquierda Democrática y su rol en el sistema ecuatoriano Martina Coloschi	121
CONDEPA y su nueva forma de hacer política en Bolivia Lucía Galli	133
Evolución y adaptación del Frente Amplio en Uruguay para llegar al gobierno nacional (1971-2004) Cecilia Gallo	154
La Unión Demócrata Independiente en Chile: del gremialismo en la dictadura a su fuerza política en democracia Manuela Losada	167
La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación en Argentina: un análisis desde las caras de los partidos Florentina Martoccia	179
El MAS como instrumento político diferenciado: desafiando el paradigma de los partidos tradicionales Rocío Oelschlager	190
El camino del Frente Amplio hacia la victoria del 2004 en Uruguay Lucía A. Pérez de Urrechú	205
El origen del Movimiento Quinta República en Venezuela: atravesando tensiones políticas, sociales y económicas Juliana Piccoli	218

La fisonomía de la Unión del Centro Democrático entre 1983 y 1989 en Argentina Valentina Puricelli	230
La experiencia de la ANAPO en Colombia Ornella Ripani	242
FREPASO: los problemas de una coalición anclada en el personalismo Tiziana Zanello	254
SECCIÓN III: SISTEMAS DE PARTIDOS	269
Análisis de los Sistemas de Partidos de Paraguay y Brasil (1998-2010) Abril Espinosa Viale	270
Los Sistemas de Partidos desinstitucionalizados en Perú (1978-2000) y Ecuador (1978-2002) Belén García Zanini	283
El Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido por la Revolución Democrática de México como partidos desafiantes de oposición en los años '90 Isabella Nardi	295
Un estudio sobre los cambios en los sistemas de partidos políticos en Chile (1989-2009) y Brasil (2002-2018) Amparo Rodríguez	309
Partidos desafiantes: el Partido de los Trabajadores (Brasil) y el Frente Amplio (Uruguay), un estudio comparado Pilar Vilches Giovanardi	321
EPILOGO: Hay que comparar para comprender Karolina Gilas	332

PRÓLOGO: PARTIDOS POLÍTICOS, ELECCIONES Y EL RIESGO DE OBSOLESCENCIA DEMOCRÁTICA

Marcelo Mella Polanco
(Universidad Santiago de Chile, Chile)

Entre 1974 y 1989 el mundo vivió una expansión extraordinaria de la democracia en lo que Samuel Huntington denominó la “Tercera Ola” de democratización. Este ciclo iniciado con la Revolución de los Claveles en Portugal y cerrado con la caída de los regímenes comunistas en 1989, contribuyó a un optimismo académico y político predominante, ya fuera, por la “superioridad moral” del concepto emergente de democracia o por su notable capacidad de adaptación e innovación, que le otorgaba una “superioridad funcional” para responder a los conflictos. Según Robert Dahl y Peter Bachrach, la democracia constituiría el mejor dispositivo para reducir complejidad social mediante mecanismos representativos y por su efectividad en sociedades plurales y fragmentadas.

La literatura académica especializada reflejó este optimismo, centrando su mirada en las precondiciones que determinarían la sobrevivencia del sistema democrático y su capacidad de enfrentar las crisis. Mejorando estas precondiciones, la democra-

cia funcionaría como un dispositivo “autoejecutable”. Algo así como un mecanismo que podría autocorregirse mediante la incorporación de evidencia. Precisamente, durante esta “momento primaveral”, que para América Latina se desarrolló desde la década de 1980 con las transiciones desde los Estados Burocrático Autoritarios, la democracia fue entendida como un sistema ideológica y funcionalmente superior. En concordancia con el pensamiento tecnopolítico del período, Adam Przeworski definió la democracia, como un mecanismo de resolución de conflictos que producía “soluciones contingentes”, favoreciendo el acatamiento de los actores y contribuyendo a la estabilidad y el orden social.

Análisis referidos a los gobiernos democráticos en América Latina entre 1980 y 2000, presentaban evidencia prometedora sobre la superioridad funcional de la democracia para enfrentar crisis y eventos inesperados (Cisnes Negros). Los trabajos de Aníbal Pérez Liñán mostraron como las crisis que anteriormente culminaban en quiebres del régimen democrático, después de la década de los 80, se resolvieron mayoritariamente dentro de las reglas del juego, mediante el mecanismo del juicio político o la acusación constitucional según fuera el caso, pudiendo llegar a interrumpir gobiernos, pero sin poner en riesgo la continuidad de las instituciones. Otros autores que examinaron los presidencialismos de coalición en América Latina como Octavio Amorim Neto, Carlos Pereira y Timothy Power, concluyeron que las cuotas minoritarias del ejecutivo en el congreso y los gobiernos divididos no necesariamente constituían una condición política terminal. Dependiendo del uso de los recursos de poder presidencial, por ejemplo, la llamada “caja de herramientas” era posible construir condiciones para un buen gobierno dotado de efectividad legislativa.

En este contexto, las “líneas rojas” para la sobrevivencia y duración de las democracias estaban determinadas por la gestión de las coaliciones en gobiernos minoritarios y en ciertos prerrequisitos o precondiciones. Autores como Gerardo Munck y Jack Corbett identificaron precondiciones relevantes que determinaban la estabilidad de la democracia y su trayectoria de desarrollo. Una condición que aparecía latamente mencionada como determinante fue el desarrollo económico mediante variables como la desigualdad por ingreso y la desigualdad percibida, la inflación, los niveles de endeudamiento, la pobreza y las diferentes mediciones de vulnerabilidad. Otras perspectivas también relevantes consistieron en el análisis tributario de S.M. Lipset sobre el fortalecimiento de la clase media y su rol en el desarrollo de la democracia, la expansión de valores democráticos, la efectividad de la democracia como resultado de la arquitectura institucional y el diseño de las reglas del juego.

Vale decir, controlando estas precondiciones, la democracia podría gestionar con efectividad sus riesgos y amenazas.

Las primeras “nubes en el horizonte” que anuncian la llegada de un nuevo momento para la democracia en el mundo y la región llegaron con la “Crisis Subprime” de 2008. Los datos de Latinobarómetro revelan que la democracia en América Latina experimenta una creciente y sostenida erosión desde 2010 que se relacionaba con la tendencia declinante observada en Europa y Estados Unidos. Algo empezada a empeorar en el sentimiento ciudadano sobre la democracia y esto ocurría de manera sincrónica en diferentes regiones del mundo. En América Latina la creencia que gobiernan grupos poderosos en su propio beneficio aumentó entre 2010 y 2018 desde 67% a 82%. Asimismo, para el mismo período, la desconfianza en el gobierno aumentó desde 54% a 77%, lo que significaba cambios en las bases de apoyo partidarias y las dinámicas de competencia electoral. A modo de ejemplo, si en el período del boom de los commodities (2003 a 2014), las oposiciones ganaron el 44% de las elecciones en América Latina, en el período posterior a 2015, las oposiciones resultaron victoriosas en el 79% de las elecciones. Aunque el predominio de los actores desafiantes sobre los incumbentes no necesariamente constituye un hecho negativo, también podía enmascarar patrones de desgaste más abruptos para los gobiernos.

El surgimiento de liderazgos populistas de alta competitividad electoral, el crecimiento del voto de la extrema derecha, la expansión de la retórica antiélites y la llegada al poder en países desarrollados de políticos que representan las tendencias anteriores, muestran que el riesgo de desdemocratización en la actualidad no solo es una amenaza en países de ingreso a medio. Si bien, las perspectivas tradicionales explicaron por “precondiciones” el riesgo de interrupción de la democracia desde la segunda postguerra, en las últimas dos décadas, la amenaza adquiere la forma de una erosión gradual y no de una caída abrupta de régimen. El problema a nivel comparado es que cada vez más, tanto aquellas democracias que satisfacen las “precondiciones”, como aquellas que no lo hacen, manifiestan desviaciones o retrocesos democráticos.

El debate sobre la calidad de la democracia en autores como Leonardo Morlino distingue entre procedimientos (*rule of law*), contenidos (derechos) y resultados (efectividad). De acuerdo con estas dimensiones, la transición desde el momento optimista y el ciclo posterior, en el que se observan mayores riesgos de regresión democrática, comprende un desplazamiento desde la perspectiva procedimental a enfoques centrados en los derechos y la efectividad. Tal como indica Morlino, entre

los principales escollos para mejorar la calidad de la política se cuentan aquellos problemas que tienden a prolongarse de forma crónica, afectando negativamente la percepción sobre los gobiernos y el establishment partidario.

Autores como Peter Mair, Herbert Kistchelt, Cass Mudde y Margaret Canovan acuden a tres argumentos para explicar el crecimiento de la capacidad movilizadora de alternativas populistas “regresivas”: i) crisis de representación que se basa en un vacío de proyecto histórico, ii) frustración por resultados del proceso de desarrollo y de la democracia y iii) una retórica centrada en los antagonismos que facilita la constitución de sujetos.

Bajo estos signos, las últimas décadas, diversos países desarrollados han vivido un importante aumento del voto antisistema, ya sea por partidos populistas de extrema derecha o extrema izquierda. Particularmente, en las democracias europeas, desde las elecciones de inicios de la década de 1990 hasta la actualidad el porcentaje de votación anti-establishment ha crecido desde 12% a 32%. Y buena parte de este crecimiento se debe en las últimas elecciones europeas, al crecimiento de la votación de la extrema derecha entre electores vulnerables, de renta media y baja, especialmente obreros, trabajadores independientes y pensionados. Para septiembre de 2023, la base de datos políticos PopuList, identifica 234 partidos antisistema en Europa, de los cuales 61 son de extrema izquierda y 112 son de extrema derecha (Los 61 partidos restantes para llegar a 234, corresponden a partidos populistas con plataformas que combinan ideas de derecha e izquierda). Considerando el período desde 1980 al presente la extrema derecha ha liderado el gobierno en cuatro países, Eslovenia, Polonia, Hungría e Italia y formó parte de gabinetes como socio de gobierno en otros diez países, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Noruega, Rumania y Suiza.

Se puede observar que el crecimiento electoral de partidos desafiantes anti-establishment, mayoritariamente de extrema derecha, coexiste con una fuerte crisis de legitimidad de los partidos originados en el siglo XX. Estos partidos llamados hoy sin distinción “tradicionales”, atraviesan una triple crisis. Primero, una crisis derivada de los cambios en la articulación partidaria (linkage) con la ciudadanía, que se traduce en pérdida de identificación entre oferta y demanda electoral. En segundo lugar, una crisis de los partidos como actores de intermediación que reducen complejidad social y cumplen una función de “selector de demandas”, atrapados en discursos de “cámaras de eco”. Tercero, los partidos son criticados por la calidad de sus respuestas en un contexto de alta fragmentación y de polarización, que dificulta la efectividad del gobierno. En estos dos últimos puntos, los partidos tradicionales parecen estar

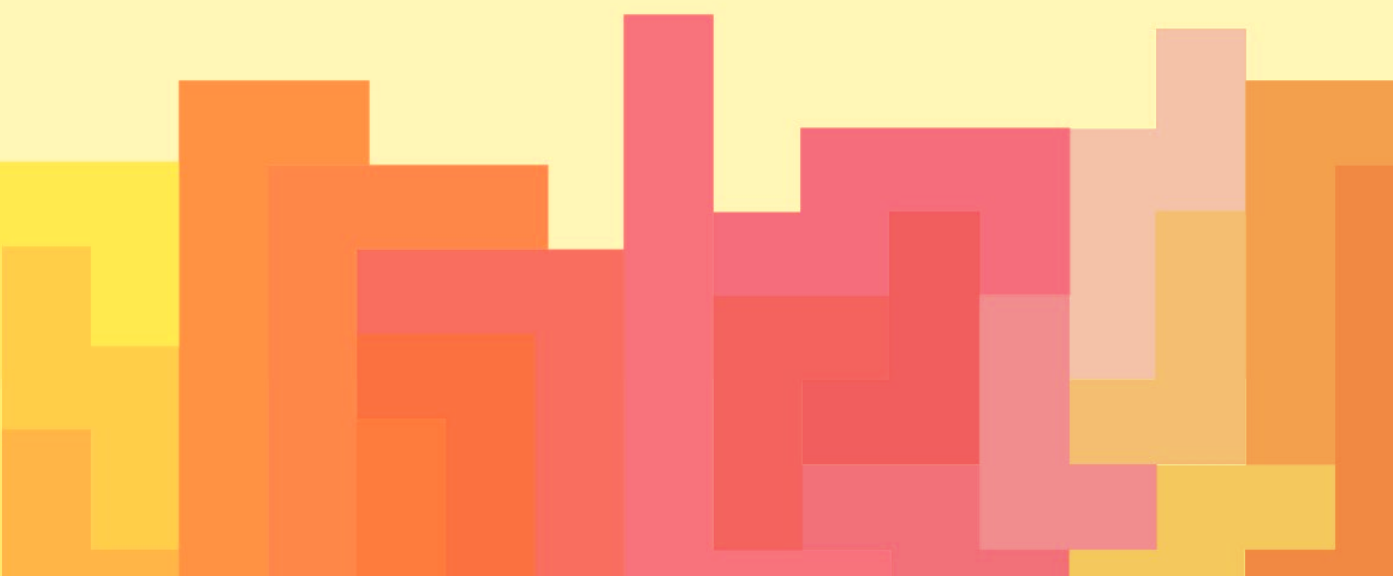
más próximos a administrar los climas de opinión en “democracias de audiencias” que a gestionar soluciones para los problemas de política pública.

En base a los datos recopilados por Pérez-Liñán, Schmidt y Vairo, sabemos que la fragmentación partidaria aumentó en forma sostenida en América Latina durante los últimos veinte años, incluyendo los casos de hiper-fragmentación en Brasil, Perú y Chile. A lo anterior se suma, un decreciente control legislativo de los presidentes de la Región y brechas importantes entre la cuota de escaños en el Congreso controlada por el partido del Presidente y el contingente legislativo de la coalición oficialista. Si bien, los quiebres de la democracia son cada vez menos frecuentes, resulta evidente que la democracia y los sistemas de partidos se encuentran viviendo una transformación profunda en el contexto de una crisis en pleno desarrollo.

El libro “Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada” coordinado por los profesores Juan B. Lucca, Cintia Pinillos, Esteban Iglesias y María Laura Sartor, contribuye en este contexto de cambios e incertidumbre, con un análisis riguroso del panorama de los partidos y de los sistemas de partido en América Latina. El enfoque de estudios comparados y de casos que caracteriza a esta publicación hace posible que los hallazgos respecto de las transformaciones de las estructuras partidarias, las dinámicas de competencia y el funcionamiento de los sistemas de partido, contribuyan a detectar los riesgos y amenazas de regresión democrática, así como a iluminar el diseño de reformas que permitan superar los problemas de efectividad. Es cierto que, generando condiciones favorables para la democracia, puede esperarse que ciertas amenazas disminuyan. Pero el desafío de analizar y gestionar los riesgos que determinan fallos de efectividad en los sistemas democráticos surge como una tarea impostergable que debieran abordar mas decididamente la ciencia política desde el ámbito académico y que esta publicación enfrenta exitosamente.

Mella Polanco, Marcelo (2024). “Prólogo: Partidos políticos, elecciones y el riesgo de obsolescencia democrática”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 6-10.

SECCIÓN I: ELECCIONES



LA RECONFIGURACIÓN DEL PANORAMA ELECTORAL MEXICANO Y SU IMPACTO EN 2024

Jaime Aragón-Falomir
(Université des Antilles, Francia)

El panorama político en México ha sido testigo de cambios sustanciales en las últimas décadas, desencadenando transformaciones que han desafiado la estabilidad y el equilibrio del sistema. Desde la alternancia en el poder en el año 2000 hasta la consolidación del partido Morena (Movimiento de Renovación Nacional) en 2018, el clivaje entre “gobierno” y “oposición” ha adquirido un protagonismo fundamental en la dinámica política del país. La elección presidencial de 2024 se presenta como un hito trascendental en esta evolución, ya que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder de Morena, no puede buscar la reelección. Este artículo se sumerge en las perspectivas y desafíos que rodean este evento electoral, destacando la estabilidad de Morena, la situación de la coalición opositora y la influencia del clivaje en el futuro político de México.

Con este contexto contemporáneo en mente, es crucial analizar cómo los cambios en las elecciones presidenciales de México desde el año 2000 hasta mediados de la

tercera década del siglo XXI han sentado las bases para los desafíos que enfrentará el país en la elección presidencial de 2024. En dicho periodo, se observa que los partidos tradicionales, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han experimentado cambios sustanciales a la baja en su apoyo electoral, mientras que nuevas fuerzas políticas han emergido (como Morena), marcando un cambio significativo en la dinámica electoral. Este contexto histórico arroja luz sobre los desafíos que enfrentará México en la elección presidencial de 2024, y cómo la evolución del sistema político en las décadas anteriores ha configurado la realidad política actual del país.

1. Trayectoria electoral y partidaria: el siglo XX y XXI en México

En el escenario latinoamericano, la trayectoria electoral y partidaria de México en el siglo XX emerge como un crisol de dinámicas políticas y sociales que marcaron su excepcionalidad. La segunda mitad del siglo XX presenció un cambio gradual de la oposición, principalmente encarnada por el PAN, organización de derecha fundada en 1939, a la que se le uniría el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de izquierda fundado en 1989, después de una cisión de miembros del PRI (Smith, 2005: 45-48). Esta transformación política se vio influenciada por una serie de factores, incluyendo la presión internacional en favor de la democracia y la participación ciudadana (Huntington, 1991: 112-115).

1.1. La hegemonía del PRI y la apertura timorata del sistema: Siglo XX

En el ámbito mexicano, durante el siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominó el panorama electoral y partidario con un control político casi hegemónico (Sartori, 2011: 324-325). Desde su fundación en 1929, el PRI no solo mantuvo un firme control sobre la presidencia, sino también sobre los cargos legislativos y gubernamentales a nivel estatal y municipal (Amezcuza y Pardinas, 1997: 66) y de un corporativismo vinculado con los sindicatos de las empresas paraestatales. Esto se logró mediante una hábil combinación de negociación política, cooptación y autoritarismo (Magaloni, 2006: 78-81). Sin embargo, a pesar de su prolongado control, las elecciones, aunque periódicas, a menudo carecían de verdadera competencia y transparencia, ya que el PRI implementaba estrategias de control electoral (Magaloni, 2006: 90-94). Esto resultó en una continuidad aparente en la presidencia, con

sucesivos candidatos del PRI ocupando el cargo sin realizar cambios significativos en las políticas o la estructura del gobierno (Aziz, 2006).

Con el tiempo, las presiones internas y externas aumentaron desde el albor del siglo hasta los albores de la era contemporánea, lo que permitió que la oposición ganara terreno en un sistema político dominado por el PRI. Esta evolución en el sistema electoral y partidario de México se materializó a través de innumerables reformas electorales, como la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el 1993 (después de las dudosas por fraudulentas elecciones del 1988), que dotó de mayor equidad y transparencia al proceso electoral (Prud'homme, 1996: 97-98). Las reformas también incluyeron la creación de una autoridad electoral autónoma y la introducción de reglas de financiamiento de partidos políticos (Molinar, 2006: 112-115).

En resumen, la historia electoral y partidaria de México en el siglo XX estuvo marcada por la prolongada hegemonía del PRI y su posterior transformación debido a presiones internas y externas. Estos cambios llevaron a la creación de un sistema más competitivo y transparente, con una diversidad de partidos políticos que reflejan una mayor pluralidad en la vida política del país (Lawson, 2004: 55-58).

1.2 El fin de la hegemonía del PRI y del bipartidismo: el XXI

En un análisis retrospectivo de las elecciones presidenciales en México desde el año 2000 hasta mediados de la tercera década del siglo XXI, se evidencia un proceso de cambios significativos en la dinámica electoral. En el año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN) emergió como el vencedor con un 42% de los votos, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un 36%, que aún mantenía un apoyo sustancial en el electorado. El tercer lugar lo ocupó la coalición que respaldaba a Andrés Manuel López Obrador, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con un 16%.

En el 2006, se produjo un cambio significativo, ya que tanto el PRI como el PAN experimentaron pérdidas de casi el 14% y el 5%, respectivamente, mientras que el partido que respaldaba a AMLO (PRD) aumentó su respaldo en casi un 19%. Este escenario se asemeja a un juego de suma cero, donde lo que los dos partidos tradicionales perdieron, el otro lo ganó.

En 2012, el PAN perdió un 11% en comparación con 2006 y casi un 17% en relación con el 2000. Sin embargo, un fenómeno inusual desafió la tendencia de declive del

otro partido tradicional (PRI). En efecto, un candidato carismático y seductor, estratégicamente bien elegido, experimentó un aumento sustancial de casi el 18% con respecto a 2006, incluso superando los resultados de las elecciones de 2000 del PRI. Mientras tanto, AMLO mantuvo un apoyo sólido, alcanzando casi el 32%, pero insuficiente para ganar la presidencia.

Finalmente, en las elecciones de 2018, se acentuó el declive que se observaba desde 2000 y 2006 para los partidos tradicionales, el PRI y el PAN. El PAN obtuvo solo un 22%, dos puntos menos que en 2012 y veinte puntos menos que en 2000. El PRI, por su parte, registró su nivel más bajo en décadas, con un 16%, lo que significó una disminución de veintidós puntos en comparación con 2012 y con el año 2000.

Este análisis histórico de las elecciones presidenciales refleja la fluctuación en el apoyo a los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, marcando una transformación significativa en el panorama electoral de México durante este período.

2. La atomización de partidos y las coaliciones incoherentes en el siglo XXI

Dicho derrotero partidista muestra que junto con la alternancia en el poder en el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) logró una histórica victoria, se observa una atomización como corolario del sistema de partido, puesto que si bien pone fin a la larga hegemonía del PRI, deja igualmente un vacío de poder y una gran fluctuación del votante (Moreno, 2017). Este evento significó un punto de inflexión en la historia política mexicana, indicando una apertura en un sistema que previamente parecía inamovible (Reynoso y Espinosa, 2017: 19-20).

2.1 Cambio y continuidad en alianzas partidarias

El inicio del siglo XXI trajo consigo por lo tanto un cambio en la configuración del sistema de partidos en México, marcado por una creciente fragmentación y la formación de coaliciones bimodales, a pesar de la continuidad de algunos actores políticos (Aragón y Cárdenas, 2019). De hecho, para demostrar dicha incertidumbre vemos que desde el 2000 se da una innovación partidaria: las alianzas políticas se multiplicaron, pasando del 37% al 90% entre los años 2000 y 2006, para luego estabilizarse en torno al 80%. Este cambio transformó el panorama político mexicano y

planteó desafíos significativos para el sistema político (Olmeda y Devoto, 2018: 310). La literatura académica identifica dos motivos principales para la formación de coaliciones políticas en México: motivos ideológicos y motivos pragmáticos. Según la investigación de Olmeda y Devoto (2019: 293), estas dos razones pueden converger en todas las contiendas electorales y a diferentes niveles de gobierno, o bien, pueden divergir según la naturaleza de cada elección (nacional, estatal, legislativa). El federalismo mexicano otorga a los líderes locales la flexibilidad para optar por estrategias de coalición que pueden ser divergentes con respecto a las decisiones tomadas a nivel nacional. Estas alianzas, en ocasiones, pueden variar incluso dentro de un mismo estado y tienden a ser efímeras en el tiempo (Olmeda y Devoto, 2019: 297).

La peculiaridad de esta dinámica de formación de coaliciones en México se explica en el contexto histórico del país. Estas alianzas políticas pueden ser consideradas antinaturales desde una perspectiva ideológica, pero se justifican como un medio para romper con la larga hegemonía del oficialismo priista (Reynoso y Espinosa, 2017: 19-20). El clivaje entre “oposición” y “gobierno” existía durante el siglo XX, pero a partir de los años 2000 se vería reflejado en alianzas políticas que algunos han conceptualizado como inconsistentes, pragmáticas y oportunistas (Cansino y Pérez, 2015: 9), mientras que para otros, estas alianzas representan un frente “antihegemónico” (Reynoso y Santiago, 2017: 19-20).

2.2 Cambio y continuidad del sistema de partidos: elecciones 2023

En el proceso de desarrollo de esta nueva etapa, se destaca un momento crítico en las elecciones presidenciales de 2018. En ese año, la llegada de Morena a los comicios y a la presidencia, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, marcó un hito en la política mexicana al desafiar la larga hegemonía sostenida bipartidista del PRI y PAN (Aragón, Lucca, Fernández, Pérez, 2019). Estos comicios se perciben como el epílogo de la transición democrática en México (Aragón, Lucca y Pérez, 2022), y señalan un punto de inflexión en la reconfiguración del sistema político del país (Garrido y Freidenberg, 2020:18-19).

Además, estas elecciones consolidaron la polarización entre los clivajes de “oposición” y “gobierno”. Uno de los aspectos más notables en estas elecciones fue la formación de la inusual alianza “Por México al frente” en las elecciones del 2018, que unió a partidos de derecha, izquierda y centro-izquierda, como el PAN, el PRD y MC (Movimiento ciudadano). Esta coalición reflejó una combinación pragmática y

oportunista, y marcó un giro en la política mexicana al mezclar corrientes políticas aparentemente divergentes (Cansino y Pérez, 2015:9). Más tarde, en las elecciones intermediaaria estatal de 2021, emergió una coalición sin precedentes denominada “Va por México” (PAN, PRD y PRI), donde las tres fuerzas políticas tradicionalmente antagónicas, se unieron como “oposición” para enfrentar al “gobierno” (Morena). Estas coaliciones pragmáticas, caracterizadas por la falta de adhesión ideológica, subrayan la creciente polarización entre el “nosotros” y el “otros” desde la década de 2000 (Aragón y Lucca, 2021; Vargas, 2021), más que una fractura entre “izquierda” y “derecha”. Sin embargo, esta estrategia de coalición, al desdibujar las identidades ideológicas de los partidos tradicionales, generó controversias y derrotas electorales, ya que los votantes no perciben un terreno común (Aragón, 2022:268-270).

3. Retórica e importancia de los comicios de 2023: el Estado de México

Ahora bien, en cuanto a la elección de 2023, reviste una importancia especial por varias razones clave. En primer lugar, incluye al Estado de México, la entidad más poblada del país, con 17 millones de habitantes. En segundo lugar, ambos estados en competencia, el Estado de México y Coahuila, han estado bajo el control del PRI desde 1929. En tercer lugar, esta elección representa un preludio importante para las elecciones presidenciales de 2024.

3.1 Elección del 2023

Los resultados de las elecciones de 2023 confirmaron el escenario observado en 2021: la coalición de oposición no logró el éxito esperado, mientras que Morena mantuvo su influencia en el Estado de México pero perdió en Coahuila. En el Estado de México, los resultados de las elecciones anteriores en 2017 asignaron un 33% de los votos al PRI, un 17% al PRD, un 11% al PAN y un 30% a Morena (INE, 2017a). A pesar de que cabría esperar que la coalición de 2023 (PRI, PAN y PRD) hubiera sumado el 60% de los votos, solo logró un 44%. Mientras tanto, la alianza liderada por Morena aumentó su apoyo a más del 50%. En el caso de Coahuila, ninguna fuerza política optó por una coalición.

De hecho, en 2017, el PRI prevaleció con un 39%, frente al 36% del PAN y el 11% de Morena (INE, 2017b). En 2023, los resultados mostraron un 43%, 6% y 26%, respectivamente (el PT, aliado histórico de Morena, compitió por sí solo y obtuvo el 8%).

Estos resultados sugieren que, en ciertas circunstancias, para Morena, el partido en el gobierno, competir sin coalición tiene un efecto adverso, mientras que para el PRI resulta beneficioso. Sin embargo, es importante destacar que este axioma no es aplicable de manera universal en todo el país y resalta la complejidad de los factores en juego al establecer alianzas políticas (INE, 2023).

3.2 Campaña

La campaña electoral en el Estado de México ha puesto en primer plano la dicotomía entre el gobierno y la oposición. Delfina Gómez, representante de Morena y afiliada al partido en el poder a nivel nacional, ha centrado su estrategia en promover un mensaje de cambio para “despedir al PRI” en la entidad (Camhaji, 2023), mientras aboga por la continuidad a nivel nacional. Su discurso enérgico cuestiona la larga historia de corrupción y negligencia en la región, aludiendo a “cien años de corrupción y abandono” (Dávila y Urrutia, 2023). Al mismo tiempo, resalta la capacidad de la comunidad para superar obstáculos, sugiriendo que la situación actual puede modificarse en beneficio de la población.

Delfina Gómez hace hincapié en su conexión con la gente y su comprensión de las realidades que enfrentan. Su afirmación de “representar con mayor intensidad lo que vive un pueblo, lo que siente la gente y, sobre todo, porque amo a la gente, al pueblo” (Berman, 2023) destaca su intención de ser una voz auténtica y cercana a la ciudadanía. Además, al mencionar su compromiso de escuchar a grupos específicos, como campesinos, maestros y miembros de pueblos indígenas, refuerza su enfoque en atender las diversas necesidades de la población y establecer un vínculo sólido entre su candidatura y las aspiraciones de la gente.

Por otro lado, Alejandra del Moral, representando la coalición “opositora”, aborda la continuidad (para que el PRI continúe en el Estado) y el cambio (para que las políticas nacionales no se implementen en el Estado) desde una perspectiva de unidad (aludiendo a una coalición inusual con el PAN en ese estado) y la superación de la polarización. Su lema “unir es resolver” (López, 2023) sugiere que el país y la región enfrentan desafíos que solo pueden superarse mediante la colaboración y la unidad.

Alejandra del Moral resalta la creciente división en la sociedad mexicana, haciendo referencia a disputas familiares, vecinales y discusiones en las calles (Aragón y Lucca,

2021). Utiliza ejemplos tangibles, como las redes sociales y las noticias, para ilustrar cómo la fragmentación está afectando a la sociedad en su conjunto. Su declaración de “cuantas elecciones tienen que pasar para que nos demos cuenta de que divididos no vamos a ninguna parte” (López, 2023) apela a la necesidad de la unidad y la cohesión en un momento de creciente polarización.

Del Moral también contrasta la idea de un “cambio” destructivo con el cambio necesario, declarando “Claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye” (Camhaji, 2023). Esta declaración sugiere que su coalición ofrece una alternativa más equilibrada en contraposición a la imagen negativa que proyecta del cambio propuesto por Morena.

En resumen, los candidatos en la elección del Estado de México han empleado estrategias de discurso que enfatizan tanto la continuidad como el cambio, pero desde diferentes perspectivas. Mientras Delfina Gómez se apoya en la noción de cambio impulsado por la organización popular y la lucha contra la corrupción, Alejandra del Moral se presenta como una figura que puede unir y resolver en un entorno marcado por la división. Ambas candidatas adoptan discursos que resaltan las necesidades y aspiraciones de la población, buscando conectar emocionalmente con los votantes en función del clivaje entre “gobierno” y “oposición”.

4. Perspectivas de la elección presidencial de 2024

A un año de las elecciones presidenciales de 2024, se vislumbra un panorama en el que el partido Morena, liderado por AMLO, no puede buscar la reelección, pero mantiene una sólida posición con una ventaja de 25 puntos sobre sus competidores, consolidando su estabilidad (Polls, 2023). Esto presenta un desafío al clivaje de gobierno, que debe equilibrar el reconocimiento de los logros pasados con la necesidad de responder a las expectativas de cambio y mejora.

En contraste, la coalición opositora compuesta por el PRI, PAN y PRD se centra en oponerse a Morena pero carece de una plataforma coherente y unificada. Esta debilidad se ha evidenciado en elecciones pasadas, como las de 2021 (Aragón, 2022) y las de 2023. La alianza opositora enfrenta el desafío de trascender su enfoque de mera oposición a Morena y presentar una plataforma sólida respaldada por un candidato convincente. Estas elecciones también serán una evaluación de la estabilidad del cambio en el sistema político mexicano desde 2018. Los resultados tendrán un im-

pacto significativo en el próximo período gubernamental y en el equilibrio político y social de México y la región.

La etapa actual invita a un análisis profundo sobre cómo el clivaje entre oposición y gobierno dará forma al futuro político de México y cómo esta dinámica podría resonar en América Latina. A medida que nos acercamos a las elecciones de 2024, el escenario se vuelve cada vez más complejo, abordando cuestiones esenciales como la continuidad, la gobernanza y la estabilidad política en México. En este contexto, existe la posibilidad de que Morena consolide su posición como una fuerza hegemónica, lo que podría aumentar la centralización del poder y limitar el espacio para el debate político y la participación ciudadana. Esto podría tener repercusiones en la democracia y en la percepción pública de las fuerzas políticas tradicionales y sus alianzas.

5. Conclusión

Sin duda, a medida que nos aproximamos a las elecciones presidenciales de 2024, el clivaje entre “gobierno” y “oposición” continúa siendo un factor clave en la política mexicana. A pesar de la imposibilidad de buscar la reelección de AMLO, Morena mantiene una ventaja sólida en las encuestas, lo que sugiere una continuidad en su predominio. Por otro lado, la coalición opositora enfrenta desafíos para presentar una plataforma unificada y coherente.

Estas elecciones son de vital importancia para evaluar la estabilidad del cambio en el sistema político mexicano desde 2018. Los resultados tendrán un impacto significativo en el próximo período gubernamental y en el equilibrio político y social del país. Además, la dinámica del clivaje “gobierno” y “oposición” tiene el potencial de resonar en toda América Latina, lo que marca un periodo de profunda reflexión sobre la continuidad, la gobernanza y la estabilidad política tanto en México como en la región en su conjunto.

Es importante destacar que las candidatas para la elección de 2024 son dos mujeres, un hecho inédito en el espectro electoral mexicano. Por un lado, Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO y actual líder de Morena, quien previamente se desempeñó como alcaldesa de la Ciudad de México, dejando un legado de logros notables, especialmente en la disminución de la violencia (Grillo, 2022). Por otro lado, Xóchitl Gálvez, empresaria, exsenadora y miembro del PAN, representa al Frente Amplio

por México, una coalición heredera de “Va por México”, la alianza perdedora en 2021, que incluye nuevamente al PAN, PRI y PRD. Actualmente, las encuestas indican un claro liderazgo por parte de Claudia Sheinbaum, con una ventaja de alrededor de 20 puntos sobre Gálvez (Moreno, 2023), lo que sugiere la posibilidad de un sexenio adicional gobernado por Morena, extendiendo la Cuarta Transformación de Morena y AMLO por casi 12 años.

Bibliografía

AMEZCUA, A. y J. E. PARDINAS. (1997). *Todos los gobernadores del Presidente: Cuando el dedo de uno aplasta el voto popular*. México: Grijalbo.

ARAGÓN FALOMIR, J. (2022). “Cambio o continuidad en la elección de 2021 en México” In Pinillos Cintia, Estaban Iglesias, Juan Bautista Lucca y Osvaldo Iazzetta *La democracia a prueba. Los años que votamos en pandemia en las Américas*, Clacso, UNR.

ARAGÓN FALOMIR, J. y J. CÁRDENAS (2020). “Análisis de redes empresariales y puertas giratorias en México: Cartografía de una clase dominante público-privada” *Temas y Debates* 39, 81-103

ARAGÓN FALOMIR, J.; J. B. LUCCA, A. FERNANDEZ y M. PÉREZ TALIA (2019) “Análisis comparado de las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, México, Paraguay y Brasil” *Apuntes Electorales*, 61, IEEM

ARAGÓN FALOMIR, J.; J. LUCCA y M. PÉREZ TALIA (2022). “Los tiempos de las transiciones a la democracia en Paraguay y México”, *Contextualizaciones Latinoamericanas*, Vol. 1 Núm. 26 (15).

AZIZ, A. (2006). “Elecciones en México, entre la incertidumbre y la polarización”. *Nueva Sociedad*, n° 205: 4-14.

BEER, C. (2003). *Electoral Competition and Institutional Change in Mexico*. Univ of Notre Dame Pr.

BERMAN, S. (2023). “Delfina: todo por el Edo. Mex”, *Largo Aliento*, 14 abril https://www.youtube.com/watch?v=TZ8iNz_okpk&ab_channel=CanalOnce

CAMHAJI, E. (2023) “Los ataques de Alejandra del Moral contra Delfina Gómez”, *El*

País, <https://elpais.com/mexico/2023-04-21/los-ataques-de-alejandra-del-moral-contradelfina-gomez-acaparan-el-primer-debate-en-el-estado-de-mexico.html>

CANSINO, C. y V. ALARCÓN (1993). “La relación Gobierno-Partido en un régimen semi-competitivo. El caso de México”. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, n° 151: 9-34.

DÁVILA, I. y A. URRUTIA (2023). “Acaban años de oscuridad y se escribirá una nueva historia: Delfina Gómez” *La Jornada*, 5 junio, <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/06/05/politica/acaban-anos-de-oscuridad-y-se-escribira-una-nueva-historia-delfina-gomez/>

GARRIDO, S. y F. FREIDENBERG (2020). “El poder del voto. Cambio electoral y sistemas de partidos a nivel federal en México en 2018”. *Política y gobierno* 27 (2)

GRILLO, I. (2022). “Mexico City’s Murder Rate is Lower Than Portland or Dallas; It’s a Reason the Gringos are Flocking Here”, *Crashout Media*. <https://www.crashoutmedia.com/p/mexico-citys-murder-rate-is-lower>

HUNTINGTON, S. P. (1991). “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.” University of Oklahoma Press.

INE (2017a). “Resultados de la elección”, *Elección Estado de México 2017*, <https://prep.ieem.org.mx/>

INE (2017b). “Resultados de la elección”, *Elección Coahuila 2017*, <http://www.iec.org.mx/v1/index.php/computos-por-casilla>

INE (2023). “Elecciones Locales 2023” *Voto y elecciones*, <https://ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/>

LANGSTON, J. K. (2017). *Democratization and Authoritarian Party Survival: Mexico’s PRI*. Oxford, New York: Oxford University Press.

LAWSON, C. (2004). “Building the Fourth Estate: Democratization and the Rise of a Free Press in Mexico.” University of California Press.

LÓPEZ, M. (2023). “Elecciones 2023 en el Edomex”, *La Silla Rota*, 3 abril, <https://lasillarota.com/metropoli/2023/4/3/elecciones-2023-en-edomex-sere-la-gobernadora-de-la-reconciliacion-afirma-alejandra-del-moral-422406.html>

- MAGALONI, B. (2006). "Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico." Cambridge University Press.
- MOLINAR, J. (2006). "Political Regimes and Economic Performance: The Mexican Case." Harvard University Press.
- MORENO, A. (2017). *El cambio electoral. Votantes, encuestas y democracia en México*. Ciudad de México: Fondo de Cultura económico.
- MORENO, A. (2023, 31 octubre). "Claudia Sheinbaum aventaja por 18 puntos a Xóchitl Gálvez", *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/10/31/claudia-sheinbaum-aventaja-por-18-puntos-a-xochitl-galvez-encuesta-ef/>.
- POLLS (2023). "Encuesta de Encuestas Presidencia 2024", <https://polls.mx/>
- PRUD'HOMME, J-F. (1996). "La negociación de las reglas del juego: tres reformas electorales. (1988-1994).", *Política y gobierno*, III, n° 1.
- SARTORI, G. (2011). *Partis et systèmes de partis: Un cadre d'analyse*. Université de Bruxelles. Bruxelles, 2011.
- SMITH, P. H. (2005). *Democracy in Latin America: Political Change in Comparative Perspective*, Oxford: Oxford press.

Aragón-Falomir, Jaime (2024). "La reconfiguración del panorama electoral mexicano y su impacto en 2024", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 12-23.

LA AGENDA ELECTORAL EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE ARGENTINA 2023

Lisa Cavanagh, Julia Davalle,
Juan Manuel Cabrera y Mariana Vera
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

A 40 años del regreso democrático en Argentina, se celebraron comicios nacionales. De forma paradójica cobró relevancia en el escenario nacional un nuevo partido a la derecha del centro relativo del sistema, que llevó a un reordenamiento de la competencia y un proceso de creciente polarización, y motorizó intensos y acalorados debates en la agenda electoral.

Durante los comicios se eligieron no sólo los cargos de Presidente y Vicepresidente, sino también un porcentaje de ambas Cámaras. El extenso calendario electoral a nivel nacional se organizó en tres momentos: el 13 de agosto tuvieron lugar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), para la selección de candidaturas; el 22 de octubre se celebraron las Elecciones Generales y finalmente el 19 de noviembre se disputó el *ballotage* en el que se definió el Ejecutivo nacional.

En las PASO hubo más de 15 candidaturas al ejecutivo, de las que resultaron 5 fórmulas presidenciales para las elecciones generales. El oficialismo, bajo la etiqueta “Unión por la Patria” (UxP), disputó una interna, en la que la ciudadanía optó por la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi, siendo la tercera fuerza con el 27,7% de los votos. Por su parte la interna de “Juntos por el Cambio” (JxC), resultó en la victoria de la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri, siendo la segunda fuerza más votada con el 28,7% de los votos.

La sorpresa electoral, no obstante, estuvo dada en las elecciones primarias por la candidatura de Javier Milei - Victoria Villarruel, de la “La Libertad Avanza” (LLA), fuerza electoral surgida en el contexto reciente de pandemia y que se presentó a elecciones por primera vez en 2021. Esta fórmula se mostró como una alternativa en el escenario partidario y obtuvo el 30% de los votos de la ciudadanía, siendo la fórmula más votada.

Finalmente, las otras dos candidaturas que se consolidaron para las elecciones generales fueron las del gobernador cordobés Juan Schiaretti, con su candidato a vice Florencio Randazzo “Hacemos por nuestro País” que obtuvo el 3,85% de los votos y la alianza “Frente de Izquierda”, la cual disputó una elección interna entre dos opciones, en la que fue electa la fórmula Myriam Bregman – Nicolás del Caño con el 2,65% de los votos.

Este artículo se centra en la construcción de la agenda electoral principalmente en el periodo entre las PASO y las elecciones generales, teniendo en cuenta los posicionamientos y debates de los principales candidatos al Ejecutivo de las tres fuerzas más votadas.

Con el concepto de agenda se parte de la definición de Aguilar Villanueva (1993:34) que la comprende como aquel conjunto de problemas, temas y demandas que requieren la atención del gobierno y que, de algún modo, buscan o pretenden ser objeto de política pública. Para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción, y que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental.

Dentro de la clásica categorización de las agendas (sistémica, gubernamental y decisoria), es posible anexar un cuarto tipo que tiene una naturaleza y dinámica propia: la agenda electoral. Esta se constituye por aquellos temas, problemas, propuestas

y proyectos a los que los distintos candidatos hacen referencia durante la campaña electoral y que, de algún modo, preanuncian cuales serían sus acciones de gobierno en caso de obtener el cargo al que aspiran (Lodi y Lucca, 2003; Castagno y otros, 2017).

En este sentido, los períodos preelectorales son: tiempos de apertura de la agenda para la introducción de nuevos temas o para la redefinición de problemas ya existentes; el momento de la búsqueda de apoyos y de la elaboración de consensos; la etapa de la promesa y el convencimiento; la fase inicial en la construcción del liderazgo y la legitimación del poder. Es por ello que la agenda electoral es aquella que, para ser en el futuro agenda de gobierno, mira en el presente a la agenda sistémica e intenta sensibilizarse ante ella (Lodi y Lucca, 2003; Castagno y otros, 2017).

Lo que se intenta remarcar es que la formación de la agenda es un proceso en el que participan numerosos actores (candidatos, partidos políticos, grupos económicos, organismos financieros, medios de comunicación, organizaciones civiles, ciudadanía, entre otros) que ponen en juego sus recursos, presiones e influencias para sacar el mayor beneficio posible en la elaboración y potencial implementación de la agenda electoral (Lodi y Lucca, 2003; Castagno y otros, 2017).

Para dar cuenta de la agenda electoral, se trabajó con una matriz de datos en la cual se recopilaban las principales noticias de tres medios digitales de alcance nacional y con representatividad ideológica en lo que refiere a sus líneas editoriales: La Nación, Página 12 e Infobae, en el período ubicado entre las PASO y las elecciones generales.

A fines de este trabajo se eligieron desarrollar los debates sobre cuatro ejes prioritarios que se desprendieron del análisis realizado: 1. Económico-Financiero, 2. Derechos Humanos, 3. Seguridad y 4. Relaciones Exteriores.

2. Dimensión económico – financiera: ¿plan motosierra?

El contenido de la agenda en la dimensión económico – financiera cobró gran relevancia en un contexto de fuerte crisis económica. Las propuestas del candidato por LLA (Javier Milei) fueron las que sentaron las bases del debate, que algunos medios de comunicación llamaron el “Plan Motosierra”, en las que se incluían desde el cierre del Banco Central y la dolarización, hasta el fin de la obra pública y el fin del sistema de coparticipación.

Uno de los proyectos que mayor controversia y alcance mediático ha tenido ha sido la dolarización de la economía. En este sentido, Emilio Ocampo (uno de los principales referentes de LLA en materia económica) propuso la creación de un Fondo de Estabilización Monetaria (FEM), un fideicomiso bajo la ley de Estados Unidos, al cual el Banco Central transferirá sus pasivos (conformada por la base monetaria del Banco y la Leliqs). Este fondo podrá emitir títulos de corto plazo en el mercado internacional que serían respaldados por los activos que corresponden al Estado: las acciones del Estado Nacional de YPF, los títulos, acciones y depósitos que forman parte del Fondo de Garantía del ANSES y otros activos monetizables. Los dólares que ingresen al Fondo deberán ser utilizados para cancelar los pasivos del Banco Central y una vez realizada esta tarea, el FEM será disuelto (Perfil, 12/09/2023).

En el extremo contrario, el Ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, consideró que no sería posible la quita del cepo cambiario y menos aún la dolarización. Para resolver el problema de la restricción externa, proyecta aumentar las reservas a través de un futuro superávit comercial. Ello sería posible a partir de la mejora de los cultivos agrícolas (que han atravesado una importante sequía iniciada durante el año 2020), junto a la exportación de litio, gas y petróleo especialmente, luego de la inauguración del oleoducto Vaca Muerta Norte, a partir del cual se podrá exportar crudo a Chile y abastecer el mercado local. A su vez, en el marco de la firma de un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, hizo un llamado al tratamiento de la ley de “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, criticando a la oposición de haber postergado su tratamiento en el Congreso. Por otro lado, hizo especial hincapié en la necesidad de una revisión del acuerdo con el FMI, debido a los impactos económicos que provoca el cumplimiento de los vencimientos de la deuda. En este contexto, anunció un nuevo *swap* con China por el equivalente a 6500 millones de dólares para precancelar los vencimientos del FMI, acuerdo que finalmente quedó inactivo.

Entre estas dos posiciones, Patricia Bullrich y quien sería su Ministro de Economía, Carlos Melconian, criticaron duramente la posibilidad de dolarizar la economía, señalando que el Banco Central no cuenta con las reservas necesarias para hacerlo y por ello acabaron proponiendo la implementación de un sistema bimonetario, sin cepos a las exportaciones ni a las importaciones (La Nación, 5/9/2023).

Otro de los asuntos más debatidos durante la campaña giró en torno al empleo. Todos los candidatos señalaron la necesidad de reducir el empleo no registrado y el empleo informal. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich hicieron hincapié en

la necesidad de reducir las contribuciones previstas en los contratos de trabajo a través de la creación de un seguro de desempleo. Para ello Milei propuso una transformación en materia laboral a través de la extensión del seguro de desempleo a todos los trabajadores de la economía. En el sistema vigente implementado por la UOCRA, el empleador deposita el 12% del salario mensualmente y el 8% a partir del segundo año, a un fondo de desempleo a título del trabajador. Este modelo sustituiría el sistema de indemnizaciones (eliminando las indemnizaciones con causa) hoy vigente en la Ley de Contrato de Trabajo. A su vez, Bullrich propuso poner en marcha un “servicio cívico voluntario en valores” dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Por su parte, Massa también señaló la necesidad de reducir las cargas patronales, en especial, de las PYMES. En este sentido, lanzó durante la campaña el Plan Emplea Pyme, reduciendo al 100% las contribuciones patronales por 12 meses, en función de facilitar el traspaso de aquellos que cuentan con programas sociales al empleo formal.

Las políticas fiscales, la reducción de impuestos y los subsidios también fueron amplio tema de discusión. En este sentido, Massa convocó a una reforma sobre el impuesto a las Ganancias, elevando el mínimo no imponible. Esta medida, que fue acompañada por la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, fue votada a favor por Javier Milei en el Congreso mientras que fue rechazada por varios legisladores de JxC, arguyendo la falta de un plan integral para abordar la crisis económica. Sumado a ello, anunció la implementación del programa “Compre sin IVA” para aquellos segmentos no alcanzados por la suba del piso de Ganancias (monotributistas, empleados en relación de dependencia y trabajadores de casas particulares) por un plazo de tres meses.

Por otro lado, el candidato de LLA propuso modificar el sistema de recaudación a través de la eliminación del sistema de coparticipación federal. En la misma sintonía, Bullrich prometió que su gobierno cambiará la lógica de reparto: “Nosotros vamos a un sistema de incentivos; con los recursos que tiene la Nación, lo que vamos a hacer es premiar a las provincias más competitivas, a las que bajan impuestos y permiten que sus economías sean productivas para que produzcan cada vez más. No habrá premios ni ventajas para las menos productivas, para que entiendan que este sistema no va a ser eterno” (Infobae, 05/10/2023). A su vez, y en busca de obtener el apoyo de los gobernadores para aprobar la rebaja del impuesto a las Ganancias, el candidato de Unión por la Patria acordó coparticipar parte del impuesto al cheque (el que grava débitos y créditos bancarios) y el impuesto PAIS.

Finalmente, uno de los puntos más relevantes de las propuestas radicó en el futuro de la obra pública. Según el candidato Javier Milei, es necesaria la eliminación total de la obra pública estatal, proponiendo su reemplazo por un esquema de iniciativa privada. En este sentido, Massa advirtió que la paralización de la obra pública implicaría el cese de 280.00 trabajadores de la construcción. En el caso de la candidata por JxC, señaló que sólo se financiarán los proyectos de obra pública que sean considerados prioritarios: aquellos vinculados a la energía, la construcción de gasoductos, el dragado de la Hidrovía y la ampliación de los trenes de carga.

3. Derechos Humanos: la Memoria en disputa

Los Derechos Humanos fueron uno de los ejes centrales de la agenda electoral, con una relevancia que no habían tenido en comicios anteriores. Esto se origina a partir de la irrupción en la escena política de voces que resquebrajaron lo que se suponía un consenso democrático de condena respecto a lo acontecido en la última dictadura militar.

Este resquebrajamiento es en realidad un retorno a discursos que se consideraba caducos. Como da cuenta en la base de datos de noticias relevadas en los diversos medios, en estas elecciones a través del discurso promovido principalmente por los candidatos de LLA, se buscó negar el terrorismo de Estado llevado a cabo durante la dictadura cívico-militar, para volver a plantearlo como una guerra entre las fuerzas de seguridad y terroristas, en la que no habría habido crímenes de lesa humanidad sino excesos. Se ha aludido incluso a la intención de dejar de juzgar los crímenes de los militares, para poder dar lugar a otros asuntos considerados por esta fuerza como más importantes o urgentes tales como las causas por narcotráfico y corrupción que, en palabras de la vicepresidenta entrante Victoria Villaruel, van prescribiendo lentamente por estos juicios que “bloquean el funcionamiento de la justicia federal” (Infobae, 10/10/2023).

Si bien siempre es deseable una problematización activa y constante de la Memoria, las expresiones que comenzaron a parecer en esta campaña presidencial vinieron a poner a prueba algunos compromisos sobre los que se estableció la democracia en Argentina. Paradojalmente, estas manifestaciones toman curso en un contexto electoral en que están siendo recuperados por las mayorías, que los validan en las

urnas¹. He aquí parte de las ambivalencias de la democracia.

Los discursos cargados de violencia de LLA –que aluden al tema de los Derechos Humanos, pero no se reducen a ellos–, tienen continuidad y vienen a dar voz a una opinión política sobre la que creció el partido pero que no inauguró. Una opinión que se configuró sobre los puntos de sutura que hacen al lazo social y que, tras años de malestar social y económico, comienzan a estallar.

Quizás el punto en que ello se vuelve más claro es en el hecho de que LLA no fue ni es el único partido que retomó estas discusiones, sino que desde JxC también se han hecho declaraciones de la misma índole. Su candidata presidencial, Patricia Bullrich, prometió también indemnizar a las víctimas de la violencia de las organizaciones revolucionarias peronistas y de izquierda, y una “salida justa” para los represores de la dictadura por el trato “inequitativo y en ocasiones inhumano” que han recibido por una “herida histórica que no termina de cicatrizar” (Página 12, 14/09/2023).

La discusión alcanzó una magnitud en las elecciones del corriente año que no es nueva. Algo de ello comenzó a ponerse en cuestión tiempo atrás, cuando en 2016 algunos miembros de JxC pusieron bajo sospecha el número de víctimas de terrorismo de Estado. No es, por tanto, sino la exposición de una fractura que comenzó hace tiempo.

Cómo bien puede plantearse desde una lectura de Ernesto Laclau (2005), hay una productividad en la nominación que, en tanto investidura, no puede desligarse del plano afectivo porque es ello lo que posibilita y da lugar a un reordenamiento subjetivo, a una recomposición que termina por volverse cualitativamente distinta a lo que la precede. Es a ello a lo que debemos estar atentos, y que hará a la forma en que se encarnen esos discursos.

Las líneas de discusión se corren cada vez. Lo que ayer considerábamos debates saldados hoy ya no lo son. Estas son posiciones incómodas y quizás tristes para la escena público-política democrática, pero de nada valen posturas lamentadoras, sino que es en este contexto que debemos resignificar los discursos por la verdad, la memoria y la justicia; para reactualizar su relevancia social y que vuelvan a ser objeto de interpelación y de sentido.

1. Es necesario aclarar que el apoyo electoral a LLA no se traduce automáticamente en un apoyo a sus posturas sobre Memoria y Derechos Humanos. El voto como forma de expresión concentra una infinidad de demandas no tan fácilmente diferenciables. Pero si hace a cierto modo de legitimación en el cual puede sostenerse y convalidarse la palabra de estos candidatos, lo cual da cuenta de la importancia de las banderas y discursos de la dirigencia política.

Y es que la historia argentina no está contada a medias², como se plantea desde LLA pero sí que una parte de ella nos fue deliberadamente arrancada; porque nos faltan los datos que la dictadura se ocupó de desaparecer junto a los cuerpos de tantos. Por ello, y a pesar de que cada muerte importa, que cada muerte es y debe ser llorable (Butler, 2020) sin importar las cifras, decir 30.000 fuerte y claro es sostener como bandera una búsqueda incansable de verdad.

En este eje central al debate, otro actor que tomó relevancia en el marco de la campaña electoral, fueron las organizaciones de Derechos Humanos que no sólo se movilizaron para advertir las posturas negacionistas, sino para volver a pedir la apertura de los archivos de 1974 a 1983. Asimismo promovieron la incorporación del tópico “Derechos Humanos” al debate presidencial³, y –de la mano de la Secretaría de Derechos Humanos– la publicación de informes sobre las víctimas de terrorismo de Estado. Puede decirse, por tanto, que no es sólo una búsqueda por la verdad sino también por hacer de ella parte de la discusión pública.

De lo expresado se da cuenta que las políticas de Memoria son un campo de disputa, que han cobrado relevancia en la agenda electoral 2023. Hacer Memoria es una apuesta por hacer presente una cosa ausente, que no puede lograrse sino en carácter de intento; porque el estado actual de cosas no puede nunca ser sino un modo o relato posible –contingente, y entre tantos otros, aunque no por ello arbitrario– de tratar de hacer compleción y suturar esa falta que gravita casi espectralmente lo presente. Si entendemos que las políticas de la Memoria solo son posibles por fuera de esa exigencia de totalización, de hacer de la memoria un circuito cerrado, es que debemos comenzar a rediscutir todo aquello que deba ser rediscutido, entendiendo que no hay debate que esté por fuera de los límites de lo decible, y que lo único que puede hacer callar es el horror.

2. A pesar de los reclamos de Victoria Villaruel sobre el trato diferencial para con las víctimas de nuestros sangrientos años 70', con el retorno de la democracia, Ricardo Alfonsín ordenó en sus primeros decretos el juzgamiento tanto de las juntas militares como de los cabecillas de las organizaciones armadas. No obstante, muchas de esas causas no prosperaron ya que, en palabras de Gil Lavedra, uno de los integrantes del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas, “fueron abandonadas por la dictadura, que eligió aprehender, torturar y matar en lugar de juzgar; fueron quienes frustraron la posibilidad de juzgar esos crímenes” (Tarricone, 2023). La reapertura de los juicios en la década siguiente, una vez declarada la nulidad de los indultos, no alcanzó a las organizaciones armadas porque sus delitos, al no ser crímenes de lesa humanidad, prescribieron. Puede verse en el reclamo de la vicepresidenta entrante una preocupante equivalencia entre las responsabilidades de un grupo de la sociedad civil y del Estado, que transpola a la vez en sus discusiones sobre las leyes reparatorias.

3. La Cámara Nacional Electoral reveló que Derechos Humanos fue el tema más votado por la ciudadanía para el debate presidencial con un 57,94%. Esto ocurrió posteriormente a que las organizaciones de Derechos Humanos, ante la preocupación porque el tópico no haya sido incluido en el debate, haya movilizó el voto de la ciudadanía.

4. Consolidación del populismo penal: la (in)seguridad en la agenda electoral presidencial

En el marco de las P.A.S.O. la muerte de Morena Domínguez, una niña de 12 años que fue asaltada y golpeada por motochorros de camino a su escuela en el partido de Lanús, puso a la política en estado de shock y redefinió la agenda electoral. Así, la discusión sobre la seguridad adelantaba y relegaba las discusiones económicas y financieras. Los hechos profundizaron el rumbo ya marcado de la agenda electoral: rol del Estado, (in)seguridad y el control de la criminalidad. En un contexto en el cual se discutía el avance o el retroceso del Estado, la electoralización de la seguridad pareció ratificar que, para todas las plataformas presidenciales, el Estado tenía algo allí que hacer.

Pasada la primera década del siglo XXI y con la crisis de los *commodities*, comienzan a crecer las opciones electorales y gobiernos de derecha en Argentina y América Latina. En escenarios políticos cada vez más derechizados, el ámbito de seguridad no fue la excepción, más bien siempre fue la regla: allí germinaron efectivamente las opciones más conservadoras que ponen el acento en la ley y el orden. En esta línea, los discursos y opciones de políticas securitarias que presentaron los tres candidatos más votados volvieron evidente el triunfo del modelo de populismo penal.

La caracterización del modelo en América Latina que realiza Alberto Binder (2012) sostiene que se trata de una concepción de que los problemas de seguridad son, principalmente, una cuestión policial. Por ende, su solución resultaría de dotar a las fuerzas de mayor autonomía, capacidad y respaldo político. Además, se expresa mediante un lenguaje tendiente a la militarización de los asuntos: combate contra la inseguridad y guerra contra el narcotráfico. Por otro lado, a través de la “demagogia punitiva” busca la reforma de códigos y leyes que conlleven a un aumento de las penas, mayor severidad con los delincuentes. En este punto también puede incluirse la repetitiva intención de la construcción de cárceles. Este modelo puede estructurarse desde arriba cuando las elites políticas definen soluciones duras en términos de seguridad, a través de la transmisión masiva de estas ideas en los medios de comunicación y la formación de una opinión pública favorable a esas ideas; y desde abajo (Pratt, 2007) cuando los políticos moldean sus estrategias políticas en base a las demandas más fuertes y punitivas de los ciudadanos. Se delinea así una característica fundamental de los populismos como es la creación de un antagonismo en el que un “nosotros” se contrapone a un “ellos”. Sobre este punto Sozzo (2009) sostiene que el populismo penal apela al sentido común mediante

una política de eslóganes que proponen despertar ciertas emociones del público tales como la ira, indignación, miedo, centrando fundamentalmente la atención en la figura de la víctima.

Con este marco de referencia analizaremos cómo JxC, LLA y UxP fueron portadores de agendas electorales securitarias que poseen aspectos plausibles de categorizar como elementos del populismo penal. En los tres casos se delinea 1) la identificación de un “nosotros” que incluye a los “argentinos de bien y de trabajo” y un “ellos” que aglutina a los “delincuentes”; 2) intentos discursivos de reparación hacia las fuerzas de seguridad y propuestas de políticas para la dotación de herramientas más eficaces en su lucha contra el delito; 3) la centralidad en la plataforma electoral de la situación del narcotráfico en la ciudad de Rosario.

Por su parte, la candidata Patricia Bullrich (JxC) puede ser vista como hija prodigio del modelo del populismo penal, cumpliendo con todas sus características. Amparada por el triunfo ante las palomas, el halcón de JxC apeló a una diferencia constante entre el kirchnerismo “que defiende a los delincuentes y un nosotros –que la incluye– “que defiende a los ciudadanos”. Esta distinción se marcó no solo en los delincuentes de calle, sino también con los políticos implicados en hechos de corrupción, con los militantes activistas por las tierras indígenas y con la denominada “la mafia sindical” culpables de una “la convivencia democrática rota e imposible” (Infobae, 8/10/2023).

Su estrategia de seguridad incluyó una reforma penal que baje la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años, pero sobre todo una defensa a ultranza de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Tomado como referente en la defensa de las fuerzas, Bullrich fue acompañada en varias ocasiones por Luis Chocobar en signo de apoyo y solidaridad con gendarmes y policías. La candidata lamentó las malas condiciones de trabajo y alegó desprotección y vulnerabilidad ante la ley de aquellos que se enfrentan a los delincuentes.

Finalmente, la agenda securitaria de Bullrich estuvo marcada por la “guerra contra el narcotráfico” en todo el país y particularmente en Rosario en donde prometió “entrar con toda la fuerza”. Sin lugar para gradualismos ni soluciones a medias, aseguró que la lucha contra el narcotráfico debe incluir todos los medios del Estado para derrotarlo, incluso las fuerzas armadas.

Por su parte, en la agenda de Seguridad de LLA fue de gran importancia la participación de la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel quien protagonizó la ma-

yor parte de las discusiones en las que se percibieron disputas con la candidata de JxC por la representación y el voto de la familia militar y policial.

Al igual que Bullrich, tanto Milei como Villarruel alegaron desprotección de las fuerzas ante el delito. Milei ilustró al país como “un baño de sangre”, producto de los que abrazaron las ideas de Eugenio Zaffaroni que cambiaron “el rol entre víctimas y victimarios, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados”. Sin embargo, en ocasión de la cuestión del narcotráfico, y de manera disímil a las declaraciones de Villarruel que dejaban ver una posición de defensa hacia las fuerzas de seguridad, Milei deslizó que en la lucha contra el narcotráfico “no hay un solo policía preso ni un solo policía muerto” (Perfil, 16/11/2023), dejando entrever una connivencia entre los criminales y las fuerzas de seguridad.

El candidato a presidente de la LLA apeló a las teorías económicas del crimen desarrollada por Gary Becker y puesta en práctica por Rudolph Giuliani. Con estas teorías intentó explicar la rentabilidad del crimen en Argentina como un caso de negocios que, como cualquier otra actividad económica, es rentable y genera resultados beneficiosos. Frente a este diagnóstico propone una solución que medie costo-beneficios: a partir de la efectividad de la justicia en impartir castigos, sería más costoso ser delincuente.

Otro punto clave y controvertido para Javier Milei en la campaña electoral fue la discusión sobre la libre portación de armas. Si bien negó que se trata de un tema de su plataforma, el candidato expresó a comienzos del año electoral que “aquellos estados que tienen libre portación tienen menos delitos” (La Voz del Interior, 16/11/2023). Al respecto fue consultada su vicepresidenta quien sostuvo que “nosotros queremos que el ciudadano de bien se pueda defender. Una cosa es la portación y otra es la tenencia” Sin embargo, al calor del ballottage, estas visiones fueron relegadas en tanto intenciones personales y privadas pero se aclaró que la crítica iba dirigida a la actual ley de armas la cual alega tener demasiadas restricciones: “No puede ser que los delincuentes estén armados y los honestos no” (La Voz del Interior, 16/11/2023).

Finalmente, el candidato Sergio Massa (UxP), de forma medida e incómoda por momentos, aglutinó –en comparación a los dos casos anteriores– fuerzas y apoyos de sectores progresistas y de izquierda, siendo no obstante portador durante la campaña electoral de elementos del modelo de populismo penal. También sostuvo distinciones en términos identitarios entre un ellos y un nosotros: “quiero que la calle vuelva a ser de los que trabajan y no de los delincuentes” o que “la pelea contra la

inseguridad no va a ser un tema más en la agenda, sino personal, porque son ellos o nosotros: o los delincuentes en la calle como dueños o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público” (La Nación, 24/10/2023).

Sin embargo, hubo algunos gestos para la tribuna, y pueden encontrarse elementos plausibles de identificar en sus propuestas con el modelo de seguridad democrática⁴. Un punto central fue el trato que el presidente debería tener con las fuerzas de seguridad. El candidato sostuvo que es necesario avanzar en la conformación de fuerzas respetuosas de los DD.HH., que garanticen una política de seguridad pública ciudadana y democrática.

En general, el candidato de UxP detalló tres ejes en su propuesta de lucha contra la inseguridad. El primero de ellos se trataría de la profundización en la prevención del delito a través de la instalación de cámaras, mayor presencia de móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de antipánico, etc. En segundo lugar, planteaba el eje concerniente a la política contra el crimen y el narcotráfico. Inclusive prometió la creación de un FBI argentino, una agencia federal que tendrá sus propios agentes especializados en delitos transnacionales y que atraviesan jurisdicciones tales como el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros que implican a grandes organizaciones criminales. El tercer eje fue el mejoramiento y control de la justicia a través de una mayor exigencia y razonabilidad en los plazos de enjuiciamiento: “Con un cambio en la ley vamos a medir el funcionamiento de los jueces para que ellos también tengan que rendir cuentas a la sociedad” (Página 12, 9/10/2023).

5. La política exterior en el marco de la agenda electoral: entre las contradicciones y la marginalidad

En el presente apartado se analizarán los principales ejes temáticos que rigieron la discusión acerca de la política exterior argentina durante la campaña presidencial de 2023. Como se verá, la discusión en esta área estuvo impulsada en gran medida por las posiciones extremistas y disruptivas de los candidatos de la LLA con respecto

4. El modelo de populismo penal se opone en América Latina (Binder: 2012) al modelo de la seguridad democrática. Según el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), el modelo propone la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de armas.

diversos temas, mientras que, solamente el posicionamiento ante el conflicto palestino-israelí se insertó en la agenda por su importancia coyuntural.

La campaña electoral presidencial de 2023 estuvo marcada por la ausencia o marginalidad de la política exterior en la discusión política argentina. Se pueden traer dos ejemplos que dan cuenta de ello. En primer lugar, el diario La Nación publicó dos cuestionarios virtuales en las cuales los encuestados, en base a sus respuestas frente a una serie de preguntas acerca de temas de actualidad, podían ver su afinidad los candidatos. La primera de estas encuestas fue publicada previamente a las PASO y la segunda antes del *ballotage*. En la primera, no se preguntó ninguna cuestión relativa a la política exterior y en la segunda solamente hubo una pregunta relativamente cercana a la temática⁵.

Por otro lado, en los debates presidenciales organizados por la Cámara Nacional Electoral (CNE), la política exterior quedó por fuera de los temas principales elegidos. Se la incluyó en un conjunto de tópicos que la ciudadanía podía optar para ser incluidos en el debate. Sin embargo, las elegidas fueron “Derechos Humanos y Convivencia democrática” y “Desarrollo Humano, Vivienda y protección del Ambiente” mientras que “Relaciones de Argentina con el Mundo” apenas llegó al 5,53% de los votos, lo cual evidenció la baja prioridad que la ciudadanía dio a la temática (Infobae 18/09/2023). Los vínculos de Argentina con el mundo recién fueron incluidos en el debate presidencial en el que participaron los candidatos que accedieron al *ballotage* (La Nación, 12/09/2023)⁶.

Pese a estas ausencias, se buscará realizar una breve descripción de cómo se trataron los principales ejes de esta discusión durante la campaña. Dentro de estos, la relación bilateral entre la Argentina y los EE.UU. devino en una cuestión de vital importancia para la clase dirigente, habida cuenta de la –seguramente dura– negociación que el gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre de 2023 deberá llevar a cabo con el FMI, además de otras cuestiones litigiosas tales como las negociaciones con los llamados “Fondos Buitres” o lo relativo a los juicios relacionados con la nacionalización de la empresa YPF.

5. Esta consistía en consultar si se acordaba con la siguiente frase: “El Papa demostró una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es condescendiente con los de izquierda, aunque sean asesinos.”

6. El tema de la política exterior sólo sería tratado en profundidad en el “Debate de Política Exterior” organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), en el cual participaron los principales referentes en esta área de las tres principales fuerzas políticas: Federico Pinedo (JxC), Diana Mondino de (LLA) y Gustavo Martínez Pandiani (UxP).

La postura que se destacó en este aspecto fue la de Javier Milei, que siempre se mostró como un admirador del capitalismo estadounidense y que hasta se llegó a mostrar cercano a figuras de la elite económica norteamericana, como el multimillonario y propietario de la compañía SpaceX, Elon Musk, quien no dudó en darle apoyo al candidato libertario y hasta de festejar su triunfo (Infobae, 19/11/2023, Paez, 2023). Por otro lado, Milei también destacó su admiración por el ex presidente estadounidense Donald Trump. Esto último quedó expresado cuando, en el marco de una entrevista que mantuvo con el comentarista político estadounidense de extrema derecha Tucker Carlson, declaró: “le diría [a Trump] que continúe con su lucha contra el socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo y los estatistas. Comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado” (Infobae, 14/09/2023). Esta admiración no está exenta de las contradicciones propias del estilo del dirigente libertario. Relacionado con Trump, en el año 2017, había publicado en Twitter: “(...) Creer que Trump es liberal es de zurdo burro.” Sumado a lo anterior, en su primer viaje como presidente electo mantuvo reuniones con el ex presidente demócrata Bill Clinton y con referentes de sectores totalmente enfrentados con el trumpismo.

Casi tan contradictorias fueron sus declaraciones sobre las relaciones con Brasil, China y Rusia. Respecto a ello declaró “no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. (...) Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. (...) Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz” (Infobae, 12/10/2023). A lo que luego sumó “a los dictadores no los saludo. A Maduro no le doy la mano, al de Corea [del Norte], a los chinos, a Putin, a ninguno que esté en contra de la libertad; al de Nicaragua tampoco. Y a los socialistas intensos tampoco, llámese López Obrador o Lula” (La Nación, 12/09/2023).

Sin embargo, volvió sobre sus pasos y matizó sus anteriores declaraciones cuando calificó como falacia la crítica en su contra sobre el congelamiento de las relaciones comerciales con China y Brasil en caso de ganar las elecciones. “No los voy a considerar mis socios estratégicos; mi alineación son los países que defienden la paz y la libertad, Estados Unidos e Israel, no hago tratos con autócratas, comunistas, pero eso es una definición geopolítica, después puedes hacer las transacciones que se te den las ganas, el comercio debería ser libre, y yo como Estado no voy a hacer nada para impedirlo” (Infobae, 12/10/2023).

Por otro lado, Sergio Massa y algunos miembros de su espacio se mostraron pragmáticos en lo relativo con sus vínculos con la región y el mundo, por ejemplo al defender como un logro el ingreso de Argentina a los BRICS, la profundización de los vínculos con el Brasil de Lula y la República Popular China o el mantenimiento del Mercosur como principal marco de integración regional (Página 12, 20/10/2023; La Nación 13/11/2023), pero sin evitar dar señales positivas hacia posturas cercanas a las sostenidas por EE.UU. Esto se ejemplificó cuando Massa planteó que “Venezuela es una dictadura”, a lo que luego sumó: “no estoy con los países que no respetan el estado de derecho. No me encolumno con ningún país, yo el único alineamiento que tengo es con la Argentina. Soy de los tipos que defiende la relación con Estados Unidos y el que mejor relación tiene con Republicanos y Demócratas, pero también defiende la soberanía de Malvinas (La Nación, 22/09/2023)”.

Como mencionamos en un primer momento, un hecho que sí irrumpiría con fuerza en las discusiones de política exterior fue el ataque perpetrado por fuerzas del grupo islámico Hamás contra Israel, llevado a cabo el 7 de octubre de 2023. El segundo debate presidencial, que tuvo lugar tan sólo un día después de la incursión de Hamas, se vería permeado por el acontecimiento. En las presentaciones que hicieron los candidatos previamente al inicio del debate en sí, todos hicieron referencia al ataque. “En primer lugar, mi solidaridad con el Estado de Israel que sufrió el ataque del terrorismo de Hamas”, dijo Milei en la apertura formal del debate. “Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste por el ataque del terrorismo”, coincidió Patricia Bullrich, un rato antes que Schiavetti, quien de modo escueto afirmó: “Reitero mi solidaridad por el ataque a Israel”. A su turno, Massa afirmó que “quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque brutal que enluta al mundo”, sin mencionar por su nombre a Israel ni al grupo palestino responsable de la invasión de territorio israelí. Por último, llegó la voz disonante. Bregman sostuvo que “nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”, postura que fue muy criticada por entenderse como una justificación al ataque de Hamas (La Nación, 09/10/2023).

Está claro que la cuestión del conflicto palestino-israelí y la vinculación entre la Argentina y el Estado de Israel será una cuestión importante para el futuro gobierno de Milei, reconocido admirador del judaísmo y que toma al Estado judío como uno de los puntos axiales de su política exterior (La Nación, 13/09/2023; Página 12, 13/09/2023).

Finalmente, la cuestión sobre Malvinas se colocó como otro punto conflictivo de la campaña, producto de declaraciones tanto de Milei como de miembros de su espacio. El debate comenzó con declaraciones de la candidata a Canciller de LLA, Diana Mondino, al medio británico *The Telegraph*, en las que expuso: “Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie”, en relación al reclamo nacional para romper con el imperialismo británico. En sus declaraciones al medio inglés, además, intentó combinar la cuestión de la soberanía con otras posturas de Milei, al resumir todo en una sola cosa: la inflación. “¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de esa sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal” (La Nación, 11/09/2023; Página 12, 28/11/2023).

Esto obligó a Milei a aclarar su postura con respecto a la soberanía sobre las islas, cuando tuvo que explicitar que “las Islas Malvinas son argentinas. La soberanía no se renuncia. Es cierto que hubo una guerra en la cual perdimos. Ahora estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong”. (Página 12, 28/11/2023) Esto sin embargo, no evitó las duras críticas lanzadas tanto por Bullrich como por Massa (La Nación 11/09/2023) o el repudio de varias agrupaciones de ex combatientes, que llegaron a usar hacia Milei y a su futura canciller calificativos como “cipayos”, “vendepatria”, “traidores internos” o “La Desmalvinización Avanza” (Página 12, 13/09/2023).

Y es que su alabanza a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher le valieron duras críticas por parte de aquellos que defienden la causa argentina sobre Malvinas. Massa retomó estas críticas durante el tercer debate presidencial cuando dijo “Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. (...) Defiendo la soberanía de Malvinas y creo que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho de a la autodeterminación o no. (La Nación, 13/11/2023)” Ante esto, Milei elaboró una respuesta donde unió cosas diversas que desdibujaron el sentido de la misma: “En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan o lo fue Churchill (...) Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. [...]” “Con ese criterio, cuando Alemania en el año 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre; vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo (...) Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra que perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por

las vía diplomática. Por supuesto voy a defender las Malvinas (La Nación, 13/11/2023; Página 12, 12/09/2023)".

Para concluir, en lo que respecta a la política internacional, se intentó señalar los principales temas y posiciones de la agenda electoral. Vale considerar que, salvo por lo expuesto hasta aquí, se puede ver como una dimensión marginal en las agendas de campaña, lo que abre un enorme interrogante acerca de la geopolítica Argentina, cuestión de vital importancia para un país que vive inmerso en una profunda crisis económica, social y política.

6. Consideraciones Finales

A modo de conclusión, el análisis de la agenda electoral correspondiente a los comicios nacionales de 2023 da cuenta de la irrupción de una nueva fuerza electoral, LLA, que con una trayectoria de dos años no sólo logró instalarse como fuerza competitiva, sino también se debe reconocer que fueron en gran medida sus propuestas de campaña las marcaron los tiempos y ejes de debate de los candidatos presidenciales en torno a las diversas dimensiones que se fueron recorriendo.

Esta tendencia se profundizó dada la crisis económica por la que atraviesa el país, la cual le permitió a Javier Milei imponer su agenda movilizando a una gran parte de la ciudadanía que se mostró apática ante los discursos promovidos por las dos fuerzas políticas que organizaron la competencia nacional desde 2015 cuyas alianzas hoy se representan en JxC y UxP.

En un panorama de fuerte descreimiento de la política, de agotamiento y descontento social, Javier Milei supo recurrir a la figura de outsider para, desde allí, volver a hacer promesas. Y si bien no fue sorpresivo que ello representara una ventaja frente a los partidos que gobernaron y tuvieron responsabilidad en un período cuya mayor constante fue el empeoramiento de los indicadores económicos y sociales, si lo fue su capacidad para imponer los temas de agenda.

Su promesa radical de un mundo nuevo significó también la puesta en cuestión de gran parte de los valores y acuerdos establecidos sobre lo que se construyó la vida política e institucional desde la democracia hasta la fecha. Ello abre la pregunta y nos deja en un panorama de considerable incertidumbre por el porvenir.

7. Bibliografía

AGUILAR VILLANUEVA, L. (1993), “Estudio introductorio”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

BERTOIA, L (2023), “Patricia Bullrich promete una “salida justa” para los represores de la dictadura”, en *Página 12*. Consultado el 14 de septiembre en <<https://www.pagina12.com.ar/587704-patricia-bullrich-promete-una-salida-justa-para-los-represor>>

BINDER, A. (2009), “El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual” en Kessler, G. (2009) *Seguridad y ciudadanía*, Buenos Aires, Edhasa.

BINDER, A. (2012), “El rompecabezas de la seguridad democrática”, en Revista digital de la Cátedra Abierta Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, publicada el 1/6/2012. Disponible en: <https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/el-rompecabezas-de-la-seguridad-democratica/>

BUTLER, J. (2020), *La fuerza de la no violencia*, Buenos Aires, Paidós.

CASTAGNO A. y otros (2017) “La agenda electoral en los comicios presidenciales de Chile (2013), Brasil (2014) y Uruguay (2014)” en Pinillos C. Cavarozzi, M. y Mella Polanco, M (Comp) *Itinerarios políticos contemporáneos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay*, UNR Editora. Libro digital. Disponible en: <<https://rephip.unr.edu.ar/items/36f4fc15-6c64-4d42-9789-48a8eb918d9e>>

LACLAU, E. (2005), *La razón populista*, Buenos Aires, FCE.

LODI, L. y LUCCA, J.B. (2018) “La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003”, en Cuadernos del CIESAL, UNR, diciembre de 2018. Disponible en: <<https://rephip.unr.edu.ar/items/8343697d-000d-4630-9225-4544dfcb97ed>>

PÁEZ, A. (2023) ¿Por qué Elon Musk apoya a Javier Milei en Argentina? Simpatía por la ultraderecha y litio para baterías, hipótesis de especialistas, en CNN. Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/11/24/elon-musk-apoyo-milei-por-que-litio-starlink-ultraderecha-orix-arg/> (Consultado: el 28 de noviembre de 2023).

PRATT, J. (2007), *Penal Populism*, Routledge, Londres.

SOZZO, M. (2008), “Populismo punitivo, proyecto normalizador y “prisión-depósito” en Argentina” en *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito*, Rio Grande do Sul.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

TARRICONE, M. (2023), “Crímenes durante la dictadura militar: ¿en qué casos la Justicia argentina los considera de lesa humanidad?”, en *Chequeado*. Consultado el 22 de noviembre en <<https://chequeado.com/el-explicador/crimenes-durante-la-dictadura-militar-en-que-casos-la-justicia-argentina-los-considera-de-lesa-humanidad/>>

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 15 de diciembre de 1995.

Fuente hemerográfica

Diario Infobae: <https://www.infobae.com/>

Diario La Nación: <https://www.lanacion.com.ar/>

Diario Página 12: <https://www.pagina12.com.ar/>

Diario Perfil: <https://www.perfil.com/>

Diario La Voz del interior: <https://www.lavoz.com.ar/>

Cavanagh, Lisa; Davalle, Julia; Cabrera, Juan Manuel y Vera, Mariana (2024). “La agenda electoral en la campaña presidencial de Argentina 2023”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 24-42.

LA DERECHA RADICAL COMO OPCIÓN ELECTORAL COMPETITIVA EN ARGENTINA 2023

Esteban Iglesias

(CONICET y Centro de Estudios Comparados
de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

El proceso electoral del 2023 en Argentina muestra la consolidación de un nuevo animal político en el campo de la política partidaria: la derecha radical. En efecto, La Libertad Avanza (LLA), liderada por Javier Milei, en el marco las elecciones presidenciales de 2023 se ha constituido en una oferta electoral competitiva perforando la dinámica bicoalicional y polarizadora que desde la primera década del presente siglo habían protagonizado el peronismo en su inflexión kirchnerista –Frente para la Victoria (2003-2109), Frente de Todos (2019-2023) y Unión por la Patria (2023)– y PRO en coalición con otras etiquetas partidarias –Cambiemos (2015) y Juntos por el Cambio (2019). Así el espacio político argentino se encontraba dominado por el kirchnerismo cuya resignificación del peronismo desde 2003 lo ubicó en el espacio de la centro-izquierda y por Cambiemos dominando el espacio de la centro-derecha. LLA en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto del presente

año obtuvo 30,04%, dejando en segundo lugar a Juntos por el Cambio (JxC) y en tercer lugar a Unión Por la Patria (UP). Este resultado nos informa de dos cuestiones. En primer término, que se trata de una fuerza política que recibió apoyo electoral en todo el territorio nacional y no sólo de rango local o exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Y, en segundo término, que se trata de un espacio político que se ha constituido en una oferta electoral competitiva con chances de acceder al gobierno por la vía electoral.

Más allá de su relevante política, lo novedoso de LLA radica, por un lado, que es una expresión política que puede ser calificada de “paleolibertarismo”, de raigambre estadounidense. Por otro lado, la singularidad argentina consistente en que aglutina dos tradiciones y culturas políticas derechistas que hasta la primera década del siglo XXI había actuado desarticuladamente: la familia nacionalista-reaccionaria y la familia liberal-conservadora. Anteriormente habían sido incorporadas por las fuerzas políticas tradicionales como el Partido Justicialista (PJ) en el período menemista, que habían tenido escasa presencia electoral como la Unión de Centro Democrático (UCECE) o fuerzas que fueron episódicas como el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN). Finalmente, y a diferencia de otras experiencias, no se trata de una radicalización de fuerzas políticas pre-existentes que se identificaban con la centro-derecha, tal como muestran otras experiencias políticas. Sus principales cuadros políticos tuvieron actividad política, la que se forjó en espacios derechistas que no necesariamente o que eran ajenos a las organizaciones partidarias que protagonizaron el siglo XXI. Entonces, la emergencia y consolidación de una fuerza que se inscribe en el espacio de las derechas radicales se produjo en el contexto político de surgimiento, constitución y agotamiento político del kirchnerismo en tanto principal expresión del peronismo y luego del fracaso de la experiencia gubernamental presidida por Cambiemos –Pro, UCR y Coalición Cívica. Asimismo, se destaca que la pandemia generada por el COVID 19 se constituyó en el momento de aparición pública de esta derecha radical como expresión política-electoral. De acuerdo con esto, el presente trabajo tiene como principal propósito caracterizar los rasgos identitarios de las fuerzas que protagonizaron el espacio político argentino a nivel nacional enfatizando sus estrategias de construcción política en diferentes coyunturas electorales. Para ello se realizará un breve repaso histórico de las trayectorias partidarias, lo que permitirá analizar la dinámica oficialismo/oposición durante el presente siglo y capturar la emergencia de un nuevo animal político en el terreno partidario: LLA.

2. Trayectoria partidaria durante el siglo XX

Durante el siglo XX radicales y peronistas predominaron en el escenario político-partidario. Y las expresiones y fuerzas de derecha y de izquierda fueron escasamente relevantes o inexpresivas. El caso de las derechas partidarias es significativo ya que optaron por apoyar la vía militar para incidir en la política nacional. En efecto, desde 1930 hasta 1983 Argentina experimentó diversos golpes de Estado que interrumpieron el orden democrático en 6 ocasiones y las derechas políticas no dudaron en brindar su apoyo político.

La Unión Cívica Radical (UCR) es el primer partido moderno de Argentina, se fundó en 1891 y en 1916 obtuvo su primera victoria electoral, mediante sufragio popular, para elecciones presidenciales. Las victorias para elecciones presidenciales se reiteraron en 1922 y 1928, y, en 1930 se produjo un golpe de Estado. El peronismo surgió a mediados de los años 40 del siglo XX y en 1946 el coronel Juan Domingo Perón ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Como se ha mencionado, durante el período 1930-1983 se produjeron diversos golpes de Estado a manos de las cúpulas militares. Sin embargo, estas dos identidades políticas no pudieron ser eliminadas del escenario político a pesar de que sus dirigentes y miembros hayan sufrido persecuciones y proscripciones. Lo cierto es que estas configuraciones partidarias han representado parte del electorado argentino a lo largo del siglo XX. Así, desde mediados de siglo XX el peronismo ancló sus rasgos identitarios en la representación de los intereses de la clase trabajadora mientras que el radicalismo lo hizo con la clase media. La implosión de la dictadura militar luego de perder la guerra de las Islas Malvinas y la consecuente restauración democrática en 1983 colocó frente a nuevos desafíos a los partidos políticos cualquiera sea su orientación ideológica. Cabe destacar que desde 1983 hasta 2003 las elecciones presidenciales como las legislativas fueron ganadas por el radicalismo en 1983 y en 1999 -en esta ocasión la UCR era el socio mayoritario de la coalición denominada Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación- o por el peronismo en 1989 y en 1995. En este período el peronismo gobernó durante 12 años y el radicalismo en 8. Y, las expresiones de izquierdas como el Partido Intransigente (PI) y las derechas como la Unión de Centro Democrático (UCEDE) tuvieron un desempeño electoral poco relevante.

En 1983 la UCR ganó con un porcentaje del 51,75% mientras que el peronismo obtuvo el 40,16%, con lo cual ambas fuerzas sumaban más del 90% de los sufragios emitidos. En 1989 se produjo la primera alternancia constitucional desde la recuperación de la democracia, en la que el entonces presidente radical traspasó la banda presi-

dencial a un peronista. En esa ocasión el peronismo alcanzó un 47% y el radicalismo un 37%. A pesar de haber obtenido menos del 50%, el peronista Carlos Saúl Menem terminó ganando las elecciones nacionales por haber conseguido en el Colegio Electoral el apoyo de la UCEDE. Lo más significativo de ese momento fue la transformación del ideario peronista tradicional afincado en la promoción de la industria nacional, el rol activo del Estado en la programación económica, la independencia y autonomía nacional, etc. fue reemplazado con velocidad por el ideario neoliberal cuyo rasgo principal fue el de colocar al mercado como principal organizador de la sociedad mediante la promoción de privatizaciones, liberalización del comercio y el achicamiento del Estado. Este viraje le aseguró el apoyo del conservadurismo liberal expresado en la UCEDE y estuvo apuntalado por el control de la inflación gracias a la aplicación del Régimen de convertibilidad económica, por el cual 1 dólar equivalía a 1 peso argentino.

El menemismo, tal como se conoció a este período, tuvo características dominantes. Sin embargo, con la Crisis del Tequila originada en México y el programa de convertibilidad económica fueron el inicio de un declive de los lineamientos políticos que se habían gestado durante la última década del siglo XX. Así, en el campo partidario en 1997 se formó una coalición electoral denominada Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, encabezada por la UCR y secundada por el Frente del País Solidario (FREPASO). Esta coalición ganó las elecciones presidenciales y legislativas de 1999. Sin embargo, nunca puso en tela de juicio el modelo económico, más bien se concentró en los aspectos éticos de la clase política, es decir, hizo eje en la corrupción. Con lo cual los problemas que venía arrastrando Argentina persistieron y se agudizaron. Esto derivó en lo que se conoció como la “crisis de diciembre de 2001”, la que produjo la renuncia del entonces Presidente elegido por el voto popular, luego la designación y renuncia de 4 presidentes y, finalmente, desde el 1 de enero de 2002 la asunción provisional de Eduardo Duhalde, un caudillo peronista de la populosa provincia de Buenos Aires. El compromiso principal de este fue el de volver a convocar a elecciones nacionales para blindar de legitimidad la investidura presidencial.

3. Centralidad del clivaje gobierno y oposición en el siglo XXI

El clivaje gobierno/oposición giró en torno a lo que podemos considerar como el surgimiento y la consolidación del Kirchnerismo en tanto fuerza política dominante. El antiguo clivaje Peronismo/anti-peronismo, que había sido el eje organizador de las disputas políticas desde mediados de los años 40 del siglo XX hasta comienzos del

siglo XXI, fue reemplazado por el de kirchernismo/anti-kirchnerismo. Esto cobró una forma nítida en 2008, luego de lo que se conoció como el “conflicto con el campo”.

Luego de la crisis política que se gatilló en diciembre de 2001 el clivaje político gobierno/oposición en Argentina se resignificó. En efecto, Néstor Kirchner triunfó en las elecciones de abril de 2003 y asumió como presidente el 25 de mayo de ese año. El kirchnerismo en el gobierno nacional forjó una identidad política cuyos rasgos principales remitían a la confrontación con el ideario neoliberal. Esto, en los primeros años del presente siglo, ya se había erigido en un clima de época que irradiaba hacia buena parte de los países de América Latina. Así, los principales elementos identitarios del kirchnerismo remitieron al fomento del regionalismo, una vuelta del Estado como organizador de la vida social, una revisión del peronismo ahora en su inflexión izquierdista, un apalancamiento de la política de derechos humanos y las políticas redistributivas, ya sea mediante el incremento del salario mínimo como a través de las convenciones colectivas de trabajo.

El llamado “conflicto del campo” modificó el escenario político argentino, alterando los esquemas de alianzas políticas existentes y motivando nuevas configuraciones. En 2007 Cristina Fernández asumió su primer mandato presidencial y a los pocos meses emitió una medida, la Resolución 125, por la cual intentó incrementar los derechos de exportación del trigo, el maíz y la soja. Esto generó un terremoto en las representaciones agrarias, produciendo la constitución de la Mesa de Enlace, un espacio político en la que confluían la representación de la oligarquía agraria, los medianos y pequeños productores. Esto fue algo inédito en términos de representación corporativa. Nunca antes habían confluído los intereses políticos de los grandes latifundistas con los intereses de los pequeños. Este conflicto se prolongó durante 129 días y el oficialismo perdió esta batalla política.

En 2007 Mauricio Macri, jefe político de Propuesta Republicana (PRO), ganó las elecciones la ciudad de Buenos Aires. Y, la coyuntura política de 2008 lo convenció de formar una fuerza de carácter nacional que dispute con el kirchnerismo. En sus orígenes PRO estuvo conformado por facciones que provenían del empresariado, de las Organizaciones No Gubernamentales, radicales descontentos, peronistas en desacuerdo con la resignificación que hizo el kirchnerismo del peronismo y partidos conservadores de alcance sub-nacional. Esta fuerza estuvo encabezada por Mauricio Macri, el que luego del conocido “conflicto con el campo” reinstaló el término de populismo en el espacio público para criticar al peronismo en general y kirchnerismo en particular.

En la contienda electoral de 2011 Cristina Fernández ganó de forma inapelable las elecciones obteniendo un 54%. En esta coyuntura electoral la entonces presidenta propuso a la ciudadanía consolidar las políticas iniciadas durante su primer gobierno. Su mensaje hacía eje en “la fuerza de los hechos” y, también, en la potencia política de su persona, “Fuerza Cristina, Fuerza Argentina”. Sin embargo, se le añadía una tonalidad nueva, el refinamiento de los mecanismos institucionales. Este elemento precisamente se convertiría en el eje de las críticas de las principales oposiciones político-partidarias, en referencia a la falta de respeto hacia los aspectos republicanos por parte del gobierno liderado por Cristina Fernández. En efecto, las críticas se dirigían hacia los supuestos intentos de reelección indefinida, a no respetar la división de poderes públicos y peor aún a la intervención del ejecutivo en el poder judicial. Aspectos que formaban un tronco de crítica común y que podían ser caracterizado como la cultura política del populismo. Sin embargo, las oposiciones partidarias estaban dispersas y fragmentadas. En la elección presidencial de 2011 Cristina Fernández ganó con 54%, el socialista Hermes Binner logró 16% y una parte del radicalismo representada en la figura de Ricardo Alfonsín obtuvo 11%. Estos resultados dieron cuenta de un fortalecimiento de las fuerzas oficialistas y de una fragmentación de las oposiciones político-partidarias. Mauricio Macri no se presentó a elecciones y este escenario político fortaleció su convicción de presentarse como principal oposición partidaria en la próxima elección.

En 2015 la situación política se había modificado radicalmente. El primer elemento a considerar radica en que kirchnerismo había mostrado signos de agotamiento y, el segundo, en que la principal oposición partidaria se había fortalecido mediante la conformación de la coalición política denominada Cambiemos -encabezado por PRO y secundado por radicales y la Coalición Cívica. Finalmente, hay que destacar que Cristina Fernández no podía ser candidata y los representantes elegidos por su sello político no tenían un alto reconocimiento social. En efecto, la fórmula por el oficialismo fue encabezada por Daniel Scioli, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso de la Argentina. Así, la coalición Cambiemos ganó las elecciones con 51,3% mientras que el oficialismo obtuvo 46,6% en instancias de la segunda vuelta electoral.

La de 2015 fue la primera campaña electoral donde las redes sociales tuvieron un lugar relevante. No sólo porque su uso era habitual en la ciudadanía sino, también, porque la reglamentación electoral no limita su utilización hasta llegado el día de la votación. Lo cierto fue que el candidato por el oficialismo, Daniel Scioli, enfatizaba

la continuidad del modelo político iniciado por Cristina Fernández. Así, las propuestas tenían las características de continuar con las políticas sociales redistributivas, en particular, la “Asignación Universal por Hijo” y los planes de vivienda, como el PROCREAR, el primer programa masivo de construcción y mejora de viviendas particulares. En contraposición Mauricio Macri hizo una campaña electoral organizada en torno a la idea de “cercanía” y, al mismo tiempo, instaló con éxito la idea de cambio –gradual– era imprescindible para la ciudadanía. Su primer aviso de campaña se denominó “Estoy con vos” y con posterioridad sumó dos de mucha contundencia social, el de “Pobreza Cero” y el de “Unir a los argentinos”. En la recta final de la campaña se vio obligado a declarar que no eliminaría la principal política social del kirchnerismo, la Asignación Universal por Hijo. Finalmente, cabe destacar que Mauricio Macri fue, para los días de cierre de campaña electoral, *trending topic* mundial y en Argentina en la red social Twitter con el hashtag #YolovotoaMM. Finalmente, la campaña de 2019 reinstaló la idea de cambio político en clave oficialismo/oposición. Esta vez el oficialismo era Cambiemos y el peronismo se agrupó en la coalición electoral Frente de Todos, la que era encabezada por Alberto Fernández y estaba secundada por Cristina Fernández. La particularidad de esta fórmula presidencial radicó en su diseño ya que el entonces presidente fue escogido por la vicepresidenta, decisión que fue comunicada públicamente mediante un video en YouTube. La coalición Cambiemos ahora se denominó Juntos por el Cambio y Mauricio Macri iba por su reelección. El Frente de Todos ganó con 48% y Juntos por el Cambio obtuvo 40% en instancias de la segunda vuelta electoral. En esta campaña electoral el candidato peronista tuvo como principal mensaje “recomposición salarial para los asalariados”, “vamos a luchar contra el hambre” o “entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados”. En cambio, Mauricio Macri desarrolló su campaña con el slogan “Sí, se puede”, en referencia a que en último tramo de la campaña era posible ganar las elecciones y darle continuidad a lo que él había iniciado con su gobierno, un nuevo camino que perseguía “cambiar la Argentina” y así alejarla del principal mal que la acechaba: el populismo y los 70 años de peronismo.

4. Pandemia y la campaña hacia las PASO 2023

El gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, comenzó con una impronta política cuyo principal vector era la de la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 alteró los diagnósticos y planes políticos. Así, el 19 de marzo de 2020 el presidente anunció por cadena televisiva na-

cional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Una medida que tenía alcance nacional y sólo exceptuaba a las actividades declaradas esenciales: sectores de salud, telecomunicaciones, energía y alimentación. Luego de un período corto de aceptación política y social del ASPO, comenzó a estructurarse un discurso en torno a que el aislamiento significaba un “encierro” en la medida en que cercenaba libertades, en alusión a la libertad de comercio, tránsito y de expresión. Lo cierto fue que el discurso que circuló en el espacio público generó un conjunto de movilizaciones y de acciones colectivas que protestaban contra el aislamiento y la vacunación masiva.

Las movilizaciones se gatillaron en respuesta a determinadas acciones gubernamentales, por ejemplo, el otorgamiento de “superpoderes” por parte del presidente Alberto Fernández a su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; también con la tentativa de presentar un proyecto de ley acerca de un tributo extraordinario a las grandes fortunas; y, finalmente, con la iniciativa de liberación de presos –1800 aproximadamente– bajo el argumento gubernamental de las negativas condiciones sanitarias y la posibilidad de contagio masivo de Covid al interior de las cárceles. Así, el 30 de abril se organizó un cacerolazo masivo, de alcance nacional, bajo la consigna #Noa-laLiberacióndePresos. Estas protestas rápidamente fueron denominadas “anti-cuarentena” e inmediatamente se instaló en la opinión pública el término “infectadura”, el que asimilaba la situación de la pandemia con una dictadura. Cabe destacar que a escasos 40 días de cuarentena las acciones de protesta tenían un perfil definido: eran protagonizadas por sectores sociales medios y medios altos y su principal petición se organizaba en torno a la idea de libertad en su acepción civil.

Las fechas patrias argentinas marcaron el itinerario de las movilizaciones. Así, las marchas “anti-cuarentena” se produjeron mayormente el 25 de mayo (día de la revolución de mayo), el 9 de julio (día de la independencia), el 17 de agosto (paso a la inmortalidad del general San Martín) y el 12 de octubre (Día del respeto de la diversidad cultural). Estas se sucedían en los grandes centros urbanos en los que circulaban consignas como “la cuarentena más larga del mundo”, “el virus fue creado por el gobierno corrupto!”, “Caravanadelalibertad”, “Libertad para trabajar” y “No al Estado totalitario”, etc.

Así, la pandemia generada por el COVID-19 dio lugar a diversos flujos movilizacionales, los que eran protagonizados por fuerzas opositoras al gobierno y que instalaron como principal problema público la cuestión de la libertad en su acepción liberal. Esto fue aprovechado por la principal oposición político-partidaria JxC y también dio

lugar a la emergencia de Javier Milei como figura política conocida en todo el territorio nacional, particularmente, por sus apariciones televisivas en canales de televisión abierta. El 14 de julio de 2021 Javier Milei fundó LLA cuyo slogan es “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte”. Los rasgos del contexto político que surgieron de la pandemia se amplificaron en la coyuntura electoral 2023. El clivaje oficialismo/oposición se reactualizó pero con connotaciones novedosas en la medida que se instaló un discurso de sospecha sobre la clase política basado en su corrupción así como también en su inoperancia política. También se agudizó una crítica al Estado principalmente por sus profundas fallas en un elemento vital: lo relativo a la “seguridad” ciudadanía. Una problemática que la ciudadanía sufre cotidianamente y que involucra un conjunto muy heterogéneo de acciones, desde pequeños hurtos hasta “balaceras” a individuos o instituciones escolares. Todo esto transcurre en un contexto en el que el gobierno nacional no puede controlar la inflación y recesión económica y mala calidad de los empleos que se han creado luego de la pandemia.

Los ejes discursivos de las principales fuerzas políticas en la campaña electoral remitieron a las diferentes modalidades que ejecutarían el cambio político, que, aparentemente, se presentaba como imprescindible. En efecto, LLA fue el espacio político que capitalizó con mayor fuerza la promesa de cambio político. así, el cambio político que proponía tenía características estructurales: dolarización, reforma del estado, reforma educativa en clave privatizadora, reforma de la salud, reforma laboral. Fue el primer espacio político que presentó un programa partidario y sus propuestas políticas dominaron la agenda pública. Juntos por el Cambio, espacio que despertaba mayor interés la interna partidaria, también promovía una idea de cambio político. Así en el marco de la interna partidaria Patricia Bullrich postulaba “bienvenida la fuerza del cambio” y, seguidamente, “Si no es todo, es nada”. En contrapartida, su principal contrincante, Horacio Rodríguez Larreta, hacía hincapié en “Hagamos el cambio de nuestras vidas”, “Este país sí tiene arreglo” y, finalmente, “lo podemos hacer porque ya lo hicimos”.

Unión por la Patria presentó como principal candidato a Sergio Massa, quien actuaba como ministro de Economía y como opción alternativa a Juan Grabois, un representante de los trabajadores de la economía informal. El slogan de campaña para la instancia interna de Massa era “defender la patria”, en alusión a opciones y recetas políticas que ya habían sido implementadas y no dieron resultado en el país. Esas opciones políticas a las que aludía Massa eran las de JxC y LLA.

5. Resultados de las PASO 2023 y los rasgos constitutivos de LLA

El 13 de agosto de 2023 se celebraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para definir las candidaturas cargos nacionales, fórmula presidencial y Diputados y Senadores. Se trata de elecciones obligatorias para la ciudadanía en donde se definen los candidatos de cada fuerza política. Esta coyuntura política estaba caracterizada por la incertidumbre acerca de la cantidad de ciudadanos que asistiría y, también, por el denominado “voto bronca” o “voto veto”. El nivel de participación ciudadana fue del 69,62%, una cifra menor que en las elecciones de 2019. También hubo casi un 5% de voto en blanco. Las principales fuerzas políticas que se presentaron fueron:

1. Unión Por la Patria, la fuerza oficialista, presentó dos candidatos, Sergio Massa, el que obtuvo 21,43% y Juan Grabois 5,85, lo que totalizó 27,28% (6.719.042 votos). Salió electo como candidato a presidente Sergio Massa.
2. Juntos por el Cambio presentó dos candidatos. Patricia Bullrich, la que obtuvo 16,81% y Horacio Rodríguez Larreta obtuvo 11,19%. Totalizaron 28% y el candidato a presidente por esta fuerza política fue Patricia Bullrich (6.895.941 votos).
3. La Libertad Avanza presentó como único candidato a Javier Milei, el que obtuvo 29,86% (7.352.244 votos). Fue el candidato y la fuerza política más votada en esta instancia electoral.
4. Juan Schiaretti, un peronista del interior, por chapa “Hacemos por nuestro país”, obtuvo 3,83% (914.812 votos).
5. Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad presentó a Miriam Bregman, fuerza que obtuvo 1,87% (642.773).

En primer lugar, fue significativo en esta instancia, en la que se elegían candidaturas internas, la victoria de la fórmula de Javier Milei/Victoria Villarruel. En segundo lugar, fue relevante que JcC, que era la principal oposición al oficialismo, presentaba una elección interna muy atractiva para el electorado. En tercer lugar, el peronismo hizo una elección que lo dejó en una instancia competitiva en términos electorales.

Más allá de ello, lo más notable radica en que desde la recuperación de la democracia es la primera vez que una fuerza política de derecha radical obtiene 30% de votos en una instancia electoral. LLA y su fórmula presidencial ganó las primarias en 16 provincias argentinas. Sin embargo perdió en el área metropolitana, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, distritos que representan alrededor del 45% del electorado.

¿Qué elementos novedosos presenta esta elección? Principalmente que LLA y su fórmula presidencial, la que salió victoriosa en la instancia de las PASO, sintetiza dos tradiciones políticas derechistas, la que Argentina se encontraban actuando de forma desarticulada hasta 2012-2013 y que ahora lograron construir una fuerza política competitiva que perfora la dinámica política que se había estructurado desde las elecciones nacionales de 2015. En efecto, desde 2003 se formó el kirchnerismo, como principal espacio político del peronismo, y, con posterioridad PRO, que fue fuerza principal de Cambiemos y Juntos por el Cambio. Así, hasta las elecciones 2021 el kirchnerismo y PRO constituían las principales referencias electorales de la ciudadanía y hacían un juego de polarización con diferentes intensidades de acuerdo a la coyuntura política. Sin embargo, el proceso electoral de 2023 abrió paso a una nueva fuerza, que es competitiva y cuyos rasgos identitarios muestran diferencias sustantivas con las fuerzas políticas actuales.

En efecto, en el núcleo neurálgico de LLA anidan dos tipos de derechas, las que han actuado en diferentes momentos de la historia Argentina y cuya unidad la vuelve singular y diferente de las fuerzas que actualmente protagonizan el escenario político. Para caracterizar las tradiciones políticas derechistas que anidan en LLA retomamos la caracterización de Carlos Altamirano, el que plantea la existencia de dos familias de derechas, la nacionalista y la liberal-conservadora. Así la derecha nacionalista se caracteriza por tener un

espíritu de cruzada (antiliberal y antimarxista), el catolicismo integrista, la concepción organicista de la sociedad, la nación como instancia primaria y absoluta, la visión autoritaria del orden político, etc. Los miembros más populistas de esta familia y, por ello, los más inclinados a aceptar la movilización de masas como dispositivo plebiscitario de un régimen autoritario, suelen buscar en el peronismo el ámbito y el instrumento de la revolución nacional. Los núcleos más señoriales cuyas raíces nos podrían remitir a los años 20 y 30, no sólo son hostiles a la democracia política y al pluralismo ideológico, sino también a los mítines y las demostraciones plebeyas. Estos no tienen, por lo

general, otro candidato político que las Fuerzas Armadas, a las que destinan todos sus afanes persuasivos (Altamirano, 1989: 46).

Mientras que la familia liberal-conservadora ve en el mercado el principal recurso de coordinación de la sociedad, y, en contrapartida concibe un Estado mínimo que no sofoque con reglamentaciones la libertad para comerciar por parte de los individuos. En Argentina estas dos familias derechistas han actuado, por diversos motivos, desarticuladamente desde la restauración democrática. Sin embargo, desde el presente siglo su protagonismo político se incrementó. Esto sucedió en un contexto de surgimiento, constitución y declive del kirchnerismo en tanto fuerza política predominante. Así, la política de Derechos Humanos (DDHH) del kirchnerismo reactivó a la familia nacionalista-reaccionaria y su principal interlocutor fue la organización Memoria Completa. En efecto, Victoria Villarruel pertenecía a una de las organizaciones que pertenecían a Memoria Completa. En términos generales Memoria Completa era el contrapunto de las organizaciones de DDHH, es decir, reivindicaba el accionar militar y, a su vez, peticionaba que se reconociera la existencia de víctimas por la subversión. La llamada “crisis del campo” brindó un nuevo escenario político para el accionar de la familia liberal-conservadora. Este conflicto que duró 129 días modificó el escenario político. Fue significativo la reinstalación de un discurso público afincado en la “confiscación” de las ganancias de lo producido y, al mismo tiempo, un discurso de “la argentina productiva” que solventa con su trabajo al resto de las provincias que integran el país.

Estas dos familias se encontraron y fusionaron durante el ciclo de protestas que se abrió en agosto de 2012 y se cerró en abril de 2013. Ciertamente, parte de este proceso fue capitalizado por PRO y en 2015 con Cambiemos. Sin embargo, la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio constituyó un terreno fértil para que estas familias de derechas construyan una oferta electoral competitiva. En este sentido, hay que destacar que Javier Milei, cabeza de la fórmula presidencial, representa políticamente la familia liberal-conservadora y Victoria Villarruel a la familia nacionalista-reaccionaria.

Lo cierto es que se trata de una fuerza política nueva en términos de rasgos y constitución identitaria. Las diferencias con el kirchnerismo y con Juntos por el Cambio son inestimables. PRO se constituyó, originariamente, a partir de 5 facciones: un ala derechista formada por partidos provinciales minoritarios conservadores, un ala de las ongs, una del peronismo, una del radicalismo, un ala del mundo empresarial. En

esta fuerza vemos una mixtura de culturas políticas en donde hay una coexistencia de valores liberales vinculados a la igualdad de oportunidades y a la equidad con valores conservadores. En LLA, por el contrario, reconoce en su constitución identitaria un movimiento anti-igualitario que tiene la tentativa de refundar “lo público” sobre nuevas bases. En su aspecto nacionalista-reaccionario se presenta poco tolerante con el pluralismo, con la institucionalidad existente, promueve un reconocimiento del poder militar y en su aspecto liberal-conservador enfatiza modificaciones profundas en la órbita estatal, en el mundo del trabajo, la salud y la educación. Esta reconstrucción de lo público, tal como lo conocemos, se combina con un estilo político organizado en torno a una movilización política-digital o populismo de derechas.

6. Conclusiones

El análisis de los rasgos identitarios de las fuerzas políticas que protagonizaron el escenario político argentino durante el siglo XX y el presente siglo nos permite observar la emergencia y la consolidación de una derecha radical en Argentina. No se hicieron observaciones sobre las bases electorales de LLA porque se entiende que lo novedoso de esta fuerza política radica en que en su núcleo constitutivo se hallan dos familias políticas derechistas, la nacionalista-reaccionaria y la liberal conservadora. Esto le brinda una identidad sólida y novedosa en tanto fuerza política. No se trata de partidos provinciales menores con características conservadoras o de incorporaciones políticas que podría hacer el peronismo, el radicalismo o PRO así como tampoco una radicalización de una fuerza política pre-existente. Más bien se observa el protagonismo político de una fuerza estrictamente de derecha, un nuevo animal político en el campo partidario, que se constituyó en un movimiento político anti-igualitario gravitante durante el presente siglo. Este anti-igualitarismo implica, por un lado, una reivindicación del orden, la seguridad y un nuevo rol del poder militar y, por otro lado, una vuelta a políticas pro-mercado, reforma del Estado, privatizaciones de los servicios públicos esenciales y la apertura de las importaciones. Todo ello conjugado con un estilo político ligado a la incorrección y que encuentra en los ecosistemas digitales su principal recurso para generar identificaciones y, también, movilizaciones. No sólo falta saber si LLA ganará las elecciones presidenciales de octubre 2023, sino, que, en caso de triunfar, si podrá hacer factible su programa político.

7. Bibliografía

ALTAMIRANO, C. (1989), “¿Realmente, hay una nueva derecha en Argentina?”, en *Nueva Sociedad*, N°102 JULIO- AGOSTO, PP. 41-51.

Iglesias, Esteban (2024). “La derecha radical como opción electoral competitiva en Argentina 2023”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 43-56.

LAS ELECCIONES ARGENTINAS PARA GOBERNADOR/A DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MAURICIO MACRI (2015-2019)

Juan Bautista Lucca

(CONICET y Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

En la elección Argentina de 2015, la coalición Cambiemos que encabezaba Mauricio Macri (51,3%) logró vencer en la segunda vuelta a Daniel Scioli (48,6%) y destronar al kirchnerismo del Frente Para la Victoria (FPV) tras doce años de gobierno. En las disputas por las gobernaciones de 2015, es posible señalar que: 1) el FPV perdió a nivel presidencial, pero fue el gran vencedor en términos distritales; 2) que los gobernadores opositores al gobierno nacional kirchnerista (San Luis o Jujuy) se reeligieron y abrieron un canal preferencial con la nación; 3) y que los bastiones del peronismo se mantuvieron incólumes, con excepción del principal distrito electoral: la Provincia de Buenos Aires (Lucca y Giavedoni, 2016; Mauro y Lenarduzzi, 2017).

Cuatro años más tarde, en la elección presidencial de 2019 en la que Alberto Fernández (48,2%) se impuso a Macri (40,2%), queda clara la preeminencia una vez más del

peronismo en los extremos territoriales y la provincia de Buenos Aires (52,2%), con guarismos superlativos en algunas provincias menos pobladas y más pobres del norte como Santiago del Estero (74,5%) o Formosa (64,8%). Por el contrario, la sigla Juntos por el Cambio -heredera Cambiemos- se impuso una vez más a lo largo de la región central pampeana que concentra la industria agroexportadora y los principales centros metropolitanos, con resultados imponentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires —CABA— (52,6%), Mendoza (50,1%) y Córdoba (61,3%), y victorias muy ajustadas en Entre Ríos, Santa Fe y San Luis.

Por ende, en este período es posible distinguir claramente dos argentinas en términos políticos, territoriales y socioeconómicos; uno afincado en las regiones más empobrecidas del interior que son ampliamente peronista versus otro anclado en la región más pujantes económicamente y pobladas cercana al macrismo (Iglesias y Lucca, 2019 y 2020).

Esta polarización electoral a nivel nacional entre 2015–19 claramente incidió en la dinámica provincial; sin embargo, resta por conocer si su influjo fue preponderante o tangencial para la fragmentación y/o reordenamiento de la política en los territorios provinciales (Mustapic, 2013). Cabe tener en cuenta que las provincias poseen cotos de autonomía; y, en el plano electoral, “desdoblar” las elecciones nacionales y provinciales ha sido una estrategia discrecional de los gobernadores para evitar la nacionalización de las elecciones o fortalecer expresiones partidarias distritales (Oliveros y Scherlis, 2004).

Para las elecciones de 2015, once provincias adelantaron sus elecciones, especialmente aquellas donde gobernaban fuerzas distritales o bien preferían dirimir sus conflictos políticos subnacionales sin quedar atados a la tensión kirchnerismo/macrismo que abría la contienda nacional. Sin embargo, para la elección de 2019, solamente cuatro distritos provinciales mantuvieron sus elecciones en consonancia con el calendario nacional, entre las que se destacan los principales distritos en términos de caudal electoral (CABA y Buenos Aires), y La Rioja y Catamarca que tenían agendadas sus elecciones como desdobladas, pero presentaron dilaciones por conflictos constitucionales.

El resto de las provincias argentinas - con excepción de Corrientes y Santiago del Estero que renovarían gobernador en el 2021¹ - optaron por desvincularse de las PASO nacionales del 11 de agosto o las elecciones generales nacionales del 27 de octubre

1. Por tal motivo, han sido quitados como casos de la muestra de este análisis

de 2019. En definitiva, en todo el territorio argentino hubo más de veinte elecciones subnacionales previas a la contienda nacional, marcando claramente el vértigo de un año politizado entre macristas y peronistas (Varetto y Palumbo, 2019; Degiustti y Scherlis, 2020).

La hipótesis de trabajo que articula el presente texto postula que: en primer lugar, la contienda a las gobernaciones es un escenario en el que se entrecruzan dos tableros de juego (la disputa nacional en el territorio y la disputa distrital dentro de la provincia); sin embargo, en segundo lugar, generalmente la contienda orbita más en torno a la figura de los gobernadores que de los presidentes, motivo por el cual aquellos se instituyen habitualmente en el “gran elector”; lo cual refuerza, en tercer lugar, muchas veces el surgimiento de siglas ad hoc o distritales que expresan y condensan las demandas y conflictos ciudadanos al interior del territorio; empero, por último, cuando ingresa una nueva maquinaria partidaria a nivel nacional (en este caso el macrismo) buscando nacionalizar la contienda, las fuerzas afines en las provincias sufren un reordenamiento interno que abreva para la contienda nacional pero tensiona sus posibilidades de éxito en las elecciones a gobernador/a.

Para dar cuenta de esta problemática y poner a control las mencionadas formulaciones hipotéticas, en los apartados subsiguientes se analizarán las elecciones de 2019 en perspectiva comparada con sus trayectorias históricas precedentes en cada provincia, presentadas alfabéticamente. En términos metodológicos, se partió de la premisa de que la coyuntura electoral es un momento de gran efervescencia, un instante de verdad (Key, 1955). Este tipo de momento electoral fuerza a los partidos a la definición de los horizontes de continuidad o cambio, motivo por el cual resulta analíticamente fértil para observar cómo se entrecruzan los derroteros provinciales y la política nacional.

Metodológicamente se llevará a cabo una investigación exploratoria no experimental, de tipo transeccional correlacional, que supone la recolección de datos en un momento temporal acotado en cada uno de los casos para inferir descriptivamente las características distintivas a la luz de una hipótesis de trabajo inicial. Además, la aproximación comparativa será de tipo sincrónico y *within-national*, lo cual implica trabajar con un contexto de variación homogéneo (Della Porta, 2013; Lucca y Pinillos, 2015).

En cuanto a las fuentes de información, se elaboró una matriz de la cobertura mediática de cada coyuntura electoral estudiada, recabando de manera flexible las noticias vertidas en los diarios de la prensa gráfica, de tirada nacional y provincial, con

representatividad ideológica en términos editoriales. Sin embargo, ello no implica el análisis de los medios o periodistas responsables de estas noticias. Asimismo, se incorporó la información de los organismos electorales y la producción bibliográfica relativa a los casos provinciales, a pesar de la condición reciente del fenómeno en estudio.

En resumidas cuentas, en Argentina a nivel provincial, poco sabemos del enraizamiento de esta disputa bipolar entre peronistas y macristas, y menos aún cómo se ha desenvuelto longitudinalmente a lo largo del gobierno de Cambiemos (2015–19). Por ello, analizar el derrotero de las elecciones a gobernador nos permitirá dirimir en qué medida esta lógica bimodal nacionaliza los itinerarios de la política a nivel provincial, o refuerza el predominio de la lógica territorial a partir del fuerte predominio político e institucional de los gobernadores en Argentina (Calvo y Abal Medina, 2001; Leiras, 2010; Miño y Busmail, 2015).

2. Catamarca

En el año 2011 el peronismo volvió a la gobernación de la mano de Teresa Corpacci Saadi por el FPV, luego de 20 años de dominio radical. En el 2015, los comicios fueron concurrentes y el desempeño del FPV que comandaba la gobernadora reelecta Corpacci Saadi fue similar en las dos elecciones a cargos ejecutivos, marcado por la división de las expresiones peronista tras el surgimiento del Frente Renovador a nivel nacional y el Frente Tercera Posición a nivel subnacional.

En la elección de 2019, los cargos nacionales y provinciales se ponían nuevamente en disputa de manera concurrente, replicando la oferta nacional en la propuesta de las candidaturas provinciales: el Frente de Todos con Raúl Jalil, Juntos por el Cambio con Roberto Gómez y Consenso Federal/Tercera Posición con Hugo Ávila como candidatos a gobernador.

La gobernadora saliente, fue el principal sustento de la candidatura del intendente de la capital, Raúl Jalil, quien contó con la venia de Alberto Fernández una vez que se resolvieron las PASO; mientras que el candidato proveniente del radicalismo, Roberto Gómez, llevó adelante su campaña sin apoyo por parte de Macri sabiendo del histórico predominio peronista (y de los Saadi) en la provincia. En las primarias, la contienda fue claramente bipolar, entre Jalil (62,6%) y Gómez (27,9%), puesto que el tercer contrincante habilitado (Consenso Federal) no superó el 5% de los votos,

dejando en claro que el peronismo catamarqueño volvía nuevamente a votar de manera unificada.

Estos resultados se replicaron nuevamente en la elección del 27 de octubre de 2019, y le permitieron al candidato peronista a la gobernación vencer con el 60,4%. El pueblo peronista catamarqueño tendió a votar mayormente una oferta unificada (tanto a gobernador como a la fórmula Fernández-Fernández que obtuvo el 56,6% en Catamarca), dando cuenta que si hubiere una frontera nacida bajo el paraguas de Cambiemos en el 2015, esta se postulaba infranqueable, al punto tal que la diferencia entre los guarismos que obtuvo Gómez a la gobernación (33,4%) y Macri (34,0%) a la presidencia en Catamarca distan en solo 5000 votos.

3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

CABA es históricamente un territorio hostil a las pretensiones electorales del peronismo y la jefatura de gobierno es tanto uno de los sustentos para la organización partidaria del PRO/Cambiemos como también una plataforma de cara a la contienda electoral nacional. En la elección de 2015, la CABA desdobló sus elecciones distritales, en pos de preservar su dominio territorial y no abonar a los intentos imperiales del kirchnerismo. En esa oportunidad, Horacio Rodríguez Larreta (por Unión-PRO) obtuvo el 45,5% de los votos en la primera vuelta, y el 51,6% en el ballottage frente a Martín Lousteau (48,4% del frente ECO) que era un aliado dentro de la coalición nacional Cambiemos que eligió a Macri presidente.

En la elección de 2019 la CABA tendría, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, elecciones concurrentes con la Nación en pos de generar el efecto “arrastre” hacia la vocación de Macri de ser reelegido. Asimismo, en vistas a fortalecer las aspiraciones presidenciales y distritales, en agosto de 2018 se configuró Cambiemos en CABA, incorporando primero a todas las fracciones radicales porteñas y luego a otras fuerzas menores como el Partido Socialista y la UCeDe. Así, el binomio Rodríguez Larreta-Santilli buscaba la reelección con un mayor soporte electoral, teniendo incluso a Lousteau como candidato a senador nacional en la misma boleta.

En el arco opositor peronista, el Frente de Todos tuvo una configuración multiforme, aunque fuertemente orientada hacia los resabios del kirchnerismo. Como candidato a Jefe de Gobierno se posicionó a Matías Lammens, que tenía escasa tradición peronista, pero mantenía un diálogo abierto con Alberto Fernández, lo cual fue clave

para imponerse a los esfuerzos kirchneristas de La Cámpora por reeditar la candidatura de Mariano Recalde como en el 2015.

En las elecciones generales de octubre, Juntos por el Cambio creció casi diez puntos en relación a las primarias, al obtener el 55,9% de los votos para Larreta-Santilli y el 52,6% para Macri-Pichetto, lo cual le permitió a los primeros ser reelectos con un desempeño electoral en las comunas ribereñas y del norte patricio de la CABA, y a los segundos mantener su principal atalaya electoral. En contrapartida, el Frente de Todos creció en relación a las PASO, aunque en menor cuantía, alcanzando el 35,1% del electorado, con una férrea preminencia en las comunas mas pobres, lindantes al sur con la provincia de Buenos Aires. El resto de las opciones electorales (CF: 5,3% y el FIT: 3,6%) y la cuantía de votos en blanco (4,2%), decrecieron en comparación con las PASO (CF: 7,1%; FIT: 3,9%; Blancos: 8,5%), evidenciando la nacionalización de la contienda y la férrea frontera entre los dos pueblos históricamente en disputa en CABA: patricios y plebeyos del siglo XIX, peronistas y radicales del siglo XX, o kirchneristas y macristas a inicios del siglo XXI.

4. Córdoba

La provincia de Córdoba es el segundo distrito electoral en importancia dentro de la República Argentina; sin embargo, políticamente esta circunscripción es un mosaico fragmentado y dispar en continua mutación, en el que se conjuga un fuerte arraigo en la gobernación de una expresión peronista abiertamente contraria al kirchnerismo; una alternancia recurrente de fuerzas diversas en la intendencia de la ciudad capital (PJ, Frente Nuevo, FPV, UCR, por mencionar solamente los que gobernaron en las primeras décadas del siglo XXI); y una predilección hegemónica por el macrismo cuando la disputa es por la presidencia.

El 12 de mayo de 2019 se realizaban las elecciones generales de forma desdoblada, con la presencia del 2 veces gobernador Schiaretti como el gran elector, y también como la figura a la cual macristas y peronistas buscaban seducir. En las elecciones de 2015 Schiaretti se había consagrado gobernador, también en elecciones desdobladas, con un guarismo cercano al 40%; enfrentando en esa oportunidad a la alianza Juntos por Córdoba (UCR-PRO) que obtuvo el 33% y Córdoba Podemos (peronismo afín al kirchnerismo) que consiguió el 17% de los votos.

Sin embargo, en las elecciones de 2019, se produjeron muchos datos sobresalientes:

en primer lugar, que se incluyó legalmente la posibilidad de la “doble candidatura”; en segundo lugar, que la unificación del peronismo a nivel nacional y la renuncia del candidato kirchnerista (Pablo Carro) a competir por la gobernación, no implicaba necesariamente la unidad del peronismo cordobés en el frente Hacemos Córdoba que encabezaba Schiaretti; y, en tercer lugar, que las expresiones radicales se presentaban fragmentadas: por un lado, con la candidatura del frente Córdoba Cambia, con el binomio Mario Negri y Héctor Baldasi, fuertemente respaldado por el gobierno nacional y exponentes como el ex intendente de Córdoba, Luis Juez; por el otro, con la sigla UCR, que llevaba al intendente de la ciudad capital, Ramón Mestre, secundado por el intendente de Bell Ville, Carlos Briner.

Finalmente, la victoria del gobernador Schiaretti resultó aplastante (57%) frente a los magros desempeños de las fuerzas no peronistas de Negri-Baldassi (18%) o Mestre-Briner (11,6%). A primera vista, lo que puede leerse como una victoria del peronismo, por sobre el radicalismo y el PRO dentro de la provincia, debe interpretarse bajo la centralidad del gran elector (gobernador) y su capacidad para trazar una frontera profunda en el clivaje gobierno y oposición provincial. Sin embargo, en la contienda presidencial de octubre 2019, el electorado cordobés respondía mayoritariamente a la candidatura de Macri-Pichetto (61%) como en el 2015, cuando en el balotaje obtuvo el 71% de los votos en este distrito.

5. Chaco

Las elecciones de 2015 fueron una coyuntura marcada por la antinomia entre el peronismo y el radicalismo dentro de la provincia, claramente orientados a nivel nacional hacia el kirchnerismo y el macrismo. En esa oportunidad, el justicialista Domingo Peppo era electo gobernador y el mandatario saliente (Jorge Capitanich) conseguía vencer para la intendencia de la ciudad capital, por sobre los esfuerzos de la radical Aida Ayala y de Leandro Zdero (del frente Vamos Chaco que agrupaba a la UCR, PRO, Frente Renovador y Progresistas) respectivamente.

En la contienda por la gobernación de 2019 compitieron 10 binomios, aunque solo 3 eran fuerzas mayoritarias. Capitanich se postulaba por el Frente Chaqueño para gobernar por tercera vez la provincia y así mantener su predominio como el gran elector chaqueño desde el 2007 y el principal interlocutor del peronismo en este distrito. El ex intendente de Roque Saenz Peña de origen radical, que había sido electo diputado provincial dentro de la alianza Cambiemos, Carim Peche, encabezaba la

lista del frente Somos Todos. Sin embargo, en esta oportunidad también se presentó a gobernador una segunda lista de extracción peronista, encabezada por el otrora vicegobernador en dos oportunidades de Capitanich (2007-2011 y 2011-2015), Juan Carlos Bacileff Ivanoff por el Frente Integrador, con un perfil conservador, punitivista y centrado en la búsqueda del orden.

El 13 de octubre de 2019, Capitanich accedió una vez más al sillón de la gobernación por un amplio margen (49,4%) por sobre su principal perseguidor Peche (31,3%) o el sorpresivo crecimiento de Bacilef Ivanoff (13,9%). A las luces de estos resultados, el gobernador electo continuaba teniendo una ascendencia y liderazgo predominante sobre el electorado chaqueño. Al momento de las elecciones nacionales, claramente la distinción entre peronistas y macristas reordenó el electorado chaqueño, que se volcó mayoritariamente (55%) a favor de Alberto Fernández, por sobre el 35% que consiguió Macri, quien sedujo al menos una parte menor del electorado más conservador que votó a Bacilef Ivanoff.

6. Chubut

El día 7 de abril y 9 de junio de 2019 fueron las elecciones primarias y generales en la provincia de Chubut. En esta provincia del sur de Argentina, Mario Das Neves fue el gran elector provincial hasta su muerte en 2017, al desempeñarse como gobernador entre 2003-2011 y 2015-17, teniendo a lo largo de este período una relación distante y conflictiva con el kirchnerismo. Entre 2011 y 2015, cuando el enfrentamiento con el kirchnerismo era abierto al punto tal de postularse a las presidenciales, Das Neves seleccionó para la gobernación a su ex ministro de la Producción, y luego intendente de Comodoro Rivadavia: Martín Buzzi.

Sin embargo, a poco de iniciado su mandato, Buzzi se posicionó abiertamente afín al FPV, lo cual motivó el retorno de Das Neves a la disputa territorial en la elección de 2015. En esta ocasión, Das Neves (41,8%) venció ajustadamente a Buzzi (40,6%), dejando en un lejano tercer lugar a la figura de Cambiemos Chubut, el radical Carlos Lorenzo (14,7%). Tras la muerte de Das Neves en el año 2017, su vice gobernador, Mariano Arcioni tomó las riendas de la provincia.

De cara a las elecciones primarias de 2019, el panorama político en Chubut mostraba a Arcioni buscando mantener la amalgama de la fuerza electoral creada por Das Neves. En las demás internas, dentro del Frente Patriótico Chubutense, al intenden-

te justicialista de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, era el favorito; y, dentro de la fuerza Cambiemos Chubut, el radical Gustavo Menna era el candidato predilecto.

En las elecciones primarias del 7 de abril de 2019, el gobernador Arcioni estuvo preso de las fuertes críticas de corrupción y de la negociación del peronismo nacional, lo cual se condice con el su magro desempeño (32,8%) en relación al Frente Patriótico Chubutense (33,5%) y al carácter residual de Cambiemos Chubut (14,5%). Aunque Arcioni respondiera a nivel nacional a Massa, el acuerdo Fernández-Fernández y una unificación del peronismo que estaba al caer, fueron el impulso necesario para conseguir el 41,3% de los votos en las generales del 9 de junio, e imponerse a Linares (33,9%) y Menna (14,5%). Finalmente, con Massa dentro del acuerdo del peronismo nacional y Arcioni apoyando la candidatura de Fernández, se cristalizaba una fuerza centrípeta lo suficientemente densa como para ordenar las múltiples expresiones peronistas y distritales en Chubut, al punto tal que el binomio Fernández y Fernández obtuvieran el 52,4% de los votos frente a Macri y Pichetto (29,3%) en la elección presidencial en esta circunscripción.

7. Entre Ríos

El 14 de abril y el 9 de junio de 2019 se resolvieron respectivamente las PASO y elecciones generales en la provincia de Entre Ríos, distrito con un fuerte predominio peronista desde el retorno democrático en 1983, pero con un histórico enraizamiento del radicalismo desde su génesis partidaria. En la elección de 2015, el gobernador Sergio Urribarri tuvo que abandonar el Palacio Gris que ocupaba desde diciembre de 2007, y ceder la candidatura dentro del justicialismo al ex intendente de Concordia, Gustavo Bordet, quien venció ajustadamente al ruralista Alfredo De Angeli (PRO-Cambiemos), y enfrentar una fractura del massismo en la provincia, que encarnaba Adrián Fuertes.

Para la elección de 2019, Bordet era el candidato dentro del peronismo provincial (Frente Justicialista). Tenía como principal contendiente al agroexportador de origen radical y Presidente del Banco Nación durante los dos primeros años de la gestión de Macri, Atilio Benedetti, que había resultado ampliamente victorioso en las elecciones intermedias de 2017 como exponente de Cambiemos (su lista obtuvo el 53% de los votos para la Cámara Baja) cuando enfrentó ya al peronismo unido (38% de los votos).

Las PASO presentaron un panorama claramente polarizado entre Bordet y Benedetti, aunque favorable al gobernador peronista, que obtuvo un guarismo cercano al 50% del electorado, frente a un exponente de Cambiemos que no llegaba al tercio de los votantes y el voto en blanco (15,5%) como tercera opción. En las generales de junio, Bordet se impuso en 15 de los 17 departamentos con el 57,4% de los votos, consiguiendo la segunda mejor elección en la historia de la provincia e incluso arrebatando el principal bastión del radicalismo: la ciudad capital de Paraná. Benedetti, solo pudo alzarse con el 35% de los votos.

Una vez más, casi 1 de cada 10 entrerrianos optaba por el voto en blanco, dando cuenta de un electorado “huérfanos” que otrora votó al macrismo, y que la crisis socioeconómica desatada en el 2018 había desencantado. Sin embargo, cuando la elección se nacionalizara en la contienda presidencial, el electorado entrerriano volvió una vez más a las huestes del macrismo, siendo una de las pocas provincias en las que Macri venció a Fernández.

8. Formosa

En la provincia de Formosa, bastión inexpugnable del peronismo, Gildo Insfrán era el gran elector, tras haber sido vicegobernador entre 1987-1995 y gobernador desde 1995 hasta el 2019 cuando, una vez más, buscaba su séptimo mandato al frente de la Casa Gris. En las elecciones precedentes, de 2015, cuando Insfrán se impuso por el 73% de los votos, su contrincante fue Luis Naidenoff, un dirigente radical que era uno de los principales armadores de Cambiemos en la provincia y en el Senado de la Nación, donde fungía como presidente del Interbloque Cambiemos.

En la elección de 2019, por intermedio de exponentes provinciales del PRO como Enrique Ramirez y Germán Villalba, el gobierno nacional entró abiertamente en la disputa provincial, llevando como candidato a Adrián Floro Bogado. Este joven abogado -que sería secundado por el radical Iván Kaluk- provenía de una familia de clara estirpe peronista². En los cálculos de este nuevo frente opositor, suponían que únicamente podrían quebrar la fortaleza de Insfrán si al pueblo peronista formoseño se le ofrecía un candidato afín.

Sin embargo, el 16 de junio de 2019, cuando se realizaron las elecciones generales en la provincia, no hubo grandes cambios puesto que Insfrán venció con el 70% de

2. Su padre, Floro Bogado, había sido vicegobernador de Insfrán

los votos en todo el territorio formoseño, confinando a Bogado a un magro 28% que emulaba el mismo resultado obtenido cuatro años atrás por el mismo Frente Amplio Formoseño. La hegemonía y el liderazgo indisputable de Insfrán, dejaba en claro el contorno pétreo de las identidades provinciales en disputa, así como también la territorialización del peronismo y la difícil e incoherente incursión del macrismo para confrontarlo. Al momento de la elección presidencial, en Formosa se reeditaría el predominio inexpugnable del peronismo en el norte argentino por valores similares a los de Insfrán: Fernández obtuvo tanto en las PASO como en las generales aproximadamente el 65% de los votos.

9. Jujuy

Aunque históricamente la provincia de Jujuy fue un enclave peronista, y durante el interregno kirchnerista una provincia afín, la elección de 2015 puso fin a este predominio, invistiendo al radical Gerardo Morales en gobernador. De cara a las elecciones de 2019, aunque Morales había sido uno de los principales interlocutores de Macri en el interior, propuso desdoblar las elecciones distritales para el 9 de junio, al igual que sus correligionarios de Mendoza o Corrientes.

En este marco, Morales buscaría la reelección, enfrentando a un espectro del peronismo jujeño que se encontraba plenamente dividido, en retaguardia y con estrategias dispares: en primer lugar, el sector del Frente Renovador que lideraba Massa – Lavagna, secundaba al propio Morales, colocando como vice gobernador al ex presidente del Partido Justicialista jujeño, Carlos Haquim; en segundo lugar, luego de una ardua disputa nacional zanjada por el presidente del partido, el sello del Partido Justicialista en Jujuy que respondía a Rubén Rivarola, llevaba la candidatura de Julio Ferreyra, que si bien abiertamente crítico del acuerdo Fernández – Fernández contaba con el apoyo de exponentes provenientes de La Cámpora, Movimiento Evita, Barrios de pie, entre otros; en tercer lugar, la vertiente del peronismo federal proponía al ex juez federal, Vicente Casas, del frente Confiar; en cuarto lugar, el senador nacional Guillermo Sponek se presentaba por el Frente Juntos por Jujuy; y, finalmente, Paula Álvarez Carrera, en clara consonancia con la fuerza social que representaba Milagros Sala, se presentaba por Unidad Ciudadana.

En este concierto de atomización peronista, y bajo la inercia de un gobierno provincial que buscaba reelegirse, Morales se impuso (43,7%) sobre Ferreyra (32,7%), Sponek (10,4%), Casas (3,3%), Álvarez Carrera (2,5%) o el desempeño del Frente de Iz-

quierda (3,1%). Sin embargo, el desempeño electoral de Morales fue sustantivamente menor que en el 2015, cuando siendo retador al peronismo unificado de Eduardo Fellner había obtenido el 58,3% de los votos.

Claramente, la lectura de adelantar las elecciones con un gobierno nacional en declive y una oposición provincial desorganizada, resultó provechosa para Morales. Sin embargo, en la contienda nacional de octubre, la fórmula Macri-Pichetto igualó la cuantía obtenida por Morales, pero no pudo vencer al peronismo jujeño unificado que buscaba poner fin a la Argentina de Cambiemos.

10. La Pampa

El calendario electoral del 2019 se inauguró en la provincia de La Pampa el 17 de febrero, en el marco de unas elecciones primarias sin carácter de obligatoriedad, lo cual motivó a que la selección de candidaturas dentro del peronismo se resolviera por la impronta del gobernador Carlos Verna, mientras que en el arco no peronista sí se usara la herramienta electoral para resolver la contienda entre radicales y el PRO.

Dentro del peronismo provincial que detentaba la gobernación, los intentos por reelegir a Verna naufragaron por su frágil condición de salud. Esto motivó, por un lado, la elección de un exponente afín al gobernador (Carlos Zilioto) secundado por el entonces vice gobernador (Mariano Fernández); y, por el otro, una extensa labor de Verna por agrupar las diversas expresiones reinantes dentro del peronismo provincial en el “Frente Justicialista Pampeano”.

En el arco opositor, el desentendimiento entre el radicalismo y el PRO, entre la oposición provincial y el gobierno nacional, llevó a que se presentaran dos candidaturas a las internas: en el radicalismo, inicialmente se hicieron públicas las intenciones de Juan Carlos Marino y Francisco Torroba, pero finalmente se unificaron en la candidatura del ex intendente de Colonia Barón y diputado nacional, Daniel Kroneberger (UCR); desde el gobierno nacional se postuló un exponente “PRO-puro”, como era el Secretario de Deportes de la Nación y ex futbolista, Carlos Mac Allister.

El 17 de febrero, en las internas el macrismo sufrió su primera derrota, ya que Kroneberger obtenía casi dos tercios de los votos; sin embargo, el segundo dato sobresaliente de la jornada era el éxito en la ciudad capital del -hasta entonces- endeble kirchnerismo a nivel provincial, ya que Luciano Di Napoli aventajó por 122 votos a

los demás contrincantes peronistas³. De esta manera La Cámpora en la ciudad de Santa Rosa, obtenía una valiosa moneda de cambio para negociar con Vera el apoyo a Zilioto y la reconciliación del peronismo provincial con la figura presidenciable de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

El 19 de mayo cuando se realizaron las elecciones generales en La Pampa, un día después que se anunciara la fórmula presidencial Fernández-Fernández, el peronismo pampeano profundizó su hegemonía desde el retorno de la democracia en 1983, al conseguir el 52,7% de los votos para Zilioto, frente al 31,8% que obtuvo Kroneberger con la fórmula Cambiemos La Pampa. De esta manera, el macrismo vivenciaba su primer revés electoral, en un territorio que en 2015 y 2017 no le había sido esquivo; sin embargo, el resultado se agudizó en tanto y en cuanto el 51,7% de los votos de la ciudad capital (Santa Rosa) fueron para el candidato kirchnerista, arrebatándole así la intendencia al radical Leandro Altoaguirre (27,4%).

11. La Rioja

En la provincia de La Rioja, originalmente las elecciones estaban dispuestas para el 21 de marzo de 2019. Ante la negativa al gobernador Sergio Cassas (de la Alianza FPV) de ser electo nuevamente, dentro del peronismo riojano se abrió un compas de tensión. La falta de consenso llevó a que, por una lado, Cassas propusiera como candidato al otrora intendente de la ciudad capital - Ricardo Quintela-, que con el “Frente de Todos” obtuvo el 44,9% de los votos. Y, por el otro, el ex gobernador Luis Beder Herrera presentó su candidatura independiente bajo la sigla “Nuestra Rioja”, que cosechó el 23,2% de los votos⁴.

El principal contendiente a las expresiones peronistas era Julio Cesar Martínez, quien tenía una larga militancia dentro del radicalismo provincial, y había disputado la gobernación tanto en el 2011 por la Fuerza Cívica Riojana (FCR) como en el 2015 coaligado con el PRO, el Frente Renovador y el Partido Socialista⁵. Sin embargo, en la elección de 2019 Martínez no pudo revertir la primacía del peronismo, incluso

3. Jorge Lezcano, Juan Grotto, Darío Hernández, Nélica Batista y Fabiana Vallejos.

4. Habida cuenta que la elección a la gobernación en La Rioja, desde el año 2007 se resuelve en una sola vuelta electoral (Art. 27 de la ley provincial 8141), Quintela se consagró gobernador el día 27 de octubre de 2019.

5. Aunque su estirpe radical es inexpugnable, Martínez es la expresión fidedigna de la Argentina de Cambiemos en la provincia, al punto tal de ser designado por Macri como Ministro de Defensa entre el 2015 y 2017 y primar por sobre los intentos de Miguel Ángel Pichetto de imponer un peronista de Cambiemos (el intendente de la ciudad capital, Alberto Paredes Urquiza) como posible cabeza de lista de “Juntos por la Rioja”.

estando dividido, al obtener un magro 30,9%. De esta forma, lo que otrora era una disputa entre peronismo y radicalismo, y a partir del 2011 entre el kirchnerismo y el radicalismo, desde las elecciones del 2015 -y especialmente en la de 2019- se configuró bajo el clivaje entre oficialismo nacional macrista y oposición provincial peronista bifronte.

12. Mendoza

Al igual que en el 2015, el 9 de junio y el 29 de septiembre de 2019 se dirimían las disputas electorales en la provincia cuyana de Mendoza de manera anticipada a los comicios nacionales. La conformación de la alianza nacional Cambiemos a fines de 2014, tuvo en esta provincia un eco inmediato, puesto que las fuerzas radicales que respondían a Ernesto Sanz y -en menor medida- a Julio Cobos, confluyeron para desbancar al gobernador Francisco Pérez (FPV). En la elección de 2015, Cambiemos se impuso tanto en la contienda para la gobernación (Alfredo Cornejo: 48,3%) como en las presidenciales (Macri fue respaldado por el 40,8% de los votos).

En la elección de 2019, dos fuerzas mayoritarias concentraban la disputa: el oficialista Frente Cambia Mendoza (FCM) y el peronista Frente Político y Social Elegí Mendoza (FPySEM). En ambos frentes la elección interna fue necesaria para distinguir quienes oficiarán de candidatos: en el FCM el intendente radical de la ciudad capital (Rodolfo Suarez) logró imponerse de forma holgada sobre el exponente del PRO (Omar de Marchi) y un sector disidente dentro del radicalismo (Fernando Armagnague); mientras que, en el FPySEM, la senadora de La Cúmpora (Anabel Fernández Sagasti) venció al intendente de Maipú (Sergio Bermejo) por un escaso margen.

En el agregado de todas las fracciones de una y otra fuerza en las PASO, la expresión filo radical aventajaba por 7 puntos al frente de vertiente peronista. Sin embargo, el 29 de septiembre cuando se realizó la elección general, la victoria y crecimiento del FCM fue contundente (51,6%) frente al deterioro de su rival peronista (36,2%) a lo largo de todas las secciones, e inclusive en todos los cargos en disputa.

Desde una mirada nacional, el macrismo obtenía así una victoria distrital de resonancia que podía apropiarse (a diferencia de Córdoba), venciendo – una vez más- a su contendiente al otro lado de “la grieta”: La Cúmpora/Kirchnerismo. Visto desde una mirada provincial, por un lado, el gobernador provincial lograba mantener la inercia y evitar la alternancia; y, por el otro, el radicalismo lograba una vez más ante-

ponerse a su sempiterno rival (el peronismo), a pesar que el recambio de los liderazgos y las tensiones internas en ambas fuerzas.

13. Misiones

En la provincia de Misiones, a diferencia del 2015, las elecciones provinciales se desarrollaron de manera desdoblada el 2 de junio de 2019, en gran medida para capitalizar la inercia de la fuerza distrital predominante: Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS). Esta sigla partidaria, creada en el 2003 por partidarios afines al entonces gobernador Carlos Rovira, conjuga exponentes del amplio espectro político misionero, aunque con una inclinación peronista.⁶

Desde su creación, el FRCS tuvo un crecimiento electoral ininterrumpido —especialmente cuando no compitió abiertamente con el kirchnerismo— al punto tal de obtener en las elecciones a gobernador de 2011 y 2015 guarismos superiores al 70% y 60% respectivamente. De cara a las elecciones de 2019, el entonces vice gobernador de Hugo Passalacqua —Oscar Herrera Ahuad— se posicionó como el principal candidato del FRCS.

En la vereda opositora, no existían contendientes abiertamente peronistas (como sí los hubo en el 2015 con Adolfo Velázquez que adscribía al massismo); sin embargo, a diferencia del 2015 en que el macrismo del Frente Juntos y la UCR (dentro del Frente Cívico y Social) fueron por separado, en el 2019 Humberto Schiavoni —presidente del Consejo Nacional del PRO y hombre cercano a Mauricio Macri— sería el principal contendiente al FRCS.

La inercia de éxito del FRCS (72,4%) a la gobernación no habría de detenerse, al punto tal de conseguir una victoria aplastante por más de 55% de diferencia sobre Juntos por el Cambio (17,6%), dando muestras claras de una nueva derrota del macrismo en su incursión distrital, y su dificultad para horadar fuerzas provinciales con gran arraigo. Inclusive, esta situación habría de reeditarse en la elección presidencial, cuando el binomio Macri-Pichetto obtuvo solamente el 33% frente al predominio del peronismo que encarnaba Alberto Fernández (57,7%).

6. El FPV y el Frente Renovador compitieron en la provincia en las elecciones de 2003, 2007 y 2011.

14. Neuquén

La provincia patagónica de Neuquén fue la segunda parada en el extenso calendario electoral del 2019 en Argentina, pero la primera provincia en definir los cargos ejecutivos y legislativos en las elecciones del 10 de marzo, implementando en esta oportunidad la Boleta Única Electrónica. Neuquén es desde 1962 un territorio hegemónico del anfibio partido distrital Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En las elecciones del 2015, el electorado estaba dividido en tercios (MPN – FPV – Cambiemos), tanto a nivel provincial como en sus preferencias nacionales (Scioli – Macri – Massa). En esa oportunidad, Omar Gutiérrez del MPN se impuso para la gobernación por el 40% y, en el 2019, buscaba revalidar su investidura enfrentando a los mismos contendientes de entonces: José Rioseco por el peronismo kirchnerista, Horacio “Pechi” Quiroga por la alianza entre radicales y el PRO, y —como novedad en esta contienda de 2019— al 3 veces gobernador por el MPN Jorge Sobisch por el Partido Demócrata Cristiano.

La contienda en Neuquén claramente se articula en la distinción entre oficialismo vs. oposición a nivel provincial. Sin embargo, en la elección de 2019 el clivaje continuidad/cambio, que produjo por ejemplo en el 2007 una alianza entre la UCR y el FPV bajo la candidatura de Quiroga, no fue predominante como para horadar la repulsión entre las intensas minorías macristas y kirchneristas a nivel subnacional.

Al igual que en el 2015, el gobernador Gutiérrez logró imponerse por el 40% de los votos, dejando en un lejano segundo peldaño al kirchnerista Rioseco (26,1%) y más aún a Quiroga (15%) y Sobisch (9,9%). En esta provincia, que condensa cerca del 1,5% del electorado nacional, el MPN y su líder de turno mantienen un dominio claramente indisputado por las fuerzas nacionales, independientemente de que se presenten unidas o fragmentadas.

15. Provincia de Buenos Aires

De cara a la elección de 2019, el macrismo tenía en esta provincia a una de sus principales exponentes: la gobernadora María Eugenia Vidal. Para enfrentar a la dupla gubernamental en funciones (Vidal – Daniel Salvador), el peronismo debía unificarse, para no repetir los designios de la elección de 2015, en la que el otrora intendente de Tigre (Sergio Massa) y el candidato a gobernador del peronismo disidente, Felipe Solá, habían atraído al 19,6% del electorado, imposibilitando la victoria de Aníbal Fer-

nández por el FPV. El 12 de junio de 2019, al entendimiento Fernández – Fernández para las presidenciales, se le sumaba un nuevo exponente con fuerte incidencia en la provincia y la nación: Sergio Massa y el Frente Renovador.

Este acuerdo abrió la incógnita de si existiría una interna entre el massismo y el kirchnerismo, pero finalmente se estableció la dupla Kicillof-Magario para la candidatura a la gobernación y Sergio Massa en primer lugar en la lista de diputados nacionales.

Aunque el periodismo azuzó continuamente la posible tensión entre CFK-Kicillof, con Aníbal Fernández y Massa, en las PASO de agosto el Frente de Todos obtuvo el 52,7% de los votos para la dupla Kicillof-Magario (y el 50,6% para Fernández-Fernández) frente al binomio de Juntos por el Cambio, que conseguía el 34,6% para la dupla Vidal-Salvador (y el 32,9% para Macri-Pichetto). Tres meses después, en las elecciones generales de octubre, el resultado y los valores no cambiarían, al obtener la dupla bonaerense del peronismo el 52,4% (y Fernández-Fernández el 52,2% en dicho territorio) y Juntos por el Cambio el 38,3% (y Macri-Pichetto el 35,9%)⁷. Con lo cual, la madre de las batallas en torno a los distritos electorales más importantes de la Argentina, mostró una vez más que la polarización —y fragmentación interna— entre las dos fuerzas nacionales fue preponderante para los resultados provinciales de 2015 y 2019.

16. Río Negro

En la provincia de Río Negro, las elecciones se realizaron el día 7 de abril de 2019, desdoblando las elecciones al igual que en el 2015. Coincidentemente con lo que sucedía en la provincia de La Rioja, el gobernador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro -JSRN) pretendía candidatearse para un tercer mandato pero se vio jurídicamente imposibilitado. Por ende, en el JSRN se colocó como reemplazo a quien ocupaba en la formula provisoria el rol de vicegobernadora: Arabela Carreras, que había sido ministra de Weretilneck y diputada de la mano del gobernador Soria.

7. Sin embargo, aunque la estrategia del macrismo no fue lo suficientemente clara para imponerse al peronismo unificado en la provincia, la impronta de Vidal y sus 4 años de gestión provincial fueron lo suficientemente fuertes como para mantener su penetración territorial. Así, el Frente de Todos conseguía la victoria en 70 intendencias (comparadas con las 55 que obtenía el FPV y las 10 que obtenía el massismo en el 2015), frente a las 61 que conseguía Juntos por el Cambio, que perdió solamente 4 intendencias si se las compara con su desempeño electoral cuatro años antes.

En el 2011, JSRN se conformaba por el Frente Grande al que pertenecía Weretilneck y el Justicialismo al que pertenecía Soria; sin embargo, tras su muerte el justicialismo se encolumnó bajo el liderazgo del senador Pichetto y rompió con el gobernador interino, presentando en el 2015 una candidatura bajo el sello del FPV. Por su parte, la coalición nacional Cambiemos, no logró amalgamar a la oposición no peronista en la provincia, presentando dos candidaturas afines: la Coalición Cívica que encabezaba Magdalena Odarda y el radicalismo que lideraba Horacio Massaccesi.

En la elección de 2019, luego del transfuguismo partidario de Pichetto al flirtear con el macrismo, el FPV propuso como candidato al hijo del ex gobernador Soria (Martín Soria), secundado por la senadora nacional Magdalena Odarda, en una alianza que incorporaba al Partido Justicialista, el Frente Grande, Kolina y el Partido Socialista. Por su parte, los fragmentos de la oposición no peronista a nivel distrital que respondían a Macri confluyeron en la candidatura de Lorena Matzen (UCR) para gobernadora y Flavia Boschi (PRO) como vice.

El día 7 de abril de 2019, cuando se realizaron las elecciones generales, el frente oficialista JSRN se impuso de forma abrumadora (52,6%) frente al FPV (35,2%) y Cambiemos (5,5%), lo cual implicaba, una derrota inexpugnable para las dos fuerzas nacionales que pugnaban para las presidenciales, aunque uno y otro quisieran endilgar dicho fracaso a sus contrincantes.

Sin embargo, meses más tarde en la contienda presidencial, la dupla Fernández – Fernández se impuso por más del 57% de los votos, dejando muestras que, en una disputa distrital, la distinción se establecía principalmente en el clivaje oposición–gobierno. En este sentido, la estrategia de los gobernadores —anclados en fuerzas distritales o construidas ad hoc— por desdoblar la contienda y reforzar su rol de gran elector, daba sus frutos en Río Negro con una candidata como Arabela Carreras, con escasa ascendencia pública en la provincia y en el peronismo.

17. Salta

En la provincia de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey había decidido compartir la candidatura de Roberto Lavagna por Consenso Federal para la presidencia de la nación en el 2019. En el 2015, Urtubey se había impuesto con el 47% de los votos a la candidatura del ex gobernador Juan Carlos Romero y del mediático empresario conservador del PRO, Alfredo Olmedo (33,7%).

Sin embargo, en las elecciones de 2019, el panorama bimodal que ordenó la competencia cuatro años antes parecía atomizarse. En primer lugar, contando con el apoyo del gobernador Urtubey, estaba la candidatura del intendente de la ciudad capital, Gustavo Saenz. En segundo lugar, el diputado salteño Olmedo, había lanzado su propia organización partidaria (Ahora Patria), compitiendo por la gobernación en el distrito salteño con la denominación Salta Somos Todos, y buscaba a, diferencia de Saenz, nacionalizar la disputa provincial. En tercer lugar, el resto de las fracciones del peronismo salteño se agruparon en torno a la candidatura del Frente de Todos del kirchnerista Sergio Leavy.

La inercia que generaba el apoyo del oficialismo provincial, sumado al carisma público y desempeño como intendente, junto con la venia implícita del gobierno nacional, hicieron de Saenz el candidato más votado en las elecciones generales, obteniendo el 53,6% de los votos. En los otros peldaños, muy por detrás en términos electorales, se posicionaban el “Oso” Leavy (26,3%) y Olmedo (15,3%), que no pudieron nacionalizar la contienda y romper de esta forma el peso del entramado político territorial en Salta.

Por ende, los esfuerzos por verticalizar al electorado en torno a identidades políticas correspondientes a los pueblos peronistas o macristas fueron en vano, especialmente frente a la potencia que tenía el liderazgo provincial del gobernador de turno y el clivaje oficialismo-oposición a nivel distrital.

18. San Juan

El 31 de marzo de 2019 se realizaron en esta provincia puntana las elecciones primarias, estableciendo en el cronograma electoral el 2 de junio para la contienda general. Durante todo el interregno kirchnerista (2003-2015), el principal elector dentro de la provincia fue el tres veces gobernador José Luis Gioja (acompañado por Marcelo Lima, Rubén Uñac y Sergio Uñac respectivamente).

Sin embargo, signado por el deterioro de su salud tras el accidente vivido en octubre de 2013, para la elección de 2015 el cargo de gobernador fue detentado dentro del peronismo por uno de los exponentes del Clan Uñac de la ciudad de Pocitos: Sergio Uñac. En esa oportunidad, su victoria fue contundente (53,6%) frente a Roberto Basualdo (30%) que provenía del peronismo, pero se presentaba bajo una sigla distrital; y Martín Turcumán (12,2%), que era presidente de la Fundación Pensar de gran

cercanía a Mauricio Macri, pero distante del referente del PRO sanjuanino Eduardo Cáceres.

De cara a la elección de 2019, la candidatura de Uñac para la reelección era un secreto a voces, restando únicamente por conocer quienes serían sus contrincantes, y qué vertientes confluirían. De cara a las primarias, mayoritariamente la oposición provincial se conjugó en el “Frente con vos” encabezado por el intendente de Santa Lucia, Marcelo Orrego. Su candidatura era una continuidad del espacio otrora liderado por Roberto Basualdo, pero también una fuerza con línea directa con el gobierno nacional de Cambiemos, aunque sin ceder el comando provincial de las candidaturas al macrismo.

Sin embargo, desde la gobernación, Sergio Uñac tejía los hilos para remplazar a Gioja como el gran elector y referente del peronismo sanjuanino, haciéndose de la presidencia del PJ en el 2016 y fortaleciéndose para ser reelecto en el 2019, al punto tal de superar su propio desempeño electoral de 2015, y conseguir el 52,8% de los votos en las PASO y el abrumador 55,8% en las elecciones generales. En este marco, las fuerzas opositoras de Orrego (33,9%) y Turcumán (3,9%) resultaron inexpresivas para contraponerse a la hegemonía peronista en la provincia puntana, pero también resultaron incapaces de despegarse lo suficientemente del gobierno nacional como para que no fuera leído como una derrota del macrismo.

19. San Luis

En este feudo históricos del peronismo, la elección para la gobernación en el año 2019 se pautó para el 16 de junio. Desde 1983, el pulso político en San Luis respondía a la hegemonía peronista que imponían los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá desde la gobernación, con las excepciones de 2001–2003 cuando Adolfo asumió el cargo de presidente provisional en el marco de la crisis, y en la elección de 2011–2015 cuando Adolfo renunció a la gobernación para postularse a las presidenciales y su hermano estaba impedido constitucionalmente. En este último interregno, la gobernación fue comandada por Claudio Poggi, un histórico ladero de los Rodríguez Saá, que al ver imposibilitas sus chances de continuar, ser reelecto, y sentarse en la mesa grande de las definiciones dentro del Clan, decidió romper, armar su propia fuerza y encolumnarse en el 2017 con el macrismo y traccionar a sectores kirchneristas en esta provincia

La elección de 2019 será recordada en la historia electoral de San Luis como una *rara avis*; por un lado, se produjo una fuerte atomización del peronismo que elevaba la competitividad electoral; sin embargo, por el otro, el resultado electoral marca una continuidad parsimoniosa del predominio peronista. En esta elección, a la candidatura del senador nacional Poggi (San Luis Unido) que contaba con el apoyo de sus acólitos peronistas, el PRO y la UCR, se le sumó la contienda al interior de la familia Rodríguez Saá. Esto fracturó el Partido Justicialista, que quedó en manos de Alberto (Frente de Unidad Justicialista) y confinó a Adolfo tras su expulsión del PJ a construir un nuevo armado (Juntos por la gente).

El día de las elecciones, Alberto Rodríguez Saá logró la reelección con el 42% de los votos, frente a los esfuerzos de Poggi (34,5%) o los magros resultados de Adolfo Rodríguez Saá (22,03%). Al igual que en Formosa, donde el gobierno nacional apoyó a un peronista para confrontar la hegemonía de Insfrán, en San Luis esta estrategia no resultó provechosa siquiera con la fractura interna del justicialismo, habida cuenta del enorme peso del gobernador en funciones (Alberto) como para traccionar al electorado puntano. Una vez más, el pulso de la política provincial latió más fuerte que cualquier intento por nacionalizar la contienda.

20. Santa Cruz

Las elecciones en esta provincia patagónica se llevarían a cabo el 11 de agosto de 2019, en consonancia con las PASO a nivel nacional. En este bastión hegemonizado desde 1991 por el kirchnerismo, la gobernadora Alicia Kirchner buscaba su reelección. En los comicios de 2015, aunque había cosechado solo un tercio de los votos, gracias a la implementación de la Ley de Lemas aprobada en el 2014, logró vencer al candidato más votado: el histórico contendiente a la gobernación por el radicalismo y Cambiemos, Eduardo Costa.

En las elecciones de 2019, el peronismo distrital resolvía sus diferencias internas gracias a la Ley de Lemas. Dentro del lema Frente de Todos se impuso por escaso margen la gobernadora Kirchner (el sublema “Acuerdo Santacruceño” consiguió alrededor de treinta y seis mil votos), por sobre los sublemas de Javier Belloni (“Nace una esperanza” con cuatro mil votos menos que Kirchner) y Claudio Vidal (“Somos” con doce mil votos debajo de Kirchner).

En la oposición del frente “Nueva Santa Cruz”, confluían gran parte de las fuerzas

variopintas no kirchneristas, con excepción de la izquierda: la UCR y el PRO, que adscribían nacionalmente al macrismo; el Partido Socialista y el Frente Renovador/Alternativa Federal que respondían a la candidatura nacional de Lavagna y Urtubey; la fuerza peronista FE creado por Gerónimo “Momo” Venegas; y Encuentro Ciudadano.

En este panorama atomizado por las diferentes expresiones dentro del concierto de los lemas y sublemas, la gobernadora Kirchner pudo mantenerse en su cargo, puesto que su fuerza partidaria dobló en cantidad de votos nuevamente a la expresión opositora que se encolumnaba tras la figura de Costa, por más de cuarenta mil votos de diferencia, lo que correspondía al 58,9% del electorado para el Frente de Todos y el 32% para el lema Nueva Santa Cruz.

El día de la elección nacional, la fórmula peronista Fernández-Fernández tuvo un desempeño calcado (59%) al del peronismo en las elecciones distritales; mientras que la fórmula Macri-Pichetto no pudo mantener toda la oposición distrital detrás de sí, que fugó parte de sus preferencias a terceras candidaturas.

21. Santa Fe

El 28 de abril comenzaron a resolverse las elecciones provinciales en el tercer distrito electoralmente más importante del país: Santa Fe. Este territorio, es una *rara avis* en la que una fuerza distrital (el Partido Socialista) logró unificar a la oposición para vencer el predominio peronista que existía desde 1983. En el año 2007, el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) obtuvo la gobernación de la provincia, y mantuvo su predominio hasta el 2019. Sin embargo, en el 2017 gran parte de la UCR provincial se sumó al PRO, para dar sustento a Cambiemos en Santa Fe, debilitando fuertemente las pretensiones del FPCyS.

En la elección para gobernador del año 2015, la contienda estuvo fracturada en tres tercios equivalentes, conformados por el FPCyS (31,6%), Unión PRO (31,6%) y el peronismo (30,3%), aunque con el escaso margen como para reeditar la victoria del socialista y ex intendente de Rosario, Miguel Lifchitz. Sin embargo, al momento de la disputa presidencial, al igual que sucedería en el 2019, mayoritariamente Santa Fe priorizó la candidatura de Macri por sobre las propuestas peronistas.

En Santa Fe el cargo del gobernador se define sin balotaje, por lo que habitualmente las candidaturas se resuelven sin hacer uso de las PASO. En las primarias de 2019 el ex intendente socialista de Rosario y ex gobernador del FSCyS —Antonio Bonfatti—

encabezó el Frente Progresista (FP); el ex intendente de Santa Fe y presidente de la UCR —José Corral— se postuló por Cambiemos; y el peronismo provincial dirimió fuerzas entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, resultando vencedor el ex intendente de Rafaela. Sin embargo, en esta oportunidad la contienda ya no suponía un enfrentamiento de tercios simétricos, puesto que, aunque Bonfatti obtuviera 50.000 votos más que Perotti, la sumatoria del peronismo lo aventajaba en más de 180.000 votos, y a Cambiemos en más de 360.000 votos.

De cara a las elecciones generales del 16 de junio de 2019, Perotti logró obtener el visto bueno de Bielsa. Y, finalmente en las generales, el ex intendente de Rafaela se hizo con el 42,3% de los votos, frente al 37,9% que obtenía Bonfatti y el 19,7 de Corral, convirtiéndose en gobernador.

Sin embargo, la dinámica y heterogeneidad del territorio santafecino en el plano electoral, mostraba algunas singularidades: por un lado, que el gobernador saliente (Lifchitz) encabezó la lista más votada en la categoría de diputados provinciales con el 41%, frente al 18,7% del Frente Juntos o el 12,6% de Cambiemos. Por el otro, que meses más tarde, cuando la contienda electoral era por la presidencia, una vez más el macrismo lograba imponerse en el territorio santafecino por sobre el peronismo, aunque más no fuere por un escaso margen, debilitando aún más la ascendencia del FP en la provincia, que en esta ocasión encabezaba la lista de diputados nacionales de Lavagna-Urtubey.

22. Tierra del Fuego

En la provincia con menor densidad de población y más austral de la Argentina, la elección a gobernador era la que atraía todas las miradas. La gobernadora Rosana Bertone buscaba en 2019 la reelección. En la elección del 2015, esta exponente del FPV se había impuesto por escaso margen y en balotaje, a Federico Sciurano, del frente Unir a Tierra del Fuego, claramente vinculado a la UCR.

En la elección de 2019, la gobernadora Bertone se postuló por el frente Unidad Fueguina, que conjugaba a expresiones diversas afines al peronismo. En la oposición, la sigla Ser Fueguino era la que condensaba la alianza Cambiemos (UCR-PRO) en esta provincia, en esta oportunidad encabezada por Juan Rodríguez; pero el principal contrincante sería el intendente de la ciudad de Río Grande, Gustavo Mellela, que pertenecía a la agrupación Concertación FORJA, una fuerza política donde con-

fluían radicales alfonsinistas y kirchneristas.

El día 16 de junio de 2019 se produjo la elección provincial con un triunfo abrumador de Mellela con el 55% de los votos, derrotando así a la gobernadora Bertone (40,8%) y las expectativas del macrismo que encarnó Rodríguez (4,1%). De esta forma, en una provincia acostumbrada a la alternancia partidaria entre peronistas, radicales y terceras fuerzas, la llegada de FORJA marcaba claramente un hito en la provincia.

23. Tucumán

La provincia de Tucumán es históricamente un bastión peronista. Al igual que en el 2015 cuando Juan Luis Manzur (FPV) obtuvo la victoria a la gobernación en una controvertida e irregular elección, la contienda de 2019 se realizaría de forma anticipada al calendario nacional, el día 9 de junio, aunque la constitución provincial establecía que fueran en agosto.

Como en la gran mayoría de las provincias argentinas, el gobernador en funciones buscaba ser reelecto. Sin embargo, en esta oportunidad, tenía un contendiente dentro del propio arco peronista: el ex gobernador entre el 2003 y 2011 y mentor de Manzur, José Alperovich.

En el espacio afín al gobierno nacional, la senadora radical Silvia Elías de Pérez y el empresario agroexportador José Manuel Paz conformaron el binomio del frente Vamos Tucumán.

Dentro del partido Fuerza Republicana, que respondiera históricamente al represor condenado Domingo Bussi, al igual que en todas las elecciones para gobernador desde 1995, el candidato sería Ricardo Argentino Bussi, aliado a nivel nacional con el partido NOS de Ricardo Gómez Centurión.

Al igual que la mayoría de los territorios del norte argentino —con excepción de Jujuy— el peronismo mantenía su hegemonía en las elecciones provinciales de 2019. En el caso tucumano, Manzur (51,8%) era reelecto con un extenso margen sobre sus perseguidores: Elías de Pérez (20,41%), Bussi (13,7%) y Alperovich (11,6%).

Esto dejaba en claro el fuerte peso del gobernador como gran elector distrital en Argentina, y su impronta para ordenar la contienda en torno a la distinción gobierno-oposición. Por su parte, en la elección nacional para presidente, la frontera entre

el macrismo (33%) y el peronismo (57%) dejaba en evidencia la agregación de las fuerzas conservadoras (que habían encabezado Elías de Pérez y Bussi) secundado a Macri, por un lado, y la potencia unificadora del peronismo por el otro.

24. Reflexiones finales

Tomando en cuenta el panorama anteriormente descrito, es necesario señalar que la dinámica de la política provincial en Argentina durante el interregno de Cambiemos (2015–2019) dista en ser uniforme u homogéneo, ya que es posible distinguir al menos 4 grandes itinerarios en términos de continuidades/rupturas que se ponen en juego en las elecciones analizadas: a) distritos con una continuidad indisputada y clara orientación hacia el peronismo (Santa Cruz, Formosa, La Rioja, La Pampa y San Luis). b) Gobernaciones con una baja alternancia, pero mayormente inclinadas hacia el peronismo (Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, San Juan o Córdoba). c) Territorios con un marcado cambio del signo político a lo largo del tiempo (Mendoza y Santa Fe). d) Circunscripciones donde fuerzas partidarias distritales adquieren un fuerte predominio, como es el caso del PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos Somos Río Negro, Chubut Somos Todos y el Movimiento Popular Neuquino en los distritos patagónicos homónimos, el Frente de la Concordia en Misiones, Identidad Salteña en Salta y Concertación FORJA en el territorio austral de Tierra del Fuego.

Asimismo, es posible señalar que en los distritos provinciales argentinos el impacto del deterioro social y económico no tuvo fuertes consecuencias en las propias dinámicas electorales subnacionales, con excepción de las provincias de la región central argentina (CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), que ven como se horada el predominio inusitado del macrismo y su simbiosis con la dinámica agroexportadora, generando nuevos huérfanos de la política que retornan al peronismo (Torre, 2017). Es por ello, que sería posible afirmar en consonancia con la hipótesis de trabajo propuesta, que la mayoría de los gobernadores/as provinciales continúan oficiando de grandes electores y defensores de una territorialidad de la política tendiente a la calcificación. Pero también es posible reconocer que, en las elecciones a gobernadores, la polarización que se observa en las provincias responde mayormente a criterios distritales (el clivaje oposición/gobierno) que a la tensión entre la Argentina Peronista y la Argentina de Cambiemos, a pesar de los esfuerzos —denodados e infructuosos— desde la Casa Rosada por enraizar una fuerza partidaria afín en las

provincias. Esta “grieta” entre macristas y peronistas se torna palpable y evidente en las provincias, únicamente en aquellas elecciones simultáneas o en el juego por cargos nacionales.

Sin embargo, es necesario apuntar como corolario que, contrario los que se supone (Calvo y Escolar, 2005), la territorialización de la política en Argentina no es un fenómeno que se deriva únicamente de la oferta política, sino también una forma de decodificar la contienda político-electoral en el plano de la demanda. Es decir, la ciudadanía pone en juego lógicas políticas múltiples según el juego electoral que afrontan, aunque en una coyuntura fluida como la del 2019 se entrecrucen —de forma desdoblada o concurrente— el calendario electoral nacional y provincial.

Bibliografía

CALVO, E. & ABAL MEDINA, J. (2001), *El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina*, CABA, INAP/EUDEBA.

CALVO, E. & ESCOLAR, M. (2005), *La nueva política de partidos en Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral*. CABA, Editorial Prometeo.

DEGIUSTTI, D. y SCHERLIS, G. (2020), “Desandando caminos. Reequilibrio de fuerzas y alternancia en el sistema partidario argentino, 2015–2019” en *Colombia Internacional*, pp. 139–69, N°103.

DELLA PORTA, D. (2013), “Análisis comparativo: la investigación basada en casos frente a la investigación basada en variables”. En DELLA PORTA, D. y KEATING, M. (Coords.), *Enfoques y metodologías de las ciencias sociales*, pp. 211–37. España, Ediciones Akal.

IGLESIAS, E. y LUCCA, J. B. (2019), *La Argentina de Cambiemos*. Rosario, EDUNR.

IGLESIAS, E. y LUCCA, J. B. (2020), *La persistencia de la Argentina de Cambiemos*. Rosario, EDUNR.

KEY, V. O. (1955), “A Theory of Critical Elections”. *The Journal of Politics*, 1 (17), pp. 3–18.

LEIRAS, M. (2010), “Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas de partidos en América Latina”. *Política y gobierno*, 17(2), pp. 205–241.

LUCCA, J. B. y GIAVEDONI, J. G. (2016), “Las elecciones argentinas de 2015”. *Política, cultura e sociedade na América Latina. Estudos interdisciplinares e comparativos*. Volume 3 en OLIVEIRA XAVIER, L. y DOMINGUEZ ÁVILA, C. F. (org.), pp. 37–64. Curitiba, CRV.

LUCCA, J. B. y PINILLOS, C. (2015), “Decisiones metodológicas en la comparación de fenómenos políticos iberoamericanos”. *Documento de Trabajo del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca*, 25, pp. 1–35.

MAURO, S. y LENARDUZZI, J. (2017), *La venganza de los huérfanos: las elecciones nacionales y subnacionales de 2015 en Argentina*. CABA, CEAP/Universidad Autónoma de Buenos Aires.

MIÑO, J. A., & BUSMAIL, A. R. (2015), *Democracia y elecciones: apuntes para una reforma política*. CABA, Editorial El Ateneo.

MUSTAPIC, A. M. (2013), “Los partidos políticos en la Argentina: condiciones y oportunidades de su fragmentación” en *Cuánto importan las instituciones*. ACUÑA, C. (comp.), pp. 249–290. CABA, Editorial Siglo XXI.

OLIVEROS, V. y SCHERLIS, G. (2004), “¿Elecciones concurrentes o elecciones desdobladas? La manipulación de los calendarios electorales en la Argentina, 1983–2003” en *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. CHERESKY, I. y BLANQUER, J.M. (Comps), pp. 179–211. Rosario, Homo Sapiens.

TORRE, J. C. (2017), “Los huérfanos de la política de partidos revisited”. *Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político*, 11(2), pp. 241–249.

VARETTO, C. y PALUMBO, W. (2019), “La desnacionalización partidaria en argentina: un proceso oscilante y espasmódico” en *Procesos electorales en perspectiva multinivel: gobernanza electoral y comportamiento político en Argentina*. MUTTI, G. & TORRES, A. (comp.), pp. 122 – 140. Rosario, EDUNR.

Lucca, Juan Bautista (2024). “Las elecciones argentinas para gobernador/a durante la administración de Mauricio Macri (2015–2019)”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 57–83.

¿EL REGRESO DEL BI-COALICIONISMO? RECONFIGURACIÓN PARTIDARIA Y ALTERNANCIA: UNA MIRADA AL PROCESO ELECTORAL SANTAFESINO DEL 2023

María Laura Sartor Schiavoni
y Enrique Tschieder
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Enmarcado en una extensa agenda electoral, Santa Fe realizó sus 11° elecciones provinciales desde el regreso a la democracia durante el 2023, año en que Argentina celebra sus 40 años de democracia ininterrumpida. Las elecciones primarias tuvieron lugar el domingo 16 de julio y el 10 de septiembre las elecciones generales, con un calendario diferido al de los comicios nacionales. Durante el proceso electoral, no sólo se eligió la fórmula del Ejecutivo, sino que también se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y Senadores y se realizaron elecciones municipales y comunales en la mayor parte de las localidades, de forma simultánea.

La novedad en materia del sistema electoral fue la incorporación del voto joven,

ampliando significativamente el padrón electoral. Por otro lado, se dió una reestructuración de las alianzas provinciales y, de postre, una alternancia en el gobierno provincial.

Este artículo busca describir los principales aspectos del proceso electoral santafesino considerando cómo se ha ido estructurando el sistema de partidos desde el regreso de la democracia a la actualidad; el diseño institucional y las innovaciones ocurridas; la conformación de alianzas y finalmente los resultados electorales y la configuración del nuevo gobierno.

2. El sistema de partidos santafesinos 1983-2023

Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta el años 2004, en el territorio provincial santafesino se dio un claro predominio del Partido Justicialista (PJ), que se sostuvo en el amparo de la Ley de Lemas (Borello y Mutti, 2003), la cual influyó significativamente en las estrategias y dinámica de los actores, tanto oficialistas, como de las fuerzas opositoras que, a fines de alcanzar el poder, conformaron una alianza cuyas negociaciones tuvieron lugar en el escenario provincial: en primer lugar la Alianza Santafesina y posteriormente del Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS), que fue clave para la alternancia política (Cruz, 2019).

En 2004, la modificación de la Ley de Lemas y su reemplazo por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) significó un importante cambio en materia electoral (Lodi, 2010). Esta reforma electoral abrió un escenario de oportunidad que influyó para que, en 2007, por primera vez desde el regreso de la democracia, se diera un cambio en el partido gobernante. Ese año el Ejecutivo provincial quedaría a cargo de una coalición de gobierno, el FPCyS, conformado por el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista y la Coalición Cívica –ARI.

Sin embargo pese a la alternancia en el gobierno, la interacción del sistema de partidos mantiene cierta estabilidad organizada bajo una lógica bimodal, sostenida sobre una coalición radical-socialista y otra peronista, dinámica que entra en crisis en los procesos electorales subsiguientes (Sartor Schiavoni, 2022).

En 2011, esto comienza a modificarse cuando el Partido Propuesta Republicana (PRO), una fuerza nacional, con raíces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza una estrategia exitosa de aterrizaje sobre territorio santafesino, generando un incremento de partidos relevantes a nivel provincial, pero sin modificar las alian-

zas existentes en un primer momento.

En este contexto electoral, el PRO arriba a Santa Fe bajo una sigla propia, conformando la alianza Unión PRO Federal, que presentó como candidato a Miguel Torres Del Sel, un *outsider* que proponía renovar la política provincial. En los comicios el FP-CyS, que había obtenido la gobernación en 2007, se presentó nuevamente a la competencia con la misma alianza electoral y logró conservar el Ejecutivo con el 39,68% de los votos. Sin embargo, la victoria se dio con escaso margen dado que, en segundo lugar, a menos de 3% de diferencia, quedó la nueva alianza “Unión PRO Federal”. Finalmente, en tercer lugar, la alianza peronista “Frente Santa Fe para todos” reunió el 22,76% de los votos. Otra particularidad de este proceso electoral es que, pese a la fórmula mayoritaria para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, por primera vez, el Ejecutivo no tuvo mayoría legislativa. La lista encabezada por María Eugenia Bielsa, del Frente Santa Fe para Todos, fue la más votada, adquiriendo así la mayoría legislativa de 28 bancas y dando cuenta de un voto cruzado en la ciudadanía entre el ejecutivo y el legislativo provincial.

Esta elección, entre sus novedades, no sólo incluyó a una nueva fuerza electoral relevante, sino que hay un cambio de un sistema bimodal a una competencia de tercios.

En el año de 2015, la decisión de la UCR de sumarse a la alianza liderada por el PRO para la conformación de Cambiemos a nivel nacional tuvo un impacto inmediato sobre la arena provincial. No obstante, en la provincia de Santa Fe, “la resolución fue la construcción de una segmentación estratégica que permitió estabilizar la dinámica provincial, a la vez que posibilitó reinsertarse en la nueva lógica del escenario nacional” (Sartor Schiavoni, 2022:2)

En este escenario, el FPCyS fue electo por tercer mandato consecutivo con el 31,74% de los votos, con una escasa diferencia, de alrededor de 1500 votos, de Unión Pro Federal, que obtuvo el 31,65% de los votos. En tercer lugar quedó la fórmula justicialista con 30,35% de los votos, reafirmando el escenario de tercios para la competencia por el Ejecutivo. Por otra parte, en lo que respecta al legislativo provincial, el FP-CyS alcanzó el 29,64% de los votos, que le significó ocupar la mayoría de las bancas (28 bancas). Unión Pro Federal y el Frente Justicialista para la Victoria obtuvieron 10 bancas cada uno, con un porcentaje cercano al 13% de los votos. Las restantes fuerzas no obtuvieron representación.

El triunfo de Cambiemos en el Ejecutivo nacional en 2015, con la victoria de Mauricio

Macri, brindó un impulso a la coalición a nivel nacional que llevó a la UCR a modificar las condiciones de coordinación a nivel provincial que quedará plasmado en las elecciones a legisladores nacionales de 2017 y se profundizará frente al escenario electoral provincial de 2019 (Sartor Schivoni, 2022).

Como corolario, en las elecciones 2019, se avizora un reordenamiento de las estrategias de las coaliciones provinciales, propiciando la ruptura de la alianza gobernante. A raíz de esto, uno de los principales cambios que se evidencia en la provincia de Santa Fe recae sobre la conformación de la alianza del FPCyS. Esta alianza electoral, que gobernó durante tres periodos en la provincia, perdió a uno de sus socios mayoritarios, la UCR. No obstante, este viraje no estuvo exento de fisuras internas, dado que algunos líderes radicales continuaron dentro de la alianza con el PS y se conformaron nuevas fracciones internas e incluso nuevos partidos que se desprenden del radicalismo (Gallo y Pérez Roux, 2021:375-379).

Con este cambio, las alianzas provinciales se reconfiguraron de la siguiente forma: El FPCyS conservó su sello electoral; el mismo quedó compuesto por el Partido Socialista, partido GEN, Movimiento Libres del Sur, Partido Demócrata Progresista, Creo, Participación Ética y Solidaridad, Partido Intransigente y el Partido Solidaridad e Igualdad.

Por su parte Cambiemos se conformó a nivel provincial con los siguientes actores: PRO (Propuesta Republicana), Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI, Ucedé (Unión del Centro Democrático) y FE.

La disputa por el Ejecutivo dio como resultado la elección de la alianza justicialista “Frente Juntos”, que llevó a Omar Perotti como gobernador con el 42,31% de los votos. Por su parte, Antonio Bonfatti, ex gobernador en el periodo 2011-2015, de la alianza del FPCyS obtuvo 37,91% de los votos y en tercer lugar José Manuel Corral, de Cambiemos, concentró el 19,78% de las preferencias. Por otro lado, en la Cámara de Diputados se produjo una situación inédita en la provincia, dado que los escaños fueron repartidos entre seis fuerzas políticas. La alianza más votada fue el FPCyS que obtuvo, dada la cláusula de mayorías, un total de 28 bancas. El Frente Juntos alcanzó 7 bancas; Unite por la Familia y la Vida, 6 bancas; Cambiemos 5 bancas; la alianza Frente Social y Popular 2; e Igualdad y Participación 2 escaños.

Con este escenario, las elecciones 2019 reestructuraron las alianzas electorales, al mismo tiempo que dieron lugar a la alternancia; no obstante el escenario de tercios se mantuvo constante, aunque con una ventaja para la alianza justicialista.

3. Diseño institucional santafesino

En Argentina, cada provincia cuenta con un diseño constitucional propio y un margen de autonomía para organizar sus instituciones, en estrecha relación con el principio federalista que rige la Constitución Nacional. En este sentido, pongamos en consideración las especificidades que la Carta Magna santafesina, vigente desde 1962, estipula en torno al diseño institucional provincial. Los artículos 1 y 2 de la Carta Magna plantean que la Provincia de Santa Fe organiza sus instituciones según las condiciones y limitaciones que prescribe la Constitución Nacional, y de acuerdo a los principios democrático, representativo y republicano.

En lo que respecta a los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo está conformado por un gobernador y vicegobernador, elegidos directamente por el pueblo de la provincia, a simple pluralidad de sufragios. El Artículo 64° remite a la cuestión de la duración en el cargo y la reelección del ejecutivo, y estipula que tanto el gobernador como el vicegobernador duran en sus cargos un período de cuatro años, y no tienen la posibilidad de ser reelectos de manera inmediata. Pueden volver a presentarse en una contienda electoral y ocupar el cargo ejecutivo luego de un intervalo de cuatro años.

Por otra parte, el Poder Legislativo está compuesto por una Legislatura bicameral, es decir, por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Respecto a las reglas de juego que establecen el mecanismo de la elección de los legisladores y la distribución de las bancas, nos encontramos con una Cámara de Diputados formada por un total de 50 bancas cuyos miembros son elegidos directamente por el pueblo, tomando el territorio provincial como distrito único. De la totalidad de bancas, 28 corresponden al partido o alianza partidaria con mayor número de votos, mientras que las 22 bancas restantes se reparten de manera proporcional, según los votos logrados (a través del sistema D'Hondt). Los diputados duran en sus cargos 4 años, los mandatos comienzan y terminan simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador, y pueden ser reelegidos en sus funciones de manera indefinida.

En lo que respecta a la Cámara de Senadores, la cantidad de bancas corresponde a cada uno de los departamentos provinciales, es decir, 19 senadores electos a simple pluralidad de sufragios y de manera directa por el pueblo santafesino. Los senadores duran en sus cargos 4 años, los mandatos comienzan y terminan simultáneamente con el del gobernador y vicegobernador, y pueden ser reelegidos en sus funciones

de manera indefinida.

Al trasladarnos al plano de la reforma constitucional, la Constitución Provincial necesita atravesar un proceso particular para ser modificada, proceso se aparta de la legislación ordinaria. Los mecanismos institucionales de reforma constitucional vigentes en la actualidad se encuentran claramente establecidos en los artículos 114° y 115° de la Carta Magna Provincial.

Es posible distinguir dos etapas del proceso constituyente (Blando, 2018). La etapa de promoción tiene lugar en la Legislatura Provincial, donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores declaran la necesidad de la reforma a través de una ley especial, con mayorías agravadas (dos terceras partes de cada cámara). Los legisladores deberán decidir qué aspectos de la Carta Magna reformar, pudiendo modificarse parcial o totalmente. La etapa de reforma expresa (o constituyente propiamente dicha) se despliega en el marco de la convención constituyente, órgano ad hoc integrado por 69 convencionales, número correspondiente a la cantidad de diputados (50) y senadores (19). La convención se desarrolla siguiendo los lineamientos de la ley de necesidad, es decir que su accionar es soberano dentro del marco que la ley de reforma dicta (Blando, 2018): debe pronunciarse sobre todos los puntos susceptibles de reforma, que la ley propone (sin estar obligada a aprobar las modificaciones propuestas), pero no debe expedirse sobre los temas o artículos no habilitados por la ley especial.

En definitiva, nos encontramos entonces con tres instancias fundamentales, inherentes al poder constituyente: en primer término, la instancia legislativa que declara la necesidad de la reforma; en segundo lugar, el electorado, que elige a sus representantes; y finalmente la convención reformadora, que lleva adelante las modificaciones. Se vuelve necesario destacar que la recuperación de la democracia en el año 1983 marca el comienzo de un período en el cual la totalidad de las provincias, a través de enmiendas o asambleas constituyentes, modificaron total o parcialmente sus constituciones. La reforma de la Constitución Nacional acontecida en el año 1994, acentúa dicho proceso. En ese contexto, la provincia de Santa Fe se convierte en un caso excepcional, ya que se trata de la única provincia cuya Carta Magna no ha atravesado un proceso de reforma, permaneciendo vigente en la actualidad la Constitución sancionada en el año 1962 (Tschieder, 2019).

3.1 Inclusión del voto joven

La discusión respecto al voto joven en Santa Fe forma parte de la agenda política local desde hace varios años, fundamentalmente a partir de la contradicción explícita de que los jóvenes entre 16 y 18 años están habilitados para votar en los comicios nacionales a partir de la sanción de la Ley Nro.26774 del año 2012. Sin embargo, la falta de consensos partidarios para garantizar este derecho anuló las posibilidades de dar respaldo a un proyecto de ley o alcanzar una reforma constitucional que lo incorpore. De esta manera, Santa Fe se convirtió en la única provincia del país donde los jóvenes no podían sufragar y elegir autoridades provinciales y locales, hasta que la Justicia electoral tomó una decisión.

El 27 de abril de 2023, los diputados provinciales del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, presentaron ante la justicia una demanda para habilitar el voto joven en la Provincia de Santa Fe. El pedido de los legisladores argumentaba que existía una discriminación hacia los jóvenes entre 16 y 18 años, que no podían votar autoridades provinciales, municipales y comunales para cargos legislativos y ejecutivos, mientras que sí podían emitir sufragio en las elecciones de cargos nacionales. A su vez, el pedido sostenía que se violaba no sólo la Constitución Nacional, sino también los tratados internacionales y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Luego de la presentación de los legisladores, el Tribunal Electoral de Santa Fe decidió por unanimidad habilitar el voto joven (Resolución N° 001/2023), pero debió afrontar la impugnación presentada por el apoderado del partido País, Mario Deschi, y por el frente Primero Santa Fe (Diario digital Letra P, 16 de mayo de 2023). El argumento de quienes rechazaban la sentencia y al voto joven gravitó en torno a una supuesta modificación del “piso electoral” para superar las primarias y una dificultad mayor para sus candidatos a acceder al reparto de bancas en Diputados, además de sostener que la modificación de la legislación abriría las puertas a una ulterior modificación de la Carta Magna vía decretos y/o sentencias judiciales, sin atravesar el proceso constitucional correspondiente.

Distintas voces del Poder Judicial y la propia sentencia del Tribunal, a través de la actuación 0832, rechazaron el planteo de inconstitucionalidad, al que consideraron erróneo e ilegítimo. Luego de numerosas idas y vueltas, el Tribunal Electoral decidió habilitar a los jóvenes entre 16 y 18 años para ejercer su derecho a sufragar en las elecciones PASO del domingo 16 de julio, y en las generales del 10 de septiembre (Diario Letrap, 11 de julio de 2023; El Litoral, 11 de julio de 2023).

La decisión ocurrió el 10 de julio, a escasos días de realizarse la elección primaria.

Cabe destacar que el voto para esa franja etaria es optativo, y se encontraban en condiciones de votar un total de 83.881 jóvenes santafesinos, de un total de 2.811.328 votantes que configuran el padrón electoral de la provincia.

4. El proceso electoral 2023 en la provincia de Santa Fe.

Las elecciones santafesinas en 2023, se dieron de forma diferida con las elecciones a las nacionales. Las PASO provinciales se celebraron el 16 de julio, y las elecciones generales tuvieron lugar el 10 de septiembre. En el transcurso de tiempo entre ambos procesos, se realizaron las PASO nacionales, el 13 de agosto.

En la provincia no sólo se eligió la fórmula del Ejecutivo, sino que también se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y Senadores. Simultáneamente, se realizaron las elecciones locales a lo largo de todo el territorio provincial.

4.1. Reestructuración de las alianzas: la conformación del “Frente de frentes”

La conformación de las alianzas de cara a las elecciones reordenó la competencia. Si bien hubo numerosos partidos y alianzas que compitieron en todo el territorio provincial, la disputa electoral se ordenó en torno a dos alianzas predominantes:

Las fuerzas peronistas optaron, al igual que en 2019, por ir de forma articulada en la Alianza “Juntos avancemos”, que reunió a 15 partidos políticos: Partido Justicialista, Frente Grande, Partido Solidario, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Fe, Compromiso Federal, Patria Grande, Partido Progreso Social, Santafesino Cien por Ciento, Confluencia Santafesina, Producción, Trabajo y Desarrollo, Frente Renovador Santa Fe, Abrazo Solidario, Firmat Futura y Ahora Si Funes.

En contracara, la oposición se reestructuró en torno a una alianza amplia, que incluyó a las fuerzas del FPCyS y Cambiemos, bajo el nombre “Unidos para Cambiar Santa Fe”; generando así una nueva alianza, con 15 partidos: la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, Unir, el Partido Socialista, PRO-Propuesta Republicana, Gen, Encuentro Republicano Federal, Unión del Centro Democrático, Frente para el Cambio, Creo, Participación Ética y Solidaridad (PARES), Unidos, Una Nueva Oportunidad, Santa Fe Puede Más y Somos Cañada.

La conformación de una alianza de amplio espectro ideológico que reunió partidos políticos muy diversos entre sí no estuvo exenta de conflictos, y en muchos casos implicó fraccionamientos al interior de los propios partidos, principalmente en el PS, que, si bien sigue siendo uno de los partidos de mayor peso dentro de la nueva alianza, perdió el liderazgo que tenía al interior del FPCyS.

4.2. Resultados de las PASO

Las elecciones primarias dieron cuenta de una alta fragmentación en la provincia, más allá de los dos frentes que buscaron reunir a la mayoría de las fuerzas oficialistas y opositoras, hubo muchas expresiones partidarias que compitieron por fuera de estas fuerzas electorales.

En las elecciones se presentaron 13 fórmulas a gobernador y vicegobernador, de las cuales sólo 4 alcanzaron los votos suficientes para participar de las elecciones generales.

El frente Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo la mayor cantidad de votos (63,08 %). En la interna se impuso la fórmula encabezada por Maximiliano Pullaro (51,65 %), en segundo lugar se ubicó Carolina Losada (UCR-PRO, 34,20 %) y en tercer lugar la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein (Partido Socialista, 14,15 %). Pullaro se desempeña como diputado provincial de la UCR y ocupó el cargo de Ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz (2015-2019).

La coalición ganadora duplicó en cantidad de adhesiones al frente Juntos Avancemos, que aglutinó a las distintas expresiones del peronismo, y obtuvo el 27,9% de los votos. Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe, resultó ganador de la interna con el 64,07 %, relegando al resto de los precandidatos: Marcos Cleri (14,86 %), Eduardo Toniolli (11,16 %) y Leandro Busatto (9,92 %).

En tercer lugar se posicionó Viva la Libertad (3,02 %), con su candidato Edelvino Bodoira; y en cuarto lugar el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad (2,72 %), en cuya interna se impuso Carla Deiana al precandidato Octavio Crivaro. Respecto a los candidatos que no lograron superar el umbral del 1,5 % para participar en las generales, se trata de Eduardo Maradona de la Coalición Cívica-Ari; Gustavo Marconato de Escucharte Santa Fe y Walter Eiguren del partido Moderado.

En las elecciones primarias participó el 62,77 % del padrón, y votaron los ciudadanos

nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Santa Fe. La novedad de esta elección fue el voto joven, es decir, los adolescentes entre 16 y 18 años fueron habilitados a emitir sufragio.

En las elecciones PASO 2019, Juntos por el Cambio y el otrora FPCyS se presentaron como fuerzas autónomas y compitieron entre sí, siendo derrotadas por el candidato del peronismo, Omar Perotti, y obteniendo entre ambas la suma de 833.380 votos. La nueva coalición opositora, Unidos para Cambiar Santa Fe, logró 952.400, dando cuenta de que la estrategia aliancista fue una de las claves para superar al oficialismo. Otra clave para entender la victoria contundente de Unidos frente a Juntos Avancemos, es el declive del potencial electoral del peronismo, que perdió 282.285 votos para la categoría gobernador. La interna del justicialismo en 2019 obtuvo 704.168 votos, mientras que en las PASO 2023 cosechó 421.883 adhesiones en toda la provincia.

Otro elemento a considerar fue la disputa entre Pullaro y Losada, que adquirió una visibilidad y gravitación destacada, a partir de los apoyos que ambos candidatos recibieron desde la coalición Juntos por el Cambio y sus precandidatos a presidente. Mientras Patricia Bullrich decididamente respaldó a Losada, Pullaro recibió el respaldo del Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Por otro lado, algunas declaraciones de Losada respecto al desempeño de Pullaro como Ministro de Seguridad, e incluso acusaciones de vínculos con el narcotráfico (La Política Online, 30/05/2023) encendieron el debate interno de la coalición y tensionaron el armado multipartidista de cara a las elecciones generales.

Por fuera de la categoría ejecutiva, las internas en las categorías diputados concitaron buena parte de la atención. Clara García, representante del Partido Socialista, fue la ganadora en una interna muy competitiva que atravesó el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Superó por una diferencia menor a 3000 votos al ex intendente de Santa Fe y ex candidato a gobernador, José Corral; mientras que en tercer y cuarto lugar se ubicaron el senador nacional Dionisio Scarpin y el ex gobernador santafesino Antonio Bonfatti, respectivamente. El frente en su conjunto resultó el espacio más votado, con 556.294 votos, superando a Juntos Avancemos, que obtuvo 464.797 adhesiones.

El gobernador Omar Perotti resultó victorioso en la disputa dentro de la coalición Juntos Avancemos, logrando 248.064 votos, y relegando con holgura al resto de sus competidores. Perotti además logró ser el precandidato a diputado más votado en todo el territorio provincial. En el segundo lugar de la interna se ubicó su vicegobernadora, Alejandra Rodenas, con 58.282 votos.

En un tercer lugar se ubicó la diputada provincial Amalia Granata, quien alcanzó los 180.653 sufragios como representante del partido Unite. En términos individuales, fue la segunda candidata más votada en la categoría diputados. Las otras fuerzas que superaron el umbral electoral fueron el Frente Amplio por la Soberanía, liderado por Carlos Del Frade; Viva la Libertad, en cuya interna resultó ganador Juan Argañaraz, e Igualdad y Participación, encabezado por Rubén Giustiniani. Las restantes fuerzas no alcanzaron el piso mínimo para disputar la elección general.

De cara a los comicios generales, las listas de cada alianza quedan conformadas, a partir del sistema proporcional D'Hont. De esta manera, tanto en Unidos para Cambiar Santa Fe como en Juntos Avancemos y en La Libertad Avanza, la nómina oficial de 28 diputados para las elecciones generales se compone de los distintos precandidatos que superaron el umbral electoral del 1,5% en la interna de cada espacio, respetando a su vez la paridad de género.

4.3 Elecciones generales

El 10 de septiembre se realizaron las elecciones generales provinciales, en las cuales los electores votaron de manera definitiva a gobernador y vicegobernador, diputados y senadores provinciales, y autoridades locales.

Respecto a la participación electoral, es necesario destacar el aumento de la afluencia de votantes respecto a las elecciones primarias, algo que es característico de las elecciones santafesinas. Sin embargo, desde una mirada histórica, se puede observar un descenso sostenido en la participación electoral de las elecciones primarias. Si miramos en retrospectiva, en las elecciones del año 2011 votó el 73,68% del padrón, y en las generales el 74,87%. En la contienda electoral de 2015 votó el 72,51% del padrón en las PASO, mientras que en las generales lo hizo el 76,37% de los electores. En las elecciones de 2019, las primarias registraron una participación del 69,59%, que aumentó levemente a un 71,93 % del padrón en las generales.

Tabla 1. Participación electoral 2011-2023

	2011	2015	2019	2023
PASO	73,68%	72,51%	69,59%	62,77%
Generales	74,87%	76,37%	71,93%	68,29%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral

El porcentaje de participación en las elecciones primarias de 2023 fue del 62,77%, mientras que en las elecciones generales el número fue del 68,29%. Sin embargo, esta baja porcentual significativa en la participación no se refleja en una baja de la participación nominal, sino que se debe en parte al incremento del padrón con la ampliación del voto joven. Si se mira la participación nominal, por ejemplo para la elección a gobernador, se puede ver que mientras que en 2019 votaron un total de 1.839.955 electores, en 2023 el número se mantuvo constante 1.852.277 e incluso presentó un pequeño incremento.

En la elección general a Gobernador se dió un resultado que diferenció al proceso electoral de los anteriores, la fórmula de Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo la gobernación con el 55,71% de los votos, un porcentaje muy elevado si se considera las anteriores elecciones ejecutivas; pero además con una amplia diferencia de la alianza peronista “Juntos Avancemos”, que obtuvo el 29,39% de los votos. Por su parte, las otras fuerzas que participaron, Viva la Libertad y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, obtuvieron el 6,15% y el 4,03%, respectivamente.

En lo que respecta al legislativo, se puede ver que hubo mayor fragmentación, tanto de la oferta partidaria, como de las preferencias del electorado.

Si bien la fórmula Unidos para Cambiar Santa Fe, obtuvo la mayoría legislativa, el número de votos y el porcentaje no fue tan elevado como para la ejecutiva. Al igual que en 2019, se dará una cámara fragmentada entre cinco fuerzas electorales. En lo que respecta a la mayoría automática de 28 bancas, corresponde al frente Unidos para Cambiar Santa Fe, liderado por Clara García. Mientras que las 22 bancas opositoras fueron repartidas a través del sistema proporcional D’Hont, en cuatro bloques. El bloque opositor más numeroso será el de Juntos Avancemos, con 10 bancas, seguido por Unite, con 7 bancas.

Un dato no menor a considerar, será el respaldo legislativo que eventualmente tendría el gobernador electo Maximiliano Pullaro, en caso de lograr una disciplina partidaria de los miembros de la coalición. Esto se debe no solamente a las 28 bancas de la Cámara de Diputados, sino a las 13 bancas que obtuvo en el senado santafesino. La Cámara de Senadores, históricamente, tuvo una composición mayoritariamente peronista, mientras que las elecciones de 2023 marcaron una reconfiguración de los bloques, con una mayoría considerable de bancas en manos del frente Unidos, cinco bancas para Juntos Avancemos, y una banca para el partido Unite por la Libertad y la Dignidad.

Tabla 2. Resultados electorales: Cámara de Diputados Santa Fe 2023.

Alianza/Partido	Cantidad de votos	% sobre electores	Cantidad de bancas
Unidos para Cambiar Santa Fe	573.639	20,39%	28
Juntos avancemos	484.161	17,21%	10
Unite por la Libertad y la Dignidad	345.551	12,28%	7
Frente Amplio por la Soberanía	132.278	4,70%	3
Viva la Libertad	128.884	4,58%	2
Igualdad y participación	70.980	2,52%	-

Fuente: elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral

5. Conclusiones

El proceso electoral santafesino concluyó en septiembre de 2023, consagrando a Maximiliano Pullaro (UCR-Juntos por el Cambio) como gobernador electo, luego de superar por una amplia diferencia al candidato del peronismo, Marcelo Lewandowski. La victoria de Pullaro puede ser leída a partir de una serie de elementos claves.

En primer lugar, significó el regreso del radicalismo al cargo ejecutivo luego de casi seis décadas, ya que el último gobernador radical en ejercer el cargo fue Aldo Tessio,

entre 1963 y 1966. Si bien el radicalismo formó parte del Frente Progresista Cívico y Social -coalición gobernante entre 2007 y 2019-, los sucesivos gobernadores pertenecieron al Partido Socialista, mientras que los vicegobernadores fueron de la UCR. Pullaro logró posicionarse en el tablero político santafesino, disputar una elección en un frente multipartidista, una elección cargada de disputas y acusaciones de fuerte tenor por parte de una de sus rivales, y obtener luego una victoria contundente en las elecciones generales. Esto nos permite pensar en la emergencia y consolidación de determinadas figuras del radicalismo, que a nivel provincial logran protagonizar y representar un espacio de coalición de distintos partidos políticos.

Al mismo tiempo, la nueva alianza se reconfigura, no sólo en torno al liderazgo de Pullaro, sino a partir de la incorporación del PRO al frente Unidos para Cambiar Santa Fe. El PRO, partido político surgido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin una tradición o anclaje territorial en Santa Fe, logra posicionarse en la política santafesina como un actor de relevancia.

La presencia del PRO -luego Cambiemos- y su buen desempeño electoral, llevó a muchos analistas a considerar que el sistema partidario santafesino debía ser leído en clave de tercios, a partir de que las elecciones de 2011, 2015 y 2019 reflejaron la presencia de tres fuerzas electoralmente competitivas. La nueva alianza entre el PRO/Cambiemos y el Frente Progresista Cívico y Social, victoriosa en las elecciones del 2023, invita a repensar cómo se reestructuran las fuerzas políticas santafesinas, pasando de un escenario de tres espacios políticos a una competencia entre dos coaliciones, Unidos para Cambiar Santa Fe y Juntos Avancemos, que nuclea a las distintas expresiones del peronismo santafesino. Este reordenamiento también permite pensar en un posible retorno al esquema de competencia bipartidaria, ahora en clave bi-coalicional, que hegemonizó la política partidaria santafesina hasta el año 2007.

Por otra parte, los resultados obtenidos por las distintas fuerzas en la disputa de cargos legislativos, dan cuenta de la consolidación de un escenario político fragmentado, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Si bien la coalición oficialista cuenta con una mayoría automática de 28 bancas, las 22 bancas de la oposición se dividen entre dos fuerzas numerosas, el justicialismo y el partido Unite, y dos fuerzas menores en cantidad de escaños. Cabe preguntarse cómo funcionarán estos espacios a la hora de acompañar o rechazar las iniciativas del oficialismo, y qué incidencia tendrán los realineamientos y posicionamientos de estos espacios a nivel nacional en la disputa local.

6. Bibliografía

AGUILAR, M (2023) “Santa Fe: el Tribunal Electoral le dio luz verde al Voto Joven”, Diario digital Letra P, publicado el 16 de mayo de 2023. Disponible en: <<https://www.lettrap.com.ar/santa-fe/santa-fe-el-tribunal-electoral-le-dio-luz-verde-al-voto-joven-n5400227>> Consultado el: 1/11/2023.

BLANDO, O. (2018). “Convención reformadora: los límites y consensos”, Nota de opinión publicada en diario El Litoral el 8 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.ellitoral.com/opinion/convencion-reformadora-limites-consensos_0_RS0qzkeKJO.html> Consultado el 06/11/2023

BORELLO, R. y MUTTI, G. (2003) “La Ley de Lemas en la Provincia de Santa Fe”. Trabajo presentado en el VI Congreso Nacional de Ciencia Política. Sociedad Argentina de Análisis Político, Rosario, Argentina.

CRUZ, F. (2018) “Construyendo House of Cards. Partidos y coaliciones en Argentina, 1995-2015”. Tesis de Doctorado, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.

EL LITORAL (2023) “El Tribunal Electoral ratificó el Voto Joven en la provincia de Santa Fe”, Martes 11.7.2023. Disponible en: <https://www.ellitoral.com/politica/tribunal-electoral-ratifico-voto-joven-provincia-santa-fe-elecciones-paso-primarias-abiertas-simultaneas-obligatorias-tep-ahora-hoy-martes_0_6wsEQOhIBL.html> Consultado el 4-11-2023

GALLO, A. y PEREZ ROUX, C. (2021) “La encrucijada de la UCR santafesina: entre dos coaliciones de gobierno” en Revista Perspectivas de Políticas Públicas Vol. 10 N°20 (enero-junio 2021) Págs. 357-396.

LODI, L. (2010) “La Política de la Reforma Electoral en Santa Fe” Ponencia publicada en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.

NAVONE, F. (2023) “Losada vinculó a Pullaro con el narcotráfico y le recordó a Lousteau la 125: “Son personas oscuras””, Diario digital La Política Online, publicado el 30 de mayo de 2023. Disponible en <https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/losada-vinculo-a-pullaro-con-el-narcotrafico-y-le-recordo-a-lousteau-la-125-son-personasoscuras/#:~:text=La%20precandidata%20a%20gobernadora%20de,en%20las%20redes%20para%20perjudicarla>.

SARTOR SCHIAVONI, M.L (2022). Un laboratorio de segmentación estratégica : análisis de las estrategias de entrada multinivel de la Unión Cívica Radical de Santa Fe en los procesos electorales 2015 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en: <http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2193>

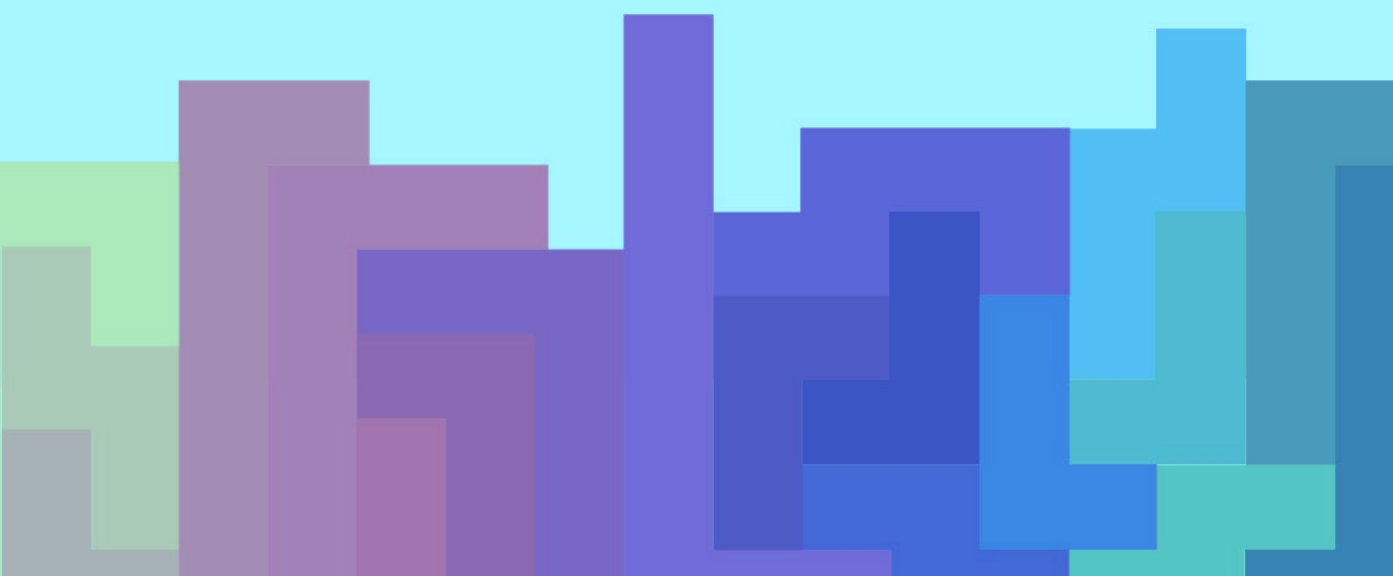
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (2023) “Resultado escrutinio definitivo Elecciones Generales 2023” Disponible en: <https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/> Consultado el: 1/11/2023.

TSCHIEDER, E. (2019). “El proceso inconcluso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe (2015-2019): un análisis a partir de la teoría de los jugadores con poder de veto” (tesina de grado). Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Repositorio digital UNR. Disponible en: <https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/17282>

VISSIO, A. (2023) “El Tribunal Electoral lo hizo: el domingo habrá voto joven por primera vez en Santa Fe”, Diario digital Letra P, publicado el 11 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.letrap.com.ar/santa-fe/el-tribunal-electoral-lo-hizo-el-domingo-habra-voto-joven-primera-vez-santa-fe-n5401622> Consultado el: 1/11/2023.

Sartor Schiavoni, María Laura y Tschieder, Enrique (2024). “¿El regreso del bi-coalicionismo? Reconfiguración partidaria y alternancia: una mirada al proceso electoral santafesino del 2023”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 84-99.

SECCIÓN II: PARTIDOS



EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO: DE LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO

Santiago Tomás Antunes
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

El Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, conocido de forma abreviada como Movimiento al Socialismo (MAS), es un partido político boliviano de izquierda fundado en 1997. El MAS nace dentro del seno sindical con el cual establece una relación simbiótica. El apoyo del movimiento sindical y su utilización como base tanto fundacional como electoral fue una de las características esenciales de partido, a pesar de las tensiones en mayor o menor grado. Como señala Machado “El MAS surge como tesis y estrategia del movimiento sindical campesino, que se materializa en 1995 cuando se realiza el congreso “Tierra, Territorio e Instrumento Político” (Machado, 2010:24).

El MÁS a su vez se caracteriza por la figura de un líder importante como uno de los principales motores del partido. El liderazgo de Evo Morales ha jugado un papel

fundamental en el proceso de surgimiento del MAS y en su crecimiento electoral. Morales se caracterizó por ser el gran árbitro de las diferentes esferas políticas y sociales que existen dentro del partido, lo cual le permitió articular una hegemonía en su figura en un contexto de baja institucionalidad interna (Do Alto, 2011).

En cuanto al componente ideológico, el MAS puede ser definido en rasgos generales como un partido anti status quo, entendiendo que mientras el MAS fue oposición sus esfuerzos se centraron en deslegitimar al sistema político. Sin embargo este carácter antisistema se expresa dentro del mismo sistema, es decir, la estrategia del MAS siempre estuvo contenida por dentro de los límites del sistema político.

En cuanto a la caracterización ideológica del MAS, este presenta una serie de rupturas en comparación a la izquierda tradicional. Para empezar propone reivindicaciones propias de sectores particulares comprendidas en propuestas nacionales pero no lo hace en el marco de un programa coherente de reformas, más específicamente el partido propone una revalorización de la identidad de los pueblos originarios por sobre otras identidades. Asimismo, el MAS se caracterizó por la creación de un sentido de pertenencia nacional del pueblo boliviano en confrontación con un adversario. “Desde sus inicios, el MAS expresó un conjunto de antagonismos y contradicciones de la sociedad boliviana y los significó de manera distinta respecto a las estructuras simbólicas neoliberales” (Komadina Rimassa, 2008:3). Por último podemos agregar que Ideológicamente el MAS no presenta tanta rigidez como los viejos partidos de izquierda, estando abierto a la inclusión de nuevos sectores, un claro ejemplo de esto es la progresiva inclusión de los sectores de clase media. El MAS desde su fundación y primera participación en elecciones en 1997 siempre ha tenido relevancia en la vida política boliviana gozando de resultados electorales más que positivos. Se puede afirmar que el MAS ha sabido capitalizar la crisis política iniciada en Bolivia en el 2000 con lo cual se fue diferenciando de las fuerzas políticas tradicionales.

El éxito electoral del MAS (...) ya en 2002 debe ser interpretado como resultado de un contexto particular que lo coloca como única alternativa electoral frente a los actores tradicionales que son asumidos como responsables de la crisis que vive el país (Machado, 2010:32).

El surgimiento del MAS puede ser interpretado como producto de la propia incapacidad del sistema político para captar efectivamente las demandas de la sociedad y traducirlas en medidas para resolver problemáticas concretas (Torrico, 2014). En este escenario el MAS nace como un partido que integra en su base identidades sociales que no estaban representadas por ningún partido político tradicional como lo eran los campesinos y los pueblos originarios, pero que progresivamente se transformó en un partido popular capaz de articular un proyecto nacional junto con el respeto a las identidades particulares de los distintos sectores sociales.

El presente trabajo se centrará en abordar el proceso del primer triunfo electoral y mandato de gobierno de Evo Morales en un proceso temporal que se extiende aproximadamente entre 2003 y 2010. El presente trabajo abordará una serie de aspectos considerados esenciales para entender el partido en cuestión. En primer lugar se analizará el sistema electoral y el vínculo que este tiene con el partido. Segundo se analizará el sistema democrático y la relación que este tuvo con el surgimiento del MAS. Tercero se abordará en las particularidades del proceso electoral referido anteriormente y como el partido quedó reflejado en las instituciones, a su vez se ahondará en la cara del partido como organización, el vínculo entre las bases sociales y la importancia de su líder. Por último, se realizará una aproximación al rol de las mujeres en la vida partidaria con énfasis en la problemática de la igualdad de representación y participación política.

2. Sistema Electoral y génesis partidaria

Es importante explicar la incidencia que tuvo el sistema electoral en el proceso político boliviano porque estas condicionan a los propios partidos y las estrategias que utilizan para maximizar sus oportunidades de conseguir una victoria electoral.

Es importante entender el impacto que tuvo el MAS en el sistema electoral, principalmente en lo que refiere al método de elección del presidente, figura de gran importancia en el sistema político boliviano, ya que la victoria en las elecciones de 2005 inició un importante proceso de reforma que alteró las características esenciales del sistema de partidos tradicional del país.

En el periodo democrático iniciado en 1982, la elección presidencial se caracterizó por contar con una segunda vuelta congresal en caso de que ningún candidato alcanzara una mayoría absoluta. Esta segunda vuelta tenía la particularidad de que

quienes elegían al nuevo presidente eran los diputados y senadores recientemente electos, que debían elegir secuencialmente los cargos de presidente y vicepresidente entre las 3 fórmulas más votadas en la primera ronda. En 1994 se efectuó una reforma que limitó las condiciones para la elección del presidente en caso de darse en esta segunda vuelta reduciendo las fórmulas participantes a las 2 más votadas y realizando las votaciones por formulas en vez de ambos cargos por separado. Sin embargo, esta reforma no cambió la esencia de un sistema que podía ser caracterizado como un presidencialismo parlamentarizado. (Mayorga, 2000)

Los cambios efectuados por el MAS referentes a la elección del presidente emergieron en el marco de una reforma de la constitución que culminó en 2009 con su promulgación. La Nueva Constitución Política, entre otros cambios, reemplazó la segunda vuelta congresal por una segunda vuelta en la cual participaban los ciudadanos eligiendo entre las dos fórmulas más votadas, así como también introdujo la posibilidad de reelección inmediata del presidente. (Leitner, 2010)

Se puede interpretar que la reforma llevada a cabo por el MAS constituye un progreso hacia un sistema electoral, — y un régimen — más democrático ya que le otorga a los ciudadanos mayores instancias de elección y expresión de su opinión política. (Dahl, 1996)

A pesar de lo trascendente que puede ser la reforma llevada a cabo por el MAS, esta no ha tenido un impacto significativo en la génesis partidaria. El sistema de partidos boliviano históricamente se caracterizó por estar altamente fragmentado, tendencia principalmente explicada por los pocos incentivos que ofrecía el sistema a los partidos para establecer alianzas preelectorales como consecuencia de la existencia de la segunda vuelta (Torrico, 2014). En este sentido la reforma efectuada en el MAS no parece haber modificado esta tendencia debido a la continuidad de la segunda vuelta más allá del cambio en su modalidad. Esto nos indica que, a pesar de la singularidad de la segunda vuelta del caso boliviano este parece cumplir los efectos típicos de la implementación de una segunda vuelta enunciados por Duverger, ya que las condiciones favorecen a la multiplicación de partidos y fenómenos como la polarización o subrepresentación no parecen darse en la primera vuelta. (Duverger, 1992).

3. Sistema democrático

En el período democrático comenzado en 1982 la continuidad del régimen fue pro-

ducto principalmente del establecimiento de pactos y coaliciones entre los partidos tradicionales que tenían como objetivo acceder al poder de forma compartida, dando como resultado un modelo que se conoció como “democracia pactada” lo cual causó entre otras cosas la incapacidad del sistema político para responder a las demandas de la sociedad. (Sinka Cussi, 2011). El problema fue que estos mismos pactos fueron causando una disminución de la confianza de los ciudadanos en la integridad de los partidos y la credibilidad del sistema en general (Rodrigues Gómez, 2017). Aunque los partidos jugaban con las reglas del sistema político que les permitía — vía pactos y coaliciones — acceder a un poder compartido que posibilitó una continuidad democrática inédita, no estaban preparados para el surgimiento de nuevos actores. (Torrico, 2014). La reforma de 1994 en parte buscó resolver este problema; sin embargo no hubo cambios fundamentales en cuanto al proceso decisorio de los poderes estatales ni en el contenido de las políticas públicas, por lo cual la insatisfacción ciudadana siguió aumentando (Rodrigues Gómez, 2017). En consecuencia, las instituciones no pudieron procesar el conflicto y se vieron impotentes ante un actor como el MAS, que jugaba adentro del sistema político pero lo golpeaba desde afuera. El MAS apareció como un partido que estaba por fuera de las organizaciones tradicionales y pudo capitalizar una situación de amplia desafección ciudadana y partidos políticos deslegitimados, por lo cual pudo atraer a gran parte del electorado, que culminó con la victoria electoral en 2005. Por ello se puede interpretar que una de las causas del éxito electoral de MAS residía en las propias deficiencias del sistema institucional para procesar los reclamos de ciertos sectores de la población.

4. El partido en las instituciones y su organización interna

Las elecciones de 2005 lógicamente dejaron un saldo positivo para el MAS debido al triunfo de Morales, el cual consiguió ganar en primera vuelta con mayoría absoluta del 54%, lo cual es un hecho poco usual en las elecciones bolivianas. Sin embargo, no todos fueron triunfos. El mapa electoral mostró un país tajantemente dividido en dos, en los departamentos del oriente se impuso Quiroga, el candidato opositor a Morales, mientras que en el occidente triunfó el MAS. (Fara, 2006). Este fenómeno puede ser atribuido a causas sociales, étnicas y culturales más allá de cuestiones geográficas, lo que tuvo como consecuencia un senado prácticamente empatado en dos bloques producto de 13 senadores para PODEMOS, 12 para el MAS, 1 para el MNR y 1 para UN. La historia es distinta en la elección de diputados donde el MAS se impuso con comodidad. El resultado de esta es un triunfo claro del MAS pero con

factores que evidencian fracturas regionales. En cuanto a las características de los votantes, lógicamente Morales obtuvo mayor cantidad de votos en el sector rural y el segmento socioeconómico bajo mientras que Quiroga obtuvo mayor cantidad en el sector urbano y la población con estudios universitarios.

Una alta presencia de funcionarios del partido en las instituciones del Estado fue una de las condiciones fundamentales para que el MAS pudiese impulsar importantes cambios en el sistema político boliviano, culminando con el dictado de la Nueva Constitución Política, ya que más allá de la legitimidad que el partido pudiera tener, la presencia mayoritaria de miembros en las instituciones imposibilitó la capacidad de partidos opositores de utilizar mecanismos institucionales para impedir la materialización de dichos cambios.

También es importante analizar la cara del partido como organización para entender las particularidades de la lucha política al interior de este y los mecanismos que utiliza para llegar a las decisiones en un escenario repleto de tensiones, principalmente producto de la heterogeneidad de su base organizacional.

El MAS como partido político cuenta con características particulares que pueden poner en duda si es correcto definirlo únicamente como un partido político. En este sentido, Komadina Rimassa (2008) propone estudiar al MAS como una forma inédita de acción colectiva, sintetizada en el concepto de movimiento político, entendido como un sistema de signos que codifica la realidad política y desestabiliza las certezas y creencias colectivas instaladas por los adversarios para instalar un nuevo régimen de significación. Siguiendo esta línea el MAS como movimiento político no se encuentra limitado por las instituciones democráticas representativas sino que actúa entre las fronteras de la sociedad civil y las instituciones.

El MAS como partido político está íntimamente relacionado con los movimientos sociales. Esta característica claramente está asociada a los propios orígenes del partido ya que este tiene una fuerte base en las organizaciones sociales, más allá de las fronteras partidarias, que le sirven como soporte, principalmente en las bases campesinas e indígenas.

En este sentido aun con el partido en el gobierno el componente institucional no siempre es el canal mediante el cual se expresan las demandas de las diferentes partes del partido si no que aquí confluyen otras formas democráticas donde la participación de las bases se expresa de manera más directa (Luna, 2010). Debido a esto la relación de los militantes con las figuras de liderazgo del partido tienen un carác-

ter más horizontal las cuales no se expresan únicamente por canales institucionales sino que la lucha política se vuelca a ámbitos más informales.

A pesar que entre el MAS y los movimientos sociales claramente hay una relación orgánica, y su llegada al gobierno significó la inclusión de los dirigentes sindicales y líderes de las organizaciones sociales, este proceso no está libre de tensiones políticas. En este sentido las organizaciones sociales pueden funcionar como mecanismos de presión para el propio partido. Un claro ejemplo de esto es el “Pacto de Unidad” que fue una instancia de coordinación de organizaciones campesinas e indígenas, formada en el marco de la redacción de un nuevo texto constitucional entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, en la cual este tuvo un impacto notorio. Los movimientos sociales organizados actuaron con autonomía del partido y consiguieron imponer ciertas condiciones en la redacción del nuevo texto, limitando la posibilidad de acción de los propios intereses del partido. (Mayorga, 2012)

Sin embargo también existen otros sectores de los movimientos sociales que presentan claramente un menor grado de autonomía ante el MAS. En esta categoría podemos hablar de La Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). A diferencia de otras organizaciones, la CONALCAM en los momentos de mayor conflictividad expresó un marcado apoyo al gobierno. Progresivamente la CONALCAM se fue integrando formalmente a la estructura de gobierno buscando de cierta manera encontrar modalidades de comunicación entre el partido en el gobierno y los movimientos sociales. Esto se enmarca dentro de una estrategia gubernamental que “apunta a reducir el grado de incertidumbre o inestabilidad, definiendo reglas para racionalizar las relaciones entre las organizaciones sociales y el Gobierno” (Mayorga, 2012:29). Es decir el partido político una vez en el gobierno busco modificar la relación que tiene con los movimientos sociales priorizando generar canales formales para la comunicación lo que implicaría, por lo menos parcialmente, enmarcar la movilización política dentro de las instituciones.

En este sentido se puede hablar de la adopción del MAS de una estrategia consistente en una cooptación gubernamental entre el partido y los movimientos sociales como manera de garantizar apoyo y movilización electoral en los momentos de crisis (Mayorga, 2012) que, sin embargo, presenta sus límites ya que la capacidad de subordinar a las organizaciones no siempre fue efectiva y estos tuvieron oportunidades de oponer resistencia.

La relación entre el partido y las organizaciones sociales es, por sobre todas las cosas, dinámica teniendo instancias en la que el partido logra imponerse y las organi-

zaciones se subordinan a estas e instancias en donde la autonomía de las organizaciones prevalece y estas consiguen tener peso en las decisiones del partido. “Es una coalición que se caracteriza por la inestabilidad en su conducta y la flexibilidad en su composición, y los formatos organizativos que asume se adaptan a las exigencias de la coyuntura política” (Mayorga, 2012:34)

Claramente la influencia que pueden tener las organizaciones de base del partido indica que el MAS es un partido que presenta notables diferencias con los postulados de Katz y Mair (2007) sobre el partido cartel. En el caso del MAS la supremacía del partido en las instituciones públicas es un fenómeno que no se corrobora ya que las decisiones del partido pueden encontrar resistencia en la organización de los grupos que se encuentran mayormente por fuera de las instituciones públicas como lo son las organizaciones sociales. El MAS puede servir como ejemplo para resaltar las particularidades propias de los partidos latinoamericanos y evidenciar los desajustes que existen entre estos y los modelos propuestos por los autores.

Sin embargo otro componente clave es la importancia del liderazgo de Evo Morales, en un contexto en el cual hay una importante fragmentación de los movimientos sociales y se dan conflictos al interior del partido se fue potenciando un modelo ultra centralizado de toma de decisiones en la figura de Evo Morales (Stefanoni, 2011). Morales como principal referente intenta articular la figura de un pueblo único como sujeto político que debe aglutinar a la multiplicidad de actores e identidades que lo componen, sujeto que principalmente se determina en oposición a otra cosa, siendo un fenómeno populista que parece ajustarse a lo descrito por Laclau (Laclau, 2005). Si bien la figura de Evo en gran parte es potenciada por su carácter carismático, este liderazgo populista se diferencia de los populismos clásicos debido a que la relación entre Morales y las masas no es directa sino que está mediado por una multiplicidad de organizaciones corporativas y movimientos sociales ante los cuales debe rendir cuentas (Stefanoni, 2011).

Continuando con esta tendencia del partido de no reducir la democracia a los límites institucionales, este ha utilizado mecanismos que permitieron una participación más directa del pueblo en general. Un ejemplo de esto se dio en el marco de la aprobación del nuevo texto constitucional el cual fue aprobado a través de un referéndum nacional. En esta línea claramente hay una intención del partido de extender la participación en los procesos políticos más allá de las instancias partidarias, a su vez que también funciona como forma de legitimar las decisiones en la ciudadanía.

Otra consecuencia de la creciente participación política de los movimientos sociales, en particular de los pueblos indígenas, es la ampliación de la ciudadanía (Mayorga, 2012) El partido promueve la reparación histórica de los pueblos originarios, cuestión reflejada principalmente en el nuevo texto constitucional, buscando equipararlos en cuestión de derechos a los demás ciudadanos pero a su vez reconociendo los fundamentos históricos para otorgarles competencias para regirse por sus propias normas. Desde la llegada del partido al gobierno se puede interpretar que hubo una extensión de la democracia más allá de las instituciones y las condiciones de igualdad de los ciudadanos se radicalizaron.

5. Rol de las mujeres en la vida partidaria

En cuanto a la participación de las mujeres Bolivia es uno de los tantos países que cuenta con una regulación legal para incentivar la participación de las mujeres en las listas electorales e implementar una igualdad de género, enmarcada en la ley 1779 dictada en 1997 y vigente en el período analizado. Sin embargo en este aspecto parece haber ciertas insuficiencias que impiden una representación verdaderamente igualitaria. (Albaine, 2009). Por un lado se estableció en diferentes porcentajes la inclusión de mujeres en las listas tanto de diputados plurinominales, senadores y municipales, sin embargo esta legislación no contempla las estrategias que los partidos políticos pueden utilizar para incumplir la implementación efectiva de la cuota, como, por ejemplo, lo puede ser el caso de diputados en los cuales los partidos abusan de la poca especificidad de la ley situando a las mujeres en las bancas suplentes, por lo cual sus posibilidades de tener un impacto real como legisladoras se ven claramente reducidas (Cabezas Fernández, 2008). Otro ejemplo de esto se da en el ámbito municipal en el cual no existen sanciones frente al incumplimiento de la norma y a su vez se da la posibilidad de que una mujer renuncie para que su cargo sea ocupado por un hombre, lo cual evidencia cómo ciertos aspectos institucionales limitan la efectividad de las cuotas de género. La introducción de las diferentes cuotas de género pueden haber tenido un efecto positivo en la representación de las mujeres sin embargo de ninguna manera en Bolivia hay una verdadera igualdad de representación entre géneros (Albaine, 2009). En este sentido la principal forma para garantizar una efectiva inclusión de las mujeres en la política debe ser avanzando en la legislación de cuotas para que estas provean respuestas efectivas frente a las estrategias de los partidos que van en contra del espíritu de la normativa.

Sin embargo también se debe mencionar que dentro del MAS también se da otra forma de discriminación de las mujeres debido a características propias de este partido político ya que más allá de la jerarquización hombre-mujer, también hay una segunda jerarquización dentro del mismo bloque de mujeres entre las cuales se priorizan a aquellas “invitadas” por sobre aquellas “orgánicas”. Lo que distingue a estos dos subgrupos de parlamentarias es su extracción social: la categoría ‘invitadas’ remite a mujeres de clase media de matriz cultural más bien occidental, mientras que las ‘orgánicas’, son mujeres de extracción social subalterna y con vínculos fuertes con el mundo indígena- campesino, esta es, en última instancia, la diferencia más sustantiva entre orgánicas e invitadas. (Cabezas Fernández, 2008). En este sentido se desvela cómo las mujeres orgánicas sufren un proceso de doble relegamiento (Cabezas Fernández, 2008).

6. Reflexiones finales

El MAS en el periodo analizado puede ser interpretado como un fenómeno novedoso en distintos ámbitos, por un lado fue un partido que rompió con las tendencias existentes en el sistema electoral consiguiendo imponerse como mayoría absoluta capitalizando una situación negativa del sistema político en general. Por otra parte este demostró continuamente la voluntad de extender la participación política más allá de las instancias institucionales a través de distintas medidas que buscaron otorgar a la ciudadanía más oportunidades para poder expresar su opinión política en contextos no necesariamente controlados por los propios partidos políticos. Sin embargo, a pesar de que el partido ha evidenciado una voluntad de incluir a las minorías y grupos marginados, se evidencian ciertos límites en cuanto a la inclusión de las mujeres en la política. El MAS se diferenció de los partidos tradicionales principalmente por la capacidad de procesar la demanda de los distintos grupos que lo conformaban traduciéndolas en medidas concretas, lo que fue una de las causas de su éxito electoral y causó que el partido gozara de altos niveles de legitimidad, fenómeno que en la historia de la democracia boliviana no era frecuente.

7. Bibliografía

ALBAINE, L. (2009), Cuotas de Género y Ciudadanía Política en Bolivia. XXVII Congre-

so de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

CABEZAS FERNANDEZ, M. (2008), “De orgánicas e invitadas: una mirada a la participación de las mujeres en la bancada del Movimiento al Socialismo (2006-2008)”. en *Umbrales* N° 18, pp 237-264.

DAHL, R. (1996), *La poliarquía. Participación y oposición*. REI, México.

DO ALTO, H. (2011), “Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano”, en *Nueva Sociedad* N° 234, pp 96-111.

DUVERGER, M. (1992), “Influencia de los sistemas electorales en la vida política”, en AAVV, en *Diez textos básicos de Ciencia Política*, Ariel. Barcelona, pp. 37-76.

FARA, C. (2006) “Bolivia 2005: Elecciones y comunicación”, en *Diálogo político*. V.23, N° 2.

FORNILLO, B. (2008), *Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual. Un análisis sociopolítico de la experiencia del Movimiento al Socialismo en el poder (2006-07)*.

GARCIA, A., NAVARRO PEÑATE, J. (2015), “El movimiento al socialismo en Bolivia. Un estudio de los marcos referenciales” en *Revista de Estudiantes de Ciencia Política* N°6, pp 44-57.

JIMÉNEZ GUERRERO, T. (2013), “Las relaciones clientelares para el acceso a cargos públicos como factor que fortalece al gobierno del Movimiento Al Socialismo”. (Tesis, Universidad Mayor de San Andrés)

KATZ, R.; MAIR, P. (2007), “La supremacía del partido en las instituciones públicas: El cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” en *Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos*, pp. 101-164, Trotta.

KOMANDINA RIMASSA, J. (2008), “La estrategia simbólica del Movimiento al Socialismo” en *Revista Tinkazos* N°23/24, pp.167-180.

LACLAU, E. (2009), “Populismo ¿Qué nos dice el nombre?” en PANIZZA, F. (comp) *El populismo como espejo de la democracia*, FCE, Buenos Aires.

LEITNER, A. (2010), “La victoria de Morales y las nuevas reglas en Bolivia” en *Política*

Exterior, Vol. 24 N°133, pp. 137-144.

LUNA, H. (2010), "Análisis de la participación del movimiento al socialismo (MAS) en la coyuntura política de Bolivia" en *revista Resistencia*, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, N°2, pp. 16-19.

MACHADO, F. (2010), "Partido y algo MAS: descripción y análisis del Movimiento al Socialismo (MAS) como fenómeno político en Bolivia", (Tesis Licenciatura en Ciencia Política, Universidad de la República).

MAYORGA, F. (2012), *Movimientos sociales y participación política en Bolivia*. Prometeo, Buenos Aires.

MAYORGA, R. (2000), "Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia" en LENZARO, J. (comp), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.

PINTO OCAMPO, M. (2006), "Un viaje por el proceso político que eligió a Evo Morales Presidente de Bolivia" en *revista Desafíos*, vol. 14, pp 10-39.

RODRIGUES GOMES, D. (2017), "Los marcos de referencia políticos del Movimiento Al Socialismo boliviano (1995-2005)" (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid).

SARAIVA LEO VIANNA, J. Y VINÍCIUS RADUAN, M. (2012), "Bolivia: ascensão indígena ao poder e o Movimento ao Socialismo (MAS)" en *Revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos* N°1, pp 89-106

SINKA CUSSI, G. (2011), "Factores coadyuvantes en la preferencia electoral del movimiento al socialismo durante las elecciones generales del 2005 y 2009". (Proyecto de grado, Universidad Mayor de San Andrés).
STEFANONI, P. (2011), *El nacionalismo indígena en el poder*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

TORRICO, M. (2014), "Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los partidos" en *Perfiles Latinoamericanos*, N°43, 78-100.

Antunes, Santiago Tomás (2024). "El Movimiento Al Socialismo: de la oposición al gobierno", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 101-112.

“RUSIA UNIDA” COMO UN CASO DE PARTIDO HEGEMÓNICO

Juan Manuel Cabrera

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Rusia ha atravesado en las últimas tres décadas por profundos cambios que modificaron de manera profunda el panorama político de este país. Las reformas iniciadas por Mijaíl Gorbachov en la segunda mitad de la década de los 1980 marcaron el final del régimen de partido único que había liderado el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Luego de la desintegración de la URSS en diciembre de 1991, la apertura política y democrática de los primeros años de la década de los 1990 estuvo signada por la violencia política¹, la profunda crisis económica de 1997 y las guerras internas que enfrentaron a un Estado ruso fuertemente debilitado contra grupos separatistas en regiones como Chechenia. Esto provocó que la democracia rusa naciera signada por una extrema fragmentación. Por poner un ejemplo de lo anterior, en las primeras elecciones celebradas en 1993 hubo aproximadamente 3700 candidaturas individuales y 130 de partidos y movimientos políticos, lo cual llevó a algunos

1. Cuyo punto más álgido fue la crisis constitucional de 1993, que enfrentó al entonces Presidente Boris Yeltsin con la Duma, el parlamento ruso, controlada por nostálgicos del antiguo régimen soviético (Bonet, 2003).

analistas a hablar de un “sistema de partidos sin partidos” (Akela, 2017: 38-39).

Sin embargo, esto cambiaría con el ascenso al poder de Vladimir Putin. Este último sucedería a un Yeltsin ya fuertemente debilitado políticamente en diciembre de 1999. Desde ese momento, Putin buscaría, por un lado, reconstituir la estabilidad y el poderío del Estado ruso, y por otro solidificar y brindar de sustento a su propio proyecto político. Una parte fundamental de esta estrategia sería la fundación de un partido político que aglutinaría a todas las fuerzas aliadas y leales al liderazgo putinista: nacería así “Rusia Unida” (en ruso: *Единая Россия*, *Yedínaya Rossíya*) en abril de 2001.

El presente capítulo analizará por qué este partido se ha constituido en el centro del actual sistema político de Rusia. Aquí se planteará que Rusia Unida se ha ido constituyendo en lo que se suele conocer como un “sistema de partido hegemónico”. Para esto será necesario primero realizar un análisis sobre este último concepto, que nos permita relacionar lo visto en otras latitudes con lo que se ha ido constituyendo en los últimos veinte años en la Federación rusa.

2. El concepto de “sistema de partido hegemónico”

Para comprender el rol que actualmente juega el partido de Vladimir Putin en Rusia, primero es preciso definir qué se entiende por “partido hegemónico” y cuáles son las características de este.

Este concepto usualmente fue usado por varios autores para definir ciertos sistemas de partidos políticos que no llegaban a ser dictaduras en su definición plena (debido a la presencia de ciertas instituciones democráticas, tales como competencia multipartidaria, relativa libertad de expresión política, entre otras), pero mantenían varias deficiencias que la acercaban al autoritarismo.

Según Sartori, este tipo de configuración partidaria “se centra en un partido y sin embargo, exhibe una periferia de pequeños partidos secundarios (2012: 281)”. A pesar de lo anterior, bajo este supuesto “multipartidismo” está la verdadera esencia del partido hegemónico, ya que este “no permite una competencia oficial por el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la alternancia, no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la po-

sibilidad de una rotación en el poder.” (Sartori, 2012: 282)

Agregando a esto, algunos autores (Azcargorta y Hernández, 2007: 13) sostienen que en este tipo de régimen, el partido del Gobierno “necesita la existencia de los partidos de oposición ya que se observa en su interior una tensión evidente e indefectible entre dos fuerzas que coexisten internamente: el control autoritario y la liberalización política. Pero se trata de una tensión dinámica planificada”. En la práctica, la coincidencia de estas tendencias contradictorias termina en la consolidación del partido del poder. Este régimen conserva la tentación autoritaria, revestida a la vez, de una película de liberalización política, lo que le permite ser tomado como una proto-democracia, o una etapa intermedia hacia el desarrollo democrático pleno (Azcargorta y Hernández, 2007: 13).

Esta supuesta existencia de un mercado electoral y partidario, le permite al partido hegemónico por un lado, dar una salida psicológica y una válvula de escape del sistema político para aplacar a las tendencias opositoras, sino también como una forma de recolectar información y reclamos presentes en la población que (de tratarse de un régimen de partido único, por ejemplo) no podrían tener determinada representación y permitirían larvar un foco importante de oposición al sistema (Sartori, 2012: 284).

Por lo tanto, en este tipo de sistemas puede florecer en un contexto semiliberal de pluralismo controlado y suele permitir, y aun promover, a los partidos políticos de oposición, siempre que su presencia sea inocua. Tales partidos nominales de oposición no son sino un adorno legitimador y en modo alguno constituyen rivales serios por el poder (Schedler, 2000: 25).

Además de esto, algunos autores (Levitsky y Way, 2004: 163) destacan que es necesario diferenciar a este tipo de regímenes de otros abiertamente autoritarios en el sentido de que en los regímenes de partido hegemónico, a pesar de que los funcionarios puedan manipular las normas democráticas formales, no pueden eliminar o reducir a una mera fachada a estas últimas. Siguiendo lo anterior, en este tipo de sistemas políticos, aún pueden quedar arenas donde las fuerzas de la oposición compitan con las gubernamentales y puedan arrebatarse algunas cuotas de poder².

2. Levitsky y Way (2004) plantean que la arena electoral, legislativa, judicial y comunicacional siguen estando presentes como terreno de disputa en este tipo de regímenes, a los que ellos llaman “autoritarismos competitivos”. Además afirman que, a pesar de que claramente las fuerzas oficialistas cuentan con mayores cuotas de poder, estas se ven incapacitadas de suprimir por completo estas cuatro arenas de competencia política sin sufrir grandes costos, lo cual brinda a los opositores mayor margen de maniobra que en los regímenes abiertamente autoritarios.

3. Rusia Unida como “partido hegemónico” y su función dentro del actual sistema de partidos ruso

Dicho lo anterior, es preciso preguntarse cómo, partiendo del contexto de gran inestabilidad político partidaria que caracterizó la Rusia de la década de 1990, Vladimir Putin y su élite dirigente pudo consolidar su dominio hasta la formación de un sistema de partido hegemónico. En este caso, puede resultar útil lo escrito por Reuter y Remington (2009), cuando ellos plantean que “se requiere el acuerdo entre élites para establecer un partido dominante (o hegemónico) fuerte. De hecho, la coordinación de las élites poderosas en el partido gobernante es un factor primordial que determina si surgirá o no un equilibrio partidario hegemónico. La formación de un partido dominante, por lo tanto, plantea un problema de compromiso entre las dos partes: los líderes de régimen y las otras élites políticas. Estas últimas pueden incluir a jefes de los ejecutivos locales y regionales, empresarios prominentes, aspirantes a políticos y formadores de la opinión pública (505)”.

En el caso estudiado, este acuerdo se dio entre el gobierno de Putin y los grandes empresarios de la Rusia postcomunista, también conocidos como “oligarcas”. Esto se daría el 28 julio de 2000, cuando Putin convocó al Kremlin a los hombres más poderosos del país. Las reuniones entre el presidente ruso y los oligarcas fueron comunes durante el gobierno de Yeltsin, sin embargo, esta vez las reglas serían diferentes. Ahora sería el gobierno quien sentaría las bases del juego. Putin propuso el siguiente esquema: básicamente el gobierno no cuestionaría el proceso de privatizaciones y respetaría los derechos adquiridos de los empresarios a cambio de que estos se mantuvieran al margen del proceso político. Aquellos que no acataron son desechados: algunos de ellos incluso deben exiliarse, como son los casos de los dueños de las principales cadenas de televisión rusa Boris Berezovski y Vladimir Gusinski (Caucino, 2016: 109-113; Radvanyi, 2009: 212).

A partir de este hecho, Putin pudo darle mayor base de sustentación a su liderazgo. Este proceso continuaría con la unificación de tres bloques parlamentarios³ y la formación de Rusia Unida en diciembre de 2001. Reuter y Remington (2009: 506) plantean que Putin pudo dar forma a este proyecto a partir de ofrecer a las elites regionales cuatro beneficios que otorga un partido hegemónico: coordinación de las expectativas electorales; mayorías legislativas fiables garantizadas; cooptación de potenciales opositores; y administración o manipulación del reclutamiento político.

3. Los cuales serían Unidad (Единство), Patria (Отечество) y Toda Rusia (Вся Россия).

Según estos autores (2009: 506), en lo relativo a la coordinación de las expectativas electorales, Rusia Unida se convirtió en una respuesta a la gran fragmentación partidaria que existió en Rusia durante la década de 1990. Como ya se dijo, en esta época se podría haber hablado de un “sistema de partidos sin partidos”. Esto hacía extremadamente difícil para las elites regionales y locales predecir acerca de a qué partido apostar a futuro, a la vez que hacía al sistema mucho más volátil e inestable lo cual limitaba en extremo cualquier tipo de proyección o expectativa a futuro por parte de los actores participantes. Además de esto, este esquema partidario permitía tener la seguridad de que se podrían gestar mayorías legislativas fiables, lo cual permitiría, no sólo dar un mayor control y centralismo al Ejecutivo sobre la Duma o los parlamentos regionales y locales⁴, sino también la de poder evitar la aparición de cualquier discrepancia entre estos dos poderes que potencialmente podría llevar a un enfrentamiento entre ellos (2009: 506-507), como había ocurrido en 1993.

Por otro lado, Rusia Unida funcionaría como un mecanismo para cooptar potenciales opositores dentro de las élites. Esto se haría mediante un intercambio, por el cual, a cambio de unir sus destinos con los del partido hegemónico, las élites tendrían un acceso privilegiado a cargos, influencias y potenciales ascensos políticos. Esto alimentaría la lealtad hacia el partido y haría que una potencial defección o escisión sea en extremo costosa (2009: 507). Esto último, también evitaría el surgimiento de divisiones y conflictos al interior de la dirigencia cuando se tuviera que decidir una posible sucesión presidencial (2009: 508).⁵

Finalmente, Rusia Unida serviría como un mecanismo para dar previsibilidad al proceso de reclutamiento político. En los tiempos de la URSS, este papel estaba dado a la antigua *nomenklatura* soviética. Sin embargo, en la actualidad, el partido de Putin es el encargado de brindar estabilidad y previsibilidad al proceso por el cual se generan los futuros cuadros políticos y burocráticos, lo que fortalece la lealtad de estos al régimen y evita el surgimiento de potenciales opositores o rivales (2009:508).

4. Consideraciones finales

Desde su llegada a la Presidencia, Vladimir Putin buscó superar la inestabilidad y

4. Cuestión de vital importancia, tratándose Rusia de un sistema semi-presidencialista, en donde el Ejecutivo cuenta con amplias facultades pero depende del Legislativo para la formación del Gobierno.

5. Esto se vería cuando en 2008, Putin fue sucedido en la presidencia por Dimitri Medvédev, sin que se produjera ningún tipo de conflicto al interior de Rusia Unida.

la conflictividad que caracterizaron a los años de Boris Yeltsin con el objetivo de reconstituir las capacidades del Estado ruso. En el ámbito político-partidario esto llevó a una refundación institucional, dotandose siempre de una mayoría política estable. Sin dudas, Putin y sus partidarios han soñado que Rusia Unida sea el equivalente ruso de lo que fue la Democracia Cristiana en la Italia de posguerra o lo que es el Partido Liberal en Japón, es decir, partidos que se han podido asegurar una posición dominante durante décadas más allá del cambio de nombres propios en su dirigencia (Caucino, 2016: 167).

Esto, sin embargo, se ha traducido en una clara manipulación del sistema democrático ruso. Por ejemplo, algunos autores (Radvanyi, 2009: 213) señalan que “durante la primera administración presidencial de Putin se modificó profundamente el ejercicio de la democracia, volviendo más difícil el registro de partidos y asociaciones (en particular de organizaciones no gubernamentales, sospechosas de ser sensibles a las influencias occidentales) o revisando la ley electoral para suprimir la elección de diputados por circunscripciones (que permitía que los líderes de la oposición fueran elegidos incluso cuando su partido no franqueara, de modo proporcional, el umbral eliminatorio del 7%).” La presencia de estas numerosas falencias institucionales ha llevado a varios autores a catalogar de diversa manera a la Rusia putinista: régimen híbrido o semi-autoritarismo, democracia iliberal, autoritarismo competitivo, entre otros (Caucino, 2016: 167; Levitsky y Way, 2004: 161).

Más allá de lo anterior, ciertos autores recalcan que la actual democracia rusa presenta fracasos y tensiones propias de la historia reciente de este país. Por un lado, está claro que la transición a la democracia que vivió Rusia luego de la implosión de la URSS en 1991 estuvo lejos de cumplir todas las expectativas que la población puso en ella. El desguace del Estado soviético a manos de los oligarcas y las élites neoliberales, la pérdida de la calidad de vida y de los beneficios públicos con que contaba la población, sumados al escenario general de caos político y económico, condicionaron claramente el apoyo del pueblo ruso a una democracia de tipo liberal-occidental (Laruelle, 2009: 219-220).

Sin embargo, más allá de la presencia de vetas autoritarias en esta sociedad, la Rusia de Putin muestra tendencias claras en contra del autoritarismo más cerrado que caracterizó la historia de este país. Un ejemplo de esto son el asentamiento de Rusia como una economía de libre mercado, la libertad de los rusos de viajar al exterior, el acceso relativamente libre a Internet y redes sociales, entre otras cuestiones. Está claro que la élite política rusa se cuida de no limitar de manera directa los derechos

conquistados por parte de su población (Radvanyi, 2009: 215). Por el momento, la respuesta de Putin y la clase dirigente rusa fue la gestación de Rusia Unida como un partido hegemónico que hasta cierto punto permite contener estas tensiones presentes en la sociedad rusa, aunque hechos recientes como la invasión de Ucrania de 2022, abren una gran incógnita acerca del futuro panorama político interno de este país.

5. Bibliografía

AKELA, J. C. (2017), “*The Party System In Post-Soviet Russia: A case study of the Party United Russia*”, *World Affairs: The Journal of International Issues*, pp. 34–49.

AZCARGORTA, J; HERNÁNDEZ, I. (2007), “PSUV: ¿Partido hegemónico o partido único?” en *Revista temas de coyuntura*, N° 56.

BONET, P. (2003), “El día que Yeltsin sometió al Parlamento”, *EL PAÍS* Disponible en: <https://elpais.com/diario/2003/10/03/internacional/1065132017_850215.html>

CAUCINO, M. A. (2016), *La Rusia de Putin*. Ediciones B.

LARUELLE, M. (2009), “Democracia a la rusa”, en Radvanyi, J. y Vidal, D. (eds.) *Rusia: de Lenin a Putin*. Capital Intelectual, pp. 217–222.

LEVITSKY, S.; WAY, L. A. (2004), “Elecciones sin democracia: El surgimiento del autoritarismo competitivo”, en *Estudios Políticos*. 24a ed. Traducido por D. L. López, pp. 159–176.

OVERSLOOT, H.; VERHEUL, R. (2006), “Managing Democracy: Political Parties and the State in Russia”, en *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, septiembre, pp. 383–405.

RADVANYI, J. (2009), “Un presidente tan popular...”, en Radvanyi, J. y Vidal, D. (eds.) *Rusia: de Lenin a Putin*. Capital Intelectual, pp. 209–216.

REUTER, O. J., REMINGTON, T. F. (2009), “Dominant party regimes and the commitment problem: The case of United Russia”, en *Comparative political studies*, 42(4), pp. 501–526. doi: 10.1177/0010414008327426.

SARTORI, G. (2012), *Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis*, Alianza Editorial.

SCHEDLER, A. (2000), “Por qué seguimos hablando de transición democrática en México?” en Julio Labastida Martín del campo, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce (Coordinadores). *Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina*. ISS/FLACSO/PyV. México.

SCOCOZZA, C. (2017), “Entre autoritarismo y democracia. El caso de Rusia”, en Picarella, L. y Scocozza, C. (eds.) *Democracia y Procesos Políticos en América Latina y Europa*. Penguin Random House, pp. 69–88.

Cabrera, Juan Manuel (2024). “‘Rusia Unida’ como un caso de Partido Hegemónico”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 113-120.

LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA Y SU ROL EN EL SISTEMA ECUATORIANO

Martina Coloschi

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

La Izquierda Democrática (ID) de Ecuador es un partido político que se asienta sobre una idea revolucionaria desde la democracia, donde busca captar e interpelar a los sectores trabajadores de Ecuador, situándose desde el socialismo democrático y promoviendo la creación de un estado diferente que busca el bienestar de todos los ciudadanos a partir de diversas medidas. “...a base de libres decisiones populares, que pueda ser agente del desarrollo económico y social del pueblo ecuatoriano, de la redistribución, del aprovechamiento pleno y racional de los recursos nacionales y de la ruptura de la dependencia externa” (Declaración de Principios, 1977:1) Posee como particularidad su origen organizativo ya que es posible reconocer un nacimiento forjado “desde abajo”. En ocasiones, se lo ha considerado reformista, sin embargo se lo define más bien como revolucionario, que hace foco en una modificación de tinte trascendental en la estructura social.

En referencia a los principios que norman su acción política, se encuentran en la

Declaración de Principios de la Izquierda Democrática de 1994, veintidós principios rectores que guían su funcionamiento, entre los que se hallan: la libertad, la justicia social, la educación, el laicismo estatal, las relaciones internacionales, entre tantos otros que se piensan como elementales a la hora de gobernar. Por supuesto dentro de estos también se localiza la democracia, que incluso el propio nombre del partido da fe de la centralidad que esta ocupa.

Este partido busca promover la representación y participación de las personas desde la libertad, para construir un país con una amplia justicia social con equidad y solidaridad que contemple y respete a todos los sectores; por eso apunta a una convivencia plural desde la diversidad, tanto en términos ciudadanos como partidarios. ID fue fundado por Rodrigo Borja Cevallos, primeramente, como agrupación en 1970, y luego como partido político en 1978.

El enfoque del escrito estará orientado al rol del partido luego de los gobiernos dictatoriales, desde el año 1978 a 1992. Para hacer este recorrido se debe contextualizar lo que se comprende como la vuelta de la democracia, en donde las primeras elecciones tienen a nuevos partidos que buscan tomar un lugar dentro de la escena, como la Izquierda Democrática, que eligió competir de manera solitaria, con el binomio Borja-Baca en el año 1978. En aquel momento, el partido va a obtener en la primera vuelta un 12.01%, y en la segunda del 29 de abril de 1979, apoyó fervientemente al partido de Jaime Roldós Aguilera. Luego en 1984 compite nuevamente, e incluso gana en primera vuelta, pero en balotaje va a ser derrotado por el candidato del Partido Social Cristiano, León Febres-Cordero. Por último, en 1988 va a obtener el triunfo contra Abdalá Bucaram, convirtiéndose así en la fuerza gobernante de la Nación ecuatoriana hasta 1992. El partido tiene presencia hasta la actualidad pero ya no son sus años más sólidos como si lo fueron en las primeras épocas post dictadura, es por eso que se analiza la era que comienza a fines de la década de los setenta hasta aproximadamente los 2000, en que se configura un nuevo sistema de partidos y vías de representación ciudadana.

Parte de este nuevo sistema de partidos modernos, tuvo que ver con la consolidación de un sistema multipartidario, donde fueron varios los que tuvieron poder suficiente a la hora de competir en elecciones, de 1978 se dio personalidad jurídica a veintitrés partidos que empezaron a competir en elecciones nacionales y municipales, generando un Pluripartidismo, según Ramos Jiménez.

(...) durante la primera y un tanto larga etapa de la transición postautoritaria cuando las fuerzas de la derecha tradicional con el Partido Social Cristiano

(PSC) de Febres Cordero y el PUR de Durán Ballén, reagrupando las fuerzas neoliberales; los cuatro partidos populistas (CFP, PCD, PRE y APRE) ubicándose hacia el centro del sistema y la Izquierda Democrática (ID) de Rodrigo Borja, volcada hacia la izquierda. (Ramos Jiménez, 2015:358)

2. El sistema electoral y su incidencia en la vida partidaria

2.1 Orígenes de la Izquierda Democrática

Para comprender la influencia de la ID en dicho país, es crucial interiorizarse en su vasta historia y diversa ciudadanía, de forma tal que se logre estudiar su estructura, la cual se encuentra duramente fragmentada.

Una de las mayores incógnitas está en el surgimiento del partido, ya que va a nacer en un momento en el que se atravesase una modernización con avances que atraen a sectores medios y población urbana que desean comenzar a participar en política. Esto abrió una nueva época que terminó con el atractivo de los viejos partidos ya formados, y dio origen también a nuevos líderes políticos, por lo tanto, hay una consonancia entre la figura del nuevo Ecuador y la necesidad de otro tipo de partidos políticos. Se observan con estos acontecimientos, los conflictos que se produjeron no casualmente, en el momento en el que el país empezó a tener un florecimiento de nuevas fuerzas partidarias, o al menos ya no solo de las tradicionales. “Los nuevos partidos que se desarrollaron en los años sesenta y setenta se fundaron como organizaciones diseñadas para canalizar las ambiciones de aspirantes al poder político de la clase media. “(Conaghan, 2003:238) Los partidos tradicionales de Ecuador no nacieron de la sociedad o de movimientos, sino que tuvieron su principio en las élites, para fomentar su avance desde esas clases medias que pudieron contribuir a su acceso y llegada al poder, es decir estos grupos tuvieron como fin primero participar en las elecciones.

Una de las principales complejidades de la política partidaria del país, es la fragmentación en dos regiones, la Costa o litoral y la Sierra o región andina, por esto es que la integración nacional ha estado en la agenda como uno de los puntos a fortalecer y discutir en cada contexto electoral. A este fraccionamiento, se le sumaba el atraso por el régimen oligárquico terrateniente que había estado presente durante mucho tiempo hasta la Revolución Juliana, una insurrección cívico-militar que tuvo lugar

en Ecuador el 9 de julio de 1925 por un grupo de jóvenes oficiales militares, denominado la Liga Militar, que derrocaron al gobierno presidido por Gonzalo Córdova.

Al mencionar la coyuntura política del país de aquella época, se debe hacer alusión a uno de los movimientos que se planeaban llevar a cabo luego de las dictaduras, ya que desde 1976 estaba la posibilidad de volver a un régimen representativo, pero el dilema estaba en la confrontación que se generó por el modo en que se ejecutaría este retorno. En esta disyuntiva, la Izquierda Democrática, apostaba a una vuelta más progresiva que alentara la participación popular a partir de un referéndum que, diera además lugar al debate y la confrontación de ideas. Este lo que buscaba era proponer otra lógica electoral diferente a la adoptada tradicionalmente; El esfuerzo estaba puesto en que cada gobernante, tuviese que exponer sus propuestas apuntando a captar el voto de la gente. Lo que se ponía a discusión en este referéndum era, por un lado, plantear un nuevo proyecto de Constitución, finalmente aprobado, o la Constitución del '45 reformada. A pesar de esto, ganó la primera opción, el cambio realmente no fue trascendental, pese a que promovió algunas innovaciones, como es un mayor impulso de la participación de la ciudadanía en la formulación de proyectos, reformas u otros. Entonces, se disputaba la modalidad en que se podía llevar al país a un estado de derecho, el cómo volver a ese formato y modelo luego de numerosos años. La ID apostaba por el referéndum, pero lo hacía también junto a facciones conservadoras, lo cual demuestra la unanimidad que había como deseo de salir de esa dictadura desde una forma más amplia y representativa. “Pero hay que tener presente que el Ecuador está ejecutando un plan de constitucionalización y no de democratización. Esto es muy claro. No es lo mismo constitucionalizar el Estado que democratizarlo.” (Borja Cevallos, 1978:6).

2.2 Resabios dictatoriales

Jaime Roldós, presidente electo en 1979 en el retorno de la democracia le tocó luchar contra diferentes inconvenientes, nuevos y heredados, como fueron el enfrentamiento bélico con Perú en 1981, su gran opositor Febres-Cordero, entre otros, que más tarde cuando Rodrigo Borja toma el poder también se le presentan, sumado a un número de expectativas puestas sobre su gobierno en el marco de la crisis económica.

El triunfo de León Febres Cordero en 1984, al igual que la unificación de la derecha, van a ser otros de los momentos que van a dejar en evidencia las debilidades de la

democracia ecuatoriana que van a manifestarse, en la fragmentación de la centro izquierda. Luego de dichos acontecimientos es que se va a conformar el Frente de Reconstrucción Nacional en donde vemos unida a la Izquierda Democrática y a la Democracia Popular, junto con otros espacios políticos. En el 1988, en este clima de autoritarismo y deterioro político y económico, es que el candidato de la ID en la segunda vuelta electoral, obtiene el triunfo contra el candidato Abdalá Bucaram, lo que va a traer un giro rotundo para el escenario que se estaba viviendo, ya que va a empezar a notarse una consolidación de la centro izquierda nuevamente.

Otra de los asuntos a los que es central aludir, es que quien asume en 1988 es un candidato con una doctrina e ideología definida y rígida, absolutamente contrapuesto a los intereses y expresiones de votos cambiantes de los electores ecuatorianos de la época. Por esto se percibe a Borja como alguien con mucha trayectoria en la política y en su partido, encargado de su consolidación por más de dos décadas y que asume con la intención de un cambio trascendental para la política, con claras y amplias reformas. Así es que se asumen los principales lineamientos de la ID respecto a ciertos temas como lo son el respeto y cumplimiento a los derechos humanos, la fortaleza de la institucionalidad democrática y además una categoría clave en un país como Ecuador que es la diversidad, fundamentalmente complementando con temáticas regionales, grupales, étnicas y de clases. Al mismo tiempo, existía un panorama complejo pese a la voluntad y deseo de gobernar que tenía el nuevo presidente. Había una situación signada por crisis económica, desempleo, deuda externa y escasez, por esto mismo, es que, si bien llega al poder con un plan de reforma democrática en particular, este busca ser enmarcado dentro de las posibilidades políticas del país.

En 1992, por el complicado contexto ya desarrollado, la Secretaría general de Planificación del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos, va a postular un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, desde el que intenta abordar las diferentes problemáticas que atraviesan al país, para así contemplar las posibles soluciones a los obstáculos existentes, comprendiendo que esta crisis se debía tanto a factores internos como externos. Por esto mismo es que dentro de este Plan de Desarrollo, hay un planteo sobre la marginación y exclusión de dos actores claves dentro de la actividad política, que fueron la mujer y la juventud.

Respecto a las juventudes va a mencionar el crecimiento exponencial de esta población, fundamentalmente entre los jóvenes rurales. Esto se enmarca dentro de lo que son las crisis económicas del Ecuador, principalmente para la agravante si-

tuación de las familias suburbanas y marginales, detonando así desde la crisis económica una gran crisis social y política, donde la legitimidad del estado al tomar o no cartas en el asunto, se pone en jaque. En su obra, Borja menciona como objetivo general: “Facilitar la participación activa y consciente de la juventud en el desarrollo nacional.” (Secretaría General de Planificación, 1989:347).

En cuanto a las mujeres entre los objetivos específicos, el ID se planteaba: “...disminuir la discriminación y la marginación social, producidas por factores de sexo y raza.”(Secretaría General de Planificación, 1989: 348).

3. Las caras de los partidos

3.1 Primera cara: conceptual

Para encontrarle el verdadero valor a la palabra democracia, es necesario conocer acerca de la situación latinoamericana en la década de los setenta, quizás por esto, existen partidos, como la ID, que tienen hasta en su nombre la insignia de la democracia. En cuanto al alcance de esta palabra en la Izquierda Democrática, hay que remitirse a su lógica tanto interna como externa, ya que su estructura se consolida a partir de la constante votación y debate, es decir se alienta continuamente a una participación ciudadana vigorosa, siendo esta su consigna al momento de llegar al poder. Por esto es que se piensa al partido “desde abajo hacia arriba”, lo cual no es un dato menor, en un contexto de configuración del sistema político partidario.

3.2 Segunda cara: accionar político

Cuando se estudia al período en que la ID estuvo en el poder, es decir desde 1888 a 1992, es inevitable no analizar el descontento social que la gestión obtuvo. Llevó a cabo un desarrollo en Ecuador que lo que buscó hacer, pese a sus falencias, fue responder a las problemáticas que se venían formando desde hacía tiempo, con mucha participación. No obstante, se le cuestionó todo aquello que no supo atender, la falta de una planificación como tal, o incluso la ausencia de políticas que intenten mitigar la situación económica, que era la más deficiente. Además, hubo una serie de medidas que lo único que provocaron fue una mayor solidez en el estancamiento

y empobrecimiento de algunas partes de la sociedad ya fuertemente perjudicadas. Por esto, es que al momento de repensar el desarrollo completo de la ID, se concluye en que, si bien sus lineamientos de centro izquierda tenían por finalidad responder a la situación crítica de Ecuador, esto no pudo ser así, y el rol que en algún momento buscó, o dijo buscar, nunca se hizo presente. Esto responde, a que bajo contextos de crisis, la población desea soluciones que sean acordes a los problemas más corrientes y que impliquen mayor urgencia, esto en tiempos electorales fue algo que escaseó, ya que se privilegiaba la captación de votos a toda costa, pero sin ninguna propuesta concreta que determine la seguridad del futuro votante, siendo así que se generaba cada vez un mayor descontento popular. Si bien en campaña de Borja se habían hecho promesas como pagar la “deuda social”, parecía que no había nada planificado para el momento de gobernar y diseñar políticas, por eso se cree que a lo largo de su gestión no logra cumplir el rol de partido de centro izquierda.

3.3 Tercera cara: vínculo con los pueblos originarios

No hay que omitir en un país como Ecuador, la relación que se construye o no, con los sectores indígenas. Para los 2000, hubo un gran debate acerca de si se estaba produciendo en el país un golpe de estado o simplemente una rebelión indígena. Esta incógnita nace de lo que se produjo previamente a este hecho explosivo, el 4 de junio de 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja Cevallos, debido a que se había generado ya un levantamiento “indio”. Estos intentaban afirmar su existencia ante la sociedad como un grupo de personas con características culturales propias, lo que incluso se podría enmarcar dentro de lo que se reconoce como el desarrollo cultural, uno de los principios del partido, que se afirma desde el libre desenvolvimiento y visibilidad a las diversas culturas a partir de la difusión popular pero también desde la ciencia, tecnología, filosofía, entre otras, para así evitar una única preponderancia cultural. Sin embargo, todo evolucionó hasta el 21 de enero del 2000 donde tuvo lugar una enorme revuelta política y cultural en manos de los “indios ecuatorianos”. Desde 1970 que este grupo se constituyó como Movimiento indígena con la fundación de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador. Al momento del levantamiento, una de las frases más polémicas del presidente que contribuyó a la imagen negativa que había sobre este, hizo alusión a que Ecuador tenía demasiados agitadores que iban contra la patria, y que querían dividir al país y romper al gobierno, es decir veía como enemigos a los propios pueblos indígenas.

3.4 Cuarta cara: legislativa

En términos legislativos, toda esta desilusión que implicó el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos en la dificultosa realidad de los ecuatorianos, respondió también a varias de las leyes controversiales que fueron promulgadas durante su gobierno, como por ejemplo la Ley de Gracia para liberar a los Comandos de Taura que fueron los causantes del secuestro de Cordero y de llevar a cabo conversaciones con el AVC. Otra de las medidas estuvo signada por la aplicación del sistema de mini evaluaciones con ajuste progresivos para mantener u cambio competitivo. Sin embargo, hay que recordar, que al ser uno de los espacios políticos que nace luego de la dictadura, su construcción va a ser paulatina y progresiva. En 1979 la ID obtuvo 15 escaños; en 1984 24 escaños; en 1986 hay una disminución a 14 escaños; en 1988 29 escaños; en 1990 11 escaños; y por último en 1992 7 escaños. Es importante mencionar que, en las elecciones del poder legislativo en 1984, luego de la derrota de Borja, este tenía mayoría en el congreso, y la otra fuerza con gran participación fue el Partido Social Cristiano, lo cual muestra una debilidad de los bloques principales y una mayor representación en otros espacios. Por lo tanto, dentro del gobierno de Febres Cordero, la ID era su mayor opositora. Sin embargo, este protagonismo del partido en 1986 disminuyó, siendo el PSC quien aumentó su presencia.

3.5 Quinta cara: desorden

Algo muy sorprendente de la ID, es la percepción que públicamente se tenía de esta como una organización moderna, que reunía numerosos militantes, con un tipo de política diferente, con un valor ideológico muy marcado, y con una forma de hacer política totalmente opuesta a la tradicional. Pese a no cumplir con estas expectativas que había desde sus seguidores, la ID va a tener un enorme peso, y fundamentalmente en la región de la Sierra.

Una de las mayores críticas a esta es que con su accionar, era funcional a los sectores de derecha del país, siendo una gran opción para los intereses y deseos burgueses, pese a que el eslogan con el que asumió Rodrigo Borja fue “Ahora le toca al pueblo”. Prueba de esto, está en la conocida flexibilización laboral que se llevó a cabo en su gestión, que se materializó con la Ley de Régimen de Maquila y de contratación laboral a tiempo parcial en 1990, con la Reforma al Código de Trabajo ya en 2006, entre otras. La época sobre la cual gobernó Borja, estuvo marcada, pese al tipo de ideología del gobierno en gestión, por políticas neoliberales, nada amigables con

el pueblo. “Sin embargo, después de Borja, se produjo, como en oleada, la sucesión de gobernantes cuya inspiración económica y orientación política exclusivamente favorecieron la definitiva consolidación del modelo empresarial de desarrollo en Ecuador.” (Paz y Cepeda, 2006: 93).

Ya en términos internos del partido, la aparición que tuvo la ID dentro del sistema electoral, no impidió que se generaran conflictos dentro de él, como fue en 1988 cuando casi se genera una división respecto al candidato presidencial, ya que había dos opciones dentro del mismo que eran Rodrigo Borja Cevallos y Raúl Baca. Ante este obstáculo, lo que se decidió fue dirimir la candidatura mediante una elección preliminar directa, que ya había sido propuesto por Baca, aunque fue este quien obtuvo la derrota, pero aun así permaneció en el partido.

4. Conclusión

La repercusión sustancial que esta fuerza tenía dentro del sistema de partidos era muy amplia, y prueba de esto fue la unidad de toda la derecha para hacerle frente. La razón venía del temor que se le tenía a aquella como espacio que lentamente iba tomando impulso, y que si ganaba, sería la primera en la historia ecuatoriana en tomar el poder. León Febres Cordero no era el único que le hacía frente a Rodrigo Borja Cevallos en esas elecciones, eran los terratenientes, los sacerdotes, los empresarios, la clase alta, los oligarcas, y toda la derecha reunida por una causa común. La frase era “con León sí se puede”. Esta atravesó todo el territorio, todas las capas sociales, e incluso rechazó con su discurso a diferentes sectores que se veían ampliamente perjudicados con este tipo de políticas que implementaría en el caso de llegar al poder. Finalmente, fue Febres Cordero quien venció a su contrincante el 6 de mayo de 1984 en la segunda vuelta. No obstante, esta estrategia de unidad tomada por la derecha permite leer un panorama para nada sencillo, en el cual la ID como partido, tenía un peso contundente que constituía una amenaza para los otros sectores, pero que sin embargo, como es posible leer en otros países atravesados por años de crisis, la derecha logró tener lugar hasta en los sectores menos esperados, incluso con el perjuicio que sus políticas tendrían en ellos.

Si bien la llegada al poder en 1988 cuando la ID ganó fue muy aclamada y positiva, su gestión fue duramente criticada, y todo aquello que se esperaba de la ID no pudo, en su gran mayoría, ser llevado a cabo. Por supuesto, eso generó fuertes disgustos en términos poblacionales, siendo a su vez, que esto iba acompañado no solo por

las medidas tomados o no tomadas sobre las cuales se había prometido efectuar cambios, sino que además todo tenía repercusiones en términos económicos que afectaban directamente a la gente, como fue el caso de la suba de los precios de la canasta básica, combustible, entre otros. A pesar de ello, hay quienes observan el mandato como uno que dejó pasar varias oportunidades para llevar a cabo reformas estructurales del estado, principalmente vinculadas a variables económicas, que habían declinado para el momento en que se asumió el poder, como por ejemplo la miseria, indigencia, desocupación, entre otras tantas. Por eso se cree que hubo un desprestigio del partido que fue poco a poco aumentando, y que paulatinamente lo llevó a ocupar una posición en la cual terminó con una imagen totalmente negativa, pese a ascender al poder con enormes expectativas, incluso para las capas sociales que lo habían apoyado en un primer momento.

5. Bibliografía

BORJA CEVALLOS, R. (1978), “El Ecuador y el proceso de constitucionalización”, en *Nueva Sociedad*, N° 34.

CEVALLOS, B. (1985), “Ecuador: Lecciones de un proceso político”, en *Nueva Sociedad*, N°78.

CIRIZA, A. (2000), “21 de enero del 2000 ¿Golpe de estado o revuelta india en el Ecuador?”, en *Osai*, Buenos Aires.

CONAGHAN, M. C. (2003), “Políticos versus Partidos: discordia y desunión en el sistema de partidos ecuatoriano”, en *Antología Democracia, gobernabilidad y cultura política*, Quito, Ecuador, FLACSO, Sede Ecuador.

Declaración de Principios de la Izquierda Democrática de Ecuador (1977), “Declaración de Principios de la Izquierda Democrática de Ecuador” en *Revista Nueva Sociedad*, N°28.

ESCOBAR, I., RAMIREZ, O., TORRES, I., VILLAFUERTE, G., VILOGNÉ, G., (2010), “La transición a la democracia en el Ecuador: una mirada histórico-política a un proceso de revalorización democrática”, en *AFESE*, N°53, Quito.

Estatuto Izquierda Democrática, Convención Nacional año 2018.

GARZON-VERA B. BRAVO, A. K. (2022), “Implicaciones históricas y sociales de las protestas indígenas en el Ecuador”, en *Investigación y desarrollo*, vol. 51, N°1.

HUAYAMAVE TORRES, G. G. (2020), La institucionalidad de los partidos políticos en el Ecuador, período post dictadura 1979 – 2017, [Tesis para la obtención del título de la Licenciatura en Ciencias Políticas, UCA, Santa María de los Buenos Aires]. Disponible en: <<https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10929>>

MENÉNDEZ CARRIÓN, A. (2003), “La democracia en el Ecuador: desafíos, dilemas y perspectivas”, en *Antología Democracia, gobernabilidad y cultura política*, Quito, Ecuador, FLACSO, Sede Ecuador.

MULLO CACUANGO, P. (2017), La respuesta de las Organizaciones Sociales frente a la Ley de Flexibilidad Laboral decretada por Rodrigo Borja Cevallos en el Ecuador en el período 1988 a 1992, [Trabajo final de investigación de Grado presentado como requisito parcial para obtener el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales, Universidad Central del Ecuador, Quito]. Disponible en: <<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/14104>>

PAZ, J. J., CEPEDA, M. (2006), “Ecuador: una democracia inestable”, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en HAOL N° 11. Disponible en: <<https://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/hao/article/view/170>>

PESÁNTEZ MALDONADO, F. M. (2006), Gobernabilidad: la participación ciudadana y los mecanismos de contraloría social, su aplicación en la legislación ecuatoriana, [Tesis de Grado previa la obtención del Título de Doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, Universidad del Azuay Facultad de Ciencias Jurídicas Escuela de derecho, Cuenca-Ecuador]. Disponible en: <<https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2823/1/05622.pdf>>

RAMOS JIMENEZ, A. (2015), “Democracia y partido: la experiencia latinoamericana”, *Los partidos políticos latinoamericanos. Una segunda mirada*, Venezuela, Editorial Venezolana C.A.

RODAS, CHAVES, G. (2000), *La Izquierda Ecuatoriana en el siglo 20*, Quito, Ecuador, Ediciones ABYA-YALA.

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, (1989), “Acentuada marginación de la juventud en el desarrollo nacional”, en Plan Nacional de Desarrollo económico y social 1989-1992, Ecuador, Gobierno del Doctor Rodrigo Borja.

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION, (1989), “Discriminación a la mujer”, en Plan Nacional de Desarrollo económico y social 1989-1992, Ecuador, Gobierno del Doctor Rodrigo Borja.

TAUFIC, C. (1984), “Ecuador: La vida te da sorpresas”, en *Nueva Sociedad*, N°70.

VÁSCONEZ R. A., CÓRDOBA R., MUÑOZ P., (2005), “La construcción de las políticas sociales en Ecuador durante los años ochenta y noventa: sentidos, contextos y resultados”, Santiago de Chile, CEPAL, N°105

VERA, M. M. (2018, Julio 17), Entrevista al Dr. Rodrigo Borja Cevallos, ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador 1988-1992, en Revista Ciencias Sociales. Disponible en: <<https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CSOCIALES/article/view/1273>>

Coloschi, Martina (2024). “La Izquierda Democrática y su rol en el sistema ecuatoriano”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 121-132.

CONDEPA Y SU NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA EN BOLIVIA

Lucía Galli

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Siguiendo a Romero Ballivián se observa que la década de 1980 en Bolivia estuvo marcada por tres grandes procesos: la transición a la democracia, la crisis socioeconómica con la rápida respuesta liberal a ese deterioro, y la valoración de la diversidad de culturas. En este punto se considera interesante analizar el surgimiento de Conciencia de Patria (CONDEPA) para poder identificar qué fue lo distintivo del mismo como movimiento y analizar ¿Por qué este proyecto popular no logró triunfar?

Este trabajo se concentra en el periodo que va desde 1985 a 2002 que engloba el inicio, desarrollo y fin de CONDEPA, sin desconocer el pasado, retrayéndonos muchas veces a la revolución de 1952. El sistema político boliviano durante el periodo que se elige analizar logró desarrollarse manteniendo una estabilidad en el sistema. Fernando Mayorga, considera que la misma refiere a una “gobernabilidad hermética”, la cual tiene que ver con una lógica pactista que se desarrolla en el sistema electoral boliviano.

Por su parte Stephanie Alenda también advierte sobre: "...la llamada « democracia pactada». Se asienta un sistema de presidencialismo parlamentarizado, en el cual el Congreso cumple un rol decisivo en la selección de los presidentes con la formación de mayorías parlamentarias. Estos pactos garantizaron la alternancia en el poder de tres principales fuerzas políticas: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y la Acción Democrática Nacionalista (ADN)" (Alenda, 2004: 120).

Ante este escenario, donde todo parece ser estable y pactado. Resulta interesante pensar el surgimiento de dos partidos neo populistas como son Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unión Cívica Solidaridad (UCS). Ambos partidos hacen su aparición en el escenario político electoral al mismo tiempo y se instalaron en la escena política con una gran fuerza, dando la imagen de que realmente iban a generar una gran transformación del sistema político boliviano, teniendo en sus inicios un gran apoyo de diversos sectores, sobre todo de sectores marginales. Ahora bien: ¿llegaron a hacer esa transformación del sistema político?

Muchos autores están de acuerdo en que el proyecto de CONDEPA fracasó, debido a que no pudieron prosperar en el sistema electoral y terminaron desapareciendo de la escena política. Sin embargo, desde la óptica de este trabajo habremos de analizarlo en términos de metamorfosis.

Sin embargo debemos reconocer que tanto CONDEPA como UCS no lograron transformar el sistema político electoral como se habían propuesto en sus inicios ni lograron perdurar en la arena electoral; empero, sí lograron allanar el escenario político para que se dé la integración de diferentes sectores generando así una ampliación de la capacidad de representación del sistema de partidos.

A su vez el trabajo se propone adentrarse en la historia del sistema político boliviano; para ello, primeramente se va a analizar el significado que tuvo la Revolución Boliviana de 1952 y cuál fue su impacto, haciendo hincapié en el modelo socioeconómico que la misma propuso y visualizando sus transformaciones.

En segundo lugar se va a trabajar las transformaciones que se vivieron en el sistema político y los procesos de reformas económicos llevados adelante. En tercer lugar se considera interesante adentrarse en las generaciones de partidos y en los pactos gubernamentales del sistema electoral boliviano. En cuarto lugar se va a mencionar el surgimiento del neopopulismo de los 90 y de dos de sus partidos, CONDEPA y UCS, centrándose en el primero para así poder visualizar en qué contexto se inscribe

y como se desarrolla el mismo, teniendo presente el rol de su líder, Carlos Palenque, y la vinculación con los sectores más marginados.

En quinto lugar se va a analizar la participación femenina en CONDEPA, mencionando algunas dirigentes sobresalientes. En último se propone centrarnos en el análisis de las diferentes caras que poseen los partidos, haciendo hincapié en cómo se desarrollan los mismos en relación a la organización, a la ciudadanía y al estado.

2. El sistema electoral y su incidencia en la vida partidaria

2.1. El sistema político Boliviano

Para poder adentrarse en el sistema político boliviano es necesario retrotraerse a la Revolución Boliviana de 1952, ya que la misma pretendió implantar un nuevo modelo socioeconómico en el país.

Esta revolución fue encabezada por el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y representó un gran hito en su historia debido a que amplió el derecho al voto, incorporando a los sectores campesinos y femeninos a la vida política, y a su vez propuso una controversial reforma agraria. Como menciona Hugo Zegarra (2002:41), con esta revolución se inicia una etapa, que va desde 1952 a 1985, la cual se caracteriza fundamentalmente por un modelo de acumulación de capital a cargo del Estado, modelo que por diversos motivos tanto externos como internos entró en crisis.

La crisis generó un gran malestar social, no solo por la recesión económica que se estaba viviendo sino por el creciente desarrollo del narcotráfico y del contrabando. La secuela de este proceso impactó en el escenario social, político y económico generando diversas transformaciones.

Por su parte Jorge Lazarte, “manifiesta que estas transformaciones tienen que ver con que el sistema político está en un proceso de metamorfosis en relación a dos ejes los cuales son constituyentes, primeramente el mecanismo electoral como núcleo regulador y en segunda instancia los partidos como actores centrales” (Zegarra, 2002:42). A su vez considera que en relación al espacio político se pueden señalar las siguientes modificaciones: “a). Descentralización del espacio político en torno a las

regiones, localidades y municipios, diferenciándose por niveles. b). Los conflictos no se polarizan necesariamente contra el Estado. C). La emergencia de otros actores no institucionalizados” (Zegarra, 2002:42).

A su vez a partir de 1985 se llevó a cabo uno de los procesos más intensos de reformas políticas, que culminó con la renovación del Congreso en 2002. Un ejemplo de esto se materializa mediante la implementación del Decreto Supremo N°21.060 llevado adelante en 1985.

El mismo da inicio a las reformas económicas, las cuales promulgaron una nueva política económica mediante la apertura y la liberalización de la economía. Con este periodo de reformas se le da fin al modelo estatista y redistributivo impregnado desde 1952.

En este periodo de transformaciones se dieron dos procesos: por un lado los sindicatos perdieron el papel protagónico que tenían desde 1952 y pasaron a dejar su lugar y peso político a los partidos; y, por el otro lado, la crisis del modelo generó una gran desacreditación de la izquierda. Esto dio lugar al surgimiento de nuevos actores sociales, los cuales aparecieron como una respuesta ante el clima de malestar social y económico.

Es en este contexto que se da el surgimiento de dos actores que luego van a conformarse en movimientos sociales y económicos muy fuertes para luego constituirse como partidos, se hace referencia a Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

2.2. Características del sistema electoral boliviano y generaciones de partidos

Siguiendo a Salvador Romero, podemos ver que en Bolivia se dan tres generaciones de partidos: la primera se conforma a partir de la Guerra del Chaco (1932 – 1935), en esta primera generación surge el MNR. Luego con la irrupción de diferentes alternativas revolucionarias podemos hablar de una segunda generación, y por último vemos que la tercera generación se conforma por aquellos partidos que se dirigen a sectores pertenecientes a la economía informal, en esta generación podemos ubicar a CONDEPA y UCS.

A su vez, como se menciona anteriormente a partir de las transformaciones de la nueva política económica se dio un proceso de reconfiguración del sistema de partidos

en Bolivia. Siguiendo a Fernando Mayorga (2003) este proceso puede dividirse en tres etapas. Una primera etapa fundacional la cual va de 1979 a 1985: en ella el corporativismo sindicalista liderado por la COB fue desplazado por el protagonismo de los partidos. Una segunda etapa denominada de “adaptación” la cual se desarrolla de 1985 a 1993 y se caracteriza por una lógica pactista y por la formación de coaliciones. Y, por último, una etapa que va de 1993 a 1999 en la cual se da la plena incorporación de UCS y CONDEPA al sistema político.

Sin embargo se debe mencionar que hay una de estas etapas que prima por encima de las demás, tiene que ver con la etapa de adaptación, ya que al sistema electoral boliviano, en este periodo, se lo puede describir como un sistema que se desarrolla bajo una lógica de pactos electorales, los cuales permiten diferentes coaliciones de gobierno y a su vez aseguran la estabilidad del mismo.

Es importante mencionar que esta lógica pactista “se explica por una nueva articulación que se da entre democracia y neoliberalismo, la cual se torna hegemónica y logra desplazar las tendencias estatistas y militaristas” (Valdés, 2007: 132).

También hay otros dos elementos que alimentan la formación de coaliciones de gobierno y el sistema pactista: la elección del presidente por el Congreso y la modalidad de voto único. Varios autores denominan al caso boliviano como un presidencialismo parlamentarizado, el cual se sostiene por las coaliciones inter partidarias y se da un predominio del poder ejecutivo sobre el parlamento. Se puede afirmar que la estabilidad del sistema político boliviano se debe en gran parte a esta estructura de relaciones y al equilibrio dado por el sistema de pactos mediante las coaliciones de gobierno.

La fuerza de este sistema pactista se materializa en el sistema político que primó desde 1985 hasta 2002, ya que durante este periodo el sistema de gobierno estuvo bajo tres partidos básicos: el MNR, el MIR y ADN. Estos partidos fueron alternándose mediante las coaliciones de gobierno que ya habían construido. Durante este periodo se da una estabilización del sistema la cual Mayorga (2003) define como “gobernabilidad hermética”.

Además si se tiene en cuenta los datos electorales se puede observar que el proceso político electoral en Bolivia puede dividir en dos etapas: una primera etapa desde 1985 hasta 1997 en la cual se ve esta cierta estabilidad y gobernabilidad del sistema político que venimos mencionando, y una segunda etapa que va desde 2002 a 2005 donde se da una reconfiguración del sistema partidista debido a una fragmentación y polarización del territorio, el cuadro 1 permite hacer esta observación.

2.3. Cuadro N°1: Elecciones Generales 1985 – 1997; %Votos, %Escaños y NEP

Partido								
Año	1985		1989		1993		1997	
Partido	%Votos	%Escaños	%Votos	%Escaños	%Votos	%Escaños	%Votos	%Escaños
MNR	24.60%	33.08%	23.07%	29.23%	36.22%	40.00%	18.20%	20.00%
ADN	28.60%	31.54%	22.07%	29.23%	-	-	22.26%	24.62%
MIR	8.80%	11.54%	19.64%	25.38%	-	-	16.80%	18.46%
AP					21.45%	26.92%	-	-
UCS					14.02%	16.15%	16.11%	16.15%
CONDEPA			11.02%	7.69%	14.56%	10.00%	17.16%	14.62%
MBL					5.46%	5.38%	3.09%	3.08%
IU			7.21%	6.92%	-	-	3.71%	3.08%
MNRI	4.80%	6.15%	-					
MNRV	4.20%	4.62%	-	-		-	-	-
PSI	2.20%	3.85%	-	-				
FPU	2.20%	3.08%	-					
PDC	1.30%	2.21%	-	-				
EJE				-	1.30%	0.77%	-	-
FSB	1.10%	2.31%	-	-				
MRTKL	1.80%	1.54%	-					
ARBOL			-	-	1.30%	0.80%	-	
ASD				-	1.30%	0.80%	-	-
NEP		4.5		4.5		4.0		6.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por el Consejo Nacional Electoral.

El sistema pactista generó la aparición de la noción partidocracia para visualizar la lógica excluyente del sistema y a su vez fomentó el surgimiento de diferentes líderes y partidos outsiders. El sistema electoral boliviano mediante su sistema de presidencialismo parlamentarizado logró solucionar el problema de la estabilidad, tal y como se visualiza a continuación

2.4. Cuadro N°2: Los pactos gubernamentales

Periodo	Pactos	Principales Integran- tes	Ruptura de los pactos
Hernán Siles Suazo 10/10/1982 06/08/1985	1982 Dialogo por la de- mocracia Noviembre de 1984.	UPD (MNRI, MIR, PCB) Partidos políticos con representación parlamentaria, Cen- tral Obrera Boliviana y Confederación de Empresarios Priva- dos, mediación de la Iglesia Católica.	Gran inestabilidad del pacto, final- mente disuelto en 1985.
V. Paz Estenssoro 06/08/1985 06/08/1989	Pacto por la democ- racia 1985 (reúne el 63.2% de los sufra- gios).	MNR - ADN	El MNR rompe el pacto por la de- mocracia al inicio de la campaña electoral de 1989 sin consecuencias para la estabilidad del gobierno.
Jaime Paz Zamora 06/08/1989 06/08/1993	Acuerdo patriótico 1989 (reúne el 47% de los sufragios). Acu- erdo por la modern- ización del Estado y la consolidación de la democracia. Acu- erdo en dos etapas (febrero de 1991 y julio de 1992).	MIR – ADN Partidos políticos con representación parlamentaria.	
G. Sánchez de Lo- zada 06/08/1993 06/08/1997	Pacto por la Gobern- abilidad 1993 (reúne el 54.8% de los sufra- gios).	MNR – MRTKL, MBL y UCS.	
Hugo Banzer Suárez 06/08/1997 06/08/2001 Jorge Quiroga 06/08/2001 06/08/2002	Compromiso por Bolivia 1997 (reúne el 55,2% de los sufra- gios).	ADN – NFR, MIR, UCS y CONDEPA.	En 1998, CONDEPA es expulsado de la coalición, seguido en 2000 de NFR.

G. Sánchez de Lozada 06/08/2002 17/10/2003 (renuncia a su cargo).	Gobierno de responsabilidad Nacional 2002 (reúne el 44,3% de los sufragios).	MNR – MBL, MIRM UCS y NRF desde el 5 de agosto de 2003	En abril de 2003, el MBL deja la coalición. El 18 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia tras ser abandonado por sus aliados.
Carlos Mesa Gisbert 17/10/2003	Concluyo el ciclo de la “democracia pactada”. Carlos Mesa gobierna sin mayoría parlamentaria que pueda ser utilizada como rodillo, u con ministros apartidistas.		

Fuente: Cuadro elaborado por Pablo Quisbert y Stéphanie Alenda.

A su vez debemos mencionar que en las elecciones de 1985 y 1989 se aplicaron listas cerradas y bloqueadas, recién en 1996 se incorpora un sistema mixto el cual permitió que 68 de los 130 parlamentarios fueran elegidos en distritos electorales uninominales y que los demás sean repartidos entre los nueve distritos plurinominales.

Valdés (2007), invita a pensar en ¿cuál fue en definitiva el efecto de la incorporación en el diseño institucional-electoral de circunscripciones uninominales? Se afirma que el efecto de esta incorporación fue por un lado la territorialización del voto y por el otro la emergencia de nuevos caudillos regionales. A su vez el sistema de partidos boliviano sufre diversas transformaciones a partir del año 2002, estas transformaciones tienen que ver con “dos tendencias de acumulación política prolongadas que comenzaron a desarrollarse desde las reformas electorales de 1994 y 1996 que impulsaron la territorialización de la votación, y la ley de participación popular que ha dado impulso a nuevos campos de competencia política en niveles antes inexistentes como el municipal” (Valdés, 2007: 137). Con lo cual podemos ver que esta combinación permitió que se dé una territorialización del voto, a su vez ayudo a que los movimientos y partidos locales obtengan mayor protagonismo.

Como último si se analiza estas transformaciones del sistema en relación a la elección presidencial del año 2002 se ve que la victoria del MAS de la mano de su líder Evo Morales materializa que el multipartidismo moderado que hasta 2002 había caracterizado a Bolivia es reemplazado por un sistema polarizado en torno a dos partidos predominantes: MAS y PODEMOS.

2.5. CONDEPA una nueva forma de hacer política

Para analizar el surgimiento de Conciencia de Patria se debe primero adentrarnos en su fundador y líder, Carlos Palenque Avilés, más conocido como “El Compadre”. Palenque nació en La Paz y fue un cantante, músico, empresario, presentador de televisión y político.

En estos primeros rasgos ya se manifiesta que no se está ante la presencia de un político tradicional. Además si se sigue analizando las actividades en las que se desarrolló, se puede ver que conformó el grupo musical folclórico “Los Caminantes”, se desempeñó como comunicador social en radio Méndez, creó el programa radial “Sabor a Tierra” y condujo un programa televisivo llamado “El Hippershow”. Su paso por diversos programas tantos radiales como televisivos de la mano con un carisma particular que tenía hizo que Palenque sea muy reconocido y querido por el público, tal es así que cuando uno de sus programas fue clausurado se dio una fuerte movilización popular en su respaldo.

En la década de 1980, ante el boom de la televisión privada, Palenque fundó el Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP), en el cual llevó adelante un programa radial y televisivo, donde se hizo muy conocido debido a la tribuna libre del pueblo. Esta tribuna habilitó un espacio de expresión, a su vez permitió la interacción con diferentes inmigrantes y fue el lugar mediante el cual Palenque empezó a organizar de forma sistémica campañas para los más necesitados. A su vez Palenque contaba con la compañía de su joven esposa, la “Comadre” Mónica Medina y de una locutora aymara, la “Comadre” Remedios Loza, que lo ayudaban en estas campañas sociales y en los programas.

Su paso por los programas radiales y televisivos fue el trampolín que lo llevó a la política. La imagen de Palenque no era una imagen más, sino que por su carisma particular la misma se había tornado mítico – religiosa. También se debe mencionar que en este periodo surge la Unión Cívica

Solidaridad de la mano de Max Fernández de la UCS. Ambos dirigentes “desplegaron novedosas modalidades de intercambio político a través del uso no convencional de sus empresas y la incorporación de nuevas identidades y demandas sociales a la democracia representativa. Su presencia en el escenario político modificó los rasgos de la competencia electoral e incidió en la consolidación democrática y en el decurso de la reforma estatal” (Mayorga, 2003: 301).

Tanto CONDEPA como UCS, formaron parte de la emergencia de los partidos neopopulista que se desarrollaron en 1988, que tenían un carácter novedoso en relación a cómo hacer política. Esta nueva forma estaba vinculada con la informalización de la política. En su forma de hacer política se distingue “la personalización de la representación política, el asistencialismo como rasgo de intercambio político y la interpelación de nuevas identidades y demandas sociales” (Mayorga, 2003: 304).

2.6. El rol de las mujeres en CONDEPA

Como menciona Susana Rostagnol “la inequidad de género permea todos los ámbitos de la vida social, incluyendo la política, y tiene efectos generales. De modo que la subrepresentación de mujeres en la escena política perjudica a la sociedad en su conjunto” (Susana Rostagnol, 2017: 128). Con lo cual hablar de la participación femenina en política es un tanto complejo. A su vez la inequidad de género instaló diversos obstáculos que las mujeres deben vencer para poder participar en el sistema político. Esto es un primer elemento que indica en primer lugar que el sistema político fue diseñado y estructurado por hombres, con lo cual el mismo tiende a perpetuarse como un espacio masculino.

Es este punto se considera interesante analizar el trabajo “¿Ejemonías? Democracia representativa y liderazgos locales” coordinado por Fernando Mayorga (2007), ya que en el mismo analiza el rol de Mónica Medina en CONDEPA, a su vez también analiza la participación de otras mujeres en el partido.

Si se observa la organización interna de CONDEPA se ve que ésta se desarrolla en relación a figura simbólica del chacha – warmi. Esta figura refiere a su cultura aymara y representa la relación de pareja y división de responsabilidades.

Autoras como María Eugenia Choque Quispe (2014) analizan esta forma de trabajo en conjunto y consideran que Palenque y Medina son un matrimonio que logra trabajar en conjunto para convertir a CONDEPA en una alternativa política que se distinga frente a los partidos tradicionales de turno.

Sin embargo se debe mencionar que la participación femenina en CONDEPA tiene un fuerte arraigo a esta figura simbólica de la cultura aymara, con lo cual se interroga ¿Qué participación política se les daría a las mujeres si la figura simbólica del chacha – warmi no existiera?

Por otro lado si bien es verdad que Conciencia de Patria ha permitido que las mujeres de sectores populares ingresen a diferentes instituciones que antes tenían prohibidas, se resalta que las mujeres que han logrado tener una efectiva participación política en nombre de CONDEPA, han sido aquellas que tenían un vínculo familiar con Carlos Palenque.

Entre estas mujeres se debe mencionar la participación de Remedios Loza, quién fue elegida como diputada por el Departamento de La Paz (1988 – 1993) y luego de la muerte de Palenque fue la encargada de conducir el partido. Otra mujer importante fue Mónica Medina de Palenque, que fue la primera mujer alcaldesa por CONDEPA, de la ciudad de La Paz (1993 – 1995).

La participación política de Mónica representa un cuestionamiento a las formas tradicionales de hacer política, en ella se ve reflejada toda una generación de mujeres que se sumergen en la arena política tratando de conformar una alternativa política.

Con lo cual se advierte que esta generación de mujeres viene a re debatir el sistema político no solo desde su lugar de mujeres, sino también desde el lugar de mujeres aymaras, ya que esta doble categoría que opera en ellas hace que sean doblemente excluidas del sistema político boliviano.

Se puede identificar que la incursión de Mónica y de diferentes mujeres aymaras en el sistema político fue cuestionada debido a que consideraban que por ser jóvenes, no tenían ni capacidad ni experiencia, a su vez varios dirigentes bolivianos reconocen que la falta de capacidad política tiene que ver con el hecho de ser mujeres, y las mismas en consideración de ellos no deberían estar en la política lo cual pone de manifiesta una lógica machista que tiene al sistema político – electoral boliviano.

3. Las caras de los partidos

Como bien lo menciona Alcántara (1994) los partidos políticos son elementos del sistema político que intermedian entre la sociedad y el régimen político. Entender a los partidos políticos como organizaciones intermediarias desde principios del siglo XX se convirtió en un tema clásico de investigación sociológica, el cual sigue siendo un tema muy polémico y actual.

Ahondar en este campo de estudio significa en primera instancia comprender que estas organizaciones no están flotando por el aire, sino que se desarrollan en un

contexto, poseen una vida propia, establecen diferentes sistemas de reglas tanto internas como externas, y a su vez van creando diferentes procesos de interacción.

Podemos ver que en América Latina las organizaciones partidarias tenían dificultades para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, este fenómeno alentó a la emergencia de outsiders políticos.

Por su parte la emergencia de outsiders materializa la crisis de representación que empiezan a vivir los partidos, a su vez se considera que la misma dio lugar a nuevos mecanismos de representación, entre estos, se visualiza el surgimiento de estructuras que también querían intermediar entre los ciudadanos y el Estado y aparecen de la mano de sus líderes, los denominados neopopulistas de los 90.

Como lo manifiesta Mayorga (2003: 302) se considera que el neopopulismo “trata de un estilo de acción perceptible por las formas que asume el discurso y la conducta política: predominio del carisma personal en la representación política, debilidad de los mecanismos institucionales formales, influencia de factores culturales en el intercambio político y precariedad de la ideología en la conformación de identidades políticas”. Con lo cual se puede considerar al neopopulismo de los 90 como una corriente política que viene a proponer una nueva forma de construir política, ya que la misma no evoca el populismo clásico, ni tampoco se refiere a movimientos sociales basados en una matriz clasista.

Es en este contexto, en 1988, cuando surge CONDEPA, justamente como un partido neopopulista el cual es conducido por Carlos Palenque, un outsider total de la política. Se recuerda que el sistema político boliviano se encontraba en una suerte de “estabilidad” política debido a los pactos gubernamentales que se llevaban a cabo entre las diferentes coaliciones, entonces ¿qué es lo que da lugar al surgimiento de CONDEPA?

Para adentrarnos en esta cuestión se considera interesante primeramente retomar lo planteado por Katz y Mair (2007) en “La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” ya que en esta obra los autores nos plantea una forma de estudiar, de analizar los partidos mediante las caras de la organización partidista, es decir, visualizar los partidos en relación a tres trincheras específicas en los cuales estos se desenvuelven: el partido como organización de afiliados, el partido como organización central y el partido en las instituciones públicas. A su vez se plantea también cuatro modelos de organización partidista: el partido de elites, el partido de masas, el par-

tido catch – all y el partido cartel. Se propone el ejercicio de releer la organización de Conciencia de Patria bajo la lógica propuesta por Katz y Mair.

3.1. El partido en la ciudadanía

En 1988 se fundó CONDEPA y su creador, Carlos Palenque, provenía del mundo artístico, ya que dedicó gran parte de su vida a realizar programas radiales y televisivos. Su constante exposición y contacto con el público lo fue dotando de una gran popularidad, a su vez Palenque poseía un carisma especial. En palabras de Mayorga, esta figura posee un “carisma de situación” debido a que en este logra insertar formas organizativas convencionales las cuales van de la mano de una intensa relación emocional con sus seguidores (Mayorga, 2003: 313).

Así las plataformas radiales y televisivas de las cuales participó fueron las que le permitieron construir su liderazgo, y funcionar como el trampolín que le permitiría acceder a la política. Esta breve introducción sobre el líder del partido es muy importante ya que se comprende en qué contexto surge el mismo, el carisma de Palenque va a ir delineando todas las formas de organización partidaria.

De alguna forma Palenque crea primero su vínculo con sus futuros “militantes” y luego aparece el partido, con lo cual logra distinguirse de los líderes carismáticos típicos debido a que la realización de su destino representa un espacio social incompleto. Este espacio es el de los marginados, el cual a su vez le permite crear una intensa relación emocional con sus seguidores.

Mediante el medio de comunicación (RTP) Palenque realiza diferentes actos solidarios, este se convierte en la herramienta que le permite lograr una dimensión expresiva de la relación carismática que él posee con su comunidad, con lo cual logra convertirse en una identidad que refleje tanto solidaridad como identificación grupal.

En esta figura de como padre se observa la fuerza que adquiere el vínculo entre Palenque y sus seguidores, a su vez las diferentes movilizaciones que se dieron en las juntas vecinales, los clubes de madres, las organizaciones de educación popular y de producción permitieron en primer lugar consolidar el vínculo y en segundo lugar generaron las condiciones para que el partido se empezara a desarrollar de una forma más política.

Uno de los motivos más importantes por el cual CONDEPA logró construir un fuerte

vínculo con sus seguidores tiene que ver con los grupos sociales a los cuales representó, ya que en su base social se encontraban los migrantes, los transportistas, las cholas, los campesinos, los comerciantes, los ex mineros y los vecinos informales, todos ellos habían sido excluidos del sistema político, pertenecían a los sectores marginados con lo cual Palenque mediante Conciencia de Patria, en un cierto sentido los adopta y empieza a cumplir un rol asistencialista que el Estado no cumplía, pero la actividad de Palenque para con ellos no queda en una mera tareas asistencialista sino que se propone integrarlos al sistema político. Esto representa una propuesta muy cautivadora que hizo que estos sectores empezaran a sentir lealtad por su compadre.

3.2. El partido en la organización

Analizando la organización interna de CONDEPA se ve que, en primera instancia, los vínculos familiares / laborales tienen un rol muy importante en la formación de las redes estructurales de la organización. A su vez “este carácter personalizado de las relaciones intra partido permite la existencia de un elevado grado de arbitrariedad en la toma de decisiones, dado que las conductas se distinguen entre “lealtad” y “traición” con respecto al jefe y, por extensión, al partido” (Mayorga, 2003: 323 – 325).

Como se ve el elemento de la “lealtad” al líder representa uno de los elementos más importantes para la organización del partido, tal es así que se subordinan a las reglas formales de vínculos personales (familiares – laborales); a su vez el acceso a diferentes cargos se logra una vez dado un elevado proceso de identificación con la familia, este proceso lo que busca es generar un incentivo a la identidad colectiva dentro del partido.

Al adentrarse en su programa vemos que “CONDEPA generó una plataforma que retomó la herencia del nacionalismo-revolucionario, con lo cual puso en valor las culturas populares y generó una discusión en relación al modelo económico liberal del momento.

A su vez un elemento muy importante a resaltar tiene que ver con que se logra construir una estructura partidaria debido a la transferencia que se da de la estructura empresarial al ámbito político. Esta estructura partidaria estuvo centrada meramente en el rol de su líder lo cual tiene que ver con lo que mencionan Katz y Mair en relación a que “los líderes se han convertido en el partido; el partido se ha convertido

en los líderes” (Katz – Mair, 2007: 115 - 116). Lo problemático de este vínculo entre el líder y el partido tiene que ver con ¿qué pasa con la organización partidaria si el líder desaparece? Esta fue la situación que enfrentó CONDEPA ante la muerte de su líder. La muerte de Palenque generó que la organización debiera enfrentarse a llenar dos vacíos “uno de carácter institucional-la jefatura y la exigencia de su nueva legitimidad- y otro de carácter simbólico” (Mayorga, 2003: 317).

Así la desaparición física del líder motivó la adopción de reglas formales para continuar con el funcionamiento del partido. Como último pero no menos importante otro de los elementos fundamentales para la organización del partido tiene que ver con la disposición del territorio. En CONDEPA vemos que se da una modalidad de penetración territorial situada primeramente en el municipio de La Paz, en el cual nació Palenque, y en segundo lugar en El Alto.

3.3. El partido en el Estado

Como se viene enunciando el sistema electoral boliviano durante un largo periodo fue manejado por pactos gubernamentales; concretamente, tres partidos (MNR, MIR y ADN) concentraban el predominio del sistema, lo cual permite afirmar que durante ese periodo se cartelizaron los partidos debido a la progresiva participación generalizada de los partidos en el gobierno. Esto a su vez fue dejando un espacio cada vez más marginal para los demás partidos que no formaran parte del sistema de pactos.

Sin embargo este predominio empieza a modificarse en 1997, año en el cual fallece el líder de CONDEPA pero más allá de esto el partido se presentó a elecciones con la “Comadre” Remedios Loza como candidata y logró obtener un sorprendente tercer lugar en las elecciones presidenciales.

En 1999, CONDEPA logró constituirse en la principal fuerza electoral del departamento más importante del país, logrando administrar el municipio de La Paz. A su vez varios autores mencionan que el ingreso tanto de CONDEPA como de UCS a la arena electoral estuvo controlado por el triunvirato de MNR, ADN y MIR, debido a que estos partidos canalizaban la activación política de los sectores populares. En este punto se visualiza que si bien CONDEPA logró ingresar al escenario político, para poder hacerlo debió dejar de lado su cuestionamiento al sistema pactista y adaptarse al mismo:

El que los partidos neo populistas se hayan adaptado al sistema de partidos y no hayan actuado disruptivamente refleja que los “actores estratégicos del sistema” jugaban con las “fórmulas” y dentro del conjunto de pautas y normas fijadas. ¿Qué tipo de gobernabilidad se observó durante este período? (Valdés, 2007:141).

Con la lógica pactista se visualiza una lógica autoritaria del poder político, la cual permite hablar de una gobernabilidad regresiva.

Sin embargo esta incorporación de CONDEPA al sistema pactista no fue tan exitosa luego de la muerte de su líder, la ausencia de una figura autoritaria e imponente como la de Palenque generó la presencia de diferentes tensiones en relación a quién debía asumir ese rol. Por otro lado CONDEPA formaba parte del gobierno de Banzer pero trasladadas las tensiones no tuvieron un buen desempeño en las responsabilidades estatales.

Se empezó a gestar un periodo de descredito y desgaste sobre la imagen de CONDEPA, a su vez empezó a decaer la popularidad de sus líderes, llegando a afectar la imagen de Remedios Loza. “Para inicios del año 1998, tres indicadores reflejaban las dificultades crecientes de CONDEPA: primero, en la intención de voto en la futura presidencial, los guarismos bajaron de 9% en agosto de 1997 a 3.5% en febrero de 1998, lo que lo convertía en un partido de segunda fila. Luego, los dos ministros de CONDEPA compartían el dudoso privilegio de ocupar los últimos puestos en la pregunta sobre quién era el mejor ministro: obtuvieron 0.1% y 0.2% respectivamente... Por último, el porcentaje de quienes creían que ese partido debería salir de la coalición trepó de 31.2% a 45%” (Romero Ballivián, 2003:91). Finalmente en agosto de 1998, Banzer excluyó a CONDEPA del gobierno, esta decisión fue percibida de forma positiva por el electoral lo cual ponía de manifiesto la mala imagen que había proyectado CONDEPA.

Esta perspectiva permite visualizar que el fuerte discurso con el cual CONDEPA ingresó al escenario socio – político no llegó a transmitirse una vez estando en el gobierno, ya que el mismo debido a sus disputas internas se convirtió en un partido sumamente conflictivo, el cual estaba más preocupado por conseguir cargos públicos para sus militantes que en una administración eficiente del Estado.

El paso de CONDEPA por el gobierno logró desgastar su estructura, su desaparición

de la arena electoral se vincula con la elección presidencial de 2002 ya que en la misma no logro obtener un resultado superior al 3% lo cual género que el partido perdiera su personería jurídica y desaparecía del sistema electoral. Como último se menciona que la desaparición de CONDEPA del escenario político electoral permitió la reconfiguración del sistema de partidos dándole una dimensión polarizada. El siguiente cuadro nos permite visualizar el declive electoral de CONDEPA.

3.4. Cuadro N°3: %Escaños y NEP Elecciones Generales 2002 – 2005

Partido / Año	2002		2005	
	%Votos	%Escaños	%Votos	%Escaños
MNR	22.46%	29.93%	6.47%	5.38%
MAS	20.94%	22.29%	53.74%	56.15%
PODEMOS		-	28.59%	33.07%
NFR	20.91%	17.19%	0.68%	-
MIR	16.32%	19.74%	-	-
MIP	6.09%	3.82%	2.16%	-
UCS	5.51%	3.18%	-	-
AND	3.40%	3.18%	-	-
LI	2.72%	-	-	-
MCC	0.63%	-	-	-
PS	0.65%	0.63%	-	-
CONDEPA	0.37%	-	-	-
UN				6.15%
NEP		5.2		2.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos electorales del Consejo Nacional Electoral.

4. Conclusiones

En el análisis realizado sobre el sistema político electoral boliviano se visualiza que durante el periodo que se llevó a cabo el sistema de pactos se dio un proceso de “parlamentarización” de los partidos, algunos autores en una versión más extrema afirman que se dio un proceso de “gubernamentalización”. Siguiendo los modelos de organización partidista mencionados por Katz y Mair se puede afirmar que “durante el periodo 1985 – 2002 se vivió una cartelización de los partidos” (Alenda, 2002) debido a la progresiva participación generalizada de los partidos en el gobierno mediante los pactos gubernamentales. El hecho de que se hable de este periodo como de una “democracia pactada” es un claro síntoma de esta cartelización.

A su vez se menciona que el partido elegido para analizar se integró a la arena electoral con un discurso muy disruptivo el cual no pudo sostener en todas sus aristas, ya que para integrarse al sistema electoral debió imbricarse en la lógica pactista. Más allá de esto debemos mencionar que “por una parte, los partidos neo populistas contribuyeron a estabilizar la representación política canalizando la integración de los sectores populares, marginales e informales que quedaron a la deriva con el declive de los sindicatos y los partidos de izquierda. Por otro lado, los espacios de poder local permitieron descomprimir el canal de las demandas y requerimientos hacia el poder central, lo que habría permitido mantener la estabilidad del sistema” (Valdés, 2007:141).

Esto mismo permite visualizar que el surgimiento de partidos neo populistas, si se analizan en términos generales, generaron un impacto global en el sistema, ya que lograron la ampliación de la base social mediante la integración de sectores marginados y a su vez incorporaron nuevas demandas e identidades sociales en el discurso político.

Con lo cual se afirma que “es posible valorar positivamente el carácter democrático de UCS y Condepa, porque han evitado que la pobreza y la marginación se conviertan en caldo de cultivo de interpelaciones subversivas, guerrilleras o terroristas. Sin embargo, esta virtud se convirtió en una limitación, puesto que, a la vez que lograron importantes adhesiones en sectores populares, ambos partidos fueron víctimas de un aislamiento electoral que les impidió convocar eficazmente a otros segmentos sociales y crecer con perspectivas de constituirse en gobierno” (Mayorga, 2003: 306).

Como último si bien como proyecto político CONDEPA fracasó debido a que no logró su perdurabilidad, se considera que quizá quienes fracasaron fueron quienes

al leer a este movimiento, le otorgaron un cierto sentido, un deber ser con el cual debía cumplir, sin tener en cuenta que quizá su rol dentro del sistema político boliviano era tan solo ser parte de un engranaje que ayudaría a ampliar la base social de representación. Por todo esto es que se considera que aunque su participación en la arena política electoral fue breve, fue muy positiva ya que contribuyó a la integración de sectores y segmentos que estaban excluidos del circuito representativo, ampliando así la base de la democracia.

A su vez la presencia de CONDEPA en el sistema generó incomodidades las cuales allanaron el terreno para que “los actores políticos tradicionales llevaran adelante un proceso de reformismo institucional centrado en tres ejes: los cambios constitucionales de 1995, el cambio del sistema electoral que instituyó el sistema proporcional personalizado (realizado en 1994 y aplicado en 1997) y la descentralización de 1994 radicada en la ley de participación popular” (Valdés, 2007: 134).

Finalmente se observa que su presencia en el sistema político generó que se le dé reconocimiento al carácter pluri étnico y multicultural de la sociedad, este reconocimiento se materializa en la reconfiguración que se dio del sistema de partidos en el año 2002, año en el cual CONDEPA desaparece de la arena electoral, dejando el terreno preparado para que por primera vez en la historia de Bolivia un candidato aymara lograra acumular casi el 20% de los votos.

5. Bibliografía

ALCÁNTARA, M. (1997), “Las tipologías y funciones de los partidos políticos”, en AA. VV. *Curso de Partidos Políticos*. Madrid: Akal. Pp.37-57.

ALCÁNTARA, M. (2001), “El Origen de Los Partidos Políticos en América Latina”, *Revista WP* N° 187, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona. p.1-39.

ALENDIA, S. (2002), “CONDEPA y UCS ¿fin del populismo?”, en *Opiniones y Análisis*, Fundemos, La Paz-Bolivia, 2002, p. 85-122.

ALENDIA, S. (2004), “Bolivia: la erosión del pacto democrático” en *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*.

APARICIO, M. (1998), “La percepción sociopolítica de la participación política de la mujer en los sectores urbano – populares”, en *Temas Sociales*, N° 20, 185-187.

CHOQUE QUISPE, M.E (2014), “Género desde las experiencias de investigación del PIEB”, en *Revista T’inkazos*, N°35, La Paz.

FREIDENBERG, F.; ALCÁNTARA, M. (2001), “*Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina*”.

KATZ, R.; MAIR, P. (2007), “La supremacía del partido en las instituciones públicas: El cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas”. en *Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos*, Trotta.

MAYORGA, Fernando (2003), “*Neopopulismo y Democracia en Bolivia (1988 – 1999). UCS y CONDEPA: Compadres y Padrinos en la política*”, en *Revista de Ciencia Política XXIII*, México.

MAYORGA, F. (2003A), “Elecciones en Bolivia: lo nuevo y lo viejo”, *Anuario social y político de América Latina y el Caribe* N° 6, Flacso/ UNESCO/ Nueva Sociedad, Caracas: 9-17.

MAYORGA, R. (2003B), “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”, en Lanzaro, Jorge (ed.) *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO: 101-135.

MAYORGA, R. (2004), “La crisis del sistema de partidos políticos en Bolivia: causas y consecuencias”, en *Cuadernos del CENDES*, Año 21, N° 57: 83- 114.

MAYORGA, R. (2005), “La crisis del sistema de partidos políticos y el experimento de gobierno sin partidos en Bolivia”, en *Revista Futuros* N° 9, Vol. III, La Paz, Bolivia.

MESA, R.; GISBERT, C. (1992), “Bolivia, Municipales 91: neoliberalismo vs. Populismo”, en *Nueva Sociedad* N°117.

ROMERO BALLIVIÁN, S. (2003), “CONDEPA y UCS: El declive del Neopopulismo boliviano”, en *Revista de Ciencia Política*, volumen XXIII, N°1 67 – 98.

ROMERO BALLIVIÁN, S. (2006), “Análisis de la elección presidencial de 2005 en Bolivia”, en *América Latina Hoy* N°43, Ediciones Universidad de Salamanca, 31-61.

ROSTAGNOL, S. (2017), “El difícil camino de las mujeres en los partidos políticos”, *Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, 127-143.

VALDÉZ, A. (2007), “Sistema de partidos y gobernabilidad democrática en Bolivia (1985 – 2005)”, en *Revista Política y Estrategia*, N°107 – 2007, Bolivia.

ZEGARRA, H. (1993), “CONDEPA en el escenario político” en *Temas Sociales*, (17), 41-50.

Galli, Lucía (2024). “CONDEPA y su nueva forma de hacer política en Bolivia”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 133-153.

EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL FRENTE AMPLIO EN URUGUAY PARA LLEGAR AL GOBIERNO NACIONAL (1971-2004)

Cecilia Gallo

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

En octubre de 2004 el Frente Amplio logró la victoria electoral en primera vuelta con el 50,4% de los votos que le permitió acceder al poder ejecutivo nacional. Este hecho fue trascendental, ya que por primera vez el gobierno nacional de Uruguay quedó en manos, no solo de un partido proveniente de la izquierda, sino también de uno diferente de los dos partidos políticos tradicionales de Uruguay (el Partido Nacional y el Partido Colorado) que se habían turnado en el gobierno a lo largo de la vida política uruguaya desde el siglo XIX hasta el triunfo del Frente Amplio, con excepción de los períodos dictatoriales (Yaffé, 2013 A: 7). Este hecho se enmarca en el contexto latinoamericano de la primera década del siglo XXI en el que la mayoría de los países de América Latina estaban siendo gobernados por partidos políticos

de izquierda o centro-izquierda. Para analizar el ascenso de la izquierda en los países latinoamericanos hay que empezar por señalar lo obvio: que en todos los casos los partidos o movimientos de izquierda llegaron al poder de forma institucional, a través de procesos electorales. Es necesario resaltar la cuestión anterior ya que a lo largo de la historia los partidos y candidatos de izquierda no fueron exitosos en ganar las elecciones. Además, los porcentajes de votos por candidatos presidenciales de izquierda fueron significativamente mayores que el número de votantes que se identifican ideológicamente como tales. En este sentido, se hace necesario preguntarse por las estrategias de la izquierda para lograr encauzar a un electorado que no se considera como tal hacia el voto de sus partidos (Panizza, 2009: 77). En el presente trabajo se intentará responder la anterior cuestión en el caso concreto de Uruguay con el triunfo electoral del Frente Amplio y su llegada al poder nacional a más de 30 años de su fundación. Esta cuestión ha sido objeto de una variedad de explicaciones desde la academia. En primer lugar se encuentran aquellos que postulan la tesis demográfica: desde esta postura se entiende que el crecimiento de votos del partido se da gracias a una tendencia de cambio generacional, habiendo una correlación positiva entre el voto al Frente Amplio y los nuevos votantes (Lorenzoni y Pérez, 2013). En segundo lugar, otros investigadores, entre ellos De Armas (2009), plantean que en realidad el triunfo se dio gracias a la existencia de un electorado volátil que migró del bloque de partidos tradicionales hacia el Frente Amplio. En tercer lugar, se encuentran aquellos que lo explican a través de la izquierdización de la cultura política uruguaya, planteando que el triunfo se debería no solo al agotamiento de la representación de los partidos tradicionales sino también a un desplazamiento de la población uruguaya hacia la izquierda en términos de identificación ideológica (Moreira et al, 2010). Sin embargo, en este ensayo se hará foco en la tesis de la moderación ideológica del partido. El éxito electoral del FA se construyó de forma gradual. Desde su fundación, el partido nunca paró de crecer electoralmente, salvo durante la dictadura cívico-militar que gobernó desde 1973 a 1985, a pesar de que al principio solo aparecía como una fuerza minoritaria y de perfil más testimonial (Nantanson, 2009: 65). En este sentido, el desafío que se le presentaba era seguir con una propuesta política leal a las concepciones de izquierda pero sin ganar lugares importantes en el Estado o transformar su programa e ideales con el fin de obtener los votos de un electorado mayor que le permitiría convertirse en partido de gobierno.

Es así que se expondrá cómo análisis, teniendo presente las lecturas de Garce y Yaffé (2006), que el triunfo electoral del 2004 se debió a una moderación ideológica y programática. Es decir, que la construcción de la victoria se dio, por un lado, a través de una política de alianzas e incorporación de sectores y figuras progresistas exter-

nas; y, por el otro, a través de la adaptación del partido al electorado con el fin de lograr una mayor cantidad de votos. En este sentido, se buscará analizar la evolución programática, ideológica y organizativa desarrollada por el Frente Amplio desde su fundación en 1971 — cuando todas las familias de la izquierda, desde los partidos Comunista y Socialista hasta la Democracia Cristiana, se juntaron bajo el liderazgo de Líber Seregni— hasta el triunfo electoral del 2004 —que le posibilitó la presidencia de la nación a Tabaré Vázquez, el emergente líder del partido (Natanson, 2009).

Para el mencionado fin se tomará cómo marco teórico, en primer lugar, la propuesta realizada por Alcántara y Freidenberg (2001) en el texto “Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina”. En segundo lugar, se analizará un conjunto de investigaciones realizadas desde la Ciencia Política Uruguaya sobre la organización interna del Frente Amplio, la adaptación a lo largo de su historia y los factores que la posibilitaron.

2.1. La organización interna de los partidos políticos

Para analizar los cambios y continuidades realizados por el Frente Amplio con el objetivo de ganar más electores, se hace necesario entender la importancia de los estudios de la organización y funcionamiento interno de los partidos políticos. Es así que, Alcántara y Freidenberg (2001: 3) plantean la necesidad de pensar en las actividades que realizan los partidos políticos desde su organización interna para conquistar al electorado y ganar cuotas de poder, tanto en épocas no electorales como en momentos de campaña. Se postula también que las organizaciones partidarias son complejos sistemas que se comportan en ámbitos diversos y en los que actúan actores con intereses distintos.

Los autores también dividen dos ámbitos del partido. En primer lugar, se encuentra el interno, que comprende los individuos y grupos que integran el partido y también las estructuras, normas y organismos creados para tomar decisiones y dirigir la organización. En segundo lugar, se halla el ámbito externo, que se refiere al vínculo entre los partidos y su entorno y a las actividades desempeñadas por el partido en los espacios que actúa. Es así que para conocer cómo actúan los partidos hay que tener en cuenta, por un lado, la correlación de fuerzas internas y, por el otro, la situación externa que los condiciona (Alcántara y Freidenberg, 2001: 4).

A su vez, dentro del ámbito externo se pueden encontrar otras tres caras del mismo,

el partido cómo organización electoral, el partido cómo organización de gobierno y el partido cómo organización legislativa. A los fines de este trabajo se tomará en cuenta, mayormente, al partido cómo organización electoral. Se entiende que los partidos políticos se organizan con el fin de ganar elecciones, pues, entre todas las metas que un partido puede tener hay una común a todos: la de conseguir votos para llegar a lugares de poder dentro del Estado (Wolinnetz, 2007).

En un régimen democrático solamente se puede obtener poder político mediante la competencia electoral y eso es lo que hace que se generen estrategias dentro de cada partido para conseguir la mayor cantidad de votos y obtener cargos en el Estado. Alcántara y Freidenberg (2001: 6) plantean:

Para cumplir ese objetivo, los miembros del partido tienden a mirar hacia la sociedad como un todo, o al menos más allá del electorado potencial como la fuente principal de los apoyos. Su fuerza queda determinada por la cantidad de votos que lo respalden y ello coincidirá con sus vinculaciones con su entorno.

2.2. Evolución y adaptación partidaria

La cara del partido cómo organización electoral es la que explica la decisión del Frente Amplio de llevar adelante una nueva estrategia política para conseguir votos. Siguiendo a Garcé y Yaffé (2006: 88), las bases ideológicas, la estrategia política y el programa de gobierno del partido uruguayo experimentaron desde 1971 al 2005 un largo, lento y complejo proceso de transformación. Para analizar este proceso, el periodo mencionado se puede dividir en tres grandes subperiodos.

En primer lugar, se encuentra el frentismo fundacional, que va de 1971 a 1984. En cuanto a la ideología, es importante destacar que la mayoría de los grupos que integraban el Frente Amplio se consideraban marxistas y sus concepciones de cambio social se vinculaban a la revolución. Por otro lado, en cuanto al programa, este era una respuesta a la crisis económica y al avance del autoritarismo en el país, por lo que, a diferencia de la ideología, evidenciaba una preocupación por la democracia formal. Según los autores, estas cuestiones fueron concedidas y aceptadas por los sectores marxistas debido al contexto autoritario (Garcé y Yaffé, 2006: 90-91). En este sentido, se puede observar en esta primera etapa la influencia del contexto marcada por Alcántara y Freidenberg (2001), pues éste condicionó al partido a to-

mar una postura programática por la democracia formal por más de que sus bases ideológicas no la postulen. A pesar de eso, también es importante destacar, cómo mencionan Lorenzoni y Pérez (2013: 14), que el programa seguía conteniendo postulados de izquierda clásica, cómo son la nacionalización del comercio y la banca, la reforma agraria y la renegociación de la deuda a través de posturas antiimperialistas.

El segundo subperiodo comprende la etapa de transición democrática y va desde 1985 a 1994. Siguiendo a Garcé y Yaffé (2006: 96), durante los primeros diez años de la democracia restaurada el Frente Amplio atravesó un proceso de debate intenso sobre su ideología y programa. Por esta razón, los autores dividen el proceso en dos fases. En primer lugar, entre 1985 y 1989 se dió un debate ideológico entre los tres principales sectores de la izquierda de esa época. En este momento es relevante señalar, cómo mencionan Alcántara y Freidenberg (2001), la importancia de la organización interna de los partidos políticos y en este sentido, preguntarnos por quiénes y dónde se adoptan las decisiones estratégicas. Por un lado se encontraba el Partido para el Gobierno del Pueblo (PGP)¹ que sostenía que se debían tener metas menos ambiciosas en términos ideológicos, por lo cual proponían moderar el programa frentista con el fin de tender puentes hacia los sectores progresistas de los partidos tradicionales. Por otro lado, el Partido Comunista de Uruguay (PCU)² seguía considerando al Frente Amplio cómo el actor que debía lograr la revolución democrática, agraria y antiimperialista. Y en tercer lugar, en una posición intermedia, se encontraba el PS que postulaba la necesidad instaurar un programa alternativo al neoliberalismo menos ambicioso que el programa fundacional y trazar una alianza que incluyese a otros sectores políticos. Este debate culminó en 1989, tras un largo ciclo de Congresos Ordinarios y Extraordinarios del partido, con la aprobación del documento “Grandes líneas de acción política” que resolvía que no se podrían hacer alianzas con aquellos que no estuvieran dispuestos a suscribirse a un programa esencialmente frentista. Esta situación provocó la escisión del PGP y la creación del Nuevo Espacio (Garcé y Yaffé, 2006).

1. El Partido para el Gobierno del Pueblo fue un partido político socialdemócrata en Uruguay. Fue formado en 1962 por Zelmar Michelini, inicialmente como un grupo dentro del Partido Colorado. PGP era parte de la rama centrista del Frente Amplio y en las elecciones de 1984 el PGP fue el sector del Frente Amplio que recibió el mayor número de votos. En 1989 PGP se retiró del frente. En 1994 se fusionó con el Partido Colorado, pero varios de sus legisladores y miembros quedaron fuera. Algunos formaron Encuentro Progresista mientras que otros, encabezados por Rafael Michelini, formaron Nuevo Espacio (Martínez Pintos, 2020).

2. El Partido Comunista de Uruguay, fue fundado en 1920 como una fracción del Partido Socialista del Uruguay, en adhesión a la Revolución Rusa y la Tercera Internacional Leninista. Desde 1971 forma parte del Frente Amplio, de la cual es miembro fundador (Martínez Pintos, 2020).

Siguiendo la teoría de Alcántara y Freidenberg (2001), se puede ver en el trasfondo de este debate la discusión entre aquellos (PGP y PS) que miraban al escenario político cómo un todo con el que tenían que negociar y ceder con el fin de conseguir apoyo político de sectores más amplios, y entre aquellos (PCU) que preferían seguir manteniendo los postulados ideológicos y programáticos originales por más de que eso les hiciera contar con un electorado más acotado.

La segunda etapa del subperiodo de la transición se caracterizó por el derrumbe del sistema socialista a nivel internacional y la victoria del Frente Amplio en las elecciones municipales de Montevideo de 1996. La primera cuestión conmovió a las bases, ya que, estas habían estructurado su pensamiento y práctica política en base a la ideología marxista. Mientras que la segunda cuestión hizo enfrentar a la izquierda por primera vez a la necesidad de administrar y gobernar con recursos escasos. Además, el intendente Tabaré Vázquez buscó no quedar preso de posiciones ideológicas y gobernó con pragmatismo. Estos dos hechos generaron que la mayor parte de la izquierda termine de abandonar una gran parte del paquete ideológico y programático característico del frentismo fundacional (Lanzaro, 2000).

El éxito en las elecciones y en la gestión del Frente Amplio en Montevideo es una cuestión que se debe tener en cuenta. Es aquí donde se vió por primera vez la cara del partido cómo organización de gobierno. El acceso a la intendencia de Montevideo cómo un espacio importante de poder dentro de Uruguay puede ser entendido cómo un nuevo factor para explicar la búsqueda de adaptación partidaria. Pues, Alcántara y Freidenberg (2001: 7) postulan: “en tanto el partido se acerque más al poder, tenderá a ser controlado en mayor medida por los políticos buscadores de cargos públicos y pretenderá beneficiarse con toda clase de apoyos, independientemente de su origen y los compromisos que ellos generen”.

La cuestión anterior se ve marcada al finalizar el segundo subperiodo con el Congreso de 1994 donde se aprobó la creación del “Encuentro Progresista - Frente Amplio” en vista de las elecciones presidenciales de ese año. Este fue impulsado por Tabaré Vázquez al tomar contacto con otros sectores progresistas con el fin de impulsar un programa alternativo al neoliberalismo que lo lleve a él cómo candidato presidencial. La negociación fue exitosa porque mantuvo conformes a todos los sectores pero profundizó el proceso de adaptación, siguiendo a Garcé y Yaffé (2006: 103) es posible señalar:

(...) el FA mantuvo su programa, esencialmente fiel al frentismo fundacional, pero, al incorporarse al EP, adhirió simultáneamente a un programa electoral

sensiblemente más moderado, en el que ya no figuraban las formulaciones más drásticas respecto a la deuda externa y al sistema financiero.

En este sentido, también se puede ver lo planteado por Alcántara y Freidenberg (2001), en cuanto a que la toma de decisiones partidarias se da en conjunto entre las estructuras institucionales, las normas y los líderes del partido. Pues, el proceso de negociación para que se conforme el EP-FA se dió en el marco institucional y normativo del partido a través de la realización de un congreso y la designación de una comisión especial que, por mayoría simple, aprobó la creación del EP. Al mismo tiempo, este fue impulsado por el emergente líder del partido, Tabaré Vázquez, al establecer acuerdos tanto con sectores progresistas externos como con las fracciones internas del FA (Yaffe, 2013 A).

Siguiendo a Garcé y Yaffé (2006), la instauración del EP-FA abrió el tercer subperiodo denominado como progresismo que va de 1995 a 2004. En esta etapa, se incorporaron al programa político todos los cambios ideológicos que se habían dado en el subperiodo de la transición. Este hecho se expresó institucionalmente con la creación en 1999 de la “Comisión Integrada de Programa” del EP-FA y la disolución de los ámbitos programáticos propios del FA. Posteriormente, el trabajo de esta comisión fue aprobado por el último congreso del FA anterior a las elecciones del 2004 y constituyó la base del programa de gobierno presentado en la campaña electoral de ese año.

En esta etapa es donde se ve claramente la cara del partido como organización electoral propuesta por Alcántara y Freidenberg (2001). Pues, la moderación del programa del FA y la convergencia hacia el del EP se realizaron con el objetivo específico de conquistar el gobierno. Desde el entorno de Tabaré Vázquez se comprendía que la victoria electoral se podría conseguir solamente cuando el programa de la izquierda uruguaya se hubiera moderado lo necesario para conquistar al electorado de centro y al del interior del país (Garcé y Yaffé, 2006: 104). Esta última cuestión es relevante, ya que, el FA fue desde sus inicios una fuerza urbana concentrada principalmente en Montevideo. Pero desde 1994, con el objetivo de llegar al gobierno el partido no solamente buscó moderarse en términos ideológicos, sino también comenzar a componer ofertas políticas de proyección nacional. En este sentido, se debía superar el cosmopolitismo y universalismo para pasar a realizar propuestas concretas y de vocación general con respecto a toda la realidad del país. Además, se buscó conectar la identidad partidaria con las tradiciones nacionales emblemáticas realizando

una relectura de la historia de la nación (Lanzaro, 2014: 257). Es así que el FA se ubicó cómo el continuador histórico de los dos grandes proyectos de transformación económica y social de la historia de Uruguay: por un lado, la revolución artiguista del siglo XIX y, por el otro, el reformismo batllista colorado del siglo XX (Yaffe, 2013 A).

Cómo se vio anteriormente y cómo proponen Alcántara y Freidenberg (2001), para estudiar las decisiones tomadas por los partidos es necesario preguntarse acerca de quiénes influyen y motivan las mismas. En este sentido, para facilitar el cambio de programa y estrategia del FA fue central la figura de Vázquez. El nuevo líder montó al menos dos operativos políticos de importancia. Primero, trabajó para ampliar las alianzas de la izquierda uruguaya, tanto con la negociación para crear el EP cómo la Nueva Mayoría. Y en segundo lugar, una vez que fue designado presidente del partido en sustitución de Líber Seregni, fomentó un proceso sistemático y sostenido de actualización ideológica que culminó en el Congreso Ordinario del 2001 (Lanzaro, 2000). A su vez, la estrategia que combinó la actualización ideológica, la búsqueda de aliados y la moderación programática fue acompañada por una oposición firme frente al Partido Nacional y el Partido Colorado. Es así que logró conjugar el electorado del centro ideológico y el descontento ciudadano que había sido potenciado por las reformas estructurales llevadas adelante por los partidos tradicionales desde 1999 y por la crisis económica y social con su punto culminante a mediados del 2002 (Moreira et al, 2010).

En consecuencia, durante el gran periodo que va de 1971 hasta 2004 se dio una pérdida de los contenidos de izquierda en el programa político del Frente Amplio y al mismo tiempo una adaptación hacia los contenidos del centro o progresistas. Sin embargo, siguiendo a Lorenzoni y Pérez (2013: 17), esta pérdida de contenidos de izquierda no fue homogénea sino que se desarrolló sobre todo en las cuestiones económicas mientras que en el plano social la mayoría de las posturas siguieron siendo consideradas de izquierda.

En este sentido, se hace evidente el pasó de un programa frentista, propio de los inicios del partido, a uno progresista, realizado para conseguir la victoria electoral. La etapa frentista se caracterizó por el impulso de postulados estatistas relacionados con la defensa de la planificación económica, la nacionalización del comercio y la banca, la reforma agraria y la renegociación de la deuda externa con posiciones antiimperialistas contrarias a los EE.UU. Mientras que la fase progresista, debido a que perdió los postulados más radicales de los primeros programas, se caracterizó por el énfasis en temas redistributivos y en la igualdad y la justicia social. Asimismo,

fue apoyado por una concepción participativa de la democracia y la importancia del Estado en la regulación de los mercados y en la provisión de bienestar. En este sentido, incluyó un mayor peso de los postulados calificados como temas neutros o de centroizquierda (Lorenzoni y Perez, 2013: 14).

Gracias a esta estrategia de adaptación, el FA amplió su capacidad para obtener el apoyo de una parte significativa del electorado de centro, históricamente opuesto a votar opciones de izquierda, al mismo tiempo que mantuvo los votos propios de su espacio. De este modo, se posicionó como la única opción alternativa a los partidos tradicionales y logró conseguir en las elecciones presidenciales del 2004 la victoria electoral en primera vuelta y por mayoría absoluta (Lanzaro, 2014).

2.3. Factores que hicieron posible la adaptación partidaria

En este último apartado se buscará desarrollar los factores y condiciones que hicieron de la adaptación ideológica y partidaria del Frente Amplio una estrategia posible y eficiente para llegar al poder ejecutivo nacional. Se entiende que el principal factor que potenció esta estrategia fue que el Frente Amplio pudo mantener la cohesión partidaria a lo largo del proceso. Siguiendo a Kestler, Krause y Lucca (2017: 198), la cohesión partidaria es entendida como la falta de rupturas mayores y la adhesión a las normas establecidas, tanto las formales como las informales, por parte de los grupos y afiliados del partido. Para los autores esta se da gracias a tres condiciones: la existencia de un liderazgo, la formalización de la disputa interna con reglas formales estables y la existencia de un enemigo común.

En este sentido, el Frente Amplio demostró a lo largo del proceso de adaptación contar con estas tres características. En primer lugar, siguiendo a Yaffé (2013 A: 75), el liderazgo de Vázquez gestó una coalición renovadora que pudo contar con una base de apoyo interno para realizar las propuestas de transformación partidaria, es decir, logró articular una coalición intrapartidaria renovadora.

Además, el orden interno del Frente Amplio fue posibilitado por el alto grado de institucionalización y de estructuras normativas del partido. Las decisiones siempre se tomaron en el marco de los Congresos ordinarios o extraordinarios y, a su vez, la Ley de Lemas que dispuso las internas obligatorias ayudó a resolver los conflictos internos de forma exteriorizada (Kestler, Krause y Lucca, 2017: 212). En cuanto a esto es importante mencionar que durante el proceso de adaptación el FA se convirtió

en el partido más fraccionalizado del sistema político uruguayo pero esta situación logró equilibrarse gracias a las instituciones y normas de la estructura partidaria. Siguiendo a Yaffé A (2013: 91):

A pesar de ser un partido altamente institucionalizado, la gran mutabilidad en las relaciones de fuerzas entre fracciones y coaliciones de fracciones en un contexto de notable fraccionalización, configuró un escenario dinámico en el que los sectores y líderes renovadores tuvieron la posibilidad de vencer las resistencias internas a la transformación.

A esta dinámica institucionalizada de la competencia interna y el surgimiento del liderazgo de Tabaré se le sumó el factor de mantenerse claramente opuestos y presentarse como única alternativa a los partidos tradicionales uruguayos, lo cual fue potenciado por el contexto de crisis económica y deterioro social durante sus gobiernos que se tradujo en una mala evaluación por parte de la ciudadanía (Lanzaro, 2000). Es así que, la combinación de estos tres factores permite explicar el avance de la renovación y de la estrategia orientada a la maximización electoral (Yaffé, 2013 A).

Por último, para complementar los tres factores presentados por Kestler, Krause y Lucca (2017), se puede hacer un análisis del partido como organización voluntaria de miembros. Siguiendo a Alcántara y Freidenberg (2001: 9), al mismo tiempo que el partido actúa como organización electoral, también es una organización compuesta por afiliados y militantes. Para los autores, si bien siempre se busca ganar las elecciones, los afiliados no van a estar de acuerdo en sacrificarlo todo para conseguir cargos en el Estado. Es por eso que se hace interesante analizar cómo el Frente Amplio pudo llevar adelante el proceso de moderación ideológica y programática sin por ello perder apoyo de sus bases y afiliados. En este sentido, Yaffé (2013 B) expresa que los partidos políticos no se agotan en la dimensión estructural y organizativa, sino que también suponen un sentimiento de pertenencia, una identidad que vincula a sus afiliados, militantes y seguidores a la estructura partidaria.

Por eso, un factor que se le suma a los expuestos anteriormente es el fortalecimiento de una tradición partidista que condujo a que la mayor parte de sus miembros pasen a considerarse como frenteamplistas más allá de su cercanía a otras facciones del partido. Esta tradición se construyó en base a una lectura del pasado cercano. El Frente Amplio logró transformar la historia del periodo autoritario instaurado entre 1973 y 1986 en un recurso de identificación marcado por la experiencia de persecu-

ción y resistencia del partido. Así, al finalizar la dictadura, el FA dispuso de una historia reciente e intensa que albergaba un conjunto de mártires, acontecimientos y símbolos que se instalaron dentro de la memoria y militancia del partido (Yaffé B, 2013: 21).

Esta historia legitimó las decisiones políticas y reforzó el sentimiento de pertenencia a la colectividad partidaria a través del establecimiento de conmemoraciones y prácticas de carácter simbólico. Así, los actos de la dictadura fueron incorporados como legado político propio del Frente Amplio que, sumado a los elementos provenientes del pasado nacional y de las tradiciones partidarias de blancos y colorados, terminó de conformar una tradición e identidad frenteamplistas reforzadas (Yaffé B, 2013: 22).

De este modo, el reforzamiento del sentimiento de pertenencia y unidad en el partido por sobre la diversidad de facciones, disminuyó las diferencias y la posibilidad de un quiebre interno al plantearse un proceso de transformación partidaria. La tradicionalización facilitó la adaptación al asegurar el mantenimiento de la adhesión al partido en el periodo en que este cambiaba sus contenidos ideológicos y programáticos.

3. Conclusión

Para concluir, se expone que la reconstrucción del proceso de evolución y adaptación partidaria que llevó al Frente Amplio a obtener el poder ejecutivo nacional en las elecciones de 2004 da cuenta de que el partido logró establecer un equilibrio entre dos de las caras partidarias presentadas por Alcántara y Freidenberg (2001), es decir, entre el partido como organización electoral y el partido como organización voluntaria de miembros. Si bien durante el proceso siempre se tuvo como objetivo captar un electorado mayor para conseguir los votos necesarios para llegar al poder, el partido no dejó por fuera del proceso a sus bases de afiliados. Pues, cómo se demostró en el desarrollo del ensayo, la transformación ideológica y programática no se impuso desde arriba y de un momento para el otro, sino que fue debatida de forma institucionalizada y democrática por los participantes del partido, a través de los procesos establecidos normativamente y de manera gradual. Además, durante el desarrollo de la transformación partidaria se terminó de consolidar una tradición frenteamplista que le otorgó a los afiliados y seguidores del partido un sentimiento de pertenencia hacia el mismo.

También, se demuestra la importancia del estudio de los procesos y actividades internas propias de los partidos políticos, el proceso de adaptación demostró que los

partidos políticos son complejos sistemas en los que el entramado interno -comprendiéndose cómo tal su estructura normativa e institucional, sus líderes, sus fracciones y sus afiliados- explica una gran parte de las decisiones, estrategias, comportamientos y objetivos de la organización dentro de un periodo de tiempo determinado. De este modo, en el ensayo se buscó vincular la propuesta teórica presentada por Alcántara y Freidenberg (2001) con la demostración empírica del proceso de adaptación partidaria presentado desde una parte importante de la Ciencia Política uruguaya.

Por último, el proceso de adaptación del Frente Amplio hace ver a los partidos políticos como instituciones que, si bien tienen como objetivo ganar las elecciones para conquistar espacios de poder en el Estado, la forma en la que lo hacen termina constituyéndolos indirectamente en un reflejo de lo que la mayoría de la sociedad busca y anhela. En este sentido, la adaptación partidaria descrita en el ensayo demuestra que el Frente Amplio logró entender lo que la sociedad uruguaya pretendía del Estado y de la política en un contexto de crisis económica y social, es decir que consiguió representar y encauzar los intereses sociales de su país. De este modo, se revaloriza el rol de los partidos políticos como instituciones necesarias para intermediar entre el Estado y la sociedad y se concluye que dentro del régimen democrático las funciones de articulación de intereses, de socialización, de representación y participación siguen siendo llevadas adelante por instituciones políticas partidarias.

4. Bibliografía

ALCÁNTARA SÁEZ, M.; FREIDENBERG, F (2001), "Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina" en *Partidos políticos de América Latina: Cono Sur*, España, Ediciones Universidad de Salamanca.

GARCÉ, A.; YAFFÉ, J (2006), "La izquierda uruguaya (1971-2004): ideología, estrategia y programa" en *América Latina Hoy*, Montevideo, Vol. 44, pp. 87-114.

KESTLER, T.; KRAUSE, S.; LUCCA J. B.; (2017), "Cohesión, éxito o fracaso de los nuevos partidos políticos en América del Sur" en *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, diciembre de 2017, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., pp. 195-221.

DE ARMAS, G.; (2009), "Debilitamiento del efecto demográfico y consolidación de un nuevo sistema de partidos: evidencia de las elecciones 2009 en Uruguay" en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, Montevideo, Vol. 18, N°1, pp. 41-63.

LANZARO, J.L.; (2014), “Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos 1910-2010”, *Cuadernos Del Claeh*, Vol 33, N° 100, pp. 37-77.

LANZARO, J.L.; (2000), “El Frente Amplio: un partido de coalición, entre la lógica de oposición y la lógica de gobierno” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, Vol 12, pp. 35-68.

LORENZONI, M.; PÉREZ, V. (2013), “Cambios y continuidades de la izquierda en Uruguay: Un análisis a partir de las propuestas programáticas del Frente Amplio 1971-2009” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, Vol 22, N° 1, pp. 81-102.

MARTINEZ PINTOS, G. (2020), “Organizaciones partidarias en Uruguay: caracterización y estructura interna (2005-2020)” [Tesis de grado. Facultad de Ciencias Sociales (FCS)], Universidad de la República (Udelar), Montevideo, Uruguay.

MOREIRA, C.; SELIOS L.; LIZBONA A. (2010), *Cuestiones de agenda: La renovación programática del Frente Amplio: una mirada al proceso reciente (2004-2009)*, Editorial Udelar, FCS-ICP: FESUR, Montevideo, Uruguay.

NATANSON, J. (2009), *La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.

PANIZZA, F. (2009), “Nuevas izquierdas y democracia en América Latina”. *Revista CIDOB d’afers internacionals*. N°. 85-86, pp. 75-88.

WOLINNETZ, S.B. (2007), “Más allá del partido catch-all: enfoques para el estudio de los partidos en las democracias contemporáneas” en *Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos*, España, Trotta: Fundación Alfonso Martín Escudero.

YAFFÉ, J. (2013 A), “Competencia interna y adaptación partidaria en el frente amplio de Uruguay” en *Revista Perfiles Latinoamericanos*, Vol 41, N° 4, pp. 71-94.

YAFFÉ, J. (2013 B), “Consolidación y transformación partidaria. Institucionalización, liderazgo y capacidad de adaptación en el Frente Amplio de Uruguay” en *Revista Iberoamericana*, Vol 13, N° 50, pp. 7-26.

Gallo, Cecilia (2024). “Evolución y adaptación del Frente Amplio en Uruguay para llegar al gobierno nacional (1971-2004)”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 154-166.

LA UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE EN CHILE: DEL GREMIALISMO EN LA DICTADURA A SU FUERZA POLÍTICA EN DEMOCRACIA

Manuela Losada

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

El presente trabajo analiza los orígenes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como un partido surgido durante y en el seno de la dictadura militar chilena (1973/1990) de cara a la apertura democrática. De esta manera, tendremos en cuenta: los orígenes del partido con el Movimiento Gremialista¹; las principales premisas y acciones de su fundador Jaime Guzmán, la participación acérrima del movimiento (luego partido) durante el régimen pinochetista, el comportamiento electoral al momento de la transición a la democracia en Chile y los dos primeros periodos electorales (1989-1999) luego del retorno de la democracia. En este sentido, partiremos

1. El término “gremialista” se refiere al Movimiento fundado por Jaime Guzmán en los años sesenta en la Universidad Católica de Chile, que buscaba luchar contra la creciente politización de la vida universitaria; es considerado como el origen ideológico de la UDI. A su vez, dicho movimiento, se constituyó como el principal grupo de poder civil participante de la dictadura militar chilena.

de la hipótesis que la UDI logró consolidarse como movimiento y partido, a partir de los recursos brindados y mecanismos legales impuestos por la dictadura militar. Es así como, en el primer apartado, daremos cuenta de la participación e implicancia del movimiento gremialista en el régimen, estableciendo contrapuntos con la teoría sobre los orígenes de los partidos de Manuel Alcántara (2001). Posteriormente, en el segundo apartado, trabajaremos en el funcionamiento de la UDI a partir de su fundación, sus acciones durante la transición pactada y su participación en las elecciones de 1989 y 1999. En todos estos apartados, intentaremos demostrar nuestra principal hipótesis y establecer las relaciones articuladas entre la UDI y la dictadura militar chilena.

2. Los orígenes de la Unión Demócrata Independiente

La historia de la UDI no se explica sin dar cuenta de quien fue su principal ideólogo: Jaime Guzmán Erraruz. Él se erige como el principal dirigente del Movimiento Gremialista de la Universidad Católica, donde se encuentran los primeros antecedentes de la UDI. Dicho movimiento se regía a partir de los siguientes principios: corporativismo en lo económico y en lo político, conservadurismo en lo moral y despolitización de las universidades y de los órganos intermedios de la sociedad. De esta manera, sus principales opositores en los inicios del movimiento eran: el Movimiento reformista, la Izquierda Marxista y al Centro Político Socialcristiano (Hunneus, 2001).

Con la intensificación del conflicto político en 1973, el Movimiento Gremialista se constituyó como uno de los principales opositores civiles en la lucha política contra el gobierno de Unidad Popular. Inclusive, llegaron a esbozar fuertes críticas contra el sistema democrático chileno exigiendo la renuncia del presidente y la intervención de las Fuerzas Armadas.

“En ese marco, no fue de extrañar que, tras el golpe de Estado, una de las primeras acciones de la Junta Militar fue convocar al líder de los gremialistas, el joven de 27 años Jaime Guzmán, a prestar colaboración en tres tareas: participar de la elaboración de un proyecto constitucional, organizar a la juventud y articular la propaganda” (Muñoz Tamayo, 2018: 107).

Por otro lado, el principal dirigente del gremialismo, Jaime Guzmán, dio cuenta al interior del movimiento, la importancia que tenían las bases sociales para poder

transformarse en una fuerza política considerable a lo largo del país. Es a partir de allí, que el movimiento va a buscar articular alianzas en los sectores populares, generando una red de relaciones con diferentes áreas: el mundo universitario, el rol de la mujer y la juventud. En tal sentido, logró disputarle las bases a la izquierda y buscó formular una nueva derecha contraponiéndose a la antigua derecha elitista. Este proceso, da cuenta de la búsqueda por parte del gremialismo de conformar una estructura centralizada en pos de una penetración territorial y expandirse desde el centro hacia diferentes regiones. Inclusive utilizó el aparato del Estado, creando subestructuras sectoriales llamadas comités, donde el más importante de ellos fue el Comité Poblacional. Este comité va a llegar ser el Departamento Poblacional a partir de su crecimiento y desarrollo, funcionando como un instrumento clave para cooptar adeptos y generar una red de intercambio entre los dirigentes del gremialismo y los sectores populares:

“...en la creación de la Unión Demócrata Independiente se dio lo que Panebianco (1990,2009) denominó “penetración territorial”, ya que son los dirigentes históricos, apoyados en las redes que fueron creando siendo miembros de la administración del Estado en dictadura, quienes captan adherentes.” (Molina Vera, 2015: 66).

Por ello, siguiendo a Alcántara (2001), podríamos dar cuenta de que los orígenes de la UDI detentan un origen más capitalino que nacional, ya que, el impulso surge desde la capital y es posterior la extensión hacia el resto del país. Sin embargo, Alcántara da cuenta de un alto porcentaje (37 %) de penetración territorial, que podríamos plantear que coincide con los intentos de expandirse hacia otras regiones gracias a la lógica de los comités.

En esta misma lógica, podemos evidenciar que el movimiento gremialista se concentró en aquellas áreas del gobierno pinochetista que le permitieran crear un poder hegemónico al momento de que la dictadura militar terminase. Desde la Secretaría General de Gobierno, Guzmán era el encargado de los medios de comunicación y de la movilización de los apoyos de la población. Esto le permitió el acceso a los principales medios del país lo cual supuso la posibilidad de construir su prestigio y de promover su liderazgo. A su vez, los gremialistas se hicieron cargo de la Secretaría Nacional de la Juventud, participaron de los gobiernos regionales y locales, integraron la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y colaboraron con los *Chicago Boys* en la diagramación de las reformas económicas.

Este rol activo que tuvieron los gremialistas en las reformas económicas les permitió configurar un nexo con los principales empresarios del país, especialmente, con aquellos que surgieron a partir de las privatizaciones.

Asimismo la participación y gobierno de la alcaldía de diversas municipalidades le significó un mayor contacto con los ciudadanos donde, detentando nuevas responsabilidades otorgadas por el gobierno, se les proporcionó mayores recursos económicos destinados a prácticas clientelísticas. Es así como, los alcaldes lograron determinar relaciones políticas, que le sirvieron en la ampliación de las bases sociales del Movimiento Gremialista. (Hunneues, 2001).

Además, Guzmán tuvo una gran influencia a través de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución en la construcción del andamiaje institucional de la democracia protegida y autoritaria, establecida en la Carta Fundamental de 1980. En dicha comisión, logró introducir sus principales ideas que quedaron reflejadas en la Constitución instaurada: la tutela militar, el pluralismo limitado, las restricciones al rol de los partidos y el presidencialismo sobredimensionado. (Martínez Mejía y Cardoso Ruiz, 2018)

En este punto, tal como lo hemos mencionado anteriormente, una de las principales tareas encomendadas por el régimen a los gremialistas es la promoción e implementación de políticas que permitan captar a la juventud, garantizando el apoyo de dicha población al régimen a través de la Secretaría Nacional de la Juventud. El gremialismo, en ese momento, era el principal grupo político de derecha en el país que lograba dirigir muchas de las principales Federaciones de Estudiantes y los Centros de Alumnos. De esta manera, Guzmán promovió los cuadros jóvenes gremialistas en la dirección de la Secretaría Nacional de la Juventud, un organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno. A su vez, Guzmán, fue el encargado de la formulación del discurso de Pinochet hacia la juventud.

Muñoz Tamayo (2018) sopesa la importancia que tuvo la juventud como un grupo objetivo de especial interés durante la dictadura, y la cuestión generacional en el discurso gremialista. La Secretaría de la Juventud tenía como objetivo captar el apoyo juvenil, trabajando de manera coordinada con las organizaciones de jóvenes, promoviendo el desarrollo de actividades deportivas y culturales:

“Su estructura superior constaba del secretario nacional, que fue siempre un destacado dirigente de la FEUC, un Subsecretario Nacional y seis direcciones, que eran organizaciones juveniles, comunicaciones, programas y actividades,

capacitación, administración y coordinación provincial. Su organización territorial se extendía a lo largo del país, con una secretaría en cada una de las provincias y en las principales comunas, las cuales trabajaban en forma estrecha con los alcaldes y las juntas de vecinos” (Hunneus, 2001: 23).

En tal sentido, podemos notar que la secretaría tenía por objetivo, captar el apoyo juvenil y transformarlo en un elemento de vigor para el régimen, acentuando el carácter militante de la reconstrucción nacional.

De esta manera, la derecha gremialista basó su relato en torno a la problemática generacional aplicada en su experiencia, buscando cumplir una función identitaria con el movimiento, postulándose a sí mismos como los “jóvenes del gobierno” y poder articular así un imaginario político a partir de la juventud. Durante 1975, desde la Secretaría Nacional de la Juventud se creó el Frente Juvenil de Unidad Nacional; este funcionó como una herramienta de organización y movilización juvenil en apoyo al régimen, a su vez que suponía una acción propagandística. El mismo frente, convocaba militantes pero se negaba a su carácter político, ya que, su propósito decía ser formular una actitud patriótica para enfrentarse a los ataques del “marxismo internacional” (Muñoz Tamayo, 2018)

Asimismo, siguiendo a Carlos Hunneus (2001), podríamos decir que el gremialismo se constituyó a partir de una doble lealtad: una de carácter externo, referida al régimen militar y al respaldo al general Pinochet, incluso sus excesos y delitos cometidos; y, otro de tipo interno, que da cuenta del ideario político desarrollado por Jaime Guzmán y que supuso una cohesión organizativa y lealtad interpersonal.

Hacia 1983, en un contexto de apertura forzada por la crisis económica y social, y en línea con la futura transición a una democracia según el enfoque de la naciente Constitución, los gremialistas anunciaron su conformación como fuerza política creándose la llamada Unión Demócrata Independiente, que convocaba a los independientes y aupaba el protagonismo juvenil (Muñoz Tamayo, 2018).

En otro aspecto, siguiendo a Alcántara (2001), podemos plantear que la fuente de la UDI es de carácter reactivo, ya que, logramos dilucidar que el mismo se erige a partir del propósito de querer reivindicar un pasado, nada lejano, como es el régimen dictatorial, y continuar con su legado. A su vez, postulamos de acuerdo a esta misma teoría, que tanto las Fuerzas Armadas, como así también, el gremialismo,

corresponden a dos motivaciones exógenas que ha tenido la UDI en el momento de su conformación, ya que se presentaron como los principales patrocinadores de dicha fuerza política. De acuerdo a los tipos de liderazgos originarios que propone el autor, entendemos que la UDI tiene un origen civil; sin embargo, no podemos omitir, que existió una relación casi que de dependencia, con actores militares de gran relevancia al momento de su origen.

3. La Unión Demócrata Independiente constituida como partido político

Ante la crisis económica y social vivida en Chile en 1983, el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, anunció la política de apertura. Dicha medida suponía una expansión de la arena política dando cuenta de un resurgimiento de los partidos. De esta manera, el plan de Guzmán se verá truncado, ya que esperaba que a la hora de que los militares dejen el gobierno, el gremialismo sea la única fuerza consolidada en condiciones de enfrentar las elecciones. Sin embargo, frente a la configuración de un contexto inesperado, el 23 de septiembre de 1983 Guzmán decide transformar su movimiento en un partido. Como primera medida importante, notamos un intento por incorporar al partido a los principales colaboradores del régimen como por ejemplo Sergio Fernández, ex ministro de Trabajo y Titular del Interior, y en ese momento, presidente de Estudios de las Leyes Políticas, un hombre que suscitaba la confianza del general Pinochet. (Rubio Apiolaza, 2015)

Frente a la alianza de la oposición democrática y el corto tiempo que los distanciaba del plebiscito en el año 1987, el espectro de la derecha en Chile decide unirse a partir de la fundación de un único partido: Renovación Nacional (RN). Dicho partido estaba conformado por: Movimiento de Unión Nacional, Frente del Trabajo y Unión Demócrata Independiente. Sin embargo, esta alianza derechista no duró mucho, ya que se quebró al cabo de un año. A mediados de 1988, como consecuencia de una fuerte disputa política por el control de RN, numerosos líderes de la UDI fueron sancionados y expulsados, entre ellos, Jaime Guzmán, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de vice-presidente de RN. Esta escisión da lugar a la UDI para diferenciarse desde un inicio de RN al apoyar fuertemente al general Pinochet como candidato para el plebiscito de 1988. Las tensiones que surgían del apoyo de la candidatura de Pinochet, o de la oposición de la candidatura y, por ende, el regreso de los militares a los cuarteles; conformaron el puntapié de la disolución de la alianza. (Joigant y Navia, 2003)

Por otro lado, para entender el devenir de la UDI como partido debemos analizar la transición pactada llevada a cabo en Chile. En este punto, siguiendo a Martínez Mejía y Cardozo Ruiz (2017), los acuerdos entre el régimen militar y los partidos políticos se tornaron elitistas y poco representativos, se acotaron a acuerdos superficiales donde quedaron relegadas cuestiones relevantes tales como: los derechos humanos, las reformas constitucionales y la subordinación de los militares al poder político civil. En este mismo sentido, la naciente democracia protegida que fue diseñada por Jaime Guzmán e implementada por el régimen pinochetista, constaba de mecanismos legales que convertían a las Fuerzas Armadas en tutoras del gobierno civil y garantes de la institucionalidad, inclusive con presencia en el Congreso Nacional con nueve senadores designados y vitalicios.

Si nos enfocamos en las motivaciones electorales, y en la manera en que se presenta la UDI en la ciudadanía en 1989, veremos que el candidato elegido por la derecha fue un independiente: Hernán Buchi (ex Ministro de Hacienda de Pinochet). El mismo fue apoyado por la UDI y posteriormente por RN a través de la alianza “Democracia y Progreso”. La alianza obtuvo el 29.40 % erigiéndose como segunda fuerza de la contienda electoral. A su vez, en un contexto de sistema electoral binominal, es pertinente comentar que la UDI se enfrentó a una doble competencia: contra los candidatos de la Concertación y contra los candidatos de RN. En una búsqueda compleja de captar al electorado, daremos cuenta de una intención por parte de Guzmán, de mantener la lealtad con Pinochet, asumiendo a su vez, una distancia con el atropello de los derechos humanos durante la dictadura. En esta búsqueda, Guzmán, sin alejarse de una continuidad del régimen y en búsqueda del voto pinochetista, realizó una jugada electoral acusando al general Manuel Contreras (ex director de la DINA), por las “arbitrariedades cometidas” durante el régimen militar (Hunneus, 2001).

En otra instancia, en las elecciones parlamentarias del año 1989, la UDI tomó la decisión de presentar a Jaime Guzmán como candidato a senador de la Región Metropolitana y lograr un escaño a cargo del mismo en la Cámara Alta. En este punto, en las elecciones parlamentarias, la derecha chilena logró superar el 40% en la composición de ambas cámaras, donde RN, el otro partido derechista, obtuvo un margen de distancia con respecto a la UDI en la repartición de bancas. (Garreton, 1990)

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, es pertinente destacar, que la ley electoral, impuesta por el régimen militar hizo posible que Guzmán logre un escaño a pesar de haber obtenido menos votos que cada uno de los dos candidatos de la Concertación, ya que, dicha fuerza política no logró doblar al bloque derechista.

Frente a la asunción de Guzmán en el Senado, el mismo, realizó una jugada política muy audaz que ayudó a la consolidación de la UDI en las *instituciones*: el dirigente negoció con el Senador del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés, asumir la presidencia del senado a cambio de una mayor participación de la UDI en las comisiones. Lo mencionado da cuenta de cómo, un mecanismo instaurado durante la dictadura en la Constitución de 1980, resultó de gran importancia para que la UDI se consolidara como partido en la democracia.

Por otra parte, en las elecciones de diputados de 1989, logramos establecer una estrecha relación, y una línea de continuidad, con las acciones llevadas a cabo durante el gremialismo en dictadura. En el primer apartado, dimos cuenta de la importancia que tenían los gobiernos regionales y las alcaldías para los gremialistas. En esta instancia, analizando las elecciones parlamentarias de 1989, podemos decir que el sustento político obtenido por parte de los gremialistas en los gobiernos locales se vio reflejado en los resultados electorales de la Cámara de Diputados. En tal sentido, más de la mitad de los diputados de la UDI electos, han concluido un mandato como alcaldes durante la dictadura militar (Molina Vera, 2015).

En otro orden de cuestiones, a poco tiempo de la restitución de la democracia, Jaime Guzmán fue asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La tarde del 1 de abril de 1991 Guzmán fue alcanzado por diversos disparos a la salida de la Universidad Católica de Chile, luego de dictar clases de Derecho Constitucional. Este hecho supuso un hito importante para la historia de Chile, ya que, da cuenta de manera explícita las tensiones vividas en Chile, y una continuidad, respecto a la dictadura, en cuanto al escenario político violento, una vez ya restituida la democracia. En cuanto al desarrollo de la UDI como partido, lograron sortear las dificultades que supuso la muerte de su principal líder y demostraron fortaleza como organización. De esta manera, continuó siendo una fuerza política de envergadura y logró resolver la cuestión sucesoria gracias a la cohesión que representaban sus principales dirigentes.

Por otro lado, en cuanto al periodo electoral de 1999, la UDI logró obtener un mayor caudal de votos, a su vez que supo acortar su brecha con RN. En este punto, es de destacar la performance que llevó a cabo la UDI a partir de erigirse como la segunda fuerza más votada del país, obteniendo una distancia de tan solo 31.142 votos frente al candidato de la Concertación. El entonces candidato de la UDI, Joaquín Lavín, explica una característica que le es inherente al gremialismo: el apoyo político a partir de una relación más directa con la ciudadanía en las alcaldías (Lavín fue un exitoso

alcalde reelecto con el porcentaje más alto de todo el país: 70%). Siguiendo con el análisis de la figura de Lavín, como principal exponente de la UDI en este periodo, podemos evidenciar otras cuestiones que hemos mencionado en el primer apartado y que dan cuenta de una continuidad entre los gremialistas del régimen dictatorial y la UDI como partido. En este aspecto, siguiendo a Cardoso Ruiz y Martínez Mejía:

“En 1999- y de nueva cuenta en 2006 – el entonces candidato presidencial de la UDI, se presentó ante el electorado chileno como un candidato populista cercano al ciudadano promedio, capaz de responder a las demandas sociales, en especial de seguridad pública, al “despolitizar” sus propuestas y distanciarse de la herencia autoritaria” (Martínez Mejía y Cardoso Ruiz, 2018: 44).

En este fragmento citado podemos dar cuenta de la manera en que reaparecen las nociones del acercamiento al ciudadano, tal como lo postulaba el gremialismo, y el intento de “despolitización” que identificamos en los primeros años del Movimiento Gremialista de la Universidad Católica.

En otro aspecto, el trabajo realizado en las bases durante el gremialismo se hizo presente a partir de los 90' en el juego electoral. La influencia del ODEPLAN y la participación en los municipios se tornaron herramientas claves para la UDI en la búsqueda de obtener el apoyo de los sectores populares. A su vez, es pertinente destacar, que la restricción de los partidos durante la dictadura le permitió a la UDI avanzar hacia sectores que históricamente le habían correspondido a la izquierda y al centro político. Lo anteriormente postulado, fue de vital importancia para que la UDI se constituya y se autoproclame como derecha popular. (Rubio Apiolaza, 2015).



(Logo utilizado por la UDI. Imagen extraída de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

En cuanto a la cuestión generacional, en la cual hemos hecho hincapié en el primer apartado, daremos cuenta mediante un documento partidario, que la UDI, ya conformada como partido, siguió demostrando un gran interés sobre la juventud. Esto lo podemos ver reflejado en un documento postulado por la UDI en 1986 titulado “Chile Vamos” donde se plantea:

“...Cuando el gobierno insiste en acudir a la justificación de su origen en 1973 como su argumento predominante, esas generaciones más jóvenes lo perciben ajeno y anclado históricamente. Más aún, enrostrarle a esa juventud que sus juicios y acciones provienen de no haber conocido la Unidad Popular, es estéril y hasta contraproducente. Las experiencias se viven o no se viven, pero nunca se transmiten como tales, sino como crónica o historia. Ninguna generación ha aceptado jamás definirse en función de realidades que sólo conoce por vía del relato. Sólo un régimen que hoy se revalide con sentido creador hacia el porvenir puede concitar un respaldo amplio en esas nuevas generaciones” (Muñoz Tamayo, 2018: 13).

En este apartado, podemos evidenciar, de qué forma, la noción de generación y la juventud como población objetivo, han conformado un núcleo central en los diagnósticos y en las proyecciones políticas de la UDI.

Por último, diremos que si bien el principal objetivo de Guzmán, de conformar un Único movimiento de derecha al momento de que los militares dejen el gobierno, no se logró, la UDI logró constituirse como el principal partido de derecha en Chile presentado un altísimo grado de institucionalización durante el periodo analizado.

4. Conclusión

Consideramos relevante recalcar los siguientes aspectos sobre el trabajo realizado. En primer lugar, hemos buscado demostrar de qué manera las lógicas y estructuras instauradas durante el régimen militar, han logrado sostenerse en la sociedad y en las instituciones de Chile. Esto mismo, da cuenta de una continuidad existente entre el régimen dictatorial y el sistema democrático. En este sentido, destacamos la importancia de que, si bien hoy en América Latina nos encontramos ya hace décadas bajo un sistema democrático, es importante llevar a cabo las discusiones necesarias que nos permitan establecer las lógicas y los actores que siguen operando, y que

devienen de un periodo al cual no queremos volver.

De esta manera, nos resulta importante sumar al estudio de los partidos políticos latinoamericanos, una visión que funcione de forma transversal entre el funcionamiento de los partidos en el sistema democrático y las implicancias de los mismos durante las dictaduras. En este aspecto, creemos que la dictadura chilena no supone un periodo socavado en 1989, sino que sostenemos, que ha logrado operar mediante diversas lógicas, estructuras y actores hasta nuestros días.

En la actualidad, la Unión Demócrata Independiente cuenta con un gran caudal de votos y se alza como uno de los principales partidos en Chile. Es por ello, que creemos necesario que para entender el presente contexto debemos discutir el pasado y dar cuenta de los rasgos que trae consigo el avance de la derecha en América Latina.

5. Bibliografía

ALCÁNTARA SAEZ, M. (2001), "El Origen de los Partidos Políticos en América Latina" Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.

ALENDAS.; SUAREZ-CAO J.; LE FOULON C. (2020), "La derecha chilena en la encrucijada: la contrahegemonía de los liderazgos subnacionales y solidarios" en *Revista CIDOB d'Afers Internacional*, Chile, N. °126, pp. 65-87.

GARRETÓN, M. A. (1990), "Los partidos políticos chilenos en la perspectiva de la transición y consolidación democráticas" Indiana, University of Notre Dame Kellogg Institute, Working Paper #138.

HUNNEUS, C. (2001), "La derecha en el Chile después de Pinochet: El caso de la Unión Demócrata Independiente" Chile, Centro de Estudios Miguel Enríquez, Working Paper #285. JOIGANT, A.; NAVIA, P. (2003) "De la política de individuos a los hombres del partido socialización, competencia política y penetración electoral de la UDI (1989-2001)" en *Estudios Públicos*, Universidad de Chile, Santiago de Chile, N 89, pp. 129-171.

KALTWASSER ROVIRA, C. (2020), "El error de diagnóstico de la derecha chilena y su encrucijada actual" en *Estudios Públicos*, Santiago de Chile, N 158, pp. 31-59.

KATZ R.S; MAIR P. (2007), "La supremacía del partido en las instituciones públicas: El

cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” en *Partidos Políticos: Viejos Conceptos y Nuevos Retos*, España, Editorial Trotta.

MARTINEZ MEJÍA, E.; CARDOSO RUIZ, R.P (2018), “La política de los acuerdos en la transición a la democracia en Chile” en *Prospectiva Jurídica*, UAEM, México, N 15, pp. 33-50.

MOLINA VERA, Nicolás (2015) “Del gremialismo apolítico a la estrategia de transformación en partido político de la Unión Demócrata Independiente (UDI)”, en *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos*, Chile, Vol. 3, N ° 2. pp. 50-73.

MUÑOZ TAMAYO, V. (2018) “La cuestión generacional en el discurso del gremialismo y la Unión Demócrata Independiente durante la dictadura de Pinochet”, en *Revista de Historia y Geografía*, Santiago de Chile, N 39, pp 99-119.

RUBIO APIOLAZA, P. (2015), “La refundación de la derecha en la dictadura militar: El caso de la Unión Demócrata Independiente y el Movimiento de Unión Nacional. Chile, 1983 “ en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, Valdivia, N 29, pp 147-163.

TEJO PIÑEIRO, M.J. (2012), “Éxito de un partido político. Partido Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente” en *Annals of the Ovidius University of Constanta Political Science Series*, Rumania, Vol. 1, pp 59-75.

TIMMERMAN, F. (2016), “Las transformaciones doctrinales del gremialismo en la neoliberalización del Régimen Cívico-Militar de Chile: 1973-1980” en *Millars Espai i historia*, España, Vol. 41, N 2, pp 45-68.

Losada, Manuela (2024). “La Unión Demócrata Independiente en Chile: del gremialismo en la dictadura a su fuerza política en democracia”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 167-178.

LA ALIANZA POR EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA: UN ANÁLISIS DESDE LAS CARAS DE LOS PARTIDOS

Florentina Martoccia

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

En este trabajo, buscaremos analizar cómo se da la relación entre las tres caras que poseen las organizaciones partidarias según Katz y Mair (2007) en el caso de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación de Argentina que tuvo su nacimiento en el año 1997 y se diluyó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. Para esto, nos limitaremos a estudiar únicamente el periodo en el cual el partido logra conquistar el poder ejecutivo nacional desde 1999 hasta el 2001.

Cabe señalar que la fortaleza de los partidos políticos, si bien no garantiza el carácter democrático de las decisiones de gobierno, lo hace más probable. Si consideramos a los partidos políticos como constitutivos de la vida en democracia, si nos interesa la calidad de la misma, deberíamos preocuparnos por la forma organizacional que adoptan los partidos políticos. Una democracia eficaz y representativa necesita,

justamente de partidos que sean nacionales pero que también estén integrados (Tuñón, 2007). En este sentido, nos resulta fundamental realizar el estudio de una coalición argentina como lo es La Alianza, cuál fue su proceso, su recorrido y su posterior caída, no solo para estudiar la crisis desde la postura del partido político particularmente sino también para comprender cuáles fueron las causas que lo llevaron a su desaparición hasta el día de hoy.

Katz y Mair (2007) postulan que los partidos políticos europeos presentan tres caras que son constitutivas, están entrelazadas y resultan fundamentales para su comprensión: “el partido como organización de afiliados, el partido como organización central y el partido en las instituciones públicas” (Katz y Mair, 2007: 101). Entendemos para el fin de este trabajo que la primera de estas dimensiones podemos relacionarla con el acompañamiento o no del electorado y principalmente la opinión pública y las formas en las que la sociedad en general demuestra su satisfacción o su descontento. La segunda de las caras de los partidos, se relaciona con los liderazgos propios del partido, sus formas de organización, su estructura tanto formal como en la realidad de los hechos (cuotas de poder), la resolución de sus conflictos internos, la repartición de cargos, entre otras. Por último, el partido en las instituciones se vincula más con cuestiones relacionadas a la llegada de la organización a puestos de poder político dentro del aparato estatal, tanto ejecutivo como legislativo, las acciones emprendidas en él y el poder que realmente tiene en sus manos. La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (en adelante La Alianza) surge como una Coalición entre la Unión Cívica Radical (en adelante UCR) y el Frente país solidario (FREPASO), que logra llegar al casa rosada en 1999 con el 48,4% de los votos como principal alternativa al menemismo con la fórmula: Fernando de la Rúa (UCR) presidente y Chacho Álvarez (FREPASO) vicepresidente.

2. Partido como organización de afiliados

No es tan sencillo definir qué es la ciudadanía en la propuesta de Katz y Mair, ya que no hacen gran hincapié en dicha descripción; sin embargo, para el fin de este trabajo, analizaremos la misma teniendo en cuenta dos modos en los que se hace visible en la realidad, a saber: el electorado y el crecimiento del descontento social demostrado por las movilizaciones sociales.

En cuanto al electorado, vamos a centrarnos en dos hitos claves para comprender el devenir del voto a lo largo del periodo presidencial. En primer lugar, nos referiremos

a las elecciones presidenciales de 1999, en las que resulta ganadora la fórmula compuesta por De la Rúa Álvarez con el 48% de los votos sobre Duhalde – Ortega. Cabe señalar que la fórmula de la Alianza resulta vencedoras en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, (DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, 1999) denotando un triunfo federal con una amplia base de apoyo a lo largo y ancho de todo el país. Este es un momento que podría ser caracterizado de esperanza y confianza en la Alianza, especialmente en sus promesas de “...eliminar la corrupción, mejorar las condiciones distributivas para atender la creciente pobreza y modificar el modelo económico disminuyendo el peso del sector financiero” (Pírez, 2002: 460).

El segundo hecho clave en materia electoral son las elecciones legislativas de octubre de 2001, que mostraron una profunda pérdida de legitimidad, ya que casi la mitad de los votos conformaron un nuevo fenómeno que se conoció como “voto bronca”, que sumaba los votos blancos y nulos (Pírez, 2002). En estos comicios la Alianza resultó vencida por el Partido Justicialista encabezado en ese momento por Eduardo Duhalde, figura clave y de gran importancia al interior del peronismo y perdedor en las elecciones presidenciales de 1999. La derrota fue generalizada, en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Santa Cruz (DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, 2001), muchas de las provincias que habían acompañado anteriormente a la Alianza. Es decir, pierden la credibilidad en la capacidad de hacer frente, no solo a sus promesas electorales, sino también al crecimiento del descontento social que era cada vez más evidente.

Según De Riz (2009), las encuestas de opinión reflejan con claridad el estado de ánimo del momento: en Octubre de 2001, el 93% de los argentinos tenía poca o ninguna confianza en los partidos políticos y un 28 % opinaba que la democracia puede funcionar sin partidos, sin embargo, el 72% creía que era necesario mejorar la calidad de la democracia (PNUD, 2002) Mientras que en 1984 sólo un 7% de los encuestados respondían “que nunca va a sentir simpatía por ningún partido”, en 1990, tras la experiencia de hiperinflación y acortamiento del mandato presidencial, la cifra se eleva al 20%; en 1998 asciende al 48%; en 2000 la cifra desciende al 40%; en 2001 trepa al 60% y en 2002 llega al 64%. Esto es una clara señal, junto con la expresión en las urnas del hartazgo de la ciudadanía y la falta de esperanza.

En cuanto al crecimiento del descontento social demostrado mediante las movili-

ciones sociales, es posible marcar que durante su gobierno la Alianza experimentó un ciclo ascendente de la protesta, resultado de medidas económicas restrictivas provocando que la conflictividad social y sindical crezca, con el carácter distintivo del aumento de la lucha de las organizaciones piqueteras. Es decir, en paralelo a la resistencia de los sindicatos más combativos, continúa el ascenso de la lucha de los trabajadores desocupados, que se iban constituyendo en un movimiento social, con organizaciones y dirigentes estables que perduraban más allá de los conflictos puntuales de la mano de estudiantes y pequeños propietarios, a través de cortes (de rutas, calles, vías), el cacerolazo, el escrache, la olla popular, entre otras. Asimismo, las clases medias tomaron un papel primordial en esta ola de protestas - sujeto que no era tan habitual hasta el momento, sumándose paulatinamente en un primer momento, y abiertamente llegado el 2001.

De la mano del fracaso económico, las políticas neoliberales erosionaban la legitimidad política de la Alianza y generaban diversas respuestas de los afectados por estas políticas, e incrementaron la protesta social generando un escenario para el cual, el gobierno nacional parecía carecer de las herramientas necesarias para frenar. La coalición resulta entonces incapaz de contener el descontento generalizado emprendiendo una respuesta represiva del Gobierno que se enmarca en una política de no reconocimiento de las demandas de las organizaciones gremiales (Salvia, 2014).

Con la medida económica denominada “corralito”, que se basaba en estrictos límites en cuanto al monto que se podía retirar de dinero en efectivo de los bancos, la situación se tornó profundamente crítica e insostenible fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudadanía salió a la calle a protestar al grito de “que se vayan todos” (De Riz, 2009), alrededor de treinta personas murieron y otras 4500 fueron detenidas, muchos comercios fueron saqueados, un gran número de ellos por grupos de personas provenientes de sectores relegados, y se produjeron destrozos en un clima violento que el Estado no pudo contener (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2002):

“La rabia y la desesperación se multiplicaron por doquier. Los días 18 y 19 de diciembre de 2001. Argentina fue sacudida por una ola de protestas, en parte espontáneas y en parte coordinadas manifestaciones a veces violentas, bloqueo de rutas por desocupados, demostraciones de decenas de miles de ahorristas golpeando cacerolas y saqueos de comercios. La decisión del presidente De la Rúa de enfrentar mediante el estado de sitio la cólera popular suscitada por el

colapso de las finanzas nacionales, desembocó en una represión policial con numerosas víctimas, seguida inmediatamente de su renuncia y la apertura de una etapa en que la Argentina vivió en estado de asamblea” (De Riz, 2009: 12).

3. El partido como organización central

Un condición fundamental para lograr la supervivencia de los gobiernos tiene que ver con su estructura político - institucional, sin las cuales se quedan desprovistos de la red de contención (Zícarí, 2016); en este sentido, es posible afirmar que analizar la estructura partidaria como organización mirando a su interior y a su formación particular es de vital importancia para comprender su accionar.

Como señalamos anteriormente, la Alianza es una coalición compuesta por el FREPASO y la UCR. En un primer momento, se pactó que la conducción de la coalición sea de forma colegiada y con integrantes de los dos partidos, a través del denominado “Grupo de los cinco” compuesto –por parte del Frepaso- por Álvarez y Fernández Meijide y, de parte del radicalismo, por Terragno –uno de los máximos promotores- Alfonsín –principal líder partidario- y De la Rúa –el dirigente con mayor aceptación en los sondeos-, con el objetivo de institucionalizar el proyecto, dirigir las campañas electorales, tomar las principales decisiones y elaborar los programas (Zicari, 2016). Sin embargo, es importante remarcar que el presidente de la nación siempre había tenido dificultades para conquistar el poder real al interior de la UCR generando una gran distancia y dificultad, además que la ideología política y económica de De la Rúa eran contrarias al grueso de la estructura partidaria radical. Nace de esta manera, una coalición política como la unión de dos partidos muy dispares que lejos de priorizar los mecanismos colegiados institucionalizados, privilegió los liderazgos individuales provocando en la realidad que el “grupo de los cinco” o el programa de gobierno de la Alianza resultaran ser débiles para asegurar una cohesión coalicional lo suficientemente efectiva, sin que tampoco se crearan mecanismos aceitados de gobierno para unir voluntades. (Zicari, 2017)

Ya en las designaciones de gabinete se sintieron algunos resquemores cuando los grupos del sindicalismo docente, académicos y de la militancia universitaria radical se encontraron un economista liberal y con concepciones privatistas como Juan José Llach como Ministro de Educación. Además, el presidente debió darles lugar a algunos de sus competidores internos. El resto de los puestos recayeron en amigos íntimos, familiares y personas cercanas al presidente, de modo tal que con tan-

tas internas en la coalición, los enfrentamientos larvados y las desconfianzas añejas debilitaban el trabajo en equipo e impedían el juego colaborativo (Zicari, 2016). De esta manera, los enfrentamientos larvados y las desconfianzas añejas debilitaban el trabajo en equipo e impedían el juego colaborativo por lo que en poco tiempo la compatibilidad ideológica que había existido entre los miembros de la Alianza pasó de algunas tensiones a provocar varias rupturas (Zicari, 2017).

La liberalización de la política económica durante el gobierno llevó a que progresivamente se dieran ciertas grietas al interior del partido, numerosos diputados abandonaron el bloque oficialista y la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que en un primer momento se mostró como una suerte de “pata sindical aliancista”, cuando en gobierno comenzó a virar hacia la derecha, rompió y comenzó a realizar paros y huelgas. Sin embargo, la coalición se mantuvo unida hasta su final. Es posible marcar al respecto que “el Frepaso mantuvo la coalición de Gobierno actuando de manera auto interesada, eligiendo en ambas coyunturas críticas la alternativa que mayores beneficios le reportaba” (Labaqui, 2005: 141).

Según Labaqui (2005), hay dos hechos fundamentales “en el gobierno” que podrían haber generado la disolución del partido, en primer lugar, la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez el 6 de octubre del 2000 debido a las denuncias por corrupción en el gobierno y en el congreso y al desacuerdo en cuanto a la política económica y a la falta de resolución del conflicto social. Y por otro lado, la designación de Ricardo López Murphy como ministro de economía que trajo consigo una profunda tensión al interior de la estructura partidaria y un gran revuelo social, por lo que, tan solo dos semanas después se dio la llegada de Domingo Cavallo para ocupar este mismo puesto pero con atribuciones extraordinarias pensadas como “superpoderes” (Zicari, 2016). En coincidencia con esto, Gervasoni (2003) señala que son éstos dos periodos en los que se registra un importante deterioro del riesgo país, y por lo tanto, pueden ayudar a explicar cómo dichas crisis políticas, fueron desencadenantes de la crisis económica. Sin embargo, más allá del descontento del FREPASO y la UCR, tolerar a Cavallo parecía así, un costo que estaban dispuestos a soportar ya que la opinión pública y las encuestas dejaban ver que esta solución era la más positiva (Labaqui, 2005).

Por todo lo anteriormente mencionado nos encontramos en condiciones de afirmar, por un lado, que Fernando De la Rúa, utilizó al partido para llegar a las instituciones, y una vez logrado este cometido decidió poco a poco ignorarlo y concentrar un débil poder individual. En los momentos más críticos de su gestión (los men-

cionados anteriormente), no buscó replegarse a los miembros de su coalición sino que por el contrario practicó recurrentes estrategias como cambios de puestos y salvaciones mágicas, contrarias al partido y tratando de depender cada vez menos de éste. El presidente no buscó consensuar con su estructura partidaria, sino que por el contrario, acudió a él con las decisiones ya tomadas, por lo cual, al momento de su renuncia recibió ni más ni menos que la soledad que había decidido edificar como forma de organización (Zícarí, 2016). Pero por otro lado, Álvarez optó por una jugada individual que lejos de posicionarlo como un nuevo líder popular significó una derrota que dejó a todos los actores heridos y sin ganadores ya que tanto el presidente como su vice perdieron la credibilidad sobre la que habían construido sus respectivas carreras políticas. (Zícarí, 2017)

4. Partido en las instituciones públicas

En cuanto al gobierno en las instituciones, nos referiremos únicamente al periodo en el cual la Alianza tiene la presidencia de la Nación. Con su llegada al gobierno, ocurrió lo que se conoce como “gobierno dividido”, porque la coalición estaba lejos de tener realmente el control de la mayoría de las instituciones ejecutivas nacionales, ya que el peronismo controlaba catorce de las veintitrés provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que la Alianza obtuvo para sí únicamente seis provincias: Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Río Negro, Chubut, parcialmente San Juan y el distrito de Capital Federal. Además, tras la derrota de Fernández Meijide en la elección para la gobernación provincial de Buenos Aires, el FREPASO terminó por reforzar su rol como socio menor de la Alianza, ya que en menos de un año una de sus principales figuras había sufrido dos derrotas de peso. Todo esto resulta un dato de fundamental importancia si consideramos que el principal objetivo llevado adelante por la Alianza era de corte electoralista.

Por otro lado, la Alianza tampoco había logrado conquistar un pleno dominio legislativo en el Congreso Nacional, si bien alcanzó a convertirse en la primera minoría en Diputados con 119 bancas (83 de la UCR y 36 del Frepaso), estaba a diez bancas de contar con quórum propio, lo que los obligaba a guardar una estricta disciplina interna y a tener que lograr acuerdos con otros partidos políticos. Todo esto, demuestra la falta de recursos en las Instituciones para gobernar realmente con autonomía necesaria. (Zicari, 2016).

Las medidas más importantes tomadas por el partido en el gobierno, se relacionan

con la política de Ajuste, para la cual existían al interior de la coalición dos visiones enfrentadas en cuanto al manejo de la economía (por un lado tenemos al presidente De la Rúa, y por el otro a la UCR y al FREPASO). Esto generó efervescencia en las discusiones y cuestiones en las que no se estaba de acuerdo. De todo modos, desde su llegada decidieron continuar con las reformas neoliberales de los noventa llevadas a cabo por Menem, gestionando la crisis económica con la que se encontró por medio de la vía ortodoxa, esto es: mantener controladas las cuentas fiscales para garantizar el financiamiento externo al país y el pago de la deuda pública, para ello, se necesitaría la baja del gasto público, el aumento de los recursos tributarios o la venta de los escasos activos estatales. Por otro lado, la política fiscalista de la Alianza le impidió cumplir con promesas electorales de corte heterodoxo para lograr la reactivación económica, como la implementación de planes de infraestructura y de construcción de viviendas (Salvia, 2014).

En diciembre de 1999, el ministro de economía José Luis Machinea anunció un recorte de gastos del Estado Nacional junto con un aumento y extensión del impuesto a las ganancias. En mayo del 2000 se decidió un nuevo ajuste con el objetivo de reducir el riesgo soberano y asegurar el apoyo financiero del FMI. Junto con esto, se dieron la continuidad de la flexibilización laboral y las sospechas de corrupción tanto en el gobierno como en la oposición; la reforma laboral de este momento era una de las condiciones del FMI que buscaba atacar a la fortaleza sindical en las negociaciones laborales generando una reducción de costos para las empresas. En cuanto a la corrupción, fue el vicepresidente “Chacho” Álvarez quien realiza la denuncia judicial e inicia una investigación en oposición al presidente, trayendo consigo su renuncia antes mencionada, lo cual denota una falta de consenso al interior del partido y por lo tanto una debilidad de hacer frente al poder en las instituciones (Salvia, 2014).

Como mencionamos anteriormente, el día 19 de diciembre de 2001 las protestas se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina: se produjeron más de trescientos saqueos a comercios, supermercados y edificios públicos, se realizaron cortes de rutas de productores agropecuarios y transportistas (Entre Ríos), trabajadores rurales (Tucumán), desocupados (Mendoza, Río Negro, Jujuy), en Córdoba se movilizaron trabajadores estatales, judiciales, colectiveros y de la energía eléctrica, que se enfrentaron con la Policía. En Capital Federal se realizó una protesta de taxistas, y en La Plata la Policía reprimió trabajadores de la salud y docentes, quienes contestaron a las apedreadas. Por la noche, el presidente De la Rúa decretó el estado de sitio anunciado por cadena nacional de radio y televisión. En rechazo al estado de sitio, se desató un masivo cacerolazo en la Capital Federal, que finalizó frente a la

Casa de Gobierno. Por último, durante todo el 20 de diciembre se produjeron combates callejeros entre los manifestantes y la Policía, que atacó con gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes festejaron la renuncia del ministro Cavallo y reclamaron la renuncia del presidente De la Rúa. Finalmente, el presidente renunció a su cargo saliendo en helicóptero desde la casa rosada dejando una imagen que marcaría a la sociedad argentina por el resto de sus tiempos (Salvia, 2014).

5. Conclusiones

Concluimos este ensayo habiendo hecho una recorrida tal vez un poco acotada, pero lo más completa posible acerca de La Alianza como un partido político. Para hacerlo, hemos utilizado el concepto que presentan Katz y Mair que postula que los partidos políticos europeos tienen tres caras: el partido con la ciudadanía, como organización y en las instituciones.

Este recorrido teórico e histórico nos ha servido, por un lado, para demostrar que la teoría europea presentada puede fácilmente adaptarse a un partido latinoamericano y argentino, y que haciéndolo realizamos un análisis de la estructura partidaria y su desempeño en distintos ámbitos muy completo. Por otro lado, nos ha permitido avanzar en la investigación de la Alianza en su estructura partidaria específicamente ya que la mayoría de los estudios relacionados a este periodo histórico se centran más en otros tópicos.

Nos encontramos entonces en la posición de afirmar que la desaparición de La Alianza hasta la actualidad en la Argentina se puede relacionar fácilmente con la crisis generalizada que sufrieron todas sus caras partidarias. Tanto su relación con la ciudadanía, su organización interna como su desempeño en las instituciones estuvieron marcadas por el desorden, el descontento y el desacuerdo.

Sentimos, entonces, “la necesidad de pensar la conformación y funcionamiento de los partidos políticos para la democracia, puesto que sin un sólido funcionamiento de estos, la vida institucional de los países se vuelve débil y la inestabilidad puede convertirse en la regla” (Zicari, 2016: 355). Es por eso que emprendimos este camino y creemos haber llegado a su fin con resultados favorables. La crisis del 2001 en Argentina es uno de los hechos más importantes del país hasta el momento, en el se cristalizaron descontentos, desilusiones e incomodidades de amplios sectores de la sociedad de larga data. Analizar la crisis, y el camino recorrido hasta su llegada es de

las maneras más eficientes para lograr comprender a nuestra sociedad, y hacerlo desde la perspectiva puntual de los partidos políticos, resulta, no solo importante sino también muy interesante.

6. Bibliografía

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). (2002), “La protesta social en la Argentina durante diciembre del 2001”, Argentina.

DE RIZ, L. (2009), “La clase media argentina: conjeturas para interpretar el papel de las clases medias en los procesos políticos.”, Universidad de Buenos Aires, CONICET.

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, (1999 y 2001), Argentina. <<https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/1999>> <<https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2001>> sitio visitado el 07/07/2023.

GERVASONI, C. (2003), *¿Son las Crisis Políticas Causa de las Crisis Financieras? Evidencias del Gobierno de la Alianza (1999-2001)*. Universidad Católica Argentina, Universidad Torcuato Di Tella y Universidad del CEMA.

KATZ, R. y MAIR, P. (2007), “La supremacía del partido en las instituciones públicas: El cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas”, *Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos* (pp. 101-164). Trotta.

LABAQUI, J. (2005), “¿Atrapado sin salida? El FREPASO en el gobierno de La Alianza”, Universidad Torcuato Di Tella.

PÍREZ, P. (2002), “¿Qué pasó en la Argentina? Algunas piezas de un rompecabezas para intentar entender”, en *Estudios Sociológicos*, vol. XX, núm. 2, mayo-agosto, 2002, pp. 455-467, El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México

SALVIA, S.P. (2014), “La caída de la Alianza. Neoliberalismo, conflicto social y crisis política en Argentina”, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

TUÑÓN, G. (s/f), “Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003” en *Revista SAAP*, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2007. <<https://revista.saap.org.ar/contenido/revista-saap-v3-n1/Resena%20Leiras.pdf>> sitio visitado el 06/07/2023

ZÍCARI, J. (2016), “Hasta que la crisis nos separe. Alfonsín, De la Rúa y el partido Radical durante el gobierno de la Alianza (1999-2001)” Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires. CONICET.

ZÍCARI, J. (2017), “Estrategias individuales, consecuencias colectivas. La renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia” en *Revista Temas y Debates*. ISSN 1666-0714, año 21, número 34, pp. 43-74.

Martoccia, Florentina (2024). “La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación en Argentina: un análisis desde las caras de los partidos”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 179-189.

EL MAS COMO INSTRUMENTO POLÍTICO DIFERENCIADO: DESAFIANDO EL PARADIGMA DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES

Rocío Oelschlager

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Durante un largo tiempo, la política boliviana ha sido considerada una de las más inestables de América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas su historia política ha experimentado un intenso proceso de exitosa movilización social, como señala María Ocampo Pinto (2006). Dicho proceso ha tenido un impacto significativo en el sistema electoral y en el consecuente ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde el regreso a la democracia, entre 1985 y 2002, la fragmentación de la representación popular, la formación de amplias coaliciones de gobierno y la estabilidad de los ejecutivos se constituyeron como las principales características del sistema electoral y la vida partidaria boliviana. La práctica política no iba más allá de un bajo nivel de discusión en torno a las agendas de gobierno en las que los diferentes candidatos, desde los partidos tradicionalmente de izquierda como el Movimiento de

Izquierda Revolucionaria (MIR), hasta los partidos de derecha como el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), compartían un acuerdo sobre la agenda económica neoliberal.

No obstante, algo ocurrió en el proceso político previo a las elecciones de 2005, transformando de manera contundente la dinámica de la alternancia partidaria en el poder y permitiendo el ascenso de alternativas radicales. Allí donde las prácticas patrimonialistas de los partidos vulneraron y erosionaron los avances institucionales de la democracia, el surgimiento del MAS es considerado como un punto de inflexión en la historia, originado por una confluencia de factores sociales, económicos y políticos que tienen lugar en un prolongado ciclo de conflictividad (Machado, 2010: 4).

Lo que Fernando Mayorga bautizó como “presidencialismo parlamentarizado, fruto de un peculiar mestizaje de estructuras básicas del régimen presidencialista con mecanismos parlamentaristas” (Mayorga, 2001; 206), se convertirá en la piedra angular del nacimiento de un movimiento social con raíces cocaleras que tendrá como ápice la victoria y consolidación en 2005 de Evo Morales en la presidencia.

En este contexto, surge la pregunta de qué sucedió en Bolivia para que las instituciones, diseñadas para garantizar la estabilidad y la preservación del sistema de partidos, generaran el efecto contrario y facilitaran la renovación y el cambio de las estructuras que debían proteger. Además, resulta relevante comprender cómo un defensor de los indígenas y campesinos cocaleros, como Evo Morales, logró alcanzar la presidencia con un nivel de apoyo electoral tan alto como el obtenido en 2005.

Con el fin de abordar estas interrogantes, el presente trabajo analizará el sistema electoral boliviano y el ascenso del MAS entre la década del '80 y principios de los 2000. A través de este ensayo, se busca comprender los cambios significativos que tuvieron lugar en la política boliviana y su impacto en la trayectoria del MAS y la presidencia de Evo Morales.

2. La dinámica del presidencialismo parlamentarizado y la lógica de los pactos: los años previos al ascenso del MAS

Entre 1980 y 2002, Bolivia experimentó un proceso de redefinición del Estado y una ruptura del modelo de “democracia pactada” que había existido hasta entonces. Según Machado (2010), la crisis institucional y el debilitamiento de los partidos políticos frente a nuevos actores, como movimientos sociales, cívicos y regionales, lle-

varon a una reconfiguración del sistema electoral y de la estructura institucional del Estado, que había sido deslegitimada y cuestionada durante mucho tiempo.

Durante estos 20 años, en un sistema político basado en la cultura de pactos y coaliciones, las coaliciones con una visión patrimonialista del Estado se convirtieron en el antídoto para evitar la desaparición de los partidos políticos. Desde principios de los años 80, el panorama boliviano estaba dominado por un multipartidismo moderado centrado en tres partidos principales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) (Rodrigues Gomes, 2016: 124).

Según Torrico (2004), durante los años 80 y principios de los 2000, ningún candidato presidencial logró obtener una mayoría absoluta de votos en las elecciones generales, lo que significaba que todos los presidentes de ese período eran elegidos en una segunda vuelta congresal. Esta característica particular aproximaba al presidencialismo boliviano a un régimen de tipo parlamentarista, donde el jefe de gobierno es elegido por el Poder Legislativo. Sin embargo, la elección del Presidente y Vicepresidente por parte del órgano legislativo no afectaba una de las características típicas del presidencialismo: la permanencia del Ejecutivo no dependía de preservar la confianza del Congreso, ya que el mandato seguía siendo fijo e independiente respecto del apoyo de uno en el otro. El corolario de ese mandato constitucional era la cooperación institucional entre las principales agrupaciones, lo cual significaba el reparto burocrático del estado entre el partido ganador y el perdedor en las elecciones presidenciales (Ocampo Pinto, 2006: 19). Por esta razón, Mayorga denomina al sistema político boliviano como un “presidencialismo parlamentarizado” (Mayorga, 2001; 206).

El sistema electoral para conformar el Congreso se basaba en la representación proporcional con lista cerrada y voto único para el elector, lo que provocaba que la distribución de legisladores electos fuera muy cercana a los resultados de la elección presidencial. La segunda vuelta congresal, con independencia del número de candidaturas que podían participar en ella, terminaba generando incentivos para que los partidos buscarán coordinarse post electoralmente, ya que los apoyos en esta instancia se convertían posteriormente en coaliciones de gobierno (Torrico, 2004: 83). Si a esto le sumamos el aumento en la tendencia a la fragmentación de las preferencias de los votantes, que buscaban emitir un voto sincero dado que, ante la expectativa -cumplida elección tras elección- de que los partidos se verían obligados a conformar coaliciones de gobierno, buena parte de los votantes trataba de impulsar

que su partido de preferencia ingresará a las mismas (Torrico, 2004: 84). Por ende, la dificultad para alcanzar la mayoría absoluta en el Legislativo era cada vez mayor.

En consecuencia, la formación de coaliciones a partir de las cuáles se elegía Presidente y luego se gobernaba, era un efecto de la interacción entre el diseño electoral presidencial, el diseño electoral legislativo y la fragmentación de preferencias de los electores (Torrico, 2004: 84).

El sistema, en su naturaleza centrípeta, tenía la capacidad de transformar a todos los partidos con representación parlamentaria en posibles aliados de coalición, sin importar sus ideología o enemistades históricas. La dinámica de la formación de coaliciones y acuerdo de gobierno implicó que, aunque algunos partidos inicialmente surgieron como fuerzas contrarias al sistema, con el tiempo se vieron influenciados por la fuerza centrípeta del sistema de partidos. Esto los llevó gradualmente a modificar o incluso abandonar sus propuestas originales para alinearse con la corriente predominante.

Aunque fuera necesaria para garantizar la estabilidad gubernamental, la lógica de los pactos socavó gradualmente la confianza de los ciudadanos en la integridad de los partidos, a quienes observaban como organizaciones que utilizaban el Estado para su propio beneficio y clientelismo, en lugar de trabajar en pro del bienestar común. Como resultado, la credibilidad general del sistema de partidos se vio afectada.

3. Reformas políticas y la decadencia del sistema que buscaban prolongar

A pesar de las ventajas mencionadas en cuanto a estabilidad y gobernabilidad, el sistema político partidario presentaba una serie de problemas como la homogeneización ideológica y programática, la patrimonialización del Estado, el clientelismo y el caudillismo interno. Estos problemas, además, se relacionaban con resultados económicos insatisfactorios. Estas deficiencias llevaron los líderes de los partidos sistémicos a concertar una serie de cambios que mejorasen la calidad del funcionamiento de las instituciones estatales y de la participación democrática, sin que eso implicase ceder sus cuotas de poder (Rodrigues Gomes, 2016: 134). En 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional y la aprobación de la Ley de Participación Popular (LPP), seguida por la aprobación de la Ley Electoral 1704 dos años después. El propósito fundamental de estas medidas era transformar el sistema electoral boliviano.

Esto implicaba la transición desde el sistema proporcional tradicional hacía un sistema mixto de tendencia proporcional a través de un mecanismo de compensación.

A pesar de estas reformas, la insatisfacción ciudadana siguió aumentando, ya que no lograron cambiar de manera fundamental el proceso de toma de decisiones en los poderes estatales. La reforma electoral tuvo efectos principalmente formales y no fue suficiente por sí sola para abordar los problemas derivados de la reducción de las diferencias programáticas e ideológicas entre los partidos establecidos, la patrimonialización del Estado y el distanciamiento entre los electores y los representados. Esto se reflejaba las elecciones de 1997, donde el sistema de partidos mantuvo su formato multipartidista de carácter moderado, con cinco partidos relevantes en ese momento: Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA), que obtenían votos similares y se mantenían bajo la misma tendencia centrípeta, motivada por la hegemonía de un centro ideológico y por el predominio del pacto como procedimiento para resolver la titularidad gubernamental y dotar de mayoría parlamentaria al gobierno de turno (Machado, 2010: 16). Sin embargo, los cambios introducidos por las reformas y la LPP ampliaron las posibilidades de participación en las instituciones estatales, tanto a nivel municipal como en la Cámara de Diputados, el corazón mismo de la democracia pactada.

Desde el punto de vista de los partidos sistémicos, la creación de circunscripciones uninominales y la LPP, junto con la actualización del padrón electoral, favorecieron inadvertidamente los fenómenos de regionalización y ruralización de la política en un país con notables diferencias regionales y descuidaron la aparición de nuevos actores sociopolíticos (Rodrigues Gomes, 2016: 135).

Las reformas relacionadas con la territorialización y descentralización de la política (LPP e inclusión de diputados uninominales) tuvieron como consecuencia directa el surgimiento de nuevos partidos caracterizados por una fuerte presencia municipal y liderazgos locales que representaban una amenaza a la composición del sistema de partidos.

La descentralización política del Estado permitió la politización del clivaje campo-ciudad y determinó la ruralización de la política sobre la base de la llegada del Estado al ámbito local, donde antes no tenía presencia, y la articulación entre el municipio y las formas de protesta anti institucionales, cuya raíz se encuentra en la ajenidad –o por lo menos distancia– entre el Estado y el campesino-comunario (Zuazo, 2010: 124).

La caída del sistema político-partidario no se debió tanto a la inmovilidad de las élites dirigentes, sino a la limitada o ineficaz naturaleza de sus iniciativas y al potencial inesperado de los cambios para impulsar una participación diferente con actores de una tipología distinta, así como generar mayores expectativas de participación, hasta entonces frustradas. Si el Estado había fracasado en autorreformarse, las transformaciones más radicales vendrían de otra parte, de las capas políticamente excluidas de la población (Rodríguez Gomes, 2016: 135). Se sentaron las bases para una transformación más profunda en la vida política y democrática de Bolivia.

4. Un movimiento de raíces cocaleras

En un contexto en el que la izquierda boliviana prácticamente había desaparecido del sistema de partidos y se refugiaba en la Sociedad Civil, se evidenciaba un distanciamiento entre el Estado y la gran masa ciudadana. La incapacidad del sistema político para construir mecanismos institucionales que respondieran a las demandas provocó el surgimiento de organizaciones sociopolíticas no partidarias, como sindicatos obreros y campesinos, pueblos indígenas, comités autonómicos y asociaciones de vecinos.

Estas organizaciones lograron condicionar la acción gubernamental y algunas de ellas decidieron incursionar en la actividad partidaria para influir directamente en las decisiones políticas. En este contexto, los partidos del sistema político, sin darse cuenta, favorecieron fenómenos de regionalización y ruralización política, descuidando la aparición de nuevos actores sociopolíticos que buscaban influir directamente en las decisiones políticas, entre ellos, los cocaleros y su instrumento político: el MAS.

El Movimiento al Socialismo, como movimiento de izquierda con raíces cocaleras y respaldado por sectores indígenas y campesinos, se presentó como una alternativa que prometía representar los intereses de los marginados y excluidos. Su discurso antineoliberal y su enfoque en la justicia social resonaron con gran parte de la población, especialmente en el contexto de descontento con los partidos políticos tradicionales y su forma de gobernar.

Un aspecto sobresaliente del nuevo electorado que facilitó la irrupción de partidos desafiantes el statu quo no solo se limitaba a su cantidad, sino que también recaía en su origen y composición social. Entre sus rasgos más distintivos se encontra-

ban la falta de educación formal, bajos ingresos, residencia en zonas rurales y ser migrantes internos. Este grupo representaba una parte considerable de votantes que ejercían su derecho al voto por primera o segunda vez, y gran parte de ellos eran jóvenes sin afiliaciones partidarias previas. Crecieron en un entorno en el que la democracia pactada estaba constantemente desacreditada y con escasas perspectivas de mejorar su situación económica o experimentar una movilidad social ascendente.

El MAS supo aprovechar la disposición potencial de estos nuevos electores para rechazar de manera generalizada las prácticas políticas asociadas con la democracia pactada y cuestionar el sistema político del presidencialismo parlamentarizado.

La Ley de Participación Popular (LPP) desempeñó un papel fundamental en este proceso, al expandir la elección de alcaldes mediante voto universal a municipios rurales, antes reservada sólo para las ciudades. La LPP también estableció la creación colaborativa de planes de desarrollo municipales y la supervisión de las nuevas autoridades locales por parte de organizaciones territoriales de base.

Los lugares de encuentro, particularmente las regiones marginadas con fuertes lazos comunitarios, se convirtieron en espacios clave para la participación activa de la ciudadanía. Estos lugares no solo fomentaron la ciudadanía activa, sino que también se convirtieron en terreno fértil para el surgimiento de alternativas locales a las organizaciones partidarias tradicionales.

Las victorias de los productores de coca en “sus” municipios cochabambinos y su asunción de responsabilidades locales proporcionaron una valiosa experiencia política a una cantidad significativa de líderes partidarios. Además, el ejercicio del poder local otorgó mayor credibilidad a la incipiente apuesta política de los campesinos, consolidándose como una fuerza considerable en el panorama regional.

Según Zuazo (2010), las experiencias electorales llevaron a una valorización de la democracia en la que el sufragio adquirió el papel de mecanismo efectivo para elegir y validar gobiernos. El movimiento cocalero, con notables éxitos electorales y su ascenso al poder en diversos municipios, interpeló al resto del campesino y logró liderar el nuevo partido.

Evo Morales, quien había sido un destacado dirigente campesino cocalero desde la década de los 80 y ganó reconocimiento nacional como defensor de los cultivadores de coca en el trópico de Cochabamba, emergió en este contexto de inconformidad

y protesta. Asimismo, Morales había sido elegido diputado con la votación más alta de todos los candidatos en las elecciones de 1997, cuando participó bajo la sigla de Izquierda Unida (IU) (Ocampo Pinto, 2006: 15).

A medida que se ampliaba la participación y se diversificaba el escenario político, se generaban expectativas y demandas ciudadanas que los partidos tradicionales no lograban satisfacer. La insatisfacción persistía debido a la falta de cambios fundamentales en la toma de decisiones y en la reducción de las brechas ideológicas y programáticas.

El descontento y la búsqueda de alternativas políticas llevaron a un quiebre en el sistema de partidos, erosionando la hegemonía de los partidos establecidos y abriendo espacio para nuevas fuerzas políticas emergentes. En los próximos años, este proceso de transformación política y democrática en Bolivia se intensificaría, dando lugar a movimientos sociales y políticos que desafiarían el statu quo y jugarían un papel clave en la configuración del panorama político del país.

A partir del año 2000, en Bolivia se desencadenó una crisis en los partidos tradicionales y en el sistema político general. Si bien el MAS acompañaba este proceso de crisis, no lo lideraba ni lo impulsaba. La participación del MAS en los conflictos del 2000 respondía más a la necesidad de generar alianzas con otros grupos sociales que participaban en las luchas sociales que desafiaban al gobierno.

El Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo apoyo de una parte del electorado que, desde 1993, venía buscando una opción diferente a los partidos convencionales, Evo Morales logró con éxito ganarse el respaldo de aquellos bolivianos que estaban insatisfechos con el sistema político tradicional y sus partidos.

El éxito electoral del MAS debe ser interpretado como un resultado de un contexto particular que lo coloca como la única alternativa electoral frente a los actores tradicionales que son asumidos como responsables de la crisis que agitaba al país. Es la propia crisis la que lleva al MAS a ser la segunda fuerza política cuando el propio partido no sospechaba aún un triunfo de esa magnitud (Machado, 2016: 32).

En el año 2005, Bolivia celebró elecciones en un contexto político y social altamente polarizado. Como se mencionó previamente, el país había estado bajo el dominio de partidos políticos tradicionales, como el MNR, el ADN y el MIR, los cuales habían perdido la confianza de gran parte de la población debido a las crisis económicas y políticas que habían afectado al país.

Evo Morales obtuvo una victoria histórica al ganar aproximadamente con el 54% de los votos, lo que le permitió alcanzar la mayoría absoluta en la votación popular y evitar la necesidad de recurrir a acuerdo en el Congreso.

Los resultados de las elecciones de 2005 marcaron un hito en la historia política de Bolivia y señalaron la virtual desaparición del sistema de partidos que había dominado las dos últimas décadas. Esta evaporación del sistema tradicional de partidos era prácticamente inevitable, ya que la mayoría de los bolivianos consideraba que las agrupaciones políticas que lo conformaban eran causantes de las crisis de gobernabilidad que el país había experimentado en los años recientes.

El agotamiento del sistema de partidos generó una ruptura en la tradicional dispersión del voto. Las elecciones generales de 2005 se convirtieron en un hito político no sólo para Bolivia sino para toda América Latina. Por primera vez, un representante del campesinado indígena llegó al gobierno y, por primera vez desde el retorno a la democracia electoral hace dos décadas, un partido obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Evo Morales era elegido directamente por el voto popular.

El triunfo del MAS se debió en gran medida al aumento significativo de la participación electoral en áreas rurales. También es importante destacar que aquellos electores que buscaban desde hacía tiempo una opción política distinta a los tres partidos más importantes de las décadas anteriores encontraron en el MAS no solo una alternativa atractiva, sino también creíble. El triunfo de Evo Morales marcó el colapso del sistema de partidos tal como se conocía hasta entonces.

5. El instrumento político: una fusión entre movimientos sociales y estructura partidaria

El panorama político de Bolivia ha sido desafiado por la irrupción de un partido con fuerza arrolladora, el MAS, que ha desafiado las estructuras y el statu quo establecido por los partidos tradicionales. A diferencia de estos últimos, el MAS ha logrado establecer una identidad propia y ha captado la atención y el respaldo de amplios sectores de la sociedad.

Para comprender la singularidad del MAS, es necesario examinar su conexión con los movimientos sociales y su enfoque en la justicia social y la defensa de los derechos de los sectores excluidos.

Ha planteado una forma inédita de participación política a través del concepto de “instrumento político”, cuestionando las estructuras partidarias clásicas y favoreciendo la participación directa de las organizaciones sociales dentro de ese mismo campo.

El Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos es tanto un partido político como una federación de organizaciones sociales, cuyo ascenso social se ha vinculado estrechamente con un creciente movimiento de luchas sociales en el país.

La base cocalera de la organización liderada por Evo Morales es una variable clave para comprender la dinámica sociohistórica que ha llevado a las movimientos campesinos e indígenas de Bolivia a participar en la competencia electoral política.

6. La emergencia del Instrumento Político como respuesta a la exclusión de los sectores indígenas y campesinos

Las políticas neoliberales y los partidos tradicionales bolivianos parecían ignorar las demandas de los sectores indígenas y campesinos. El Plan Dignidad, bajo el lema “coca cero”, colocaba en una posición de abierto enfrentamiento al gobierno y a los productores de coca. Las zonas de cultivo se militarizaban, se insistía en la erradicación forzosa y la sustitución por producciones no rentables, se ligaba directamente a la hoja de coca y a sus trabajadores al narcotráfico y se proseguía con los ajustes sobre los sectores más resentidos de la población. En este marco el desarrollo de un instrumento político implicó la confluencia de los sindicatos campesinos y las organizaciones indígenas que pretendían garantizar y profundizar sus conquistas sociales, complementando su accionar con la incursión en la arena político-electoral (Quiroga, 2014: 18).

En un primer momento, se buscó alianzas con diversas coaliciones de izquierda, tales como Izquierda Unida (IU) en 1989, y luego el Eje Pachakuti en 1993, que desembocarían más que todo en un descontento de los cocaleros hacia estos partidos, tanto a causa del comportamiento descrito por muchos como instrumental por parte de estos últimos, como por la marginalidad de esta izquierda dentro del campo político (Do Alto, 2008: 27).

Ante la percepción de que su medio de vida y su identidad estaban en peligro, los campesinos se vieron obligados a desarrollar una estrategia política propia. Optaron

por esta opción debido a la falta de alternativas de negociación dentro del sistema social y a la unión de las elites para bloquear cualquier concesión por parte del Estado.

El Instrumento Político (IP) comenzó a participar en elecciones, primero a nivel local y luego nacional. Su estrecho vínculo con las organizaciones de productores de coca le impregnó, en sus primeros años, un carácter netamente corporativo. Es decir, se trataba de un fenómeno eminentemente rural y cochabambino por lo que, en una primera etapa, las articulaciones o alianzas se entablaron en relación a la hoja de coca y a la experiencia sindical (Quiroga, 2014: 19).

La limitada influencia del sector en políticas relacionadas con la coca, debido a las restricciones en las alianzas y el estado del mercado político, llevó a la creación de un nuevo enfoque político innovador. En este enfoque, no había una clara distinción entre las organizaciones sindicales y la estructura del partido, ya que los sindicatos y las organizaciones sociales de base se convirtieron en secciones fundamentales del IP. A través de la adhesión colectiva de estas organizaciones, se estableció un vínculo “orgánico” entre ellas. En esencia, este instrumento operaba como una federación de organizaciones sociales.

A medida que fue involucrándose en la política regional y nacional, el MAS-IPSP logró erigir un discurso donde la hoja de coca fue ocupando el centro de la lucha social y política en Bolivia (Quiroga, 2014: 19). La defensa de la hoja de coca no solo representaba la reivindicación de la dignidad y la soberanía nacional, sino también la preservación de la herencia cultural de los pueblos originarios: la lucha por el agua, los bloqueos del altiplano, la resistencia a la suba de impuestos y la defensa del gas. Esta lucha por la hoja de coca se enmarcaba en la reivindicación de los recursos naturales saqueados y mal administrados durante siglos por los gobiernos bolivianos.

Este desplazamiento simbólico implicó la politización de la hoja mediante la construcción de una “cadena de equivalencias” (Laclau, 2005) que permite asociar fluidamente la defensa de la coca con la defensa de la cultura andina, con la soberanía y con la dignidad nacional que se sienten amenazadas por el imperialismo norteamericano (Komadina Rimassa, 2008: 4). La presencia campesina e indígena en esos espacios institucionales muestra una importante renovación de las elites políticas con fuerte acento en aspectos identitarios, tanto de carácter étnico como de género (Mayorga, 2011: 19). El MAS-IPSP se autodenomina como un “instrumento político” en lugar de un partido tradicional, y busca preservar elementos característicos de

los movimientos socio-territoriales latinoamericanos, cuestionando el modelo de democracia liberal representativa.

Nace como un partido de estructura indirecta. Esto significa, que la afiliación al partido es una afiliación de las organizaciones sociales: indirectamente, los individuos miembros del sindicato quedan afiliados al partido. Esto explica por qué Evo Morales ha manifestado en varias ocasiones que «donde funcionan bien las organizaciones sindicales no es necesaria una estructura paralela del partido» (Zuazo, 2010: 126).

Quiroga (2014) afirma que el MAS-IPSP ha procurado mantener estructuras organizativas flexibles y fomentar la toma de decisiones a través de asambleas y consensos. El estatuto del mismo refleja esta orientación, con disposiciones que promueven la participación de las bases y la elección de candidatos mediante votación directa en ampliados y asambleas.

El punto fundamental de distinción entre el IP y un partido radica en la estrecha relación con los movimientos sociales. El IP se considera una herramienta que surge de los movimientos sociales para la toma del poder, donde las organizaciones sociales son su base fundamental. Los referentes políticos en este contexto, actúan como propietarios del partido y toman las decisiones. El IP es diferente, se compone de un grupo de organizaciones sociales vivas que participan en la definición de situaciones, pero a diferencia de un partido, no es una entidad en la que solo algunos definen, sino que todos participan en la toma de decisiones.

Con la presencia del MAS en el Gobierno, se han ampliado los grados de participación política y se han incorporado nuevas identidades en el sistema de representación política, provocando una renovación de las antiguas elites políticas; en términos simbólicos y discursivos, existe un predominio de la identidad indígena que ocupa el centro del espacio de discursividad política y tiene efectos institucionales (Mayorga, 2011: 35).

En efecto, el clivaje campo-ciudad reorganiza los valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia republicana se valoriza como capital la pertenencia o ascendencia étnica indígena, expresada en apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional dejan de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer lugar, hay una valoración del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la presencia de organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto urbana como rural (Zuazo, 2010: 125).

De este modo, la victoria del MAS en las elecciones es un reflejo del poder de los movimientos sociales y la derrota de las pretensiones de los partidos políticos tradicionales. En estos conflictos sociales, MAS había logrado ampliar su discurso para incluir las reivindicaciones de los movimientos de protesta y posicionarse él mismo, si no a la cabeza de las protestas al menos como punto de referencia aceptado (Sven, 2007:15).

El MAS ha comprendido que el camino hacia el poder político requiere movilizar el poder social de los movimientos sociales, pero de una manera distinta. En lugar de incorporar a los actores sociales en una estructura partidaria y establecer jerarquías internas de demandas, busca establecer una relación de igualdad con los movimientos, donde todas las reivindicaciones se unen en una cadena discursiva que desafía el statu quo. El papel del MAS, en consecuencia, es articular esta cadena de demandas en el ámbito político-institucional.

7. Conclusión

En resumen, entre 1980 y 2002, Bolivia experimentó un sistema electoral caracterizado por la fragmentación política, las coaliciones de gobierno y la lógica de los pactos, dinámicas que generaron descontento y desconfianza en la ciudadanía y sentaron las bases para el ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS) y la llegada de Evo Morales a la presidencia.

El MAS se presentó como una alternativa desafiante de la tradicional, promoviendo una mayor inclusión social y política, prometiendo representar los intereses de los sectores marginados y excluidos de la sociedad boliviana.

Este ensayo subraya la importancia de la emergencia del MAS como una alternativa a los partidos políticos tradicionales, ofreciendo una visión de mayor inclusión social y política. El apoyo electoral abrumador obtenido, especialmente en las elecciones de 2005 que llevaron a Evo Morales a la presidencia, reflejó el deseo de cambio y la demanda de una mayor inclusión social y política en Bolivia.

La victoria del MAS-IPSP no sólo significó un cambio en los actores y sectores de gobierno, sino que también tuvo un significado simbólico especial con resonancia en toda América Latina y, por qué no, a nivel mundial.

En conclusión, el ensayo resalta la importancia de entender el impacto histórico y político del ascenso del MAS en Bolivia, ya que representa un cambio significativo

en la dinámica política del país y una respuesta a las demandas de inclusión y justicia social por parte de amplios sectores de la población. Esta transformación política tiene implicaciones más allá de las fronteras bolivianas, generando atención y reflexiones en otros contextos regionales e internacionales.

8. Bibliografía

CUNHA, C. (2014), “El proceso de cambio en Bolivia: un balance de ocho años”, en *T'inkazos*, Vol. 37 N.º 35.

DO ALTO, H. (2008), “El MAS-IPSP boliviano, entre movimiento social y partido político” en *Análisis Político*, Bogotá, Vol. 21 N.º 62.

KOMADINA RIMASSA, J. (2008), “La estrategia simbólica del Movimiento al Socialismo” en *T'inkazos*, Vol. 11 N.º 22-23, pp. 183-196.

MACHADO, F. (2010), “Partido y algo MAS: descripción y análisis del Movimiento al Socialismo (MAS) como fenómeno político en Bolivia”.

MAYORGA, F. (2001), “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”, en Lanzaro, Jorge (comp.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.

MAYORGA, Fernando: “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia”, en LANZARO, Jorge (comp.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 2001, p. 206.

MAYORGA, F. (2011), “Movimientos sociales y participación política en Bolivia” en CHERESKY, I. (comp.) *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*, Buenos Aires, Ed. Prometeo.

OCAMPO PINTO, M. T. (2006), “Bolivia: un viaje por el proceso que eligió a Evo Morales Presidente de Bolivia”, en *Desafíos*, Bogotá, Vol. 14, enero-junio, pp. 10-39.

QUIROGA, M. V. (2014), “El MAS-IPSP como proyecto político identitario en Bolivia. Reflexiones sobre una experiencia estética y política”, en *Identidades*, N.º 7, diciembre, pp. 1630.

RODRIGUES GOMES, D. M. (2016), “Los marcos de referencia políticos del movimien-

to al socialismo boliviano (1995-2005)", Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, *Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset*, pp. 112-170.

SVEN, H. (2007), "¿Hacia un partido "tradicional"? Un análisis del cambio organizativo interno en el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia", en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Coloquios.

TORRICO, M. (2014), "Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los partidos" en *Perfiles latinoamericanos*, Vol. 22 N° 43 (77-102).

ZUAZO, M. (2010), "¿Los movimientos sociales en el poder?", en *Revista Nueva Sociedad*, Vol. 227, mayo-junio.

Oelschlager, Rocío (2024). "El MAS como instrumento político diferenciado: desafiando el paradigma de los partidos tradicionales", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 190-204.

EL CAMINO DEL FRENTE AMPLIO HACIA LA VICTORIA DEL 2004 EN URUGUAY

Lucía A. Pérez de Urrechu
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

La fundación del Frente Amplio en el año 1971 inaugura un proceso de reconfiguración del sistema partidario de Uruguay, el cual toma definitivamente forma con la victoria en las elecciones presidenciales del 2004. La coalición conformada por partidos y grupos de izquierda, entre ellos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los demócratas cristianos y aquellos descontentos con los partidos tradicionales, de los cuales se escinden, quiebra de este modo, la lógica bipartidista instaurada en el país desde sus orígenes.

El Partido Nacional y el Partido Colorado, no solo son los partidos más antiguos de Uruguay, sino que se encuentran entre los partidos con mayor institucionalización, estabilidad y longevidad en América y Europa Occidental (Lanzaro, 2007:2-3). Su surgimiento se encuentra ligado al origen mismo de la república uruguaya. La alternancia política entre ambos partidos, estableciéndose en cierto punto un gobierno

de concertación, tuvo una duración centenaria (Lanzaro, 2007). Es por esta razón que resulta por lo menos llamativo a primera vista el triunfo del Frente Amplio en las elecciones del ejecutivo nacional de 2004, rompiendo con la tradición histórica de gobiernos blancos o colorados.

Es preciso por lo tanto, comprender de qué manera fue posible que un partido de izquierda, nacido con una lógica coalicional y movimientista, ganara un lugar en las instituciones y en el electorado, en detrimento de los partidos tradicionales. ¿Cómo se desenvuelve la metamorfosis del frenteamplismo que consigue modificar uno de los sistemas bipartidistas más antiguos, consiguiendo el paso a un multipartidismo moderado? (Yaffé, 2013b).

Con el fin de poder dar respuesta a la anterior problemática se abordará —siguiendo lo propuesto por Katz y Mair en “La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” (2007)— la evolución de las caras donde actúa el partido. Primero, el partido en relación a quienes lo votan, como los convoca y ejerce la representación, remitiendo a la dimensión del partido en el electorado; segundo, se encuentra la dimensión del partido como organización partidaria, la cual refiere a la estructura y vida interna del partido, y por último, el partido en el gobierno, en tanto la participación del partido en las instituciones estatales.

Por lo tanto, se analizará el desenvolvimiento de la organización partidaria en su vida interna, teniendo presente la transición de coalición electoral a su institucionalización como partido (Lanzaro, 2000), en el cual los diversos partidos que originalmente lo conformaron, se convierten en facciones partidarias. Al mismo tiempo, se tendrá presente los aspectos estatutarios y los liderazgos que configuraron a lo largo del periodo al partido.

En cuanto al Frente Amplio como partido en el Estado, resulta aquí una cuestión tan problemática como interesante. El rol del partido en tanto oposición al gobierno resulta clave para comprender la dinámica que luego llevará al partido a configurarse como una alternativa a los partidos tradicionales gobernantes. Al mismo tiempo, los tres periodos de Tabaré Vázquez como intendente de Montevideo, ciudad donde se concentró el mayor porcentaje de la población nacional, es un aspecto que debe ser relevado y resaltado, entendiendo que si bien el partido no accede al gobierno nacional, si lo hace en la ciudad capitalina de Uruguay. Asimismo, debe considerarse su participación en el parlamento, donde paulatinamente, comenzará a ocupar un mayor número de bancas, beneficiándose del caudal electoral que el Partido Nacio-

nal (PN) y el Partido Colorado (PC) iban perdiendo por el creciente descontento por la situación de crisis que comienza a atravesar el país.

Por último, se estudiará el partido en el electorado. Esta cara del partido atraviesa una metamorfosis durante el periodo analizado. Es un factor clave la constitución misma del partido como una organización militante, con alta participación de sus afiliados. Al mismo tiempo, la hermandad del frenteamplismo con el movimiento sindicalista, explica la constitución misma de sus bases sociales, junto a las estructuras militantes de las fracciones que lo integran al partido. Por último, la moderación ideológica del Frente Amplio con motivo de ganar a un electorado de centro es contrarrestada con la infusión de valor al partido, brindándole una identidad, un sentido emotivo y de pertenencia para sus bases militantes.

2. El sistema partidario uruguayo y la incidencia del Frente Amplio

Siguiendo a Lanzaro (2007), el sistema de partidos de Uruguay, era originalmente un sistema bipartidista con una larga historia, cercana a los 150 años, y una institucionalización fuerte. El autor propone que “... los partidos tradicionales uruguayos están entre los más antiguos de América y de Europa occidental (segundo o tercero, dependiendo de los criterios empleados) (Lanzaro, 2007:2). En cuanto al sistema de partidos, si se los clasifica y ordena de acuerdo a “longevidad exitosa” - edad promedio de los dos partidos más votados en la última elección incluida en el estudio- Uruguay está en el primer lugar, seguido por Estados Unidos y Colombia.” (Lanzaro, 2007:2). Es parte de la motivación del ensayo comprender de qué manera logra el Frente Amplio irrumpir y reconfigurar un antiguo sistema bipartidista, el cual derivó en un equilibrio de poder entre ambos partidos tradicionales, los cuales conforman y establecen una lógica consociacional de gobierno. Este sistema estaba basado en ciertos principios fundamentales, los cuales eran el doble voto simultáneo, la representación proporcional en el Poder Legislativo, la coparticipación de ambos partidos en los consejos de gobierno y organismos de control de los servicios públicos y la configuración de mayorías parlamentarias estratégicas para la sanción de leyes prioritarias, al mismo tiempo que se ejerce un presidencialismo de compromiso, buscando alianzas con sectores que no son propiamente parte del oficialismo (Lanzaro, 2007:5).

Un sistema mayoritario con una sola vuelta, podría explicar, en parte, siguiendo a Duverger (1992), esta configuración bipartidista, que estructura las instituciones de

gobierno. Resulta interesante pensar que el Frente Amplio, un tercer partido, logra competir con los dos partidos tradicionales, iniciando en una situación de debilidad, consiguiendo en el transcurso del tiempo ampliar su caudal electoral, desafiando el factor psicológico propuesto por Duverger (1992), modificando la configuración del sistema bipartidista. El Frente Amplio inaugura un sistema multipartidista moderado, debido al bajo número de partidos que lo conforman (Lanzaro, 2000: 49). Al mismo tiempo, la estructuración del sistema partidario pasa a ordenarse mediante una polarización izquierda-derecha, aunque es preciso destacar que las distancias entre las posturas ideológicas no son extremadamente amplias, debido a que los tres grandes partidos competían por conquistar a un electorado de centro y aquellos electores independientes (Lanzaro, 2000:50).

Luego del retorno de la democracia en Uruguay, pasados diez años de gobierno dictatorial, el sistema de partidos se enfrenta a una doble transición: la ya mencionada realineación del sistema partidario, donde se pasa de un bipartidismo para luego evolucionar en una política de triángulo, deviniendo finalmente en una política de bloques articulada por el clivaje izquierda-derecha por un lado (Lanzaro, 2000), y la transformación que sufren los partidos en cuanto a sus formas organizacionales, funciones y tácticas electorales por el otro (Lanzaro, 2007:3).

Un suceso relevante fue la reforma constitucional de 1996, la cual parecería elaborada con la intención de retrasar, o por lo menos dificultar, el acceso del FA al gobierno. La misma consiste en la imposición de elecciones primarias simultáneas en todos los partidos, las cuales reemplazan a las elecciones internas donde los partidos dirimían las candidaturas para las elecciones generales. Esto lleva a la presentación de una candidatura presidencial y vicepresidencial única por partido, cuestión que anteriormente era resuelta por el voto doble simultáneo, votando por el sublema de uno de los lemas, permitiendo cierta concentración de los votos. Se agrega la segunda vuelta electoral para las elecciones ejecutivas nacionales y se separan en tiempo los comicios nacionales de los departamentales, los cuales anteriormente se desenvolvían en la misma fecha (Yaffé, 2013b:14).

3. El Frente Amplio como organización partidaria

El Frente Amplio, surge como una coalición de los partidos de izquierda de Uruguay, planteando su organización partidaria de forma diversa a la que se podía encontrar en los partidos tradicionales. Mientras estos partidos se organizaban en clubes po-

líticos, el FA se presentó desde 1971 como una coalición y un movimiento militante. Esto reviste importancia a la hora de pensar la estructura interna del partido, de las bases sociales. A modo ilustrativo es posible retomar declaraciones de Liber Seregni, primer presidente y líder del Frente Amplio, donde declara que todo elector del partido es un militante frenteamplista. Más allá de la veracidad de la declaración, el discurso pone en evidencia la aparición de una forma diferente de vida política, una estructura organizacional que buscaba dar protagonismo a sus militantes (Yaffé, 2013b:11).

El Frente Amplio nació con la expectativa de constituirse en una organización partidaria que poco tuviera que ver con la de los partidos tradicionales. Se fundó bajo dos lógicas: la de la coalición y la del movimiento. El componente movimientista tuvo un gran desarrollo en el periodo anterior al golpe de Estado y posterior conformación del gobierno dictatorial. Desde el año 1974 el FA pasó a la ilegalidad y clandestinidad, al ser prohibido por la dictadura. Muchos de sus miembros y líderes pasarían a convertirse en mártires de la resistencia frenteamplista. Será luego del retorno a la democracia, la liberación de los militantes del FA y vuelta de la proscripción del partido y sus fracciones, que el componente del movimiento comienza un momento de crecimiento. (Yaffé, 2013b:10).

Por otra parte, el componente de la coalición, que luego evoluciona al convertirse en un partido de coalición, refiere a que al momento de su fundación reunía a los partidos tradicionales de la izquierda, que se encontraban en un momento de nacionalización, el Partido Socialista y el Partido Comunista, junto al Partido Demócrata Cristiano y sectores disconformes con el PN y el PC. Pero se desenvolvió a lo largo de los años con cierto dinamismo, produciéndose en 1989 el alejamiento de los demócratas cristianos y el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, al mismo tiempo que se sumaban a la coalición el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Surgen en el seno del Frente Amplio, producto de la reconfiguración de las fracciones existentes en su interior, la Vertiente Artiguista y el Movimiento de Participación Popular. Luego aquellos que se habían alejado volverían bajo el nombre de Nuevo Espacio, quien luego volvería a escindirse. El componente coalicional entonces convivió con la reconfiguración interna de fuerzas y fracciones. (Yaffé, 2013b:10).

El tránsito de la coalición al partido se evidencia en la consolidación del Frente Amplio como un partido en sí mismo. Este proceso de afirmación del Frente Amplio como partido se observa con claridad en los estatutos de 1986 y 1993. A la par de la sanción de los estatutos que establecen la estructura organizativa del partido, se

produce una integración de los partidos que conformaban la coalición como fracciones del nuevo Partido del Frente Amplio. Las fracciones partidarias mantienen, de igual manera, altas cuotas de poder dentro del partido, junto con su institucionalización y su identidad propia, ahora incluida e imbricada con la identidad frenteamplista que será analizada en un apartado posterior. (Yaffé, 2013b:11).

En cuanto a su organización interna, el Frente Amplio presenta en sus estatutos una organización formal de tipo piramidal, con una base militante muy importante, la cual tenía un lugar en los órganos colegiados de toma de decisiones del partido. En la base de esta pirámide se encontraban los comités de base, conformados por los militantes y afiliados frenteamplistas. En un nivel superior se encontraban las coordinadoras zonales. En niveles superiores se hallaban, siguiendo una jerarquización ascendente, los plenarios departamentales y las mesas políticas departamentales. En el plano nacional, se encontraba el plenario nacional, la mesa política nacional y, por último, en la cúspide de la pirámide organizacional del Frente Amplio, se daba el Congreso del partido (Yaffé, 2013b:17).

A esta estructura formal, se debe sumar la de las fracciones frenteamplistas. Es una característica de los partidos uruguayos la fraccionalización. Mientras que los partidos tradicionales tienden a un bifraccionalismo, el FA contiene un gran número de fracciones en su interior, llegando a contener cinco fracciones (Piñeiro y Yaffé, 2003:7) Esta fraccionalización podría ser explicada, sostiene Yaffé (2013a) por múltiples factores. Entre ellos el autor enumera el aumento del caudal electoral del partido, lo cual llevó a un aumento de las bancas a repartir. Este crecimiento electoral es preciso notar que se da mayormente en las circunscripciones de mayor tamaño, siendo más lento su desarrollo en el interior del país. También se podría explicar la creciente fraccionalización por la inclusión de los partidos con los que se realizaban alianzas electorales, como fracciones del FA.

Entre estas fracciones partidarias hay amplias diferencias. Por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Socialista, tienen un andamiaje institucional de alta complejidad y con una amplia adhesión de su militancia a sus estructuras burocráticas. Asimismo, existen fracciones de un nacimiento más reciente, con menor historia y tradición que sus compañeros de partido, que valorizan, debido a la carencia de organización propia, la conformación de estructuras del Frente Amplio. Esta disparidad entre fracciones se evidencia también en los órganos de representación partidaria. En la organización de los órganos colegiados de decisión del FA "...los delegados de las bases sociales son una parte crucial de todos los cuerpo dentro

de la estructura del FA y coexisten con los delegados de las fracciones del FA y los líderes partidarios” (Cambridge, 2019:162). Aquellos sectores con presencia en todo el territorio nacional, junto con una numerosa militancia de base, se encuentran sobre representados en los órganos de decisión y participación, ya que sus líderes y sus bases militantes logran encontrarse en los puestos decisorios, mientras que las fracciones más pequeñas y jóvenes, con formas de participación más precarias no posee. (Yaffé, 2013b).

Las fracciones obtienen un mayor peso y relevancia al obtener un mayor peso electoral, y por lo tanto, un mayor número de bancas conseguidos. Pero si bien esto le dé una cuota de mayor poder, durante el periodo analizado, los pesos de los partidos varían de una elección a otra, de esta manera viéndose afectada sus posiciones relativas, sin tener ninguna de las fracciones una postura predominante o de hegemonía (Yaffé, 2013a:80). Esto permite comprender la alta disciplina partidaria que tenían las fracciones, siempre acatando las directivas y estratégicas establecidas por los órganos de dirección del partido.

Hay dos últimos aspectos a tener en cuenta en la configuración interna del FA, que resultan relevantes en la explicación de su victoria electoral: el peso de los liderazgos partidarios y las alianzas que estos llevan adelante. Liber Seregni es uno de los fundadores de la coalición frenteamplista y el primer presidente del partido. Su figura toma principal relevancia en 1984 con la vuelta a la democracia y su liberación luego de años encarcelado, poniéndose al frente del proceso de presentación de la izquierda a nivel nacional junto con la recomposición e integración democrática (Lanzaro, 2000: 48). Con la llegada de Tabaré Vázquez a la intendencia de Montevideo y su impulso renovador programático del FA, comienza una disputa y recambio de liderazgos. Por un lado, Liber Seregni conservaba aún la presidencia del partido, acompañado de quien hasta ese momento se pensaba sería su sucesor natural Danilo Astori, quien había encabezado las listas senatoriales en las elecciones; mientras que, por el otro, Vázquez detentaba la presidencia del Encuentro Progresista, alianza partidaria surgida con motivos de atraer franjas electorales de centro. Vázquez no solo se encontraba respaldado por los sectores renovadores, cuestión a la cual Seregni y Astori se oponían terminantemente sosteniendo que atentaba contra los valores fundacionales del FA, sino también por su gestión en el gobierno de Montevideo, el cual es el departamento de mayor importancia debido a su caudal electoral y dimensión. Vázquez representaba una oposición más firme a los partidos tradicionales pero comprendía que era necesaria una moderación partidaria para captar un mayor número de electores que se alejaban del PN y PC por el descontento con

sus gestiones. Luego de que Seregni negociara personalmente por la reforma de 1996 con los partidos tradicionales —que el FA rechazaba terminantemente— el líder partidario renunció a la presidencia del partido al sentirse desautorizado y se escindió del FA. Es así que la tensión entre los liderazgos se resolvió, siendo elegido a los pocos meses Tabaré Vázquez como presidente del partido (Yaffé, 2013a). Él ejerció un liderazgo de corte más personalista, el cual condujo, en parte por el efecto de arrastre de su figura y un posible disciplinamiento, a una mayor unificación del partido (Lanzaro, 2000:46).

4. Frente Amplio en las instituciones del Estado

Durante el período abordado, el Frente Amplio se ha encontrado siempre en la oposición a los gobiernos nacionales, los cuales desde la vuelta de la democracia se han caracterizado por una alternancia entre el mando del PC y el PN. Pero debe destacarse que, si bien no ha formado parte del Poder Ejecutivo nacional, no es menor el rol que ha desarrollado en las demás instituciones gubernamentales, ejerciendo desde allí su influencia. En la presente sección se hace una revisión de la presencia del FA en las instituciones estatales, destacando la obtención de bancas en el Parlamento desde la cual se encargó de ejercer la oposición, al mismo tiempo que el partido se hizo con el gobierno del departamento más importante, Montevideo. También participó en la dirección y control de ciertas empresas públicas.

En un primer momento, la izquierda adquiere, mediante su hermandad con el sindicalismo, “puestos estratégicos en los organismos tripartitos de regulación del salario y de administración de la seguridad social, accediendo a una suerte de coparticipación corporativa” (Lanzaro, 2000:40). La izquierda aparece en ese momento como un actor secundario pero relevante que sacó provecho de las posiciones que obtuvo en las instituciones. Desde estas buscaron reeditarse mediante la negociación con el oficialismo tradicional y, al mismo tiempo, la defensa de la clase y el mundo urbano. En este sentido, el sindicalismo, el cual en sus direcciones gremiales se encontraban referentes de la izquierda, generaba poder de congregación de distintos sectores, siendo destacable el poder de veto que poseía y su organización autónoma. Desde el sindicalismo se ejerció la oposición a los gobiernos, siendo sus bases sociales, la clientela electoral para la coalición de izquierda (Lanzaro, 2000:40).

El FA, gracias a la coparticipación, consiguió hacerse con un lugar en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, los cuales constituían organismos de control. También

se hizo con puestos en los directorios de empresas públicas y servicios (Lanzaro, 2000:43).

Por otra parte, desde sus bancas parlamentarias, los legisladores frenteamplistas buscaron ejercer la oposición, canalizando la representación del descontento de la ciudadanía. Papel que logró desempeñar exitosamente, debido a que elección tras elección el caudal electoral del FA se expandía y el de los partidos tradicionales disminuía preocupantemente, lo que le otorgó, paulatinamente una mayor representación parlamentaria. En este sentido, es posible establecer que los legisladores de izquierda tuvieron un mayor éxito a la hora de renovar sus bancas mediante la reelección que los partidos tradicionales (Chasquetti, 1999:10).

La participación más destacable y relevante que tuvo el Frente Amplio en las instituciones fue la victoria y retención durante tres períodos de la Intendencia de Montevideo. Este es el “[...] departamento más importante de los 19 en los que se divide el país desde todo punto de vista: demográfico, económico, político, cultural” (Yaffé, 2013a:83). Haber ejercido el poder en la capital del país, con una gestión que no generó profundos conflictos, por el contrario, resultó beneficioso, le brindó al FA legitimidad. La experiencia positiva en el gobierno de Montevideo estableció un ejemplo de las capacidades del FA al ponerse al frente del ejecutivo, desafiando así las gestiones de los partidos tradicionales. Resultó clave la legitimación en el bastión electoral más importante del Frente Amplio, lo que le proporcionó la capacidad de postularse como alternativa al PN y el PC.

En resumen, si bien no fue gobierno oficialista, desde los lugares que ocupó, el partido del Frente Amplio, se encargó de canalizar y moderar las demandas sociales, gestionando de forma exitosa la Intendencia de Montevideo, junto con los puestos en las direcciones de control de las empresas estatales y dentro de las bancadas legislativas. Su participación como oposición en las instituciones le permitió configurarse como una alternativa verdadera a los partidos del establishment, mostrándose como amenaza al poder complicar la gobernabilidad del oficialismo. El exitoso desempeño en las gestiones ejecutivas, legislativas y en los organismos de control le propició un antecedente que generó legitimidad y un sello propio de la gestión del Frente Amplio, catapultando al partido como una opción viable para el ejercicio del poder nacional.

5. El Frente Amplio en el electorado

La reconfiguración que atravesó el Frente Amplio desde su nacimiento hasta las elecciones presidenciales del 2004, de cara al electorado, es una de las claves explicativas centrales de su victoria.

La literatura sobre la temática ofrece numerosos argumentos para explicar el aumento exponencial del caudal electoral del Frente Amplio, que lo llevó de ser un tercer partido sin peso electoral a reconfigurar el sistema partidario y ganar las elecciones. Algunos autores proponen que hay un recambio generacional, es decir, un factor demográfico, que serviría de factor causal para la victoria del FA. Esta propuesta sostiene que las generaciones más jóvenes, tienen una preferencia por los partidos de izquierda. Mientras que otros autores proponen la hipótesis de una izquierdización de la sociedad uruguaya (Chasquetti, 1999).

Pero estos argumentos por sí solos resultarían insuficientes para dar cuenta del crecimiento del caudal electoral que sufre el FA. Es por eso que se sostiene en el presente trabajo que hubo un reposicionamiento calculado y estratégico por parte de la dirección del partido frente a un posible electorado.

Primeramente, es imperativo nombrar las bases sociales de las fracciones partidarias junto a la clientela electoral que aporta la hermandad del partido con el sindicalismo. Existe una “alianza estratégica con la central sindical única, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (pit-cnt). Se trata de una alianza construida sobre la base de acuerdos programáticos, que respeta la autonomía de ambos actores” (Padrón y Wachendorfer, 2017:63). Es el sindicalismo el que aportó una amplia capacidad de movilización (Padrón y Wachendorfer, 2017:62).

Bajo la dirección de Tabaré Vázquez, se produce una moderación programática y alianzas partidarias, que tenían por objetivo atraer a un electorado que en el espectro ideológico se encontraba en el centro. De esta manera, se reconfiguraron y moderaron las propuestas, pudiendo afirmarse que el FA se convierte en un tipo de partido catch-all, principalmente por el interés en la obtención de votos, perdiendo importancia y centralidad las propuestas relacionadas con una ideología más radicalizada y de izquierda (Yaffé, 2013b).

Sumado a la moderación programática, el Frente Amplio capitalizó el descontento de la ciudadanía con los gobiernos llevados adelante por el PN y el PC. A través de la lógica de la diferenciación y la oposición acérrima a los partidos tradicionales, con-

siguió posicionarse como una alternativa viable. Ejerció resistencia a las reformas liberales llevadas a cabo durante los años noventa y canalizó la aflicción generalizada por la crisis que se vivía (Yaffé, 2013b).

Por otra parte, entendiendo que el Frente Amplio nació como un partido de izquierda con fuerte preeminencia de las bases militantes, debió canalizar y disminuir los costos de una moderación programática. Es así que infundió valor al partido como tal. Construyó una identidad recuperando la historia reciente, la resistencia a la violencia dictatorial, la cual dejó mártires y sentidos con los cuales los militantes frenteamplistas podrían identificarse (Yaffé, 2013b).

Luego de presentarse en sus orígenes como una superación de la tradición, se decidió la creación de una tradición propia del Frente Amplio, buscando generar una conexión de tipo sentimental y emotiva con sus simpatizantes. La izquierda eligió la manera en que se insertaba en la historia, adjudicándose la tarea histórica de completar dos proyectos frustrados: la revolución artiguista y las reformas batllistas. Realizaron una revisión del pasado reciente, y a partir de este, se construyó una identidad fuerte, que contrarrestaban los costos de la moderación del programa partidario. La izquierda se inscribió en la historia nacional, convirtiéndose en personaje activo de la construcción de memoria, no permitiendo que se pasara la página, luchando contra la amnesia colectiva que ciertos sectores buscaron instaurar en la sociedad uruguaya. La izquierda se reconoció como víctima pero también como actor de resistencia frente al autoritarismo, la desaparición, el exilio, la tortura, la persecución y los asesinatos llevados a cabo por la dictadura. La etapa de la resistencia y la épica frenteamplista durante los tiempos de la dictadura, es desde donde se construyó y se infundió valor a la organización partidaria. El FA disputó la capacidad de resignificar el pasado, llevándolo al presente, fortaleciendo los lazos emotivos e identitarios de los militantes y simpatizantes. Se generó una comunidad, una pertenencia, que reforzó al partido y núcleo electoral. Esta reconstrucción surgida de un análisis introspectivo por parte del frenteamplismo, generó una historia cuasi épica y mística, cuando la relación con el pasado nacional es, por lo menos, conflictiva.

El FA puede explicar su victoria en el 2004, primero, gracias a sus amplias bases sociales de apoyo. Por otra parte, se decidió estratégicamente por la moderación programática. En consonancia con esta táctica electoral, se infundió de valor al partido con el motivo de generar un lazo emocional e identitario entre este y la militancia, la cual podría haberse disgustado por la moderación ideológica. Estos son los fac-

tores que le ganaron la simpatía y adhesión de gran parte de la sociedad uruguaya, llevando al partido a la presidencia nacional.

6. Conclusión

Como fue visto en el desarrollo del presente ensayo, la explicación de la llegada del Frente Amplio, con la candidatura de Tabaré Vázquez, a la presidencia nacional del Uruguay, siendo el primer gobierno en la historia de Uruguay en no ser blanco ni colorado, es compleja.

La victoria del Frente Amplio, tiene relevancia en el contexto tanto nacional como latinoamericano. Esta modificó uno de los sistemas partidarios más antiguos del continente, al mismo tiempo que cambió terminantemente la situación electoral, ampliando las opciones de representación que disponía la sociedad uruguaya. Es un proceso de renovación de un sistema anquilosado que resulta extremadamente novedoso e interesante.

Es preciso destacar la relevancia social que tuvo este suceso. Es una alternativa con bases populares, con alto compromiso con las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Es un partido que se apropió de la representación del pueblo, como sujeto excluido de la vida política por parte de los partidos del establishment. El ascenso al poder del Frente Amplio, ofreció una alternativa de construcción política nacional y popular, promoviendo políticas de inclusión social, con la centralidad del Estado, buscando subsanar la crisis de los años anteriores, persiguiendo el crecimiento y mejora de la economía nacional. Conocer sus transformaciones, tanto sea en el interior del partido, como frente al electorado o dentro de las instituciones, resulta importante para poder comprender la relevancia que aún mantiene en la actualidad, tanto el partido, como las figuras surgidas de él.

7. Bibliografía

CHASQUETTI, D. (1999). "La renovación del Parlamento: 1985-1999." *Documentos de Trabajo/FCS-ICP*; 22.

DUVERGER, M. (1992). "Influencia de los sistemas electorales en la vida política", en *"Diez textos básicos de Ciencia Política"*, Ariel. Barcelona, pp. 37-76.

LANZARO, J. (2000). "El Frente Amplio: un partido de coalición, entre la lógica de oposición y la lógica de gobierno". *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, v. 12, 35-68.

LANZARO, J. (2007). "Uruguayan Parties: transition within transition" en "*When parties prosper*" Boulder: Lynne Rienner Publishers.

KATZ, R. y MAIR, P. (2007). "La supremacía del partido en las instituciones públicas: El cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas." en MONTERO, J. GUNTHER, R. y LINZ, J. "*Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos*" Madrid; Trotta.

PADRÓN, Á., & WACHENDORFER, A. (2017). "Uruguay: caminos hacia la construcción del poder sindical". *Nueva sociedad*, 272, 62-82.

PÉREZ BENTANCUR, V., PIÑEIRO RODRÍGUEZ, R. y ROSENBLATT, F. (2019). "Theoretical Conclusions and Political Implications" en "*How Party Activism Survives. In How Party Activism Survives: Uruguay's Frente Amplio*" Cambridge: Cambridge University Press.

PIÑEIRO, R. y YAFFÉ J. (2003). "¿Por qué se fraccionaliza la izquierda? Sistema electoral y fraccionalización partidaria en el Uruguay. El caso del Frente Amplio (1971-1999)." Montevideo: Udelar. FCS-ICP, 2003. *Documento de Trabajo / FCS-ICP*, 41

YAFFÉ, J. (2013a). "Competencia interna y adaptación partidaria en el frente amplio de Uruguay." *Perfiles latinoamericanos*, 71-94.

YAFFÉ, J. (2013b). "Consolidación y transformación partidaria: institucionalización, liderazgo y capacidad de adaptación en el Frente Amplio de Uruguay." *Iberoamericana* 7-26.

YAFFÉ, J. (2004). "Memoria y olvidos en la relación de la izquierda con el pasado reciente" en MARCHESI, A. MARKARIAN, V. RICO, Á y YAFFÉ, J. (compiladores) "*El presente de la dictadura: estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay*". Ediciones Trilce.

Pérez de Urrechu, Lucía A. (2024). "El camino del Frente Amplio hacia la victoria del 2004 en Uruguay", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 205-217.

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO QUINTA REPÚBLICA EN VENEZUELA: ATRAVESANDO TENSIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS

Juliana Piccoli

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las fuentes que dieron origen al surgimiento del Movimiento Quinta República (MVR), hacia el año 1997 en Venezuela. En este sentido, se desarrolla a lo largo del texto una lectura del contexto económico, social, y político que atravesaba la República Venezolana a finales del siglo pasado, bajo la consigna de que estos elementos otorgaron las condiciones materiales para su creación.

De forma pormenorizadas, se parte del supuesto de que las tensiones sociales que tuvieron como consecuencia movilizaciones populares hacia finales de la década del 80, y principios de los 90, fueron los cimientos de la creación del partido en cuestión.

De esta manera, el texto dará cuenta de los objetivos políticos que fomentan la creación del partido; los objetivos económicos que también son fuente de creación del

MVR, y para los cuales es necesario comprender la sucesión de hechos que han signado la economía venezolana en los años anteriores al 1997; y los objetivos sociales, caracterizados por los levantamientos preliminares al surgimiento del MVR como tal.

Además, retomando la lectura propuesta por Manuel Alcántara (Alcántara Saez, 2001) en su texto titulado “El origen de los partidos políticos en América Latina”, observaremos en el surgimiento del Movimiento Quinta República aspectos como el tipo de liderazgo, el enfoque electoral en las etapas iniciales de su vida como partido, las fuentes de inspiración que actuaron como agentes externos (movimientos sociales e intereses militares en conjunto) y la orientación reformista del partido.

Por último, el texto puntualizará que, si bien es el contexto netamente electoral el que propicia las condiciones necesarias últimas para la creación del Movimiento Quinta República, no es este el objetivo único o esencial de su génesis y desarrollo, sino que se trata de un partido que busca dar vía institucional a un proyecto que se forjó en los albores de lo social en los años previos

2.

El Movimiento Quinta República Venezolano otorga un carácter institucional al proyecto que tenía como objetivo reformar Venezuela. Si bien su nacimiento como tal se dió en octubre de 1997 en una coyuntura netamente electoral, es erróneo pensar que su carácter esencial se encuentra en las elecciones de 1998. El MVR poseía una finalidad clara, discursivamente precisa, basada en la ruptura con las estructuras previas que se habían afincado a lo largo y ancho de la República Venezolana, logrando una hegemonía política que les había permitido perpetuarse en el poder.

De esta manera, para poder explicar el énfasis que el partido tendrá en la ruptura con lo previo, es preciso remitirnos al sistema político venezolano, en el que existía desde 1958 un pacto de gobernabilidad denominado “Pacto de Punto Fijo” entre los partidos políticos Acción Democrática (AD), COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), que funda un orden de estabilidad política a través de la alternancia de estos partidos tradicionales, pero dejando sin espacio a la transformación de estas organizaciones en la misma senda que podría cambiar la sociedad (Kornblith, 2003). Es decir, a medida que avanzaban los años después de la firma del pacto de Punto Fijo, los partidos en el poder fueron perdiendo legitimidad. Esto se debió a que, du-

rante la década de los 80, Venezuela experimentó una serie de tensiones económicas y sociales que sentaron las bases para lo que se desarrollaría a finales del siglo con la creación del MVR. (Lander, L y López, M. 2001).

Hacia 1980 se produjo una caída de los precios de petróleo a nivel internacional y esto, claramente generó una disminución de recursos en manos del Estado puntofijista. A su vez, el país se vio atravesado por un aumento de la deuda externa. Esto propició que hacia 1983 se inicie un proceso de ajustes económicos que tendrán respuestas reactivas en manos de la sociedad civil. Simultáneamente, a fines de la década de 1980, quienes continuaban en el poder hacía varias décadas “implementa un plan de ajustes que pone su acento en la liberación de la economía y que, en términos concretos, se visualiza en la eliminación del control de precios, el incremento de tarifas de los servicios públicos y una nueva devaluación del bolívar” (Lacabana, 1990).

Estas medidas económicas adoptadas por el gobierno venezolano llevaron a un crecimiento de la pobreza en vastos sectores del país. En consecuencia, la sociedad venezolana decidió manifestarse en las distintas ciudades, llevando a cabo un ciclo de luchas populares en las calles comprendido entre 1989 y 1992, teniendo como emblema el suceso conocido como el “Caracazo”. Este fue la expresión de un estallido social que dejó como saldo aproximadamente 300 muertes, saqueos e innumerables heridos. Estos acontecimientos buscaban poner freno a las políticas económicas del gobierno venezolano, cuestionando la estabilidad de la que había gozado el régimen por varias décadas y la hegemonía de los partidos que ocupaban los cargos públicos en dicho régimen, que a su vez venían engendrando diversos cuadros de corrupción que aumentaba la indignación social (Martinez, 2014).

Estas revueltas sociales constituyeron un severo golpe a la legitimidad del gobierno de turno y aumentaron el número de tensiones que atravesaban a la sociedad venezolana. Esto se expresará en los resultados electorales de los comicios que se sucederán años más tarde (Kornblith, 2003). Existía entonces un clima civil que apuntaba hacia el cambio radical porque los y las venezolanas se encontraban desencantados con su democracia, rechazaban la política e incluso grandes proporciones de la ciudadanía se abstenían de votar (Lander, L y López, M. 2001).

Fueron estas expresiones del pueblo las que dieron el puntapié a la creación de la organización política que en un primer momento fue de tipo militar, Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR), y que posteriormente se convertirá en un partido político, comenzando un proceso que abrió paso a la ruptura con lo instituido, buscando construir una Venezuela refundada.

Es relevante destacar que el régimen puntofijista en Venezuela se basaba en acuerdos y pactos, incluyendo el que existía entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos dominantes. Sin embargo, hubo un sector de las Fuerzas Armadas que no estaba satisfecho con esta situación. Estos militares intentaron diversos golpes de Estado para debilitar a los partidos que habían gobernado durante décadas y, posteriormente, se autolegitimaron como representantes del descontento social, con la intención de “refundar la República”. Así nació el Movimiento Quinta República.

La génesis del MVR como partido político estuvo influenciada por un intento fallido de revolución militar en 1992, el cual fue resultado de las crecientes tensiones sociales en Venezuela en años anteriores. Según Salazar (2007), entre las causas de la insurrección se encontraban el aumento de la pobreza, las medidas de ajuste económico y los casos de corrupción que involucraban a los funcionarios gubernamentales.

Los primeros indicios de organización que condujeron al Movimiento Quinta República se remontan décadas antes de 1997. En primer lugar, se formó el Ejército Bolivariano Revolucionario 200, compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas que se oponían al gobierno de turno, así, señalaba uno de sus miembros:

“Cuando fundamos el movimiento en 1982, siendo ya capitanes, era el EBR 200. Allí logramos darle el doble significado a las siglas: EBR, por Ezequiel Zamora, Bolívar y Rodríguez, en cuanto a la trilogía del árbol de las tres raíces. Y además Ejército Revolucionario Bolivariano y 200 por el marco del bicentenario de Bolívar, que se extendió del 24 de julio de 1982 hasta el 24 de julio de 1983. Nosotros fundamos el movimiento el 17 de diciembre. Después pasó -tras el Caracazo- a ser ERB 200 cuando se incorpora gente de otras fuerzas y algunos civiles” (Aznárez, 2000, p.79).

Posteriormente, este grupo se convirtió en el Movimiento Bolivariano Revolucionario, que llevó a cabo el intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. A pesar de que el golpe fue controlado por el gobierno, las justificaciones y la actitud de los golpistas generaron simpatía entre las masas. Los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas, líderes principales de la conspiración, adquirieron relevancia política durante este episodio, lo cual fue fundamental para la posterior creación del partido. (Lander; López Maya, 1999).

Después de pasar dos años en prisión, los militares que formaban parte del MBR comenzaron a construir una vía de legitimidad en el pueblo, lo que les permitió llegar al poder a través de la creación del MVR como partido político. Este partido tenía una carga simbólica significativa, ya que se basaba en las convulsiones sociales y militares previas.

En consecuencia, esto permite afirmar que el surgimiento del Movimiento Quinta República en Venezuela estuvo impulsado por las expresiones del pueblo y las tensiones sociales, así como por los intentos de golpe de Estado liderados por militares descontentos. Estos eventos sentaron las bases para la creación del MVR como una alternativa política que buscaba transformar el país.

3.

Siguiendo a Alcántara en su texto “El origen de los partidos políticos en América Latina” (2001), en el momento de su creación, el Movimiento Quinta República no posee un programa previo ni una estructura burocrática organizada sobre la que afincarse. Sus bases la constituyen los civiles y militares que pregonan un objetivo común: una Venezuela antiimperialista, nacionalista y con un pueblo que no este bajo la línea de la pobreza. De esta manera, es la coyuntura política venezolana, la tensión y movilización que surge hacia la década del 90 la que otorga un momento histórico propicio que da la oportunidad para canalizar un proyecto de país que busca romper con lo constituido.

Un sector de las Fuerzas Armadas que se encontraba decidido a llevar a cabo una transformación decide crear el MBR, pero a esta ventana de oportunidad se le suma la necesidad de encuadrarse por vías netamente institucionales, por lo cual esta organización deriva en la conformación del Movimiento Quinta República. Es decir, tomando la conceptualización de Alcántara, el MVR en su fuente contó, por un lado, explícitamente con una organización militar, una expresión de un sector de las fuerzas armadas que le dió origen, siendo expresión de esas voces militares, recogiendo la inspiración de lo que previamente se denominó MBR. Pero también, por el otro, una fuente fundamental de la organización la constituye la cohesión basada en el liderazgo personalista del militar Hugo Chávez, quien más tarde se convertiría en presidente. Aunque posteriormente Chávez se alejó de los cuarteles, aún hubo importantes fracciones de las Fuerzas Armadas que respaldaron su proyecto partidista, aunque de manera no uniforme ni institucionalizada. (Alcántara, 2001).

En cuanto a la elección del nombre del partido, el Movimiento Quinta República (MVR) se denominó de esta manera por diversas razones. En primer lugar, en Venezuela existe una prohibición de utilizar nombres de próceres o símbolos nacionales en las denominaciones de los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Por lo tanto, el MVR optó por un nombre que evitara esta restricción.

Además, los fundadores del partido buscaban transmitir la idea de que era necesario dejar atrás el período anterior. En este sentido, Chávez publicó un documento a principios de los años 1990 en el que criticaba el sistema político conocido como puntofijismo y proponía el proyecto bolivariano como una alternativa. Según Chávez, la cuarta república venezolana, que abarcaba desde la independencia de la Gran Colombia en 1830 hasta ese momento, debía ser superada. Así, el objetivo era llevar a cabo una refundación del poder nacional en todos sus aspectos, basada en la independencia y la soberanía, tomando como bandera la figura de Simón Bolívar. De esta manera, lo que buscaba construir era la Quinta República, pero con un carácter Bolivariano.

En resumen, la elección del nombre del Movimiento Quinta República (MVR) estuvo motivada tanto por la necesidad de cumplir con las restricciones legales en cuanto a la denominación de partidos políticos, como también por la intención de marcar un cambio profundo en la historia política de Venezuela, basado en los principios de independencia, soberanía y la figura de Simón Bolívar (Martínez, 2014).

Si observamos quienes conformaban el partido, es posible identificar diversos sectores de las izquierdas que se afincaban en una ideología basada principalmente en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, el Movimiento Quinta República (MVR) carecía de una doctrina sólida o bases orgánicas fuertes, encontrándose lejos de ser el típico partido de masas propio del siglo XX o las estructuras partidarias tradicionales venezolanas. En respuesta al contexto internacional caracterizado por el neoliberalismo, el MVR presentaba una síntesis máxima del bolivarianismo independentista, ofreciendo una alternativa al régimen hegemónico (Kornblith, 2003).

Los líderes del partido aludían al carácter difuso del pensamiento popular como argumento justificativo de la falta de hondura ideológica en el partido, ya que este afirmaba construirse a partir de la ideología del propio pueblo venezolano (Martínez, 2014). De esta manera, tomando como referencia lo planteado por Katz y Mair (2007) en torno a las caras partidarias, se ve reflejado en la conformación del MVR la existencia de una prioridad por el partido en los ciudadanos, haciendo hincapié, sobre todo discursivamente en afirmar que la organización partidista debió centrarse

en los movimientos populares organizados. De este modo, incorpora como razón de ser “..la lucha por las reivindicaciones de los sectores más débiles de la sociedad” (Lander, L y López M. 2009: 9).

El partido en los ciudadanos era la cara que los líderes buscaban afianzar en el origen del MVR, siendo este quien otorgue institucionalidad y le de impulso al movimiento popular. Los territorios prioritarios de quienes se encontraron en el origen del MVR, eran aquellos vinculados a los grupos más vulnerables del país. Para esto fue primordial que el partido compitiera electoralmente otorgándole institucionalidad al mismo para, posteriormente, generar un canal de ascenso al movimiento popular y a las necesidades de dichos sectores.

De esta manera, la cara institucional (el partido en el Estado), es la consecuencia necesaria para que las masas organizadas en el movimiento popular participen e influyeran en los lugares de poder. Y es eso lo que el MVR busca sintetizar en su creación.

En torno al carácter del partido, si retomamos la conceptualización previamente mencionada de Alcántara (2001), está claro que buscó reformar las estructuras políticas, económicas, y sociales que atraviesan la Nación Venezolana hacia fines del siglo XX. El partido intentó constituir a través de una estrategia anti política que confronta con lo tradicional, lo establecido, la coherencia que les permita llegar al poder, para una vez en él, sustituir la elite venezolana, fundando un orden que se asume bolivariano y busca, según su líder, representar los intereses del movimiento popular y atender las necesidades de este. Por esto, el MVR pone en tensión la necesidad de una férrea estructura partidaria; es decir, la no existencia de una burocracia partidaria que le permita diferenciarse de los partidos políticos tradicionales como tales.

En este sentido, la motivación electoral que impulsó la fundación del partido se basaba en la necesidad de contar con las instituciones del Estado para llevar a cabo su proyecto de construir una nueva república que encarnara un verdadero proyecto nacional. Como lo señala Salazar (2007), esta idea de cambio y transformación estaba respaldada por la demanda previa de convocar a una Asamblea Constituyente, la cual era vista como una vía para introducir los cambios necesarios en la realidad venezolana. El clamor de “¡Constituyente ya!” fue expresado de manera explícita por los opositores al régimen puntofijista, y finalmente se materializó años después cuando el partido se encontraba en las instituciones del Estado. Esta conexión entre la motivación electoral y la necesidad de cambios estructurales refleja la visión y el objetivo del MVR de impulsar una transformación profunda en el país.

Entonces, es en el momento de creación del MVR que se reflejan las movilizaciones populares que tuvieron origen en Venezuela algunos años antes, y que sentaron las bases para la aparición del partido como tal. Este nace en la coyuntura electoral y, constituye alianzas con el partido denominado Patria Para Todos, conformando el núcleo duro del Polo Patriótico, y autodenominándose como una alianza indiscutible de vocación popular (Lander, L. y López, M. 1999).

Debido a la falta de programa político que estructure la alianza electoral, pero con la firme promesa de refundar Venezuela, el Polo Patriótico publicó un documento con cinco polos para refundar la República, a saber:

1. Equilibrio Político. Cuya principal tarea era la transformación del marco constitucional.
2. Equilibrio Social. Con el objetivo de realizar un nuevo reordenamiento social y económico, poniendo énfasis en la pobreza, desempleo, falta de servicios. Además debe garantizar educación, cultura, deporte, vivienda, alimentación, salud así como entender las problemáticas de la juventud y de los pueblos indígenas.
3. Equilibrio económico. Para cambiar el modelo económico vigente por uno de carácter humanista en tanto asegure un nivel de vida adecuado y proteja el medio ambiente.
4. Equilibrio Territorial. Entender al país de acuerdo a las diferencias regionales, tomando en cuenta los desequilibrios regionales existentes. Éste contempla la desconcentración de la población, con una planificación social y económica en el desarrollo.
5. Equilibrio mundial. Se refiere a lo relativo a la política exterior, la soberanía nacional y los diversos proyectos de integración de Latinoamérica y el Caribe. Tiene como principio la autodeterminación de Venezuela, la no intervención, la lucha por la integración Latinoamericana y caribeña para crear un nuevo orden económico internacional. Una de los fundamentos es que la relación entre los Estados debe estar basada en la solidaridad y la cooperación internacional. (Salazar, 2007, p. 5).

En estos cinco puntos se sentaron las bases de los objetivos políticos que se forjaron al calor del contexto económico y social que atravesó Venezuela desde los años 80 en adelante.

En torno al contexto político, la alianza puntofijista creada en el año 58 no estaba dispuesta a perder su hegemonía en el poder, de esta manera buscó sentar diferentes obstáculos a la campaña electoral del MVR en el Polo Patriótico, haciendo énfasis en el rol de Chávez en el intento de golpe sucedido unos años antes. Estos actores políticos de corte tradicional (AD y Copei), en conjunto con otros grupos económicos, y medios de comunicación, percibieron a la posible victoria del MVR en las elecciones presidenciales como una amenaza al sistema político, del cual se beneficiaban (Salazar, 2007).

Estas actitudes de quienes por años ostentaron el poder en Venezuela, nos permite entrever que la construcción del MVR basada en, entre otras cosas, la ruptura con el puntofijismo, tuvo un resultado al menos favorable, porque son estos sectores del establishment los que rápidamente percibieron como una amenaza al líder del partido, e intentaron derrotarlo con una campaña basada en denunciar al bolivarianismo como el mayor peligro.

En este discurso, la oligarquía asimilaba la figura de Bolívar al proyecto que el MVR, al interior del Polo Patriótico presentaba, esto indirecta (o directamente) favorecía al partido que manifestaba ser el representante de los intereses del pueblo. Por consiguiente, la victoria electoral del MVR fue arrasadora, obteniendo un 56% de los votos en las elecciones presidenciales del año 1998.

Lo que posteriormente llevará a que se lleven a cabo algunas de los objetivos y finalidades que habían dado lugar a la formación del partido como tal. Existía entonces para finales del siglo pasado una decisión por parte del pueblo Venezolano de dar fin a los escenarios de corrupción, ajustes económicos y altos niveles de pobreza que atravesaban al país.

Esto se vió reflejado en primer medida a través de las diversas manifestaciones sociales que generaron un clima arduo y de tensión, y en segundo lugar, por la decisión del pueblo de cambiar el rumbo en las urnas. Fue, entonces, necesario el nacimiento de un partido que dé cauce institucional a todos esos legítimos reclamos que llevó adelante la población Venezolana.

4. Conclusiones

En conclusión, este trabajo ha abordado las diferentes causas del surgimiento del Movimiento Quinta República (MVR) en Venezuela en 1997. A lo largo del texto, se ha

analizado el contexto económico, social y político que dio origen a este movimiento político, así como las tensiones sociales y movilizaciones populares que sentaron las bases para su creación.

Desde una perspectiva teórica, este estudio ha contribuido a la comprensión de los factores que impulsaron la formación del MVR, destacando la importancia de las condiciones materiales y sociales previas. Además, se ha examinado el marco conceptual propuesto por Alcántara en su texto sobre el origen de los partidos políticos en América Latina, identificando las características específicas que dieron forma al surgimiento del MVR, examinando las causas externas que llevaron a la formación del partido, incluyendo la influencia de la organización militar, así como las orientaciones ideológicas que le dieron vida.

En cuanto a la relevancia empírica, este trabajo ha demostrado cómo el MVR respondió a las demandas y necesidades de la sociedad venezolana de la época, promoviendo objetivos políticos, económicos y sociales que buscaban transformar la realidad del país. Asimismo, se ha evidenciado la influencia de movimientos sociales y de intereses militares en la configuración y orientación del partido. tradicionales que mermaban en Venezuela hacia esos años.

Por otro lado, ha aportado a la creación de una génesis partidaria que cobra un sentido que va más allá del nacimiento del partido en la coyuntura electoral de 1998, ya que hace hincapié en la orientación que buscó plasmar las reivindicaciones populares que se dieron en Venezuela hacia 1889.

A su vez, permite ver que la apelación al pueblo como base social de apoyo fue el discurso de legitimación del partido en su origen, que le permitió consolidarse rápidamente y obtener una amplia victoria electoral hacia 1998.

Desde la perspectiva disciplinar de la Ciencia Política, este estudio ha contribuido al análisis y comprensión del surgimiento de los partidos políticos, destacando la importancia del contexto político, social y económico en su formación. Además, ha resaltado la relevancia de la vía institucional para la concreción de los proyectos políticos y la importancia de reconocer las raíces sociales que los fundamentan; a la vez que permite visualizar el origen de un partido que busca exacerbar, al menos discursivamente, la ausencia de una organización burocrática e institucionalizada como algo meramente positivo, en contraposición a las estructuras partidarias tradicionales.

Por otra parte, el apoyo electoral y social que tuvo el Movimiento Quinta República en sus orígenes es relevante porque representa la voz y la voluntad del pueblo venezolano en su búsqueda de un cambio profundo y significativo. Además, sentó las bases para una transformación política y social en el país, generando un debate continuo sobre los ideales y los resultados del partido.

En resumen, este estudio se ha centrado en relatar las fuentes que dan lugar al surgimiento del Movimiento Quinta República en Venezuela. A la vez que expresa los objetivos que dieron origen a este partido político.

5. Bibliografía

ALCÁNTARA SAEZ, M. (2001), *El origen de los partidos políticos en América Latina*. Barcelona. Universidad de Salamanca. Instituto de Ciencias Políticas y Sociales. ISSN: 1133-8962 DL: B-31.532-2001.

HARNECKER, M. (2001), *Venezuela: Construir un instrumento político a la altura del proyecto*. La Habana. En: La izquierda después de Seattle. s.l. : s.n., 2001. MEPLA. CUBA SIGLO XXI.

JIMÉNEZ, J. (2003), *Aproximación al fenómeno Chávez y su Movimiento Quinta República (MVR). Tipificación del régimen Venezolano*. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia Política. Bogotá D.C

KORNBLITH, M. (2003), "Del puntofijismo a la quinta República: elecciones y democracia en Venezuela Colombia Internacional" Universidad de Los Andes Bogotá, D.C., Colombia. núm. 58, julio-diciembre, pp. 160-194.

LANDER, L. LÓPEZ MAYA, M. (1999) "Venezuela. La victoria de Chávez, el Polo Patriótico en las elecciones de 1998" en *Revista latinoamericana de ciencias sociales Nueva Sociedad*. NUSO N° 160.

MAIR, P; KATZ, R (2007) "La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas" en MONTERO, J.; GUNTHER, R.; LINZ, J. (2007), *Partidos Políticos: Viejos Conceptos y Nuevos Retos*, Madrid, España, Trotta, Fundación Alfonso Martín Escudero. ISBN 978-84-8164-860-7, págs. 101-164.

MARTÍNEZ, J. H (2014) “El papel del Movimiento Quinta República en la recomposición del Estado venezolano (1998-2000)” en *Historia Actual Online*, ISSN-e 1696-2060, N°. 33, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, págs. 21-34

MUJICA, C; NORBIS, R; GONZÁLEZ, S. (2008) “Quinto momento de la Quinta República: El socialismo del siglo XXI” en *Revista Venezolana de Gerencia*, Vol.13, n.42, pp.244-272. ISSN 1315-9984.

SALAZAR, D. (2007) *La Revolución Bolivariana en Venezuela*. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

Piccoli, Juliana (2024). “El origen del Movimiento Quinta República en Venezuela: atravesando tensiones políticas, sociales y económicas”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 218-229.

LA FISONOMÍA DE LA UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO ENTRE 1983 Y 1989 EN ARGENTINA

Valentina Puricelli
(FCPOLIT/UNR, Argentina)

1. Introducción

En un clima de época que parece tener poco espacio para propuestas de izquierda o progresistas, el escenario electoral argentino no es la excepción. Tras unas frenéticas 48 horas de hermetismo previo al cierre de listas, el país se entera de que el candidato a la Presidencia de Unión por la Patria es Sergio Tomás Massa, dirigente que, antes de su traspaso al Partido Justicialista, se formó en la Unión del Centro Democrático (UCeDe).

Comienzan las suposiciones, los disgustos, los entusiasmos y sobre todo las preguntas: ¿cómo puede ser posible que la UCeDe, que hace más de 30 años no compite por la sigla partidaria, esté tan viva a través de ciertas personalidades que en ella se formaron política e ideológicamente? ¿Qué es lo que hace que el contexto de los 80's y 90's, donde todavía se veía al partido disputando activamente -y ganando bancas- esté de alguna manera relacionado con nuestra coyuntura? ¿Cuál es el cal-

do de cultivo de este giro a la derecha que permite que el Partido Justicialista tenga candidatos de la UCeDe? ¿Hay algún antecedente que funciona como condición de posibilidad para este presente? Si bien muchas de estas preguntas exceden los objetivos de este trabajo y funcionan únicamente como disparadoras, me detendré a analizar el desarrollo de la UCeDe en el periodo comprendido entre 1982 y 1989 para revisar de dónde surge el candidato.

Tomando el andamiaje analítico propuesto por Katz y Mair (2007) y analizando las caras del partido desde su nacimiento hasta la absorción de sus líderes por el oficialismo menemista, nuestro objetivo fundamental será analizar el origen y el auge electoral de la UCeDe tomando como fecha límite el año 1989, momento en que Carlos Saúl Menem gana las elecciones presidenciales y, contrario a lo que se pensaba, convoca a la UCeDe a integrar el gabinete, causando la eclosión del partido. De ese modo, primero nos detendremos en el origen y nacimiento de la UCeDe y posteriormente analizaremos las tres caras del partido: en la ciudadanía, en el territorio y como organización hasta el año mencionado.

2. Origen y nacimiento de la UCeDe

La Unión del Centro democrático nace en 1982 en Capital Federal como un espacio liberal-conservador y tiene un gran crecimiento a partir de 1983, momento en que Raúl Alfonsín gana las elecciones y la UCeDe observa que se había terminado la “amenaza peronista”. Fue fundada por Álvaro Alsogaray una semana después de la derrota de Malvinas en una reunión con más de cien asistentes que buscaba expresamente la creación de un partido político. Las personalidades más relevantes del liberalismo porteño estuvieron presentes en dicho encuentro y forman parte del grupo fundador de la UCeDe: Alberto Benegas Lynch hijo, Carlos Sánchez Sañudo, Francisco de Durañona y Vedia, Jorge Pereyra de Olazábal y Roberto Alemann. Aunque habían asistido funcionarios de la dictadura a la reunión que los convocaba, Alsogaray se mostraba como lejano y a la vez cercano ideológicamente al gobierno de facto con críticas liberales: por dirigista, inflacionaria y estatista (Bohoslavsky y Morresi, 2011: 37)

Según Gibson (1990:185) en esta época se da un giro hacia la derecha que responde, sobre todo, a un desencantamiento del conservadurismo argentino con respecto de las Fuerzas Armadas. La propuesta golpista, que en años anteriores la élite conservadora había apoyado, ahora le resultaba peligrosa por incompetente e incontrolable,

e incluso ambas agendas habían empezado a entrar en contradicción. Un hecho clave de este distanciamiento fue la Guerra de Malvinas, ya que la clase alta porteña siempre fue pro-británica y las FF.AA. habían decidido declararle la guerra (Gibson, 1990:185).

Es así que las clases sociales más altas y la derecha comienzan a buscar otras formas de expresión política dentro de la democracia y la posibilidad de crecimiento de la UCeDe encuentra asidero, incluso con cierto optimismo de este estrato social ya que se habían dado cuenta de que efectivamente había una posibilidad de lograr las reformas liberales si aceptaban las reglas del juego democrático.

Las razones de esto están en que el clima de época de la dictadura -pero también de la transición a la democracia- denostaron profundamente el accionar del Estado en materia económica. De hecho, Cavarozzi sostiene que: “La economía argentina, y la sociedad toda, se ha estado «ajustando caóticamente» desde 1982.” (Cavarozzi, 1991:104) porque el ajuste fue producto de las políticas descontroladas y de un deterioro que fue sumándose y no el efecto de las políticas *per se*. Esto, evidentemente, era muy tenido en cuenta por las clases más altas. A su vez, Cavarozzi plantea que además de haber generado mayores condiciones de pobreza y dificultades económicas y sociales de todo tipo, no se logró, desde 1983, terminar con la inestabilidad y tampoco sentar las bases para el proyecto liberal o neo-liberal. Podemos decir entonces que un punto nodal en la condición de posibilidad de surgimiento de un partido como la UCeDe está en la incapacidad del gobierno alfonsinista para controlar la economía (Morresi, Saferstein y Vicente, 2021:7).

En este clima de época, de profunda desorganización económica y descrédito del Estado pero también del gobierno de las Fuerzas Armadas, nace la Unión del Centro Democrático en Argentina. Beatriz Campillo sostiene que “El crecimiento de la población urbana y la atomización de la estructura ocupacional, en un contexto de crisis económica y desprestigio del estatismo, facilitaron la posterior “popularización del liberalismo”” (Campillo, 1997:167), es decir que se adoptaron propuestas, discursos y formas de movilización que traspasaron las estructuras de clase que lograron alcanzar a sectores urbanos medios y populares.

El contexto de los primeros años de la década de los ‘80 sirve a este trabajo a los fines de profundizar por qué el partido estudiado surgió en dicho momento, qué condiciones de posibilidad vieron, dónde eligieron asentarse y a qué porción de la población quisieron apuntar.

3. Las caras del partido hasta 1989

En relación a lo anteriormente mencionado, tomaremos el modelo analítico de Katz y Mair para analizar a la UCeDe. Los autores plantean que los partidos tienen tres “caras”: el partido como organización, el partido en la ciudadanía o el territorio y el partido en las instituciones públicas (2007:101)

La primera cara, el partido como organización, busca ahondar en la forma en que se organiza el partido en su interior: los liderazgos, las formas de tomar las decisiones, la burocracia partidaria, la ideología dentro de él entre otros aspectos organizativos. La segunda cara refiere a cómo se referencia el partido en la ciudadanía, dónde se buscan sus afiliados, dónde está su base de apoyo, cómo actúan sus votantes, en qué territorios se desarrollan y en definitiva toda forma como participan los ciudadanos en él o viceversa. Por último, el partido en las instituciones es, según Katz y Mair, la cara que se ha vuelto más importante porque según los autores los partidos ya no tienen en consideración a la primera y segunda cara como sí tienen a la tercera. La misma se trata de las formas en que el partido busca llegar al Estado: su desempeño electoral, las alianzas o relaciones que traza para poder hacerlo, cómo se comporta una vez que llega allí.

Habiendo descrito brevemente de qué se trata cada cara, las buscaremos entonces en el período de origen y auge del partido, comprendido entre 1983 y 1989, período donde la UCeDe se desempeñó y compitió electoralmente por su sigla partidaria, hasta la eclosión del partido.

3.1. El partido en la ciudadanía

Como mencionamos refiriéndonos al origen de la Unión del Centro Democrático, este partido nace y se establece deliberadamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un dato de gran relevancia dado que los estratos sociales a los que apuntaba el partido de Álvaro Alsogaray eran las clases porteñas más altas. El surgimiento de la misma ya estuvo signado del espíritu que se le quiso imprimir. Los liberales más tradicionales de Buenos Aires y los intelectuales que habían adquirido renombre durante la dictadura formaron parte de la reunión que la dió a luz, como Armando Ribas y Manuel Mora y Araujo.

Podemos ver esta cuestión en el hecho de que la UCeDe haya vencido consistentemente al peronismo y al radicalismo en el distrito Socorro, de Barrio Norte. Allí se

obtuvieron siempre cifras mayores al 35% de los votos, llegando a obtener el 44.9% en 1989 (Gibson, 1990:184). Tal es así que si bien su electorado a nivel nacional fue pequeño, el 90% del mismo estaba en Buenos Aires, y según Gibson su influencia y fuerza en esta región causó su diseminación en el país constituyéndose entonces como una fuerza nacional. Campillo (1997:166) sostiene que el gran desempeño electoral de la UCeDe en su primera elección resultó para el partido en la obtención de un electorado central como un grupo de personas convocadas por el partido y comprometidas con el mismo que se mantuvo durante años.

Aunque nace y se consolida como un partido por y para la élite porteña, comienza paulatinamente a poner sus esfuerzos en ampliar su base de apoyo hacia las masas populares, es decir, en la clase media y baja argentina, incluso modificando sus estrategias políticas hacia unas más populares. La principal dificultad de la UCeDe en este punto fue la imposibilidad de armonizar los intereses y la ideología con las clases a las que apuntaba para poder lograr una verdadera coalición. Es por esto que la habilidad de la UCeDe para trascender su electorado e ir por la ampliación no fue su característica más importante, pero aún así se logra un desempeño electoral que trasciende la clase alta y que logra transformarse de un partido de notables a una alianza electoral policlasista tomando en consideración las cifras que muestran de 1983 a 1989 casi llega a triplicar su caudal de votos en la Ciudad de Buenos Aires. (Gibson, 1990:185). En este sentido Carlos Maslatón (2023) afirma que el partido, contrariamente a lo que se podría suponer en cuanto a las clases sociales que lograba conquistar,

representaba ideas liberales, era multclasista pero había una ausencia notable de clase media baja y de clase baja, había poco y nada. De ahí para arriba tenías variado: no había un solo grupo social como uno podría suponer la oligarquía o las resacas de la oligarquía. Desde el punto de vista patrimonial tenías de todo. (Maslatón, 2023)

Además resalta que los distritos fuertes fueron en primer lugar Capital Federal pero también Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. También había armados significativos en Entre Ríos, Mendoza y San Juan, pero la debilidad estaba tanto en la Patagonia como en la región norte salvo Tucumán.

3.2. El partido en las instituciones

Hay autores como Gibson, Bohoslavsky y Morresi que plantean, siguiendo a Di Tella, que la fragilidad de la democracia en Argentina tiene que ver directamente con el hecho de que nunca haya existido en la historia un partido de masas de orientación conservadora que pueda competir con el peronismo para captar a las clases medias y bajas. Es por esto que el nacimiento de este partido fue observado como la evidencia de que por fin estaba sucediendo. Esta hipótesis fue ganando peso a medida que la UCeDe iba compitiendo electoralmente e iba logrando crecer porque se iba instalando como el partido conservador que lideraba el espectro de la derecha. Es menester hacer una observación respecto de la gran velocidad a la que el partido creció en tan pocos años, teniendo en cuenta que solo tuvo un desempeño electoral total desde 1983 a 1989.

Las primeras elecciones democráticas del país, las de 1983, fueron también las primeras elecciones donde compitió la Unión del Centro Democrático. El desempeño no fue exorbitante pero fue suficiente para lograr alcance nacional, obtener Diputados y erigirse como el partido de derecha, ya que había logrado algo inédito posicionándose como tercera fuerza nacional. Así fue que en la primera elección legislativa lograron entrar al Congreso Nacional representando a la Ciudad de Buenos Aires su líder, Alvaro Alsogaray, y José Juan Manny con 244 mil votos, representando al 8,71% del electorado, según Campillo (1997:166) gracias al apoyo de los estratos altos de la ciudad. En las elecciones siguientes, las de 1985, logran obtener 540 mil votos, y llega María Julia Alsogaray, la hija del líder al Congreso Nacional. Entre la elección de 1983 y la de 1985 hay un crecimiento del 120%. Posteriormente, en 1987 obtiene 5 diputados, volviendo a ser Álvaro Alsogaray el primer candidato. Encontramos que desde 1985 a 1987 hay un crecimiento del 70% (Gibson, 1990: 186; Dirección Nacional Electoral, s.f.).

En las elecciones de 1989 se conformó la Alianza del Centro liderada por la UCeDe que tenía por objetivo llevar a Álvaro Alsogaray a la Presidencia de la Nación. Respecto del desempeño electoral, se logró un tercer lugar, representando aproximadamente al 7% de la población, pero además fue importante esta elección porque representó un crecimiento del 74% respecto de la última elección y porque logró ganar 9 bancas en la Cámara de Diputados, consolidando en total una bancada de 15 representantes en 1989. (Gibson, Edward, 1990: 186; Dirección Nacional Electoral, s.f.)

Podemos observar en el trayecto de estos años que van desde el '83 al '89 un crecimiento rápido y el logro de una representación inédita para la derecha argentina

“el único en la historia del conservadurismo que logró un espacio importante en la escena electoral” (Campillo, 1997: 166), que se vio favorecida por el contexto que anteriormente describimos.

3.3. El Partido como organización

Como mencionamos en el apartado 2, el surgimiento de la UCeDe se da en la Ciudad de Buenos Aires, pocos días después de finalizada la guerra de Malvinas a causa de una reunión convocada por Álvaro Alsogaray con personalidades del liberalismo y ex funcionarios de la dictadura.

En la entrevista que sostuvimos con Carlos Maslatón, abogado y fundador de UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria) respecto del mecanismo de selección de candidaturas y la democracia interna del partido, él afirma que “de 1982 a 1985 inclusive, los candidatos eran elegidos por la Convención del partido. La convención designaba los candidatos que iban a competir en cada distrito. La convención nacional designaba los candidatos que iban a competir en las nacionales vicepresidencia y presidencia” (Maslatón, 2023).

En los años 1983 y 1985, años de renovación parlamentaria, por ejemplo, los candidatos fueron elegidos por la Convención aunque la UCeDe poseía una intensa y dinámica vida partidaria, incluso ya había líneas internas y un gran trabajo de la juventud, que posteriormente en el apartado 3.3.1 analizaremos desde UPAU. Fueron, en ese contexto, los participantes del partido quienes desde abajo hacia arriba exigieron una forma distinta de selección de los candidatos. Maslatón (2023) menciona que “se pasó de la selección a dedo refrendada por una Convención a un sistema de voto uninominal, o sea: el elector entraba al cuarto oscuro y se encontraba con postulaciones para diputados, concejales y consejeros vecinales”

De este modo, los votantes entraban al cuarto oscuro y tenían varias boletas con un solo nombre. Fue así que en el año 1987 Maslatón quedó segundo en la elección y entró en la Lista de Concejales de la UCeDe por la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue tomado como una amenaza por el oficialismo partidario y de un sistema de voto uninominal se quiso volver al sistema de convenciones pero finalmente se terminó instalando un sistema de fracciones (donde la primera lista que ganaba la interna se llevaba los primeros 5 lugares y la segunda, siempre que superara el piso del 20%, se llevaba los 2 últimos lugares).

3.3.1. Unión para la Apertura Universitaria

Dentro del apartado del partido en su cara organizativa nos interesa hacer foco en lo que fue posteriormente el brazo universitario de la UCeDe porque fue una importante incorporación que transformó la vida partidaria. Para esto tomamos enteramente el testimonio de Carlos Maslatón (2023), su fundador.

La Unión para la Apertura Universitaria fue una agrupación de jóvenes estudiantes liberales fundada por Carlos Maslatón en 1981. En julio de 1983 UPAU gana una banca en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 1984 gana tres bancas y en 1985 gana cinco bancas, consolidando un éxito inédito del liberalismo en las Universidades, que para ese entonces tenían una fuerte presencia del radicalismo en la Franja Morada. En 1986 el 80% de sus militantes deciden afiliarse a la UCeDe para competir en el partido armando una línea interna de la juventud llamada “Avanzada liberal” con el objetivo de desplazar a lo que ellos llamaban “los dinosaurios”, que era el sector tradicional. En esa elección perdieron por 50 votos contra el oficialismo partidario pero allí se sentaron “las bases para en el 1987 arrasar en las elecciones internas con un aparato único de movilización de estilo universitario que sumaba votos espontáneos resultantes de mi exposición de en los medios, que me permitió alcanzar la segunda banca más votada del 1987 al 1991” (Maslatón, 2023).

Es importante aclarar que UPAU es, cronológicamente, anterior o paralela a la creación de la Unión del Centro Democrático, no surge de ella sino que es preexistente, “con metodología propia y distinta, de ideología similar e independiente del partido” (Maslatón, 2023), al cual se decide partidariamente (no sin oposiciones) afiliarse a la misma para poder competir en las elecciones de CABA.

4. Las caras del partido después de 1989

Antes de comenzar a desarrollar este apartado es menester aclarar que la decisión metodológica de separar esta sección del punto 3 responde a que el cimbronazo de la incorporación de varios miembros de la UCeDe al gobierno de Carlos Saúl Menem (PJ) no puede ser considerado parte del desarrollo normal que el partido venía teniendo hasta dicha fecha dado que transformó radicalmente a la UCeDe en su totalidad, sobre todo en su cara estatal y organizativa; tal es así que citando a Carlos Maslatón: “generó la desactivación del partido”.

En 1989 las tres caras de la UCeDe sufren un giro de 180°. En ese año Carlos Saúl Menem, candidato del Partido Justicialista, ganó las elecciones y se convirtió en el Presidente de la Nación. La Unión del Centro Democrático había quedado en tercer lugar con Álvaro Alsogaray como candidato a Presidente representando a un 6% de los electores (Gibson, 1990:178).

Sorpresivamente y confirmando su conversión hacia el proyecto neoliberal, el Presidente electo convocó, de manera muy estratégica, a ciertas personalidades conocidas y relevantes de la escena política que habían sido fundadores o partícipes importantes de la UCeDe, como por ejemplo Álvaro Alsogaray, Alberto Albamonte y María Julia Alsogaray en una primera etapa en 1989 y posteriormente Adelina D'Alesio de Viola, Ricardo Zinn y Germán Kammerath en 1991.

El objetivo de la incorporación fue que los miembros de la UCeDe desempeñen un papel político-ideológico en cuestiones económicas que habían sido centrales para el debate nacional, que estaba muy influenciado por dicho partido. Gibson (1990:178) señala que cuando Menem buscó la colaboración de la UCeDe en su gobierno no lo hizo pensando en su fuerza numérica (que de hecho no era significativa) sino por su poder en el ámbito de la política de élite, y eso se explica, desde nuestra perspectiva, en el hecho de haber convocado a ciertas personalidades y no a la totalidad del partido.

Según Maslatón (2023), este pacto “no se hizo orgánicamente, por ende generó un resentimiento significativo por aquellos que se quedaban afuera o los que estaban genuinamente en contra”. Se puede vislumbrar aquí, entonces, una ruptura de la cara del partido en la organización tal como la vimos anteriormente. Los líderes del mismo dejaron de lado la estructura partidaria y privilegiaron sus intereses personales para ingresar a la cúpula gobernante. Tal es así que María Julia Alsogaray se retiró de la UCeDe en 1992, tras el enojo de los simpatizantes frente a estos mecanismos.

Producto de esta situación, el partido como tal entra en una decadencia irrecuperable. Los mecanismos antidemocráticos al interior del mismo y la falta de espacios donde debatir las decisiones que tomaban los líderes terminan generando un desinterés y un alejamiento de todos aquellos que encontraban en los comités de la UCeDe un lugar donde depositar energías y esperanzas.

Respecto de los efectos de tales mecanismos en la cara institucional del partido, Maslatón (2023) remarca nuevamente que “el partido como tal fue en la práctica desactivado” porque las negociaciones fueron de carácter individual, aunque los lí-

deres que habían aceptado ingresar a la gestión menemista aseguraron que era una gestión liberal llevada a cabo, incluso, por participantes de la UCeDe (Bohoslavsky y Morresi, 2011: 39), buscando inútilmente la adhesión y legitimación de sus simpatizantes. Esto se tradujo fuertemente en la importantísima disminución de votos que sufrió el partido durante las elecciones de 1991, 1992 y 1993 en parte porque se rechazaba la decisión tomada por la élite dirigente y en parte porque realmente el giro neoliberal del peronismo había logrado convencer a una gran parte de la derecha liberal.

Respecto de UPAU, sucedió lo mismo que en la UCeDe: a partir de 1991 se observa la misma decadencia en la agrupación. Maslatón (2023) sostiene que esto se da “quizás por influencia de los errores de la UCeDe combinada con el menemismo. Un poco eso, y un poco el hecho de que la generación inicial de UPAU se estaba retirando de la universidad y no fue posible dejar una sucesión”, lo cual representa un problema de definición política: “¿sucesión de qué y para qué? Muchos liberales sentían que la Argentina se estaba transformando porque estábamos entrando en una etapa liberal-capitalista con Menem, entonces, ¿qué sentido tenía un proyecto político aparte?” (Maslatón, 2023)

Podemos pensar que la estrategia de Menem fue exitosa porque logró incorporar a sus filas a los dirigentes más importantes del liberalismo, también logró la transferencia de votos de un partido al otro y por último y lo que más nos interesa en este trabajo: logró desactivar políticamente por medio de la absorción de sus líderes al partido que podría haberlo disputado electoralmente, causando, prácticamente, su muerte.

5. Conclusiones

Tal como mencionamos en la introducción, este trabajo surge como un compendio de preguntas tras la designación de Sergio Massa, de origen en la UCeDe, como precandidato a presidente por el Partido Justicialista. A partir de la observación de este hecho quisimos ahondar en las profundas aguas de la derecha argentina deteniéndonos particularmente en la Unión del Centro Democrático y pensando en su origen, su desarrollo y su declive. Buscamos analizar las tres caras de la UCeDe (el partido en la organización y dentro del mismo su brazo universitario, el partido en la ciudadanía y el partido en el Estado) desde 1983 a 1989, año crucial en el que los líderes del partido estudiado son convocados a formar parte de la gestión de Carlos

Saúl Menem. Por último, analizamos los efectos de la decisión tomada por los líderes del partido al aceptar la propuesta y a partir de esto vimos las transformaciones cruciales que generaron en las caras partidarias, originando prácticamente la desintegración del partido tal como se lo conocía. Esa desintegración, esa debacle de la que nunca se pudo recuperar, se puede vislumbrar hasta hoy día, donde el sello sigue activo pero no hay verdadera actividad de la UCeDe.

Este ensayo busca explicar el origen y el desarrollo del partido que indirectamente formó dirigentes como Sergio Massa, entre otros, que al día de hoy ocupan lugares relevantes en el escenario político. Por eso observamos que la UCeDe, tal como mencionamos en la introducción, sigue estando relacionada con nuestro presente a través de estas personalidades que formó. Es allí que reside la relevancia social y política de este trabajo al invitarnos a preguntarnos de dónde surgen nuestros candidatos, qué trayectoria política tienen y qué pasaba en ese contexto, analizando los puntos más importantes del partido y sus devenires en el tiempo.

6. Bibliografía

BOHOSLAVSKY, E.L; MORRESI, S.D. (2011), *Las derechas argentinas en el siglo XX: ensayo sobre su vínculo con la democracia en Iberoamérica Global*, Universidad Hebrea de Jerusalén, Vol. IV, N° 2.

CAMPILLO, B. (1997), *Reseña de Class and Conservative Parties, Argentina in Comparative Perspective*, de Edward Gibson. *Foro Internacional*, 163–169. <http://www.jstor.org/stable/27738580>

CAVAROZZI, M. (1991), “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina” en *Revista de Estudios Políticos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, N° 74. < <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/3285> >

Dirección Nacional Electoral, (s.f.), *Resultados electorales*, Ministerio del Interior <<https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/>>

GIBSON, E.; GRONDONA, M; GARCIA, J.; DALESIO DE VIOLA, A. (1990), “Democracy and the New Electoral Right in Argentina en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*”, VOL. XXXII, N°3. <<https://doi.org/10.2307/166092> >

KATZ, R. y MAIR, P. (2007), “La supremacía del partido en las instituciones públicas: El

cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” en MONTERO, J.R.; MONTERO GIBERT, R.; GÜNTHER, J.J.; LINZ. *Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos* Madrid, Trotta.

DIAMOND, M. (1996), “El Federalista” en L. STRAUSS y J. CROPSEY (comp.) *Historia de la Filosofía Política*, México, Fondo de Cultura Económica.

MASLATON, C., (2023), entrevista realizada el 6 de julio de 2023 en la ciudad de Rosario por Valentina Puricelli. Disponible en audio. <<https://drive.google.com/drive/folders/1Aq-uSLeycV8C536d9dml1QYx8TV8f0sD>>

MORRESI, S.; SAFERSTEIN, E.; VICENTE, M. (2020), *Nuevas configuraciones derechistas en Argentina. El progresismo y la izquierda ante la nueva derecha: claves para la región*, Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, Uruguay, 1-15.<<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/17847.pdf>>

Puricelli, Valentina (2024). “La fisonomía de la Unión del Centro Democrático entre 1983 y 1989 en Argentina”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 230-241.

LA EXPERIENCIA DE LA ANAPO EN COLOMBIA

Ornella Ripani

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

La Alianza Nacional Popular, conocida como ANAPO, fue un partido político colombiano fundado en 1960 por Gustavo Rojas Pinilla, quien fue presidente de Colombia entre 1953 y 1957. ANAPO surgió como una alternativa política de oposición al bipartidismo tradicional entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que dominaban la escena política del país en ese momento. Perduró hasta el año 1998.

Resulta interesante centrarse en el estudio de su surgimiento, porque este ocurrió en un contexto de profundos cambios sociales y políticos en Colombia. La ANAPO surge como una respuesta o confrontación al bipartidismo tradicional instaurado a partir de 1958 con el surgimiento del Frente Nacional. Rojas Pinilla, un general retirado del ejército, se había destacado durante su presidencia por su estilo autoritario y populista. Su gobierno implementó políticas como la reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera, lo que le sumó el apoyo de amplios sectores de la población, especialmente de las clases populares y campesinas. Se hará énfasis en sus principales objetivos, uno fundamental era representar los intereses de las

clases populares y marginadas en la arena política, buscando una mayor participación y representación de estos sectores en el gobierno. A lo largo de su desarrollo, el partido abogó por políticas de justicia social, redistribución de la riqueza, defensa de los derechos laborales y la soberanía nacional (Sánchez Martínez, 2010).

Otro período relevante a considerar es el de las elecciones presidenciales de 1970, donde ANAPO presentó a Rojas Pinilla como candidato, quien buscaba regresar al poder. Aunque obtuvo una considerable cantidad de votos, no fue suficiente para ganar la presidencia. A lo largo de su trayectoria, ANAPO se enfrentó a diversos obstáculos y conflictos que generaron divisiones internas y enfrentamientos con otros sectores políticos, debilitando su estructura e influencia. Además, Rojas Pinilla fue objeto de persecución política, mientras vivió, por parte de las élites tradicionales, quienes veían en su figura un peligro para el statu quo.

2. El sistema electoral y su incidencia en la vida partidaria

2.1 Principales características del sistema electoral

Para contextualizar, es necesario entender que el surgimiento de la Alianza Nacional Popular en el año 1960 es producto del establecimiento del Frente Nacional en Colombia. El Frente Nacional fue un acuerdo pactado entre las élites de los partidos tradicionales (el Liberal y el Conservador) que reforzó mecanismos clientelistas y además excluyó a otras fuerzas políticas. Si bien este Frente fue un sistema cerrado, surgieron fuerzas de oposición, entre ellas, el Movimiento Revolucionario Liberal, iniciado en 1960 bajo la tutela de Alfonso López Michelsen que se oponía principalmente a cualquier alianza con el Partido Conservador. Por otro lado, la Alianza Nacional Popular surge para hacerles frente a los partidos tradicionales y como una forma de reivindicar al general Gustavo Rojas Pinilla, quien se desempeñó como presidente desde 1953 hasta 1957 (Sánchez Martínez, 2010).

En cuanto al sistema electoral y la vida partidaria de ese momento en Colombia, debemos remitirnos al pacto del Frente Nacional que implicó la paridad en los cargos públicos y la alternación presidencial entre Liberales y Conservadores, generando un fuerte bipartidismo que dificultó la representación por parte de otros partidos, consolidando el control del poder político, excluyendo y limitando la participación política en la toma de decisiones. Según Hartlyn:

“Tal como se adoptó finalmente, el convenio interpartidista del Frente Nacional limitó severamente el funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa mayoritaria en el país. Estipuló que entre 1958 y 1974 la Presidencia se alternaría entre los dos partidos y que todos los puestos ministeriales, legislativos y judiciales, así como otros cargos públicos no incluidos en la carrera administrativa, deberían repartirse equitativamente entre ellos.” (Hartlyn, 1992: 22).

Una cuestión fundamental para comprender el bipartidismo es que se trata de una lógica de polarización muy arraigada que tiende a crear espacios mutuamente excluyentes. En este caso se produce una alternancia entre dos partidos que corresponden a la misma familia política, es decir, estamos frente a un bipartidismo rígido (Ramos Jiménez, 2001).

Es importante tener en cuenta que este acuerdo bipartidista recibió apoyo de los sectores ligados al poder económico. A su vez, los sectores sociales dentro del país que se han beneficiado con la alianza entre estos partidos, fueron tres: Los partidos Liberal y Conservador, la Iglesia Católica y los militares, con una tendencia derechista, en vinculación a esto:

“Los liberales recuperaron un espacio en el poder político [...] La Iglesia podía verse a sí misma como una fuerza de reconciliación para todos los colombianos, puesto que ambos partidos reconocían ahora su posición privilegiada y que preservó una autonomía institucional más grande. A los militares se les prometió autonomía y respeto.” (Hartlyn, 1992: 106).

La ANAPO tomó fuerza durante la década del 60´, obteniendo importantes victorias en las elecciones de 1966, 1968 y 1970. Su primera participación en elecciones se produjo en 1962, cuando obtuvo el 8.2% de los votos. Unos años después, en las elecciones de 1966, la ANAPO se convirtió en el movimiento de oposición más importante del país, atrayendo votos tanto de liberales como de conservadores, así como de sectores ajenos a estos partidos. El porcentaje general del apoyo al anapismo aumentó del 13,6% a 17,8% del sufragio total (Sánchez Martínez, 2010). La ANAPO ganó fuerza en la década de 1960 debido a una serie de factores políticos, sociales y económicos que contribuyeron a su crecimiento. Entre estos factores se incluyen

la crisis del bipartidismo tradicional, el carisma de Gustavo Rojas Pinilla, líder de la ANAPO, quien prometió implementar importantes reformas en el país, en sintonía con las demandas de la sociedad de la época, especialmente de los sectores rurales y marginados que buscaban justicia social y modernización, entre otras cuestiones. Esta serie de factores culminó con el triunfo de Gustavo Rojas Pinillas en las elecciones presidenciales de 1970, que de alguna manera marcó el punto culminante del partido y su formalización como una fuerza política relevante en el país.

En vinculación al juicio político de Rojas Pinilla, es importante comprender los antecedentes del año 1953, cuando el General se desempeñaba como comandante de las Fuerzas Armadas y anunció la consolidación de un Golpe de Estado con el respaldo de algunos sectores como la Iglesia Católica, gremios y élites económicas como la ANDI, FENALCO, Federación Nacional de Cafeteros, banqueros y ganaderos. Estos mismos gremios contribuyeron a la caída de Rojas Pinilla en 1957 al formar parte del denominado Frente Civil opositor a Rojas. Pinilla fue apoyado por variedad de grupos políticos, con excepción de algunos como el Partido Comunista (Sánchez Martínez, 2010).

La carrera ascendente de la ANAPO la llevó a obtener un triunfo en las elecciones de abril de 1970. En lo que respecta a este período comprendido entre 1970 y 1974, se puede apreciar de forma inmediata el auge y la decadencia del partido, basado en los resultados electorales en estos años. Se menciona el triunfo de la ANAPO en 1970, victoria que fue negada por los partidos tradicionales, a pesar de lo cual el general Rojas no exigió el triunfo. En rechazo al fraude, militantes de la ANAPO constituyeron en 1974 una organización guerrillera denominada: Movimiento 19 de abril. (Ardila, 2013). Entonces, un primer momento explica el auge a partir de las elecciones de 1970 que resultaron ser un éxito total para el partido en todas las corporaciones públicas, y fueron en estas donde el partido mostró su fuerza como movimiento opositor del gobierno del Frente Nacional, logrando grandes avances importantes. La participación de la ANAPO en estas elecciones tiene un promedio de 42% del total de votos, tanto en elecciones Presidenciales, como en Senado, Cámara y Asamblea. Sánchez Martínez toma de muestra para realizar un análisis de este período, a seis departamentos: Antioquia, Atlántico, Bocayá, Cundinamarca, Santander, y Valle. En el año 1970 el número total de votos de los seis departamentos fue de 2.287.604, de los cuales 942.870 corresponden a los representantes a la Cámara por el anapismo. Los mayores porcentajes en votación la lograron Santander con el 49%, Boyacá y Valle con porcentaje del 45%. Las elecciones Presidenciales reflejan el triunfo del candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, aunque la ANAPO obtuvo

un alto caudal de electores. En las siguientes elecciones del año 1972 en las cuales se eligieron Asambleas Departamentales y Concejos Municipales fueron el principio de su descenso, y se caracterizaron por el surgimiento de conflictos, divisiones y disidencias al interior de partido y reflejados a nivel de municipios, capitales y departamentos. Este descenso alcanza casi un 50%, y en 1974 la baja continúa con una caída que llega al 11%. Esto nos muestra el declive de ANAPO en términos electorales, proceso que se inicia de manera vertiginosa en 1972 (Sánchez Martínez, 2010).

A partir del debilitamiento del partido a la par de conflictos internos de tinte ideológicos, así como luchas por el liderazgo, muchos de sus miembros regresaron a sus partidos de origen, siendo algunos expulsados por el general Rojas Pinilla y otros se retiraron voluntariamente. La división partidaria fue una constante en las elecciones de 1974, y en lo que respecta a la inscripción en las listas electorales. En vinculación a esto, Sánchez Martínez entiende que:

“El debilitamiento continuo de la ANAPO a partir de 1972 tuvo muchas causas entre ellas: las disidencias y el retorno de anapistas a los partidos tradicionales, la ruptura del partido con la desertión de los diecisiete parlamentarios y la nueva organización política el MAC constituido por éstos” (Sánchez Martínez, 2010: 92).

Posteriormente a las elecciones de 1974, hubo un claro descenso en el caudal de votos obtenido por la ANAPO, los dirigentes del partido justificaron esta derrota debido a la fuerte presencia del conservadurismo en la conformación de las listas, lo que produjo la reacción de antiguos liberales que decidieron regresar a sus partidos de origen antes que “caer” en este conservadurismo explícito, que caracterizó en estos tiempos al partido.

3. El rol de las mujeres en el sistema electoral

En cuanto al rol de las mujeres durante la existencia de la ANAPO, es importante comprender que, en la sociedad colombiana en general, la participación política de las mujeres era muy limitada. Sin embargo, la Alianza Nacional Popular mostró apertura hacia la inclusión de las mujeres, brindándoles oportunidades de involucrarse en la política al ocupar cargos, participar en la toma de decisiones y formar parte de las estructuras organizativas. Durante el gobierno del General Gustavo Ro-

jas Pinilla, se le otorgó el derecho del voto a la mujer y la ocupación de ella en cargos más altos en el gabinete, en las gobernaciones, en las embajadas y en los cuerpos legislativos. De esta manera la ANAPO acabó con el concepto feudal de inferioridad de la mujer frente al varón (Forero Bermúdez, 2009).

Un momento destacado en la participación política de las mujeres fue el Tercer Congreso Nacional de la ANAPO, celebrado el 11 de octubre de 1973 en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República de Colombia. Durante este congreso, se programó la candidatura presidencial de María Eugenia Rojas, convirtiéndose así en la primera mujer en ser candidata a la presidencia en el país. También fue la primera mujer latinoamericana en ejercer un cargo público. Además, tras el fallecimiento de su padre Gustavo Rojas Pinilla, asumió la dirección total del partido (Sánchez Martínez, 2010).

Podemos percibir el rol de las mujeres como una tercera fuerza que surge en la Alianza Nacional Popular. Esta idea de tercera fuerza se entiende como parte de la crítica hacia el bipartidismo tradicional que regía en Colombia anteriormente, entendiendo a este como un conjunto de experiencias de gobiernos que no habían logrado el progreso. En lo que respecta a la Alianza Nacional y Popular, y el rol de la participación política, Villareal sostiene lo siguiente:

“Este Estado presidido por militares, con una orientación populista y nacionalista acentuó los rasgos de modernización a partir de una buena coyuntura económica y se abrió a la participación de las mujeres en áreas que le permitían extender su mano protectora al pueblo, entendido este como los sectores sociales de mayor carencia” (Villareal, 1994: 137-138).

Desde esta tercera fuerza se criticaba puntualmente la histórica opresión femenina, su obediencia, sumisión, así como la limitación de su libertad personal. También se cuestionaba la visión clásica que se tenía de las mujeres, considerándolas objetos de una orientación ideológica y educativa, centrada en el hogar y en la escuela, basada en una valoración sobre la diferenciación entre hombres y mujeres.

Además, el papel de las mujeres consistía en ser protagonistas de una política comunitaria en una perspectiva asistencialista, de cobertura masiva alentando la cooperación a expensas de la competencia y el conflicto. Como mencionábamos anteriormente, el auge de las mujeres como tercera fuerza tuvo que ver con la pérdida

de legitimidad de la hegemonía bipartidista que se expresó claramente en la Alianza Nacional Popular, como un partido que tomó las banderas populares y las reivindicaciones de sectores excluidos, como fueron las mujeres, disminuyendo la apatía electoral.

4. Las caras del partido

Siguiendo a Richard Katz y Peter Mair, los autores reconocen a lo largo de las organizaciones partidistas en las democracias del siglo XX, un equilibrio variable entre lo que han denominado “caras” de los partidos. En primer lugar, se encuentra al partido como organización de afiliados, que se refiere a la estructura interna y la dinámica del partido político como una entidad organizada. En segundo lugar, está el partido como organización central presente en la ciudadanía, que se refiere directamente a la relación con la ciudadanía en general. Por último, reconocen al partido en las instituciones públicas del Estado y el ejercicio de su poder político. Se entiende que la ANAPO, encuentra vertientes en estas “caras”, que son complementarias entre sí ya que la forma en la que un partido se organiza internamente tiene un impacto directo en su relación con la ciudadanía y en cómo busca ejercer su influencia en el Estado (Katz. Mair., 2007).

El surgimiento oficial de la ANAPO tuvo lugar en un evento masivo en Villa de Leyva, con la presencia de aproximadamente 100.000 personas el 13 de junio de 1971. Se eligió este municipio ubicado en el departamento de Boyacá debido a que la ANAPO obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de 1970. Además, Boyacá es el departamento natal del General Rojas (Sánchez Martínez, 2010).

La ANAPO surge como un tercer partido en oposición al régimen bipartidista hegemónico, y contra la inmoralidad y explotación de las oligarquías de las clases tradicionales. Buscaba alcanzar el poder para entregárselo de alguna forma, al pueblo. La ANAPO presentó e implementó políticas que pensaban en un régimen democrático, con los principales objetivos de establecer relaciones económicas, políticas, culturales con todos los países del mundo, responder a la salud y la educación para las clases menos favorecidas, e incentivar la cultura popular, otorgándole importante relevancia a las clases sociales más desfavorecidas, al sindicalismo, y a los indígenas (Forero Bermúdez, 2009).

Una política de suma importancia fue la Reforma Agraria, que buscaba producir artículos de primera calidad, y a bajos costos, para poder competir en los mercados. La ANAPO proponía la creación de cooperativas, uniones campesinas, parques de maquinaria agrícola, talleres, almacenes de repuestos y centros de entrenamiento mecánico agrícola. También buscaba facilitar créditos baratos y oportunos, implementar un seguro estatal de cosechas para aumentar la producción y recuperar la economía (Forero Bermúdez, 2009).

Otro aspecto crucial fue la aplicación de políticas por parte del partido hacia las mujeres, como el derecho al voto, la supresión de leyes que discriminasen por género, y la concreción de derechos civiles a la mujer aprobada en Naciones Unidas.

Una característica destacada de la ANAPO que se refleja en la ciudadanía es su vinculación con las mayorías más vulnerables y los sectores populares de la sociedad, incluyendo también a las mujeres. A medida que logró llegar a estos sectores, siendo su principal objetivo, también generó rápidamente grupos de oposición. Los anapistas lanzaron su periódico llamado: “Alianza Nacional y Popular. Diario del pueblo”, el 11 de octubre de 1965, con el cual pudieron establecer comunicación con seguidores y militantes, denunciando a las oposiciones políticas “por sus crímenes contra las clases humildes”, y reivindicando sus ideales para con el pueblo, vinculados a la violencia capitalista, los abusos cometidos en nombre de la democracia contra los humildes, la economía nacional y la salud de los pobres (Sánchez Martínez, 2010).

Los apoyos electorales obtenidos por este partido expresaban el surgimiento de una nueva categoría de electores, mucho más despegado de las identidades partidistas tradicionales y mucho más receptivo en cuanto a propuestas políticas. Otro aspecto importante es que durante el gobierno de Rojas se crearon las condiciones necesarias para que los discursos favorables a la expresión popular tuvieran oportunidad de ser difundidos. Estas formas de relacionarse explícitamente con la ciudadanía y los sectores a los que el partido deseaba llegar más profundamente son características importantes que permiten la participación ciudadana y la movilización de los electores, ya que el simbolismo adquirido por el discurso y la cuestión de las masas se produjo en un efecto antielectoralista, en un intento de nivelar la sociedad y promover la igualdad (Forero Bermúdez, 2009).

En el caso de la ANAPO, su papel en las instituciones públicas del Estado se vio influenciado por el tránsito de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla a gobiernos civiles por elección popular. Este tránsito se dio a través de un pacto entre las elites, lo que implicó una transición hacia una democracia pactada. En un primer momento, esta

transición derivó en un bipartidismo puro entre alianzas del liberalismo y el conservadurismo.

Aunque algunos sectores conservadores y liberales habían formado parte del gobierno del General Rojas, posteriormente se retiraron y él perdió los últimos apoyos políticos con los que contaba. A partir de entonces, todas las fracciones bipartidistas y sus líderes políticos tenían un interés común: restaurar o mejorar sus posiciones políticas. Esta coordinación estratégica entre las elites políticas se dio de manera oligárquica (Duque Daza, 2011).

La ANAPO se constituyó como un nuevo partido en 1971, pero ya durante la década de 1960 había obtenido un gran apoyo en los estratos bajos urbanos, lo que le generó un creciente éxito electoral, como se mencionó anteriormente en relación a su vínculo con la ciudadanía.

En este contexto, la ANAPO buscó influir en el funcionamiento estatal a través de su participación en las instituciones públicas. Los partidos políticos desempeñan un papel importante en la toma de decisiones políticas y la implementación de políticas públicas, ya que buscan ejercer su influencia en el Estado.

Es importante tener en cuenta que el papel de la ANAPO en las instituciones públicas estuvo condicionado por las reglas y dinámicas existentes en la sociedad colombiana, así como por las relaciones de poder entre los partidos, las élites, la clase política y las organizaciones sociales. Los cambios en las instituciones se rigen por la distribución del poder y la definición de quienes tienen más influencia en el sistema político, en el caso de la ANAPO, su éxito electoral y su conexión con la ciudadanía, especialmente con los estratos bajos, le brindaron oportunidad de participar activamente en el sistema político buscando implementar sus propuestas y políticas en beneficio de los sectores populares.

5. Conclusiones

En conclusión, el surgimiento de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) en Colombia, se da como alternativa política al bipartidismo tradicional, buscando representar y dar voz a las clases populares y marginadas. A través de su defensa de la justicia social, la redistribución de la riqueza, y la soberanía nacional, ANAPO logró un notable apoyo popular, como se evidenció en las elecciones presidenciales de 1970 con la candidatura de Gustavo Rojas Pinilla. Aunque no alcanzaron la presidencia, obtuvie-

ron una significativa cantidad de votos, demostrando su relevancia e importancia en la sociedad. El auge que tuvo la Alianza Nacional Popular, también demuestra lo excluidos que estaban ciertos sectores populares en la sociedad colombiana previo al surgimiento de la ANAPO, donde predominaban grupos exclusivamente de tinte liberal o conservador, que no permitían el multipartidismo y la inclusión de todos los grupos sociales presentes en el país.

A lo largo de su existencia, ANAPO se enfrentó a obstáculos y divisiones internas, así como a la persecución política dirigida hacia Rojas Pinilla por las elites tradicionales, lo que debilitó su estructura y su influencia en el tiempo. Aunque actualmente ha perdido relevancia como fuerza política activa, su legado persiste en la historia política de Colombia. ANAPO presentó las bases para la representación de los sectores excluidos y marginados, y su lucha por la inclusión y la justicia social sigue siendo relevante en la sociedad colombiana. Se puede pensar esta cuestión como el fuerte legado de la ANAPO hoy, y la forma en la que de alguna manera “vive” este partido en Colombia, aunque ya no se encuentre políticamente activo.

Es importante destacar que, además del legado político de ANAPO, su surgimiento también tuvo implicaciones significativas para la participación política de las mujeres en Colombia. La promulgación de la Ley del voto femenino fue un hito importante en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, permitiéndoles participar plenamente en el proceso electoral y desempeñar un papel activo en la vida política del país. Esto obtiene suma importancia si pensamos en el rol de las mujeres en la sociedad en general históricamente, las mismas siempre han estado oprimidas, invisibilizadas, reducidos sus roles a cuestiones domésticos, de cuidado, de protección, de ayuda. Entonces, que un partido político les comience a dar voz, contribuye a su participación y reivindica de alguna manera la larga lucha que han atravesado, y atraviesan las mujeres.

En resumen, aunque ANAPO ya no está activa, su legado perduró en la lucha por la inclusión, la justicia social y la participación política. Su importancia histórica sigue presente en la conciencia colectiva del país y su impacto ha sentado las bases para la representación de los sectores que históricamente han sido excluidos y la ampliación de los derechos políticos de las mujeres.

6. Bibliografía

ANALICIAS, E. (1974), "Colombia en noviembre de 1973", *Revista Controversia*, (20), 43-48. Recuperado de: <<https://www.revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/1033/838>>

Archila Neira, M. (2011). *César Augusto Ayala Diago. La explosión del populismo en Colombia. Anapo y su participación política durante el Frente Nacional*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

ARDILA, M. Á. U. (2013), "El movimiento sindical: el período de violencia y la formación de la nueva izquierda colombiana, 1959-1971". *Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales*, (38), 135-145. Recuperado de: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4696472>>

AYALA DIAGO, C.A. (1995), *Nacionalismo y populismo: Anapo y el discurso político de la oposición en Colombia, 1960-1966*. Universidad Nacional de Colombia.

AYALA DIAGO, C.A. (1996), *Resistencia y oposición al establecimiento del frente nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) Colombia 1953-1964*. Universidad Nacional- Colciencias, Bogotá.

AYALA DIAGO, C.A. (2006), "El populismo atrapado, la memoria y el miedo: el caso de las elecciones de 1970".

DAZA, J.D. (2005), "La circulación de la clase política en Colombia: El Congreso de la República durante el Frente Nacional" en *Sociedad y Economía*, (8), 29-60.

DE LA ROCHE, F.E.L (1996), "Aspectos culturales y comunicacionales del populismo rojista en Colombia (1953-1957)" en *Signo y Pensamiento*, 15 (29), 81-94.

DUQUE DAZA, J. (2011), "La circulación de la clase política en Colombia: El congreso de la república durante el frente nacional", *Sociedad y Economía*, (8), 29-60.

DUQUE DAZA, J. (2019), "El Frente Nacional revisitado: el cambio institucional en Colombia y sus efectos no previstos", *Reflexión Política*, (42), 109-128.

FORERO BERMÚDEZ, M.A. (2009), *El Frente nacional y la oposición: la ANAPO y el MRL (1960-1966)*. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Historia.

FREIDENBERG, F., CRUZ, C., GILAS, K. (2022), Modelos organizativos, reglas formales y feminización de los partidos políticos en América Latina. Seminario Permanente de “Reformas Electorales y Democracia” del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. México.

HARTLYN, J. (1993), La política del régimen de coalición: la experiencia del Frente Nacional en Colombia. Santafé de Bogotá, Tercer Mundo.

KATZ, R., MAIR, P. (2007), “La supremacía del partido en las instituciones públicas: El cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” en *Partidos Políticos: viejos conceptos y nuevos retos*, (pp. 101-164). Trotta.

LUNA, L.G, VILLAREAL, N. (1994), *Historia género y política movimientos de mujeres y participación política en Colombia 1930-1991*. Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, Universidad de Barcelona. Recuperado de: <<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55638>>

MEDINA, M. (1996). *Nuevas formas de participación política*. Bogotá, Fescol.

RAMOS JÍMENEZ, A. (2001), “Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo” en *Revista del Centro de investigaciones de Política Comparada*. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad de los Andes. Mérida (Venezuela). Pp 181-202.

SANCHEZ MARTÍNEZ, O. (2010), *Anapo: del triunfo a la crisis 1970-1974*. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Historia.

Ripani, Ornella (2024). “La experiencia de la ANAPO en Colombia”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 242-253.

FREPASO: LOS PROBLEMAS DE UNA COALICIÓN ANCLADA EN EL PERSONALISMO

Tiziana Zanello

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Teniendo en cuenta los golpes y avatares que tuvo que atravesar la política en América Latina en su historia reciente del siglo XXI, es posible comprender por qué las relaciones de poder estructuradas y su funcionamiento tuvieron un comportamiento tendiente a la debilidad, donde las fuerzas sociales estables no eran partidos políticos o asociaciones civiles per se sino sindicatos, agrupaciones militares, empresarios y grupos guerrilleros, por mencionar algunos. Estos actores definían los conflictos sociales a través de corporaciones y alianzas sectoriales, dejando por fuera a los partidos políticos al momento de canalizar procesos históricos sociales. Con la recuperación democrática post gobiernos militares, los partidos se mantuvieron en la informalidad con estructuras institucionales insuficientes, lo cual culminó en la imposibilidad de construirse como canales de representación política duraderos (Zícarí, 2018).

En Argentina, el desordenado panorama incluyó golpes de Estado, grandes crisis económicas, sociales, políticas y culturales, sumado a diversos escenarios que mos-

traron falencias en términos de representación, eficiencia política, justicia social, reconocimiento de derechos, garantías y obligaciones. El siglo XX llevó consigo numerosos vaivenes en todas sus arenas y escenarios, inclusive en la partidaria; a partir de ello, elegimos centrarnos en el FREPASO (Frente País Solidario), una coalición que emergió poniendo en cuestión al bipartidismo imperante del siglo XX, pero eclosionó al poco tiempo.

Para abordar este caso nos remitiremos a la propuesta de Katz y Mair (2007), quienes apuntan que es posible caracterizar a los partidos políticos en torno sus “caras” y el equilibrio variable de poder entre estas facetas (Caruncho, 2018:14). Estas se distinguen, en primer lugar, como el partido como organización de afiliados (también llamada el partido en el electorado) que alude a la organización de los miembros; en segundo lugar, el partido como organización central, en términos de la organización del comité central, y, por último, el partido en las instituciones públicas, es decir, la organización del partido en los cargos públicos (Katz y Mair, 2007: 101). A partir de ellas, los autores estudian el desarrollo organizativo de los partidos políticos de las democracias occidentales desde mediados de siglo XIX hasta fines del siglo XX, retomando los tres modelos partidarios reconocidos por la literatura especializada (partido de élites, partido de masas, partido atrapado) y su aporte, el partido cartel (Caruncho, 2018:12). Estas “caras” poseen influencias de todo tipo, como pueden ser la coyuntura política, social y económica, la opinión popular, el posicionamiento o comportamiento de la oposición y los conflictos existentes entre los dirigentes y las figuras extrapartidarias; todos estos elementos aparecen con vital importancia e influencia en el caso del FREPASO.

En nuestro estudio de caso, observamos que durante el gobierno de Carlos S. Menem (1989-1995) tuvieron lugar importantes cambios en el sistema electoral que influyeron no sólo en las elecciones sino también en la organización partidaria, entendiendo a ésta, en palabras de Leiras, como el resultado de las decisiones que los individuos y grupos que componen el partido toman para distribuir el trabajo político y sus beneficios resultantes. Sin embargo, es menester tener en cuenta que los partidos y sus miembros también pueden cambiar las reglas del juego electoral, tomar decisiones que transformen el entorno social y, en ese sentido, cambiar el curso de la historia electoral (Leiras, 2007:20).

Trataremos de hacer un análisis en torno al origen y el desarrollo del FREPASO con énfasis en el estudio de estos aspectos bajo la lupa de Katz y Mair, reconociendo al partido mencionado como una coalición donde los *mass media* llevaron a cabo el

trabajo que debía ser llevado a cabo funcionarios, mientras el núcleo organizativo permaneció en la irrelevancia e inoperancia, dejando en manos de la prensa y un líder personalista las actividades esenciales y la necesidad de mostrar una buena imagen, socialmente positiva, para ganar votos. Así, a pesar de su rápido crecimiento electoral, el FREPASO anduvo a los tumbos por sobrevivir pese a sus conflictos identitarios, personalistas e institucionales, que terminaron por corroer sus bases y condenarlo a la fragmentación.

2. El sistema electoral y político argentino: ¿dónde se inserta el FREPASO?

En términos de sistema político-electoral, Basset (2003) plantea que la mayor particularidad argentina radica en que el poder central personalizado llegó a contagiar al sistema partidario, construido históricamente en torno a figuras como Yrigoyen para la Unión Cívica Radical y Perón para el Partido Justicialista. Ambos partidos fueron dominantes del escenario electoral desde mediados de siglo XX hasta casi su culminación, y el liderazgo fue una piedra de toque en su formación, cohesión ideológica y organización partidaria.

A este panorama hay que agregarle una segunda particularidad, que es la centralidad que reviste la territorialización de la política y las fuerzas provinciales incluso dentro de sus propias estructuras partidarias. Muchas veces la designación de candidatos a la presidencia depende, en parte, de la capacidad para obtener la aprobación de los líderes provinciales del partido. Paradójicamente, una vez designado, el candidato debe dar a su postulación un sentido nacional para recoger beneplácito más allá de las clientelas tradicionales de su partido; esto es sin duda uno de los requisitos para ganar una elección nacional en nuestro país¹. La elección de 1999 fue paradigmática al respecto: el binomio De La Rúa-Álvarez supo dar a su postulación una significación nacional de ruptura con la era Menem, encarnando un proyecto ético y progresista (Basset, 2003:269).

Es factible indicar que el sistema partidario iniciado en 1983 con la vuelta de la democracia muestra una radical diferencia en aspectos centrales con los períodos previos: a) la distancia ideológica se redujo y el sistema perdió su condición de polarizado para comportarse como un sistema moderado; b) además, el sistema se volvió

1. Es importante mencionar también que, al elegirse los convencionales por medio de circunscripciones grandes y sistema de representación proporcional D'Hont, aumentan las chances de lograr representación aún en aquellas provincias esquivas para el partido.

más complejo: no hay una sola dimensión de conflicto que sobreimprima una lógica a todas las demás; c) asimismo, el número efectivo de partidos cambia cualitativamente al surgir “terceros” partidos importantes, como fue el FREPASO. En este panorama, la alternancia pasó de ser inexistente a ser completa, e inclusive desde 1999 a fines de 2001, el país experimentó la inusitada situación de ser gobernado por una coalición de partidos (Abal Medina, 2003:138).

Bajo el gobierno de Menem se llevó a cabo todo un proceso de ingeniería electoral y política, principalmente a través de la reforma de la Constitución Nacional en el marco del Pacto de Olivos año 1994. Siguiendo a Natale (1994), luego de la reforma Menem accedía a la posibilidad de la reelección al tiempo que Alfonsín -principal figura de la oposición- lograba limitar los poderes presidenciales. Sin embargo, es posible decir que, por un lado, la reelección realmente se concretó, pero el poder presidencial no se atenuó sino que, por el contrario, fue fortalecido.

Dentro del nuevo paquete de políticas aplicadas en el período se implementaron, junto con la reelección, la elección directa de presidente y vicepresidente con sistema de ballotage, reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años, cambios en la composición de la Cámara de Diputados (se compuso por un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500) y se modificó la duración del mandato, ahora con renovación por mitades cada dos años; para la elección de Senadores se amplió de dos a tres senadores por estado provincial y para el poder Ejecutivo se estableció la votación directa; también se añadió la “lista incompleta” al juego electoral.

Asimismo, el sistema político argentino también tuvo modificaciones en la década del 90 en términos de género, lo cual lo hace ver como una experiencia exitosa de la región por la capacidad de incrementar la proporción de mujeres en el Congreso. Teniendo en cuenta que desde el retorno a la democracia Argentina fue pionera en promover la participación política de las mujeres, podemos señalar que desde 1991 se llevaron a cabo elecciones de cargos legislativos nacionales bajo la aplicación del régimen de cuotas de género, establecido por la Ley de Cupos², que introdujo nuevos incentivos en la contienda electoral al modificar las reglas de jue-

2. La Ley 24.012 de cupo femenino fue sancionada el 6 de noviembre de 1991. Determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones en Argentina tiene que estar ocupado por mujeres. Originalmente fue aplicada en la Cámara de Diputados de la Nación. En 1995 se extendió al Senado y, a partir de 2015, al Parlasur.

go³: se modificó el Código Electoral Nacional indicando que las listas deben tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento de los candidatos a elegir, en proporciones que otorguen la posibilidad de resultar electas. Como resultado, se institucionalizó el hecho de que no puede ser oficializada ninguna lista sin estos requisitos (Alles, 2018:314).

Podemos señalar que diversos estudios exploraron el efecto de las reglas electorales sobre el desempeño de las leyes de cuotas, evidenciando que los sistemas de representación proporcional con listas cerradas y distritos grandes o medianos -como los de nuestro país- son los más favorables a las mujeres, especialmente si la legislación exige posicionar a las candidatas en lugares expectables y no puramente simbólicos de las boletas partidarias (Caminotti y Freidenberg, 2016). Un ejemplo de esta Ley de Cupos y la participación de las mujeres puede reflejarse en las elecciones legislativas de 1991, donde se presentó una lista de diputados encabezada por Graciela Fernández Meijide -destacada referente femenina del ámbito- y Eduardo Jozami.

3. El advenimiento de la centroizquierda y los comienzos del FREPASO

Siguiendo a Corral (2011), podemos decir que la emergencia de la centroizquierda en nuestro país durante los años 90 implicó una redefinición del tipo de oposición hasta entonces ejercida al menemismo y del tipo de proyecto político que una fuerza progresista debía consolidar para acceder al gobierno. Con origen en el Frente Grande (frente conformado en 1993), luego de que Carlos “Chacho” Álvarez y su sector promovieran un acercamiento y posterior acuerdo con el partido Socialista, sumado a un desprendimiento del justicialismo liderado por el senador José Octavio Bordón, se conformó en 1994 un nuevo frente político que pasó a denominarse FREPASO (Frente País Solidario), integrado por el Frente Grande, la Unidad Socialista -Partido Socialista Popular (PSP) y Partido Socialista Democrático (PSD)-, la Democracia Cristiana y el partido Política Abierta para la Integración Social (PAIS), formado poco tiempo antes por el previamente mencionado dirigente peronista y ex gobernador de la Provincia de Mendoza, Bordón. En febrero de 1995 se sumaron algunos dirigentes y militantes radicales que habían creado el partido Nuevo Espacio, cuyo referente era Carlos Raimundi (ex presidente de la Juventud Radical); en marzo del mismo año también abandonaría la UCR para incorporarse al FREPASO el ex canciller Dante Caputo. Entre tanta heterogeneidad partidaria tuvo lugar un escenario

3. Sin embargo, es importante mencionar que las cuotas de género buscan favorecer la elección de mujeres, aunque por sí solas no garantizan este resultado.

de competencia entre Álvarez y Bordón para definir a la figura del frente y constituir fórmulas electorales, el cual se dirimió en el marco del pragmatismo político y de la exposición en los medios de comunicación. Se eligió la fórmula presidencial mediante internas abiertas que se realizaron el 26 de febrero de 1995, donde compitieron Álvarez y Bordón; participaron cerca de medio millón de ciudadanos cuyos votos permitieron a Bordón obtener la victoria, aunque por un muy escaso margen. Es importante destacar que, dentro de esta nueva coalición, la denuncia contra la concentración de poder en la figura presidencial y el discurso contra la corrupción enquistada en su administración, sumada a la promesa de una “renovación de la cultura política”, fueron algunas de las claves de una oposición más preocupada por el “déficit institucional” que por la construcción de una propuesta alternativa y superadora al modelo económico concentrador y excluyente de la gestión de Menem (Corral, 2011:1).

Desde la irrupción del peronismo, y durante más de medio siglo, el país pareció estar edificado sobre un sistema de partidos esencialmente bicolor, donde la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) compitieron entre sí con el fin de acceder a cargos del gobierno, mientras ningún otro partido logró construir una plataforma nacional con peso suficiente para ambicionar triunfos electorales en el país. Sin embargo, la última década del siglo XX pareció desafiar lo acontecido en el medio siglo previo, ya que el FREPASO logró cuestionar la sólida bicefalia y abrir una brecha en el bipartidismo en muy poco tiempo. Sin embargo, su buena estrella fue en realidad una circunstancia muy débil: la intensa experiencia de gobierno que implicó formar parte del gobierno de la Alianza y que solo duró dos años (1999-2001) fue suficiente para liquidar al partido tan rápido como éste creció (Zícarí, 2018:4).

4. El FREPASO desde la lupa de Katz y Mair

A fines de 1994 nació el Frente del País Solidario (FREPASO), con la ya mencionada disputa en torno a cuál de sus líderes (Carlos A. Álvarez, Graciela Fernández Meijide, Fernando “Pino” Solanas, José O. Bordón) encabezaría el espacio. La disminución de los desacuerdos ideológicos de sus miembros llegaría recién para 1998, pudiendo estar vinculados con la superación de algunos conflictos en torno al liderazgo entre sus dos principales figuras —Álvarez (del Frente Grande) y Bordón (del Frente por un País Solidario)— a partir de 1995. En 1996, cuando la contienda llegó a su fin tras el triunfo de Álvarez y su grupo más próximo, el liderazgo del partido se consolidó paulatinamente en torno a su figura (Caruncho, 2016:69) teniendo en cuenta que el 9

de febrero Bordón se alejó del FREPASO esperando capitalizar a su favor la enorme popularidad que las encuestas de opinión le otorgaban, hasta entonces superior a la de Álvarez, y los cinco millones de votos obtenidos por su candidatura pocos meses atrás (Abal Medina, 1998:18).

El énfasis u objetivo principal de esta organización partidaria no estuvo en romper con el régimen sino en mostrarse como alternativa ética frente al bipartidismo; de esta forma, se apeló a todos aquellos afectados por el “cansancio moral” causado por el gobierno, plagado de corrupción y autoritarismo, buscando representar una etérea masa impersonal llamada “la gente”. El discurso del FREPASO dominante en la campaña electoral, salvo alguna esporádica jerarquización de intereses e instrumentos, mantuvo su carácter fuertemente “moral” buscando diferenciarse del “costo social del ajuste” y de la “corrupción del gobierno” con la propuesta central de “un mejor gobierno”. Al mismo tiempo, el candidato presidencial del FREPASO renovaba su compromiso con la estabilidad económica y la convertibilidad de la moneda (Abal Medina, 1998:17). Mientras, la consigna de campaña refería a un “cambio seguro” y apostaba por ganar el “voto útil”, con el que se esperaba atrapar los votos del espectro anti-menemista; a partir de ello, podríamos hablar del FREPASO como un partido atrapado, como diría Kirchheimer (1980), entendiendo que no había un programa o ideología definido, sino que se trató de llegar a todos los votantes no menemistas.

Particularmente, al analizar las caras partidarias del FREPASO, notamos que una de las facetas más llamativas es la del partido como organización. El grueso de los recursos del FREPASO se encontraba tanto en los medios comunicacionales —de los que hacía uso intenso y eficaz, logrando una corriente de opinión favorable— como en el prestigio de sus líderes, con destacada imagen pública. Los medios funcionaron como tribuna de difusión y posicionamiento, sin mecanismos típicamente político-partidarios que caracterizaron a otros partidos (actos masivos, militancia, ideología firme y confrontativa; elementos de la vieja política). Sin dudas, FREPASO era un partido con un crecimiento y desenvolvimiento generado a costas de otras fuerzas políticas y desde cambios coyunturales, sin lograr la consolidación de sus recursos en una base organizativa a nivel territorial con un programa a mediano y largo plazo. Su accionar político lo hizo ver como un partido de opinión aparentemente más apto para el rol de oposición que el de gobierno; de aquí que no haya correlato entre la representatividad del FREPASO en la sociedad y el peso en las cámaras legislativas o el efectivo ejercicio de cargos de gobierno. Esto constituía otra de las fallencias básicas del FREPASO: la falta de experiencia para gobernar (Vázquez, 2014:7).

Asimismo, el FREPASO nunca se despegó del personalismo, teniendo en cuenta que la figura del líder (en este caso, Álvarez) tomó las riendas del partido como principal conductor del mismo, entendiendo que se encargaba de aparecer en la prensa con notorios discursos que presumían una buena adaptabilidad a la coyuntura del momento. Esta capacidad de amoldarse al contexto, sin embargo, puede ser vista como un arma de doble filo: si bien permite inspirar cierta confianza, tal vez, y pretender que todo está bajo control y en buenas manos, terminó por generar un partido con fronteras laxas y cambiantes que enarboló ideas generales, sin una profundidad considerable en términos de programa político e ideológico, la cual devino en una plataforma político-ideológica totalmente desdibujada.

En suma, el partido terminó por embarcarse en un proyecto imposible y en total contradicción con las ambiciones del grueso de sus integrantes, los cuales, al haber descansado en el liderazgo de Álvarez, quedaron con poco margen de acción para replantear el destino al cual aquél los dirigió. En este sentido, no hubo otro resultado más que rupturas dentro del FREPASO por desacuerdos con respecto al programa gubernamental y por problemas identitarios.

Abal Medina (2006) señala que el FREPASO utilizaba una estrategia de “crecimiento forzado” como forma de expansión política; asimismo, remarca que el partido renunció a una expansión gradual y ordenada para optar por los saltos al vacío. Si las carencias organizativas terminaban por resolverse con un personalismo cada vez más extremo, la identidad ideológica también se desvanecía al interpelar a un espectro político cada vez más amplio para lo cual era cada vez más indispensable no confrontar ni trazar límites ideológicos claros (Corral, 2011:11). Siguiendo a Leiras, es importante mencionar que las ideologías partidarias son una herencia que necesita ser realimentada constantemente para mantener su vitalidad. De otro modo, subsisten solamente como un recuerdo y su impacto electoral, tanto en los comicios internos como en los generales, se diluye (Leiras, 2007:113).

Particularmente, el FREPASO buscaba tener liderazgos sin muchos condicionamientos, flexibles y libres, para tener suficiente capacidad de adaptación a los volátiles climas de la opinión pública: hablar reiteradamente sobre la corrupción era una vía de escape que permitía ganar consenso fácil al tocar un tema de acuerdo universal, y evitaba discutir otras cuestiones en un contexto donde la debilidad ideológica tendió a aflorar, sin promover una disputa por proyectos políticos alternativos (Zícarí, 2011:13).

En suma, los frepasistas carecían de un modelo político preciso al cual emular dentro del contexto de nuevas izquierdas latinoamericanas, como también de objetivos

ideológicos claros más allá de las denuncias de corrupción y buscar representar al ambiguo espacio progresista. A fines de 1996, Álvarez propuso una nueva coalición opositora, por lo que en 1997 nació la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (comúnmente llamada Alianza), aglutinando los dos principales partidos de la oposición, el FREPASO y la UCR, con miras a un mayor potenciamiento electoral, intercalando puestos entre los partidos e intentando así que encabezaran las listas los aspirantes que pudieran ofrecer los mejores resultados electorales (Zícarí, 2011:14). En este escenario, las complejas negociaciones para el reparto de los cargos culminaron con las candidaturas de las dos máximas figuras, Álvarez (en Capital Federal) y Fernández Meijide (provincia de Buenos Aires). De esta forma, ambas fuerzas se comprometieron a decidir mediante una interna abierta la fórmula presidencial común para 1999. La conformación de la Alianza, en palabras de Abal Medina, parece nuevamente remarcar un extraño rasgo político que el Frente Grande ha mostrado desde sus orígenes, como es el privilegiar los intereses visualizados como generales por sobre los particulares (Abal Medina, 1998:20).

Como se evidenció, la cara organizativa, además de sorpresiva y con giros bruscos inesperados, fue claramente débil, desestructurada, desorganizada, disfuncional, con fronteras laxas e inorgánicas, funcionando a la sombra de la toma de decisiones por parte de Álvarez, el líder de la coalición. Empezando como un partido crítico del escenario electoral menemista, terminó por consolidarse como una posible posición moderada, de centro, un tibio republicanismo progresista sin un rumbo propio ni edificado sino acomodado a la coyuntura y las disputas del momento, lo cual generó una clara pérdida de seriedad y eficiencia en términos ideológicos e identitarios. Los únicos momentos donde se apreció un inicio de una estructura organizativa por se podemos verlo en la campaña electoral inicial, con ciertos lineamientos demasiado “superficiales” o vacíos de contenido, como la lucha contra la corrupción, que habrían funcionado como un principio de esquema político a seguir. Sin embargo, sabemos que estos lineamientos terminaron siendo vacíos y generales basados en debilidades institucionales.

Entendemos entonces que el veloz ciclo político del FREPASO, con rápido ascenso y estrepitosa descomposición, se debió en gran medida al tipo de estructuración con la que se edificó el partido, con un liderazgo omnipresente por parte de Álvarez que implicó una notoria debilidad institucional. En este sentido, no nos parece erróneo afirmar que la vertebración del partido detrás de la figura de Álvarez fue el germen de destrucción del propio partido político del dirigente.

En el caso del partido a partir de su composición en términos de activistas, afiliados, simpatizantes, votantes leales, sus miembros en general, entendemos que éstos son los encargados de, entre otras cosas, conformar la estructura y liderazgo activo de este espacio. Esta cara -característica de los partidos de masas- refleja los objetivos del partido, como pueden ser fomentar la solidaridad, construir símbolos y orientar políticas públicas a partir de la puesta en juego de diversos recursos como el trabajo en equipo y el conocimiento organizacional. Sin embargo, no es hasta su llegada al Estado y sus instituciones que pueden tomar decisiones concretas y efectivas. Citando a Katz y Mair (2007) y retomando la “cara” anterior, podemos señalar que la organización central del partido presta el apoyo necesario para la expansión del partido de los afiliados y la coordinación central de sus actividades, mientras que el partido de los afiliados aporta los recursos necesarios para la existencia y el éxito de la organización central del partido. La ciudadanía en general se vio manipulada por banderas genéricas que promulgaban diversas políticas públicas o direccionamientos no precisos, como la “lucha contra la corrupción” o la “justicia”. Por fuera del voto, no se buscó integrar a los afiliados, votantes o simpatizantes en el partido, entendiendo que éste se centró en su líder y las decisiones que provenían (o no) de él.

En cuanto a la cara del partido en el Estado, el primer y más obvio síntoma de esta pauta atañe a la distribución de recursos financieros dentro del partido y, sobre todo, a la distribución de las subvenciones estatales (entendiendo que desde los años 60, cuando se introdujeron por primera vez los subsidios directos a los partidos políticos en algunos países, la canalización de la ayuda estatal a las organizaciones partidistas se convirtió en una práctica casi universal en las democracias europeas contemporáneas⁴); sin embargo, también se hace referencia al papel central de la burocracia, empeñada en buscar la forma de permanecer en su cargo o, en caso de no poseerlo, acceder al mismo, junto con la injerencia en la toma de decisiones de la orientación de la política pública. Ciertamente, el mayor peso institucional del FREPASO tiene lugar a la hora de hablar de las coaliciones en términos de alianzas pre y post elecciones, ya que el mismo nació como una alianza entre varios espacios políticos con un mismo fin, entre los cuales promovieron su campaña opositora al menemismo.

La coalición mencionada tuvo acceso a varios cargos legislativos, principalmente luego de 1995, que fue su momento de mayor auge y salto electoral -con mayor peso entre 1991 y 2001 que estuvo en el gobierno. Este fue uno de sus principales puntos a favor, más que nada en términos de innovación y cambio, pero no dejó

4. Katz y Mair, 2007:112.

de ser efímero: las carencias institucionales y organizativas fueron suficientes para poder derrumbar la pseudo estructura institucional que alguna vez se había podido llegar a formar, más que nada por detrás de la figura de Álvarez. También podemos mencionar que se careció una burocracia capaz de nuclear las necesidades del partido, y mucho menos de concentrar el capital humano requerido para sostener la estructura partidaria; todas las decisiones y definiciones eran coyunturales. Alcanzar buenos niveles de organización, estructura territorial y recursos militantes fueron objetivos que no se alcanzaron bajo ningún aspecto a lo largo de su trayectoria y se configuran como cruciales en cualquier partido político importante. A esto se le suma la carencia de victorias a nivel subnacional, como alguna intendencia. Estos déficit internos se vuelvan más notorios y graves por el hecho de compartir la Alianza con el partido radical, una organización que, a pesar de sus últimamente malos resultados electorales, tiene una estructura de recursos humanos y materiales que fácilmente multiplica los del FREPASO (Abal Medina, 1998:23).

En términos organizativos, se pagó muy cara su opción por la construcción política a través de liderazgos *masmediáticos* y el privilegio a permanentes frentes electorales por sobre la construcción de instituciones sólidas. Sin duda, esto otorgó ventajas en términos de alta flexibilidad, de libertad gozada por sus líderes y no cargar con un pesado aparato territorial, elemento que en otros partidos siempre está tentado de entrar en prácticas corruptas. El déficit de la coalición, para Abal Medina, es producto de no haber podido construir una organización partidaria de nuevo tipo que mantuviera esas ventajas y pudiera sumar solidez y capacidad militante. Podemos observar entonces un fracaso del hecho de hacer política mezclando desordenadamente elementos de su vieja herencia populista con componentes socialdemócratas sumado a fuertes matices propios (Abal Medina, 1998:17). Las impugnaciones que el FREPASO hacía al sistema político buscaban enfrentar a los partidos tradicionales denunciando sus falencias y excesos, básicamente con relación al uso de los recursos públicos, pero no los impugnaba totalmente, pudiendo así entrar en alianzas con ellos, tal como es el caso con la UCR.

5. Conclusiones

En palabras de Abal Medina (1998), el FREPASO se ha distinguido entonces por su carácter centralizado, personalista y mediático; a la par, no ha establecido un modelo original de partido. Su irrupción repentina acentuó fuertemente características arraigadas en los partidos modernos, llamados “profesional-electorales” (Panebian-

co, 1990:487-512). Por tal modelo partidario se hace referencia a la idea originalmente planteada por Kirchheimer (1966) del “catch all party” o “partido atrapado”.

Como indican Kestler, Krause y Lucca (2017), el FREPASO se constituyó desde sus orígenes como una fuerza “en oposición a...”, que se iba cohesionando en tanto se enfrentaba a la hegemonía tradicional partidaria y crecía electoralmente (Kestler et al, 2017:195). Sin embargo, la identificación del enemigo común fue mutando a lo largo del tiempo: inicialmente fue la “traición” menemista al peronismo por la implantación del modelo neoliberal (1991); en un segundo momento el adversario fue la “vieja política” expresada en el Pacto de Olivos entre la UCR y el PJ (1994); luego se identificó la “fiesta menemista” y la corrupción como principal antagonista (1997); por último, los déficits del modelo económico en el área social y la defensa de las instituciones (1999). La inclusión de Cavallo en la Alianza en el año 2000 implicó traspasar un límite en la moderación ideológica del FREPASO, desdibujando el enemigo común que cohesionaba la disputa interna. Por ende, sin un conjunto de reglas organizativas explícitas y estables, sin un líder capaz de galvanizar las fracciones internas, y sin una razón de ser en términos ideológicos, el FREPASO dejó de ser una promesa de éxito y pasó rápidamente al fracaso (Kestler et al, 2017:120).

Podemos concluir que sin dudas el FREPASO implicó cambios en la política argentina, pero estos no pudieron ser sustanciales y modificadores de la situación desde la raíz, sino que notamos falta de disciplina, decisión, organización y fuerza para imponerse como fuerza política programática y eficiente. Se amoldó a cada espacio donde encontró lugar, con las herramientas que tuvo a su alcance, y su torcido devenir se tornó inevitable. Vemos así cómo el encolumnarse detrás de un líder carismático, que pese al buen uso de su oratoria no es capaz de garantizar la organización de los demás funcionarios y permanecer en una misma línea identitaria e ideológica, no es una opción que lleve a buen puerto.

Quedó finalmente demostrado que un partido necesita constantemente de sus elementos centrales y una base organizativa para subsistir, lo cual lograría necesarios diagnósticos informados y consistentes que partan de información representativa y confiable, pero también que sean compatibles con los lenguajes tradicionales y las tendencias ideológicas reconocibles en la tradición partidaria (Leiras, 2007:84). Además, las condiciones de las alianzas, particularmente, deben ser claras y justas, y sobre todo mantener la consistencia en el tiempo. En un partido o coalición con vaivenes, indecisiones, falta de determinación, no hay organización que prospere. A la par, es fundamental proponer beneficios colectivos y selectivos, buscar un electora-

do particular, tratar de identificarse -y mantener- una ideología y poder transmitirla a los votantes, que podrían así estar convencidos de su sufragio, y no promover o permitir el devenir de la volatilidad del voto. Tal como indica Leiras, la capacidad de los partidos de elaborar doctrinas y traducirlas en programas de gobierno constituye un bien colectivo que galvaniza a las organizaciones y facilita la resolución de los problemas de información que enfrentan los ciudadanos en el momento de decidir su voto (Leiras, 2007:84).

Es importante mencionar la posibilidad de aplicar los conceptos y criterios de Katz y Mair al estudio de partidos latinoamericanos, entre ellos el FREPASO. Resulta relevante, en última instancia, poder ver cómo el partido pretendió organizarse, para dar cuenta de las dificultades y obstáculos que genera la estructura partidaria articulada bajo la sombra de una sola persona o dirigente que parece tener la última palabra y decisión. Sin dudas, la importancia de una burocracia capacitada y eficaz es de las herramientas fundamentales para poder llevar a cabo una participación política de los partidos acorde a las funciones que le competen, tales como la representación, implicancia en el juego político y participación electoral.

6. Bibliografía

ABAL MEDINA, J. (1998), “Los herederos del populismo. La experiencia del PRD y el Frente Grande” en *revista Nueva Sociedad*, 157, 87-106. <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3993983>>

ABAL MEDINA, J. (1998), “Viejos y nuevos actores en el escenario posmenemista: De Evita a Graciela, la experiencia del Frente Grande/FREPASO”, Latin American Studies Association, XXI International Congress, Chicago, Estados Unidos.

ABAL MEDINA, J., SUÁREZ CAO, J. (2003), “Análisis crítico del sistema electoral argentino. Evolución histórica y desempeño efectivo” en *Revista de Ciencias Sociales* N°14, 120-150. Disponible en RIDAA-UNQ. Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. <<http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1192>>.

ALLES, S. M., (2008), “Efectos del sistema electoral sobre la representación de mujeres. Argumentos y evidencia a partir del caso argentino (1983-2005)” en *Revista SAAP*. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 3(2),313-352. ISSN: 1666-7883. Recuperado de: <<https://www.redalyc.org/articulo>.

oa?id=387136361003>

BASSET, Y. (2003), "Las elecciones en la Argentina: entre dispersión política y voto bronca" en *Revista ALCEU*, vol. 3 - N° 6. Disponible en: <http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/alceu_n6_Dossie%20Argentina.pdf>

CAMINOTTI, M. y FREIDENBERG, F. (2016), "Federalismo electoral, fortaleza de las cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos subnacionales en Argentina y México" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Vol. 61, pp. 121-144. ISSN 0185-1918, <[https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(16\)30042-3](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(16)30042-3)>.

CARUNCHO, L. (2018), "La organización de los partidos políticos en las democracias occidentales". X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/80073/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CORRAL, D. (2011), "El giro "institucionalista": El liberalismo del Frepaso y sus apoyos intelectuales (1993-1997)". IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

KATZ, R. y MAIR, P. (2007), "La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas" en MONTERO, J., GUNTHER, R. y LINZ, J. (comp). *Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos*, España, Fundación Alfonso Martín Escudero.

KESTLER, T., KRAUSE, S. y LUCCA, J. (2017). "Cohesión, éxito o fracaso de los nuevos partidos políticos en América del Sur" en *Revista Mexicana de Estudios Electorales*. N° 18, segundo semestre de 2017 (julio-diciembre): 195-221, ISSN: 2448-8283.

KOESSL, M. (2009), "Apogeo y derrumbe del FrePaSo. Algunas consideraciones" en *Revista del CESLA*, (12), 99-116. ISSN: 1641-4713. Disponible en: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243321003011>>.

LEIRAS, M. (2007), *Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

NATALE, A. (2000), "La reforma constitucional argentina de 1994" en *Cuestiones Constitucionales*, enero-junio, N° 002, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 219-237.

PERETI, G. (2006), *La nueva política de partidos en Argentina: Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral*. Recuperado de: <<http://www.scielo.org.ar/img/revistas/daapge/n7/html/n7a07.htm>>

VÁZQUEZ, A. (2014), “La conformación de La Alianza UCR – Frepaso (1997 – 2001). Usos de las teorías de negociación política para el estudio de las coaliciones” 2º Jornada de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral.

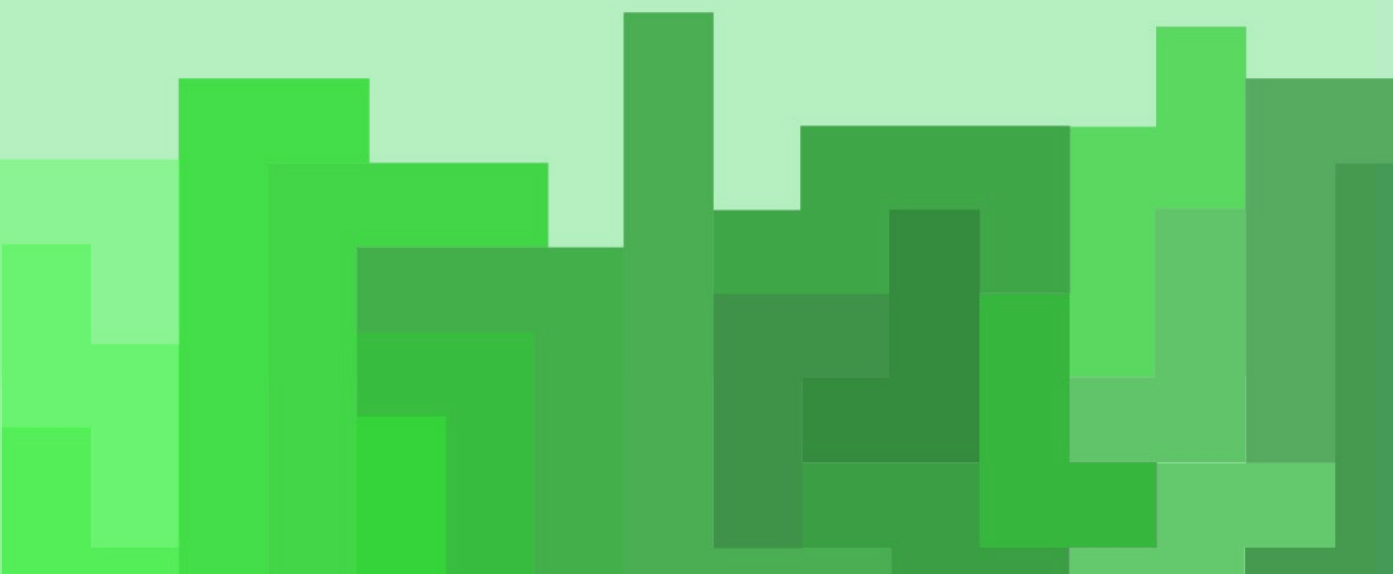
ZÍCARI, J. (2018), “Liderazgo fuerte, partido débil. Ascenso y rápido desaparición política de Chacho Álvarez y del Frepaso en la Argentina”. en *Naveg@américa*, Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas [en línea]. 2018, N°. 21.

Un recorrido por la historia de las elecciones en Argentina [artículo]. El Destape. Recuperado de: <https://www.eldestapeweb.com/sociedad/elecciones/un-recorrido-por-la-historia-de-las-elecciones-en-argentina-20212910580?utm_medium=paid&utm_source=Google&utm_campaign=DSA_Dinamico5&gad=1&gclid=CjwKCAjwyqWkB-hBMEiwAp2yUFqGUv60Ote5xCOISBVWBnAE7e3DnO5cemLpmkp-lzimio7LDNSZn-HRoCHTQQAvD_BwE>.

Frente Grande | Sitio Oficial del Partido Frente Grande. (n.d.). Frente Grande. <https://frentegrande.org/>

Zanello, Tiziana (2024). “FREPASO: los problemas de una coalición anclada en el personalismo”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 254-268.

SECCIÓN III: SISTEMAS DE PARTIDOS



ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS DE PARAGUAY Y BRASIL (1998-2010)

Abril Espinosa Viale

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Mainwaring y Scully, (1996) en su obra *“Introducción: Sistemas de partidos en América Latina”* se proponen el análisis comparado de los sistemas de partidos de la región, centrándose en el concepto de institucionalización. Para tal cometido, sostienen una serie de premisas mediante las cuales un sistema de partidos democrático puede ser considerado como institucionalizado en mayor o menor medida.

Los autores parten por definir al sistema de partidos y a la institucionalización respectivamente como un “...conjunto de interacciones esquematizadas en la competencia entre partidos ... y el proceso por el cual una práctica u organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, si no necesariamente aceptada por todos” (Mainwaring y Scully, 1996:3).

En la mencionada obra se exponen diversas argumentaciones, que recorren desde el rol de los partidos en el funcionamiento de las democracias, las diferencias entre los sistemas de partidos latinoamericanos en cuanto a su grado de institucionaliza-

ción y cómo esta influye en el proceso de consolidación democrática (Mainwaring y Scully, 1996).

En este trabajo nos detendremos sobre el análisis de la institucionalización de los sistemas de partidos, partiendo de las dimensiones presentada por los autores que postulan cuatro criterios fundamentales.

En primer lugar, consideran que para que una primera condición que debe cumplirse para que un sistema de partidos esté institucionalizado, es que debe manifestarse cierta regularidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos. Los partidos más importantes han de aparecer en la escena política con regularidad y aportar cierta estabilidad al sistema. A fines de verificar el funcionamiento de esta variable los autores proponen observar el índice de volatilidad.

En segundo lugar, los partidos deben contar con raíces más o menos estables en la sociedad. Esto tiene que ver con el grado de apego de los ciudadanos, el vínculo entre ciudadanos y partidos, además de la consistencia de estos últimos en sus relativas posiciones ideológicas. A fines de observar cómo se comparta esta variable, los autores proponen medir la diferencia que existe entre las elecciones presidenciales y del Congreso, para ver cuán profundo los partidos penetran en la sociedad.

En tercer lugar, los principales actores políticos otorgan legitimidad al proceso electoral y a los partidos, entendiendo que las elecciones serán la ruta principal hacia el gobierno. En un sistema de partidos institucionalizado, los partidos políticos son clave para determinar el acceso al poder. La observancia de este criterio se sostiene en el análisis de la participación ciudadana en los comicios.

Finalmente, el último criterio remite a la solidez y autonomía de las organizaciones partidarias. A fines del presente ejercicio comparativo, haremos especial hincapié en las tres primeras variables propuestas.

A fines de contrastar la propuesta realizada por Mainwaring y Scully (1996), tomaremos los casos de los sistemas de partidos de Paraguay (1998-2008) y Brasil (1998-2010). La investigación se caracteriza por ser un estudio de área, ya que los casos se encuentran situados en la misma región. La misma estará enmarcada en un espacio nacional, retomando lo que se sostiene en Lucca y Pinillos (2015), se utilizará “un mismo aparato conceptual para abordar dos o más estados, sociedades o culturas, enmarcadas en un país, para explicar las particularidades de los contextos, pero también para poder generalizar a partir de los mismos” (Lucca y Pinillos, 2015: 7).

En cuanto a la temporalidad, se trata de un análisis de tipo sincrónica ya que se presenta una simultaneidad del fenómeno en los casos a analizar. El recorte temporal abarca el periodo inmediato posterior a la publicación de Mainwaring y Scully de 1996 en la que se sustenta este trabajo. Durante el nuevo periodo que aquí se busca recorrer, en ambos casos se da la alternancia en los gobiernos con la llegada a los ejecutivos de dos partidos a la izquierda del centro relativo de sus sistemas, siendo como lo son el Partido de los trabajadores en Brasil, con la victoria en el ejecutivo de Lula da Silva y en Paraguay la victoria de Alianza para el Cambios, con la elección de Fernando Lugo.

Para la selección de los casos se consideraron algunas de sus características centrales. Por un lado, mientras que Paraguay se caracteriza por un sistema bipartidista, Brasil tiene un sistema de tipo multipartidista. Asimismo, el sistema de partidos brasileño, el cual de forma progresiva fue caracterizándose por partidos que ostentaban perfiles diferenciados, expresando posiciones político-programáticas definidas en el espectro ideológico, dotados de recursos políticos y organizacionales muy desiguales para ser utilizados en las disputas políticas (Sousa Braga, 2006: 145). Mientras que, el caso paraguayo se contempla atravesado por la influencia hegemónica del Partido Colorado, ganador de cinco de las seis elecciones nacionales posdictadura y con mayorías recurrentes en el Congreso Nacional en todos estos periodos (Filártiga Callizo, 2016: 194).

Recuperando aquí la hipótesis inicial planteada por Mainwaring y Scully (1996), en cuanto a la heterogeneidad en los niveles de institucionalización de los sistemas de partidos latinoamericanos, intentaremos dar cuenta de ello a parte del análisis de los casos seleccionados.

2. Análisis de Casos

2.1 Regularidad en la competencia entre partidos

En primer lugar, cabe delimitar conceptualmente lo que Mainwaring y Scully (1996) entienden por esta dimensión. En sí, se hace referencia a que, en un sistema de partidos democrático institucionalizado, los partidos políticos importantes presentan una estabilidad y presencia regular en el mismo. De evaporarse tan rápido como aparecieron, no estaríamos ante un caso de alta institucionalización (Mainwaring y Scully, 1996:4).

En esta dimensión es crucial medir en cuánto el sistema de partidos confiere coherencia y regularidad a los patrones de competición entre los partidos, esto es, en cuánto el sistema institucionaliza la participación y, de esa manera, se institucionaliza a sí mismo (Sousa Braga et al., 2016: 99)

Para entender la complejidad del mismo y concretar un análisis correcto de este criterio el concepto de volatilidad electoral resulta clave. Esta es definida como aquella que mide el grado en que los regímenes políticos competitivos desarrollan patrones estables de competencia intrapartidaria, y que, por lo tanto, una alta volatilidad electoral es un problema para el régimen democrático que la experimenta (Aragón e Incio, 2015: 39) En la obra de Mainwaring y Scully se utiliza el índice de volatilidad de Pedersen para cuantificar esta variable, que “mide la proporción de cambios absolutos en los votos emitidos de una población en elecciones sucesivas” (Duarte, 2012: 119). Para establecer tales índices, es necesario analizar al menos dos elecciones consecutivas para los mismos cargos, realizadas bajo condiciones similares de libertad y competencia relativamente transparente.

En el caso paraguayo, en el período comprendido entre 1998 y 2003 se indicó un 36% de volatilidad electoral agregada. Y ya para el próximo ciclo entre las elecciones de 2003 al 2008, escaló a un 50%, siendo ampliamente mayor que la anterior (Filártiga Callizo, 2016: 214-215). Esta variación es consecuencia, retomando lo que sostiene Duarte (2012: 126), de la opción que hizo el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de no presentar un candidato propio sino que unirse a la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), liderada por el obispo Fernando Lugo, figura detrás de la cual se unieron importantes partidos políticos de oposición de manera conciliadora y atrayendo a votos no solo de la izquierda, centro-izquierda e independientes, sino que también a votos que tradicionalmente serían destinados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), o Partido Colorado.

Por otro lado, en las elecciones presidenciales de Brasil comprendidas en el año 2002 alcanzaron un 44,8% de volatilidad electoral, pasando a un 30,3% en las de 2006, hasta llegar a un 19,5% en 2010. La volatilidad en el caso de Brasil para este periodo es relativamente baja, especialmente en la elección del 2010, pero sí podemos hacer una salvedad en que es un sistema de partidos muy fragmentado, tanto que se generan dinámicas complejas de negociación política entre el ejecutivo y el parlamento. Este factor puede poner en riesgo la estabilidad del sistema político (Haak, 2017: 59).

En cuanto a las elecciones en la Cámara de Diputados, en la Tabla 1 se expresan los patrones de volatilidad electoral en el periodo del 1998-2010. En el lapso entre

1998 y 2002 se experimentó un aumento dada la alternancia del grupo político en el gobierno federal, llegando a un 15,3%. En 2002 - 2006 cae a un 10% y se mantiene prácticamente en el mismo nivel en el subsiguiente período, lo cual se debe a que las principales fuerzas políticas del poder central fueron electas por más de un mandato. Este declive en el grado de volatilidad de los patrones de competición interpartidista en tan poco tiempo revela que el sistema de partidos es cada vez más viable (Sousa Braga et al. 2016: 100).

Tabla 1

Volatilidad electoral agregada, Cámara de Diputados 1998 - 2010 en Brasil (%).

	1998 – 2002	2002 - 2006	2006 - 2010
Brasil	15,3	10,3	9,9

Fuente: Sousa Braga et. al (2016)

Por su parte, en Paraguay los resultados de elecciones de diputados presentan volatilidad del 37% entre los periodos 1998-2003, registrándose niveles menores de oscilación entre 2003-2008, con una volatilidad reducida del 13% (Duarte, 2012: 130).

Siguiendo los lineamientos de la autora, este índice permite percibir las fluctuaciones en el apoyo a determinados partidos a lo largo del tiempo, dando cuenta así el grado de estabilidad de un sistema de partidos. Sin dudas, niveles altos de volatilidad constituyen un elemento negativo a dicha estabilidad, sin embargo, ciertos niveles de volatilidad son aceptados dado que son necesarios para que la democracia electoral funcione adecuadamente, en tanto esto está relacionado con la libertad de los votantes al definir sus preferencias partidarias ocupando su papel de ciudadanía deliberativa (Duarte, 2012:120).

2.2 Estabilidad en la sociedad

Retomando las premisas de Mainwaring y Scully (1996), sostenemos que los partidos deben tener raíces más o menos estables en la sociedad para así generar una re-

gularidad estructurada en las preferencias políticas y en la manera en que la gente vota. Esta dimensión está estrechamente ligada al grado de apego de los ciudadanos a los partidos, el cual varía en los diversos sistemas de partidos institucionalizados. Esta categoría analítica se enfoca en los vínculos entre partidos, ciudadanos e intereses organizados, quienes proporcionan cierta regularidad, la cual describimos en el apartado anterior.

Como consecuencia de dichos vínculos, los partidos que conforman un sistema institucionalizado de partidos tienden a ser consistentes en sus posiciones ideológicas, con el fin de mantener una base que les sea fiel. En el caso contrario, los lazos entre partidos y la sociedad serían mucho más débiles, además de la implicancia de una irregularidad en la manera en la que los partidos compiten y se relacionan con otros actores.

Para efectuar el análisis de esta dimensión, la diferencia entre las votaciones presidenciales y legislativas constituye una variable relevante que proporciona información con la cual es posible evaluar el grado de penetración de un partido en la sociedad. En los casos en que tal diferencia sea menos pronunciada, podemos hablar de una estructuración de las preferencias políticas a través de los partidos, quienes tienen un rol influyente en este respecto.

En cuanto a las elecciones generales de 1998 en Paraguay, observamos una perpetuación de la clara tradición bipartidista en el país dada entre el Partido Colorado nucleado en la Alianza Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien en estas elecciones en particular conformó una alianza con Encuentro Nacional llamada “Alianza Democrática”. La ANR obtuvo la victoria con el 54% de los votos, y alcanzó un porcentaje similares tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Diputados. Lo mismo sucede en el caso del PLRA, quien obtuvo el 43% de los votos para presidente, y la diferencia entre este porcentaje y los votos de elecciones legislativas también fue muy estrecha (Filártiga Callizo, 2016).

De igual manera esta tendencia puede trazarse en las elecciones generales del año 2003, en tanto los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas muestran porcentajes similares, con la diferencia de que el núcleo de los votos estuvo agrupado en la ANR, el PLRA sumando en esta oportunidad la presencia del Partido Patria Querida y la UNACE, quienes también obtuvieron una representación equitativa en ambas Cámaras. En el año 2003 ocurre por primera vez lo que Lachi (2009:51) llama la definitiva multipartidización del Parlamento ya que se constata la presencia de seis partidos distintos en el mismo, como se expresa debajo en la Tabla 2.

Por lo tanto, si retomamos la premisa de Mainwaring y Scully (1996) el sistema de partidos paraguayo marca una continuidad en los votos entre el ejecutivo y el legislativo, que permite pensar en que los partidos cuentan con raíces en la sociedad, correspondiéndose con el modelo de los sistemas de partidos más institucionalizados.

No obstante, la situación cambia en las elecciones generales del año 2008. Si bien es posible observar una cohesión entre los resultados en el caso del Partido Colorado, cuando nos referimos a la coalición ganadora, la APC, la victoria de Lugo fue alcanzada con el 41% de los votos, pero estos no se ven reflejados en las elecciones legislativas. En ellas, los votos están más equitativamente distribuidos entre los partidos tradicionales. Esto quizás se deba a la aglomeración de diversas identidades políticas del espectro ideológico en una sola coalición sumado a la falta de acuerdo entre los múltiples partidos de izquierda de la APC quienes no lograron unificar una lista (Nickson, 2008).

Tabla 2: Votos obtenidos para presidente y vicepresidente, cámara de senadores y de diputados en Paraguay.

	Presidente			Senadores			Diputados		
	1998	2003	2008	1998	2003	2008	1998	2003	2008
ANR	887.196	574.205	573.995	813.287	508.506	509.907	857.473	520.761	582.932
PLRA	703.379	370.348		661.764	374.854	507.413	681.917	379.066	500.040
PPQ		328.916	44.060		234.748	151.991		225.811	102.139
UNACE		208.391	411.034		211.078	336.736		216.803	330.754
Otros*	12.331	2.813	769.582	96.826	28.881	50.872	55.024	26.168	97.159

Fuente: Duarte Recalde (2012). *aquí se incluyen los votos de APC-PDC

Por otra parte, vemos que esto no sucede así en el caso brasileño, en el que existen diferencias entre los resultados arrojados en las elecciones del Ejecutivo con los resultados para la Cámara de Diputados. Un ejemplo de lo mismo sería el caso del PT en 2006, el cual ganó las elecciones presidenciales con 48,6% y 60,8% en la primera y segunda vuelta respectivamente, para luego alcanzar un 15% de los votos en la Cámara de Diputados ese mismo año. No debemos olvidar el alto grado de fragmentación del sistema de partidos brasileño, y que la oferta partidaria es mayor que

en el caso paraguayo. En este sentido, resulta interesante analizar lo que sostienen Caballero Rossi et. al (2017), en lo que refiere al clivaje PT-PSDB, el cual sustenta una visión bipartidista inserta en un sistema multipartidista altamente fragmentado en las Cámaras (Caballero Rossi et. al, 2017: 28). Esto también se ve reflejado en los datos compilados en las tablas 3 y 4.

Tabla 3: Variaciones en la proporción de votos obtenidos para presidente y vicepresidente en Brasil. (%)

	Presidente						
	1998	2002		2006		2010	
		1° v*	2° v	1° v	2° v	1° v	2° v
PT	31,7	46,4	61,3	48,6	60,8	46,9	56,1
PSDB	53,1	23,2	38,7	41,6	39,2	32,6	44
PPS	11	12					
PSB		17,9					
PSOL				6,9			
PV						19,3	
Otros	4,2	0,5		2,9		1,2	

Fuente: Elaboración propia a partir de Haak (2017).* 1er y 2da vuelta

Tabla 4: Variaciones en la proporción de votos obtenidos para la Cámara de Diputados Federales por principales partidos en Brasil. (%)

	Diputados			
	1998	2002	2006	2010
PT	13,2	18,4	15	16,9
PSDB	17,5	14,3	13,6	11,9
PFL/DEM	17,3	13,4	14,6	7,5
PMDB	15,3	13,4	10,9	13
Otros	36,7	40,5	45,9	50,7

Fuente: Haak (2017)

Finalmente, Mainwaring y Scully (1996) también sugieren que la capacidad que tienen los partidos de existir por un largo tiempo proporciona un indicio de que han logrado establecer lazos leales a largo plazo con diversos grupos sociales. Por lo tanto, cuando nos referimos a un sistema de partidos institucionalizado es más probable que los partidos que lo componen posean historias más largas que aquellos casos en los que la institucionalización es menor. En el caso paraguayo la disyuntiva histórica principal se articula en torno al Partido Colorado y al Partido Liberal, ambos fundados en 1887, con la salvedad que el Partido Liberal tiene como heredero al actual PLRA, el cual fue establecido en 1978. Por otra parte, en el caso de Brasil, los dos partidos más establecidos en la sociedad, al menos en el recorte establecido para el presente ejercicio comparado, son el PT y el PSDB, creados en 1980 y 1988, respectivamente.

2.3 Legitimidad al proceso electoral y partidos

Para contemplar la última dimensión que analizaremos en el presente, debemos volver a enunciar lo que proponen Mainwaring y Scully quienes sostienen que son los actores políticos importantes quienes le conceden legitimidad al proceso electoral y a los partidos, dando pie a que las elites políticas se comporten a la expectativa de que las elecciones serán la ruta principal que conduce al gobierno. Caso contrario, la institucionalización se desmoronaría. Como ya hemos mencionado previamente, son los partidos los que juegan el rol clave para determinar el acceso al poder, a través de elecciones abiertas reales, y los actores han de considerarlas como tal (Mainwaring y Scully, 1996: 4).

La principal manera que posee el conjunto de la ciudadanía para legitimar los procesos electorales es justamente la activa participación de los mismos, hecho tal que será nuestra variable a analizar para la presente dimensión. En el caso de Paraguay, notamos una tendencia a la disminución de la participación efectiva, pasando desde un 80,54% en 1998 a un 64,29% en las elecciones de 2003. En 2008 se registró un leve aumento llegando a 65,48%. Esta predisposición puede ligarse a diversos factores, que directa o indirectamente deslegitiman el proceso electoral y a los partidos, como puede ser el comportamiento de la ciudadanía que prefiere abstenerse de votar ante un descontento con una pobre gestión gubernamental, entre otros (Duarte, 2012: 133).

Brasil por su parte, observa un aumento paulatino en el tamaño del electorado, pasando de 106 millones en 1998 a 135 millones en 2010. Los votos válidos emitidos en

relación con este electorado también han crecido y mantenido una tendencia dentro de los mismos parámetros desde 2002 a 2010. En 1998 arrojó un 63,8%, un 73,7% en 2002, aumentando a 76,2% en 2006, con un pequeño declive para el año 2010, con un 74,8% (Sousa Braga et. al, 2016: 80).

3. Conclusiones

Para finalizar, a partir de lo que hemos analizado a lo largo del presente ejercicio comparado, podemos coincidir en la afirmación de nuestra hipótesis, la cual sostiene que existe una marcada diferenciación en los grados de institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina. Sin embargo, a modo de cierre, nos vemos en la necesidad de enumerar algunas especificaciones ligadas a las coyunturas particulares de Brasil y Paraguay para el periodo estudiado.

En primer lugar, en cuanto a la regularidad y estabilidad de la competencia entre partidos, podemos observar en el caso paraguayo, el cual está signado por una fuerte tradición de lealtad a los partidos y una primacía de las costumbres por sobre una elección ideológica o programática (Filártiga Callizo, 2016), un cambio en esta regularidad de la competencia de los partidos a partir del fenómeno de la candidatura de Fernando Lugo, figura tras la cual se aglutinaron diversos sectores del espectro político y por lo tanto del electorado, además de votos que solían pertenecer a la ANR. Es decir, la volatilidad electoral presentada responde a una situación coyuntural y será trabajo de futuros estudios confirmar si esta tendencia se perpetúa en miras de constatar que Paraguay se encuentre en vías a un mayor grado de institucionalización, al menos en esta arista del análisis.

Muy distinto es el caso de Brasil, en el cual los grados de volatilidad son relativamente bajos, guardando la salvedad de que es un sistema de partidos más atomizado o fragmentado, lo que puede dar origen a dinámicas complejas en la negociación del ejecutivo con el parlamento, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema político (Haak, 2017).

En lo que respecta a la segunda variable, las raíces estables que deben poseer los partidos en la sociedad está muy relacionada con los factores previamente descritos, además de la relación que existe entre los votos de las elecciones presidenciales con los presentados en las elecciones parlamentarias. Por un lado, Paraguay constata una continuidad en la estabilidad en la sociedad de los partidos a lo largo de las

primeras elecciones del periodo seleccionado para el presente estudio, hasta llegar a las elecciones generales de 2008, en las cuales la figura presidencial de Lugo no encuentra un apoyo igual de representativo en el Congreso, cayendo estos votos en manos de los partidos tradicionales. En cuanto a Brasil, podemos constatar una variación amplia respecto de esta última variable, dada justamente la fragmentación del sistema de partidos y su amplia oferta electoral. Esto nos lleva a retomar la afirmación de Mainwaring y Scully (1996) en la que se plantea que, a menor diferencia entre estos porcentajes analizados, más podremos hablar de una estructuración de las preferencias políticas a través de los partidos, y sostenemos que esta no puede ser contrastada en ninguno de los casos seleccionados en el marco temporal correspondiente.

Finalmente, la tercera variable presentada, tiene que ver con la legitimidad del proceso electoral y de los partidos, la cual se ve respaldada por la participación activa de la ciudadanía en los mismos. En el caso de Brasil el panorama es más optimista, dado que, en el periodo seleccionado, los porcentajes de participación en las elecciones van en aumento. No es el caso de Paraguay, el cual presenta un descenso en los mismos de alrededor de 20 puntos en las últimas dos elecciones analizadas. Concordamos con las afirmaciones de Duarte (2012) en tanto sostiene que esta tendencia puede responder al agotamiento y descontento de la ciudadanía ante pobres gestiones gubernamentales, entre otros factores que directa o indirectamente deslegitiman el proceso electoral.

Por último, nos queda retomar nuestra afirmación principal relacionada con la existencia de una diferenciación en los grados de institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina, retomada de Mainwaring y Scully (1996). Dadas las evidencias encontradas a partir de las variables estudiadas, podemos afirmar que existe una marcada diferencia de institucionalización de dichos sistemas de partidos, no partiendo desde el punto de encontrar más cerca de este concepto a uno o a otro, sino que atravesado por estas aristas de análisis, desde alguna de ellas podemos notar un cierto grado de aproximación por encima del otro, o que en determinadas cuestiones se encuentren en vías a una mayor institucionalización.

Para finalizar, queremos agregar que la institucionalización de los sistemas de partidos no ha ocurrido de manera uniforme en las cuatro dimensiones que componen el concepto. Con esto nos referimos a que no todas las variables a analizar se acompañaron una a la otra. Podemos notar, por ejemplo, que una erosión en la legitimidad de los partidos como actores centrales del proceso democrático puede ser

contemporánea a una mayor estabilidad en los patrones de competencia, abriendo espacio a continuar con el análisis tanto en extensión del periodo, como sumando otras variables que permitan un mayor acercamiento.

4. Bibliografía

ARAGÓN, J., & INCIO, J. L. (2015). La medición de la volatilidad electoral en sistemas de partidos escasamente institucionalizados. Análisis del caso peruano. *Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte*, Eduardo Dargent y Martín Tanaka (eds.). Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 39-63.

CABALLERO ROSSI, E. PINILLOS, C. SARTOR SCHIAVONI, M. (2017) "El pulso electoral en perspectiva comparada: Las experiencias de Chile (2013), Brasil (2014) y Uruguay (2014)" en CAVAROZZI, M. MELLA POLANCO, M. PINILLOS, C. (comp) *Itinerarios políticos contemporáneos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay* 1a ed. - Rosario : UNR Editora.

DUARTE RECALDE, L. (2012). Variaciones en el comportamiento electoral en Paraguay. *América Latina Hoy*, 60, 117-138.

FILÁRTIGA CALLIZO, C. (2016) "La estabilidad del sistema de partidos de Paraguay (1989-2015)". En FREIDENBERG, Flavia. *Los Sistemas de Partidos en América Latina - 1978-2015*. Tomo 2. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, núm. 783. Universidad Nacional Autónoma de México.

HAACK, D. J. A. S. (2017). El elector latinoamericano del Siglo XXI: estudio comparado del comportamiento electoral en Brasil, Chile, México y Perú. Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica del Perú-CENTRUM Católica. Perú.

LUCCA, J. y PINILLOS, C. (2015). "Decisiones metodológicas en la comparación de fenómenos políticos iberoamericanos". Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. DT 25/2015

MAINWARING, S. y SCULLY, T. (1996) "Introducción: Sistemas de partidos en América Latina", en Mainwaring, Scott y Scully, Timothy. *La construcción de instituciones democráticas. Sistemas de partidos en América Latina*. CIEPLAN, Santiago.

NICKSON, A. (2008) "Paraguay: ¿Un giro a la izquierda bajo el mandato de Lugo?". *Boletín Elcano*, 108.

SOUSA BRAGA, M. (2006), *O Processo Partidário-Eleitoral Brasileiro: Padrões de Competição Política (1982-2002)*, São Paulo, Humanitas-FAPESP.

SOUSA BRAGA, M. RIBEIRO, P. DO AMARAL, O.. (2016) "El sistema de partidos en Brasil: estabilidad e institucionalización (1982-2014)". En FREIDENBERG, Flavia. *Los Sistemas de Partidos en América Latina - 1978-2015*. Tomo 2. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, núm. 783. Universidad Nacional Autónoma de México.

Espinosa Viale, Abril (2024). "Análisis de los Sistemas de Partidos de Paraguay y Brasil (1998-2010)", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 270-282.

LOS SISTEMAS DE PARTIDOS DESINSTITUCIONALIZADOS EN PERÚ (1978-2000) Y ECUADOR (1978-2002)

Belén García Zanini

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

Los Sistemas de Partidos han sido definidos por Mainwaring y Scully (1996) como “un conjunto de interacciones esquematizadas en la competencia entre partidos” (1996:3). La definición otorgada prevé cierto marco de continuidad en sus partes componentes y la existencia de más de un actor o partido político, es decir, más de un componente en dicho sistema. Los autores enfatizan en que todos los países tienen sistemas de partidos, pero problematizan el grado de institucionalización de estos sistemas. Como señalan Mainwaring y Scully (1996) que el sistema esté institucionalizado tiene una ventaja, la cual resulta importante para el proceso de consolidación democrática de los países. Por ende, que exista o no un sistema de partidos institucionalizado hace una gran diferencia en el funcionamiento de la política democrática.

Los autores observaron que las maneras establecidas para comparar los sistemas de partidos convencionales no resultaban adecuadas para América Latina, o aquellos países donde la democracia no está consolidada o donde los partidos y otras

instituciones políticas son débiles, y por lo cual la razón para estudiar los partidos es menos obvia. Por ende, la noción de institucionalización del sistema de partidos proporciona un elemento útil para comparar los sistemas de partidos latinoamericanos (Mainwaring y Scully, 1996:3)¹.

En América Latina existen marcadas diferencias entre los países que conforman el continente en cuanto al grado de institucionalización que tienen. Para la década del 90', Mainwaring y Scully (1996) clasifican a los países en tres grupos: Venezuela, Costa Rica, Chile, Uruguay, Colombia y, en menor grado, Argentina tienen sistemas institucionalizados de partidos competitivos. Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador tienen sistemas de partidos incoactivos. México y Paraguay forman una categoría residual a la cual los actores denominan “partidos hegemónicos en transición” para el periodo que están analizando (1996:1)

En este sentido, si ponemos el foco en la institucionalización del sistema de partidos, la propuesta de Mainwaring y Scully (1996) reviste una serie de componentes que los mismos deben cumplir –en mayor o menor medida-. En primer lugar, un sistema institucionalizado de partidos implica la estabilidad de la competencia entre partidos, segundo, consideran la existencia de partidos que tengan raíces más o menos estables en la sociedad, en tercer lugar, la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas que determinan quién gobierna, y finalmente la presencia de organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables (Mainwaring y Scully, 1996).

En el presente ejercicio comparativo analizaremos la institucionalización de los sistemas de partidos en los casos de Perú (1978-2000) y Ecuador (1978/79 – 2002). En el caso peruano, el periodo abarca desde el regreso de la democracia, hasta la renuncia de Fujimori en el año 2000; mientras que en Ecuador se tomará también como punto de partida el regreso a la democracia en los años 78-79, y como punto de corte, los comicios 2002, en los cuales los autores coinciden que hubo un “colapso” del sistema de partidos (Freideberg, 2016:402).

En este sentido se trata de un estudio de casos nacionales y de área que como afirman Pinillos y Lucca (2015:25) que por ende pueden presentar elementos o patrones semejantes (ya fueran de tipo sociales, históricos, económicos, culturales o políti-

1. Los partidos políticos no estructuran el proceso político en el mismo grado. A menudo son altamente personalistas o afines a vehículos emprendedores políticos descritos por Schumpeter, no conductos fundamentales de vida política. Sin embargo, los partidos de todas maneras tienen importancia porque dan forma al sistema político aún cuando no están bien institucionalizados (Mainwaring y Scully, 1996:3).

cos), pero entendiendo, como afirman los autores que no por ello se deben “perder de vista las particularidades o diferencias contextuales como variables explicativas del diverso resultado de aquello que se estudia dentro de la región” (Pinillos y Lucca, 2015:25).

La selección de casos de Perú y Ecuador, parte de que ambos fueron clasificados por Mainwaring y Scully (1996) para el fenómeno en cuestión, como incoactivos y están desinstitucionalizados o, podríamos decir, débilmente institucionalizados. Esto implica, en términos de los autores que “las organizaciones partidarias son generalmente débiles: la volatilidad electoral es alta, las raíces de los partidos en la sociedad son débiles y las personalidades individuales dominan los partidos y las campañas” (Mainwaring y Scully, 1996:17). En consecuencia, también existe una débil vinculación entre electores y electorado o ciudadanía y representantes. En términos del marco analítico propuesto, esta desinstitucionalización podría traer aparejado una escasa aceptación de los partidos y las elecciones como instituciones legítimas y organizaciones partidarias con estructuras estables, y por ende, que la democracia no sea estable.

Para el ejercicio comparado que aquí se propone nos centraremos en observar en qué medida los sistemas de partidos de Perú y Ecuador cumplen, en el periodo de tiempo previsto, con las condiciones esbozadas por los autores para la institucionalización de sus respectivos sistemas de partidos, partiendo de la hipótesis prevista por los mismos de que se trata de dos sistemas incoactivos o desinstitucionalizados.

Como concepto central se tomará la institucionalización del sistema de partidos, la cual de acuerdo como la definen Mainwaring y Scully (1996) es el “proceso por el cual una práctica o una organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, si no es necesariamente aceptada por todos” (Mainwaring y Scully, 1996:3).

La primera dimensión que se analizará es la interpartidaria, que posee como unidad de análisis: sistema de partidos y cuyas variables respectivas son: a) la estabilidad en las estructuras y la naturaleza de la competencia entre partidos b) la legitimidad del proceso electoral

La segunda dimensión es intrapartidaria. Para esta dimensión, la unidad de análisis son las organizaciones partidarias y las variables son: a) raíces de los partidos en la sociedad a) importancia de las organizaciones partidarias.

2. Análisis de la institucionalización de los sistemas de partidos en Perú y Ecuador

2.1 La estabilidad de las reglas y la naturaleza de la competencia entre partidos

Con respecto a la dimensión interpartidaria se analizarán las dos variables indicadas por Mainwaring y Scully (1996). En primer lugar “la estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos que debe manifestar alguna regularidad” (1996:4) y, segundo, el otorgamiento de legitimidad del proceso electoral por parte de los principales actores políticos (1996:4)

Con respecto a la primera variable que es la estabilidad en las estructuras y naturaleza de la competencia sugiere la estabilidad de las reglas y una mínima regularidad en los partidos, se tomarán como indicadores los cambios en las reglas electorales, las características de la competencia y la volatilidad electoral.

En el caso peruano las modificaciones electorales juegan un rol fundamental a la hora de pensar en términos de institucionalización del sistema de partidos. En 1978, se realizó una reforma constitucional que fue el pilar de la transición a la democracia que estuvo vigente hasta 1992 con el “autogolpe” de Fujimori, en el que cerró el Congreso, con apoyo de las fuerzas militares y gran parte de la población (Rubio, 452). Allí el mismo Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático que redactó una nueva carta magna que entre sus modificaciones permitiría la reelección presidencial por única vez (aunque en el 2000 fue reinterpretada para la reelección del propio Fujimori) e importantes modificaciones en el legislativo: como el cambio a un congreso unicameral, modificaciones en la fórmulas de designación de escaños, y en las circunscripciones electorales por señalar algunas altamente significativas (Rubio, 2016 452-453). Estas modificaciones, y su posterior reforma nuevamente en el año 2000 dan cuenta de que el sistema electoral se ha mostrado cambiante en el periodo estudiado.

También en lo referido a la naturaleza de la competencia, se pueden señalar dos periodos durante la etapa estudiada. Por un lado, desde el regreso de la democracia hasta los 90', se caracteriza por la preeminencia electoral de los cuatro partidos antiguos (APRA, AP, PPC e IU) que sobrevivieron al régimen autoritario (Rubio, 2016:459-460). Durante este periodo Perú tiene competencia muy inestable por tanto la volatilidad es muy alta alcanzando el 54,4% (Mainwaring y Scully, 1996:5).

Frente a este escenario, la crisis de representación de los partidos que componían el sistema culminó con la elección de Alberto Fujimori, un outsider de un partido nuevo llamado Cambio 90 “Por primera vez, no sólo un independiente llegaba a la presidencia, sino que también debía gobernar sin mayoría en el Congreso” (Rubio, 2016:460); marcando el inicio de una nueva etapa con la primacía de nuevos partidos que se extenderá hasta el final de su gobierno en el año 2000. Como afirman Levitsky y Cameron (2003), los nuevos partidos se originaron en un contexto económico de reformas neoliberales y baja competencia política, sin bases ideológicas fuertes se clasificaron como “independientes”. En Perú desde el fujimorismo se estableció un nuevo modo de organización electoral: el partido descartable, en donde podemos encontrar al el Frente Independiente Moralizador, Perú Posible, Unión por el Perú, el Partido Nacionalista Peruano, entre otros (Rubio, 2016:458-461).

Tanto la fragmentación del congreso como la ausencia de regularidad en las elecciones presidenciales son el reflejo de un conjunto de factores tanto institucionales como estructurales, que determinan las pautas de la votación y de las normas que rigen los procesos electorales y al propio sistema de partidos. En cuanto a las reglas electorales, en el caso ecuatoriano, como afirma Pachano (2005) hubo cambios reiterativos que generaron una “institucionalidad incoherente” (2005:3). Muchas veces se respondió con esos tipos de cambio a sectores específicos y a situaciones coyunturales que lograron un debilitamiento de los partidos. El cambio permanente hizo que se manejen “conductas propias de la institucionalidad paralela” (Pachano, 2005:3). En Ecuador en 1995 se aprobó la posibilidad de presentar candidaturas en alianzas, así como también candidaturas independientes, lo que cambió el principio de la representación del sistema de partidos (Freidenberg, 2006:407). Pachano (2005) afirma que entre las “disposiciones que han afectado negativamente a los partidos se puede destacar la apertura casi indiscriminada para la participación de los independientes en cualquier elección, en contraposición a las regulaciones rigurosas que deben cumplir los partidos. También se deben considerar los incentivos que en la práctica existen para los partidos pequeños y las condiciones favorables para su supervivencia” (Pachano, 2005:9).

Por su parte, Ecuador se identifica un multipartidismo extremo que hace que la competencia se vuelva centrífuga, hay cinco o seis partidos cuya fuerza electoral y capacidad de coalición los coloca en competencia entre sí (Freidenberg, 2016:412). Ecuador tiene competencia muy inestable y la volatilidad para el periodo 1979-92 alcanzaba el 37,9 (Mainwaring y Scully, 1996:7). En cuanto a la estabilización de las reglas en el caso ecuatoriano se han revisado reiteradamente las leyes que rigen a

las elecciones y a los partidos políticos, así como las que determinan la estructura y el funcionamiento del Congreso. Las reformas que se aplicaron fueron legales y por plebiscito. El país no ha contado con períodos relativamente largos de vigencia de un cuerpo normativo que pudiera ser puesto a prueba en procesos de mediano alcance y que a la vez ofreciera algún grado de certidumbre en tanto marco adecuado para las prácticas políticas, especialmente para la acción de los partidos y para su relación con los electores (Pachano, 2005:2).

Asimismo, en el caso ecuatoriano, “la volatilidad se manifiesta en la ausencia de regularidad en el apoyo a tendencias ideológicas y no sólo a partidos” (Pachano, 2005:5). Las preferencias volátiles de la ciudadanía han obtenido que ningún partido en las urnas haya ocupado la presidencia dos veces (Freidenberg, 2016:413). Por otro lado, se manifiesta la débil vinculación existente entre la población y los partidos, como se trabajará más adelante.

2.2 La legitimidad del proceso electoral

La segunda variable indica la legitimidad al proceso electoral. El indicador de esta variable es la legitimidad de los partidos políticos. Como sostienen Mainwaring y Scully (1996) es de suponer que la ciudadanía debe percibir que los partidos y las elecciones son los medios, debe haber una cierta expectativa entre ellos para mantener a los partidos políticos con una cierta institucionalización o estabilidad.

En Perú la mayoría de la población no está adherida a algún partido político y tampoco se caracterizan por las simpatías partidarias a la hora de votar. Los vínculos con los partidos políticos anteriormente estaban bien desarrollados, pero en 1980 declinaron debido a los conflictos agudos entre elites políticas y el carácter anómico de las organizaciones sociales (Mainwaring y Scully, 1996:10). Por otro lado, como afirma Yanina Welp (2008) la aparición de la guerrilla Sendero Luminoso en Perú y el avance de una crisis de partidos que hace a un círculo vicioso porque las demandas sociales no llegan al gobierno y este pierde efectividad. Es en ese contexto que han aparecido los nuevos “outsiders”.

El desencanto de la ciudadanía con la democracia y los partidos políticos se reflejó en “el autogolpe de abril de 1992 -en el que Fujimori redefine el sistema político peruano- que los partidos políticos no pueden contrarrestar” (Tanaka, 1998:748). Las identidades de los partidos políticos se desgastaron, el partido APRA (Alianza Popu-

lar Revolucionaria Americana) y la Izquierda Unida fueron víctimas de la mala percepción por parte de la ciudadanía.

Por su parte, en Ecuador el proceso electoral sucede de igual forma y los altos índices de volatilidad expresan la escasa lealtad de la población. Las crisis económicas y sociales prolongadas (con el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad) y el compromiso de los partidos de centro con los planes de ajuste económico (políticas de ajuste, el achicamiento del Estado, endeudamiento, entre otras) impactaron sobre el sistema político, minando los niveles de confianza de la ciudadanía hacia esos partidos cuando no fueron capaces de adaptarse a las exigencias sociales (Freidenberg y Casullo, 2014; Tanaka, 2008). El caso ecuatoriano también refleja la baja legitimidad hacia los partidos porque ocurre que los partidos representan intereses de grupos específicos o grupos de presión y por otro lado se recluyen a espacios territoriales acotados (Pachano, 2005:15-16).

2.3 Raíces de los partidos en la sociedad.

En primer lugar, en cuanto a la dimensión intrapartidaria se partirá por analizar las raíces de los partidos en la sociedad, entendiendo que los partidos más importantes deben tener un cierto arraigo en la sociedad para poder mantener preferencias políticas a lo largo del tiempo por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, se puede observar cómo un partido penetra en la sociedad, cuáles son sus vínculos.

En Perú, Mainwaring y Scully (1996) sostienen que los ciudadanos tenían antes lealtades partidarias fuertes pero el efecto de la “mala administración” de los 80’ se vio reflejado en la campaña de los 90’ (1996:10). Es el caso extremo de crisis de representación de los partidos políticos a la sociedad, el vínculo se debilita y los outsiders adquieren preponderancia. “Los líderes partidarios seguían escogiendo los candidatos parlamentarios en función de sus preferencias personales y con el propósito de asegurar la lealtad personal del candidato” (Mainwaring y Scully, 1996:276).

En Ecuador la mayor parte de la ciudadanía no se identifica con partidos ni votan según orientaciones partidarias. En cada elección la tendencia ideológica tiende a modificarse. Por otra parte, hay candidaturas partidarias que canalizan intereses de ámbitos específicos, pero otros no cuentan con el apoyo de un espacio regional. La alta volatilidad demuestra que los partidos no tienen raíces sólidas en la socie-

dad y en el caso ecuatoriano hay una “provincialización”² de los partidos (Pachano, 2005:13).

El indicador de las raíces de los partidos en la sociedad es la diferencia en el voto del Ejecutivo y Legislativo que da información para evaluar el grado de penetración en la sociedad. Las diferencias en el porcentaje de puestos en la Cámara Baja ganados por el partido y el obtenido por sus candidatos presidenciales. En el caso peruano las elecciones de 1990, que fueron coincidentes³ hubo un 12,8% de diferencia (Mainwaring y Scully, 1996:8). En el caso ecuatoriano las elecciones de 1992, que también se dieron de forma coincidente, alcanzaron un 48,8% de diferencia. Este último caso particularmente muestra la diferencia más dramática.

Asimismo, si se analiza la diferencia de votos obtenidos por los partidos tradicionales y emergentes, se puede ver que, en el caso peruano, los tres partidos tradicionales hasta la década del 90 concentraban gran cantidad de votos. A partir de 1995, se puede observar que el número efectivo de partidos (NEP) del legislativo disminuye en un punto para las elecciones legislativas en relación con 1990. Esto está correlacionado a la desaparición de los partidos antiguos y el predominio del fujimorismo que brindan la principal explicación de este cambio. No obstante, es durante la década de 1990 el NEP para las elecciones legislativas irá aumentando de una elección a la otra. En 1995 el Congreso quedó conformado por más partidos pero con menos representantes cada uno, mientras que en 2000 menos partidos obtuvieron más escaños (Rubio, 2016:472)

En Ecuador, Freidenberg (2016) sostiene que entre 1978 y 2006 el sistema de partidos ha tenido características de multipartidismo extremo: “han competido al menos cinco o seis partidos, cuya fuerza electoral, capacidad de coalición o de chantaje los coloca en competencia a unos con otros; con gobiernos de coaliciones minoritarias; oposiciones bilaterales desleales que se mueven por mecanismos patrimonialistas o clientelares y tienen serias dificultades para cooperar en torno a temas claves” (2016:412). En este sentido la autora destaca la presencia de políticos desleales, que cambiaban de partido continuamente provocando gran inestabilidad y por lo tanto generando una baja capacidad de identificación con los partidos de parte de la ciudadanía.

Lo que significa que para el período analizado las organizaciones partidarias tradi-

2. Los partidos han tendido a recluirse en espacios acotados, lo que ha llevado a la configuración de bastiones electorales y sistemas subnacionales. Obtienen altísimos porcentajes de votación pero en territorios acotados.

3. Coinciden entre elecciones del Legislativo y el Ejecutivo

cionales con historias más largas en los dos casos han tenido menor captación de votos debido a los conflictos y la débil penetración de los partidos en la sociedad.

2.4 Importancia de las organizaciones partidarias

La segunda variable es la importancia de las organizaciones partidarias. Como sostienen Mainwaring y Scully (1996) las organizaciones partidarias “sí” tienen importancia y no están subordinadas a los intereses de una élite, adquieren valores propios (1996:4).

Tal como afirman Mainwaring y Scully (1996) en los dos casos analizados las organizaciones partidarias son muy débiles. Los partidos tienen escasos recursos y una presencia organizativa limitada a nivel local. En Perú hay un cambio en los 90’ (momento de su colapso en el sistema de partidos) con el surgimiento de nuevos partidos que se basan en personalismos y débiles bases ideológicas. La supervivencia de ellos recae en el líder y carecen de institucionalidad (Rubio, 2016:457). En Ecuador particularmente hay un asentamiento sobre la base de un liderazgo particular, el populismo y el personalismo son prevalecientes. En ambos casos se puede ver que los partidos están subordinados a los intereses de líderes ambiciosos (Mainwaring y Scully, 1996:4) por lo tanto dependen de ello.

3. Conclusiones finales

El recorrido realizado sobre las características de los sistemas de partidos en Perú y Ecuador, da cuenta de que, con sus particularidades específicas, presentan características propias de los sistemas de partidos desinstitucionalizados o incoactivos tal como lo definen Mainwaring y Scully (1996).

En ambos casos hay una presencia de reglas electorales cambiantes, así como de sus actores partidarios, que han devenido en una crisis de representación política. Como consecuencia, se señalaron fuertes liderazgos que han llevado a que los partidos se construyan a partir de personalismos y, por ende, las organizaciones partidarias se vieron debilitadas.

En Ecuador el pluralismo extremo de los partidos políticos tal como lo define Pachano (2008) generó que las raíces de los partidos en la sociedad civil estén debilitadas

durante el período comprendido 1978-2002. Las facilidades de entrada y las amplias posibilidades para obtener puestos con votaciones relativamente bajas fueron determinantes para la multiplicación del número de organizaciones así como también para la corta vida de muchas de ellas (Pachano, 2008:11) obtener un escaño legislativo no estaba relacionado con una organización previamente existente, eran esfuerzos individuales o personales de corta duración.

La baja implantación de los partidos en la sociedad ecuatoriana se puede observar con el alto nivel de volatilidad que es mencionado en el análisis. El cambio constante de las preferencias de los electores es una manifestación de la débil vinculación que existe entre la población y los partidos junto con la presencia de liderazgos fuertes (Pachano, 2008:13). En Ecuador hay una provincialización de los partidos que tendieron a recluirse en sectores acotados lo que ha contribuido a la configuración de sistemas subnacionales. (Pachano, 2008: 14).

La volatilidad, dado que existe correlación entre la fuerza de cada partido y el arraigo en la sociedad, es también una expresión de su debilidad y una manifestación adicional de la escasa institucionalización del sistema de partidos (Pachano, 2005:6).

Mientras que en el caso ecuatoriano se pudo conservar el pluralismo político con algunos procesos graduales de apertura política y reforma institucional, en Perú se dió un proceso de crisis simultáneas de los actores políticos en un contexto de coyunturas críticas que llevaron al poder al outsider antisistema Alberto Fujimori, como afirma Rubio (2016). Este contexto se ubica en la segunda etapa de la evolución del sistema de partidos peruano donde se presenta el colapso del sistema de partidos, el cual desarrolló estrategias de confrontación con los partidos tradicionales y las instituciones aprovechando el descrédito de ellos ante la sociedad (Tanaka,1998:3,4). Los partidos políticos antiguos han dominado la arena electoral durante la década de 1980 y los partidos nuevos durante 1990 (Rubio, 2016: 458).

El sistema de partidos puede revelar problemas de legitimidad del régimen de carácter profundo, ya que resulta muy probable que los electores no hayan rechazado solo uno o más partidos sino al sistema de partidos como tal, a la manera de hacer política o al modo en que se articulan las relaciones entre Estado y Sociedad (Dietz y Myers, 2016:451 en Freidenberg).

De esta forma, si bien, como afirma Freidenberg (2016) “los partidos políticos continúan siendo los actores centrales de la representación política en la región” (Freidenberg, 2016:12) debemos reconocer las particularidades que presenta cada país

latinoamericano, y particularmente en este los casos de Ecuador y Perú para comprender sus alcances y características, así como de sus sistemas de partidos.

4. Bibliografía

CONAGHAN, C.C. (2003) *“Política versus Partidos: discordia y desunión en el sistema de partidos ecuatoriano”*. FLACSO. Pp. 219-259. Ponencia presentada al seminario Partidos políticos y calidad de la democracia México DF, 26-28 de noviembre de 2008

FREIDENBERG, F. (2016), “El camino inverso del sistema de partidos ecuatoriano (1978-2015): desde el multipartidismo extremo al partido predominante” en FREIDENBERG, Flavia (Editora), *Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015, Tomo 2*. Universidad Nacional Autónoma de México - INE. Pp. 401-448

LUCCA, J. B. y PINILLOS, C. (2015), “Decisiones metodológicas en la comparación de fenómenos políticos iberoamericanos”, Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamerica. DT 25/2015.

MAINWARING, S. Y SCULLY, T. (1996) “Sistemas de partidos en América Latina”. En Mainwaring, S. y Scully, T *La Construcción de Instituciones Democráticas*, CIEPLAN, Santiago.

PACHANO, S. (2008) “Calidad de la democracia y colapso del sistema de partidos en Ecuador”, ponencia presentada en el seminario Partidos Políticos y Calidad de la Democracia, México DF, 26-28 de noviembre de 2008 FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

PACHANO, S. (2005), *“El territorio de los partidos. Ecuador, 1979-2002”*. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y El Caribe, CLACSO.

RUBIO, J. (2016), “El sistema de partidos de Perú (1980-2015)” en FREIDENBERG, Flavia (Editora), *Los sistemas de partidos en América Latina 1978-2015. Tomo 2*. Universidad Nacional Autónoma de México - INE. Pp 449-488.

TANAKA, M. (1998), *“Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada”*. Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Perú.

WELP, Y. (2008) *“La participación ciudadana en la encrucijada: Los mecanismos de democracia directa en Ecuador, Perú y Argentina”*. C2D – Centre for Research on Direct Democracy C2D. Working Paper Series 27/2008

García Zanini, Belén (2024). “Los Sistemas de Partidos desinstitucionalizados en Perú (1978-2000) y Ecuador (1978-2002)”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 283-294.

EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE BRASIL Y EL PARTIDO POR LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE MÉXICO COMO PARTIDOS DESAFIANTES DE OPOSICIÓN EN LOS AÑOS '90

Isabella Nardi

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

A finales del siglo XX en América Latina, podemos encontrar un conjunto de partidos políticos que Santiago López (2005) denomina “partidos desafiantes de oposición” y que, cada uno a su tiempo, se han ido integrando de forma exitosa en sus respectivos sistemas de partidos asumiendo características particulares.

El autor define a los partidos políticos desafiantes de oposición como aquellos que “amenazan el control de los espacios de poder (en el gobierno o en la oposición) que ejercen los partidos del statu quo. Estos son los que en algún momento constituyeron una amenaza real a los partidos del statu quo y luego lograron mantenerse como actores relevantes (o efectivos) dentro del sistema de partidos durante un período de tiempo suficiente” (López, 2005:6).

Con el objetivo de acercarnos al análisis de este fenómeno, este trabajo busca describir, algunas de las características del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) y el Partido por la Revolución Democrática de México (PRD). Se realizará un ejercicio comparado descriptivo, donde se pondrá en consideración un análisis binario, de alcance nacional y de tipo sincrónico, referido a los años 90.

Ambos casos presentan similitudes tales como ser oposiciones solitarias parlamentarias, el desarrollo territorial y en la exitosa instauración de un nuevo clivaje en el sistema de partidos de cada país. Por el contrario, las principales diferencias de los casos escogidos, se centran en el desarrollo de liderazgos competitivos y los lazos con la sociedad como describiremos a lo largo del trabajo.

A fines del estudio se tomarán las siguientes variables de análisis, siguiendo la propuesta de López (2005):

En primer lugar se observarán las pautas de cooperación y conflicto, que refieren al crecimiento electoral autónomo, no haciendo coaliciones electorales o pre electorales con partidos del statu quo (porque terminan desapareciendo o se reducen a expresiones políticas insignificantes) y a la posición parlamentaria adoptada por el partido, en tanto sean oposiciones solitarias, oposición en coalición o coalición de gobierno (caso que también terminan fracasando porque vulnera las bases y fundamentos de la representación política que hicieron emerger como fuerza). Es decir, la coherencia entre el plano representativo y el plano estratégico.

También se analiza la fortaleza de las organizaciones, para lo cual se analizará la disciplina parlamentaria pudiendo ser alta, media o baja.

Otro punto a observar es el desarrollo de liderazgos partidarios; y el desarrollo territorial, analizando en este último caso si tiene un anclaje nacional, regional o capitalino

Asimismo, se tomará como referencia la capacidad de representación política, que refiere a si posee raíces en la sociedad o bases sociales fuertes, es decir, vínculos con intereses organizados o nacieron gracias a ellos (sindicatos, empresarios, movimientos sociales) intermedias o débiles.

Finalmente se analiza el impacto de la competencia partidaria a fin de contrastar si el partido fue capaz de instaurar un nuevo clivaje de competencia.

Cada una de las variables mencionadas ordenarán el desarrollo del artículo, donde se buscará contrastar la propuesta de Leiras (2005) y mencionar similitudes y dife-

rencias entre los casos analizados.

Como supuesto inicial se considera que tanto el PT como el PRD no sólo han logrado instaurar un nuevo clivaje de competencia en sus sistemas partidarios, sino que luego de mantenerse estable en los años 90, comenzarán a formar parte de los partidos del statu quo, es decir, que alcanzan puestos de gobiernos pasando a ser nominados como partidos tradicionales en sus sistemas.

2. Análisis de los casos

2.1. PT Brasil

2.1.1 Pautas de cooperación y conflicto

Los partidos electorales para conquistar la preferencia del electorado, además de comunicar programas electorales con sus propuestas, deben establecer estrategias de competencia a través de alianzas o coaliciones entre partidos. A comienzos de la década del 90, el sistema de partidos en Brasil era fragmentado. Tanto en elecciones presidenciales como estatales, “los candidatos del PT compitieron o bien aislados o bien coaligados con pequeños partidos de izquierda” (Roma, 2006: 174) que seguían sus criterios ideológicos, porque de no ser así pone en juego la credibilidad de sus propias propuestas.

En la elección presidencial de 1989, el PT se alió con PSB y PC do B, ambos partidos pequeños de izquierda. En 1994, el PT mantuvo esta estrategia de no formalizar coaliciones con grandes partidos, sumando el PPS, PSTU y PV. Ya en 1998, el PT construyó una coalición un poco más amplia con el PDT, también reconocido como un partido de izquierda, pero que había sido su adversario en procesos anteriores. Sin embargo, hay un cambio importante en el 2002 cuando el PT ganó las elecciones presidenciales del país, tras veinte años de existencia, aliándose a un pequeño partido de derecha: el Partido Liberal (PL). Esta estrategia de competencia electoral refleja la necesidad del partido de acercarse a aquellos ubicados al centro, pero a su vez es un desafío para los dirigentes, porque refleja un difícil dilema: requiere también la negociación de los puntos del programa de gobierno. “Refrendar alianzas amplias

y buscar apoyo electoral de partidos ideológicamente lejanos significa moderar sus pretensiones y suscita resistencias al interior del partido” (Roma, 2006: 175-176). De esta forma, al realizar amplias negociaciones con los diversos partidos brasileños y líderes nacionales que históricamente fueron contrarios al PT, permitió mostrar una imagen de partido maduro, estratégico y con experiencias innovadoras en la gestión municipal y estadual, minimizando la desconfianza que históricamente las élites políticas y empresariales tuvieron hacia él y el PT. Como consecuencia, se obtuvo un alto nivel de fidelidad y amplio apoyo en las elecciones convirtiéndose, Lula, en presidente de Brasil (Castro Berardi, 2004).

En cuanto a la posición parlamentaria del PT, nos encontramos con una oposición solitaria al régimen. El PT y PSDB ganaron visibilidad y forjaron alternativas al electorado, organizando bloques consistentes de oposición, siendo el PT el precursor y por eso mismo inevitablemente, visto como insolvente. Su estructura ideológica de centro izquierda lo llevó a la construcción de un campo de oposición, sostenido durante ocho años, con la necesidad de mostrarse diferente y por eso mismo no fue pasado por alto (Bezerra, 2012).

En resumen, el PT para mejorar su desempeño electoral ha cambiado puntos importantes de su programa, moderando su discurso político pasando de extrema izquierda hacia uno de centro-izquierda en 2002. Pero anteriormente, en los años 90, sus estrategias de competencia opositora siempre fue participar de las contiendas electorales aislados o coaligados a pequeños partidos de izquierda coherentes con su ideología.

2.1.2. Estructuras fuertes. Disciplina parlamentaria

Esta variable en el caso del PT corresponde a una disciplina parlamentaria alta, y para referirnos a esta debemos partir de la propia organización del partido reflejada por su ingeniería institucional implementada a partir de su reglamento interno. En la misma se expresa el principio de disciplina, según el cual, los afiliados deben cumplir las órdenes del partido bajo el riesgo de sufrir penalizaciones y sanciones. Como también deben respetarse las decisiones tomadas en sus respectivos comités con fuertes principios de deliberación y centralismo democrático. Es decir que, “el proceso de deliberación se manifiesta por medio de un poder de decisión descentralizado, mientras que el centralismo democrático se manifiesta en la disciplina partidista y en la jerarquía en la toma de decisiones” (Roma, 2006: 158).

El propio partido ejerce un alto control jerárquico de las decisiones, imponiendo la disciplina parlamentaria que se justifica por la idea de que el mandato pertenece al partido y no al representante individualmente. Así los líderes electivos ejercen la representación según los principios de la doctrina programática del partido y los procesos deliberativos apoyados por los afiliados en los comités, en relación a los términos impuestos en el estatuto (Roma, 2006).

Por ejemplo, en 1985, tres diputados desobedecieron la orientación de sus líderes de no votar en las elecciones indirectas para presidente de la República realizadas en el Congreso Nacional en el regreso a la democracia, y fueron expulsados del partido. Otro caso es el de la alcaldesa de la capital del estado de Ceará, quien en 1988 no cumplió con las orientaciones de los comités y también fue expulsada.

Sin embargo, esto puede presentar ciertos inconvenientes al interior del partido, ya que prevalezca la democracia interna presenta mayores dificultades para gobernar privilegiando a sus electores antes que a sus afiliados y así, aumentando la tensión entre la burocracia partidista y los afiliados que ocupan puestos en el gobierno.

2.1.3 Liderazgos

El principal líder del PT es Lula Da Silva; quien inicia su carrera como sindicalista de los obreros metalúrgicos de la región del ABC paulista, llegando a ser presidente de este sindicato, en los tiempos del gobierno militar brasileño. El desarrollo de su liderazgo se fue dando a lo largo de años de militancia sindical e incursionando en la política participando como uno de los fundadores del PT, hasta alcanzar su completa maduración política con el triunfo en las elecciones presidenciales de 2002 (Castro Berardi, 2004).

La imagen de Lula presenta rasgos personalistas, dado que fue (y sigue siendo) el candidato más competitivo con una imagen pública y política única; convirtiéndose en un líder carismático que por momentos es representado como quien va a salvar a Brasil de la corrupción y de la pobreza. Tal es así, que “la importancia de la popularidad de Lula para el *petismo* tiene implicaciones sustanciales para el futuro del PT porque sigue siendo el único líder del PT que puede atraer adeptos en mayor número que su partido como fue demostrado en las últimas elecciones brasileñas en 2022. Tras su salida del escenario, podemos predecir no únicamente una sucesión difícil de liderazgo, sino también algunos problemas en términos de la capaci-

dad del partido de preservar militantes y por tanto seguir creciendo electoralmente” (Samuels, 2004:78)

2.1.4 Desarrollo territorial

Con respecto a la estructura de la militancia, la toma de decisiones y los procesos deliberativos se realizaban en Convenciones Nacionales pero también Regionales y Municipales como en Encuentros Nacionales organizados en diferentes puntos del país. Estos son mecanismos de participación política que crean espacios de discusión para elaborar lineamientos en relación a las propuestas o tendencias políticas del partido (Roma, 2006).

En las elecciones, la fuerza del regionalismo y del federalismo en la democracia brasileña, garantiza a los gobernadores de los Estados un rol clave ya que actúan como traccionadores de votos (Samuel, 2000 citado por Borges, Sanches Filho y Rocha, 2011). Y esto se debe a que el Ejecutivo tiene la capacidad de formular e implementar políticas públicas de salud, educación, infraestructura, etc., ejerciendo control sobre la nominación de miles de empleos y la distribución de los fondos y las inversiones en los municipios, beneficiando o perjudicando los gobiernos estatales.

“Cuando eran oposición, los dos partidos obtuvieron mejor desempeño en las ciudades más desarrolladas, más pobladas y con mejores índices sociales. Una vez en el gobierno, los patrones se invierten, y el voto en las elecciones presidenciales aparece asociado positivamente a factores como la pobreza” (Borges, Sanches Filho y Rocha, 2011:328-329) Lo más probable es que los electores, y especialmente aquellos más pobres, estén respondiendo a la provisión de beneficios tangibles (transferencias gubernamentales, programas, etc.) utilizados para obtener el apoyo y la capacidad de movilización de liderazgos políticos locales (Borges, Sanchez Filho y Rocha, 2011).

En resumen, si bien el PT en su momento de origen presentaba rasgos de regionalización, tras pasar sucesivas elecciones se nacionalizó (Roma, 2006).

2.1.5 Representación política

El PT fue creado en 1980 en el ámbito de la sociedad civil, intentando representar e incentivar la participación política de los sectores obreros, trabajadores del sector

público y organizaciones estudiantiles. Recordemos que se da en un contexto post-dictadura, en el que a partir de que grupos de izquierda de la sociedad civil organizada (*novo* sindicalismo, Teología *da Libertação* –sector de la Iglesia Católica–, intelectuales y estudiantes, parlamentarios disidentes de varios partidos de izquierda) dieron la lucha por la vuelta a la democracia (Roma, 2006).

Un partido político que, sin poder contar con recursos estatales para llevar adelante su lucha y carrera política, no tuvo otra opción que estructurar una red de organizaciones de masas como son los sindicatos y las movilizaciones sociales (Borges, Sanchez Filho, Rocha; 2011).

Otro factor del PT, es que su líder, Lula, era un inmigrante del nordeste que había tenido relativamente poca educación formal y emergió de las clases populares. Como consecuencia, el PT se desarrolló como partido de la clase media organizada, teniendo en cuenta la asociación del partido con el sector sindical formal. Por tanto, quienes apoyan electoralmente al PT –sobre todo en un inicio– en su mayoría pertenecen a clases bajas excluidas o bien a la clase media trabajadora (Samuels, 2004).

2.1.6 Nuevo clivaje

En el caso del sistema político brasileño, posteriormente a 1985, nos encontramos con un predominio de organizaciones y partidos “movilizados internamente” creados por las élites para ocupar cargos en el gobierno. Pero, el caso del PT corresponde a la definición de “movilizados externamente”, es decir, creado al margen del régimen existente y externamente al sistema parlamentario y electoral (Borges, Sanchez Filho, Rocha; 2011).

Es posible visualizar que el PT presenta un crecimiento a lo largo del tiempo, a través de la conquista de varios puestos gubernamentales, tanto en elecciones legislativas como en las elecciones ejecutivas. El PT, en la década del 90, se configura como el partido de la oposición de los gobiernos instaurados desde la vuelta de la democracia, impulsando justamente el clivaje democracia- dictadura como parte de su identidad partidaria. Aparece en el escenario político, y elección tras elección desafía a los partidos tradicionales de centro y de derecha.

En el 2002, el PT se convierte en el primer partido de izquierda en ascender a la presidencia de la República en esta segunda experiencia democrática. También crece en número de diputados y senadores elegidos, aunque este

crecimiento no se verificó en número de gobernadores. Hasta entonces, el poder nacional era dominado por una coalición de partidos de centro-derecha, la cual incluía al PFL y el PSDB. El PT y el PSDB han sido fundamentales para la dinámica de la democracia justamente porque son capaces de reclutar una elite política comprometida con una doctrina, representar agendas de gobierno diferentes para el electorado y desarrollar estrategias electorales eficientes (Roma, 2006).

2.2. PRD México

2.2.1 Pautas de cooperación y conflicto

El PRD se construye como el heredero de una izquierda histórica, joven en sí mismo, pero con abundantes desacuerdos internos. Como un cóctel explosivo que revuelve comunistas y trotskistas, ex priístas y ex guerrilleros, nacionalistas e internaciona- listas, el partido germinará de la precaria alianza de sus afluentes. Tuvo obstáculos para institucionalizarse formalmente debido a la diversidad de orígenes, un líder carismático y una débil estructuración. Sin embargo, el crecimiento electoral estuvo dado por su autonomía en las contiendas electorales sin realizar coaliciones electo- rales o pre electorales con partidos del statu quo.

La necesidad de construir coaliciones en la Cámara de Diputados surgió en 1988 cuando el PRI perdió la mayoría calificada (2/3) para aprobar las reformas constitu- cionales. Posteriormente, en 1993, se aprobó una reforma constitucional que impide a cualquier partido reunir la mayoría necesaria para alterar la Constitución. La nove- dad de esta legislatura es que ningún partido reúne la mayoría para aprobar leyes secundarias que sólo requieren la mayoría simple. El tipo y frecuencia de las coali- ciones depende y fluctúa según el rubro de las iniciativas de la Cámara. Por ejem- plo, en materia económica, la cercanía entre PRI y PAN es evidente (Casar, 2000). Por el contrario, el PRD permanecerá en oposición al régimen como un eslabón más por su lucha contra el régimen y elecciones transparentes.

2.2.2 Estructuras fuertes. Disciplina parlamentaria

Maria Amparo Casera (2000:196), define el término disciplina como “el acatamiento de los legisladores de la línea dictada por el líder del partido o de la fracción parlamentaria”. Por lo cual habrá indisciplina “siempre que algún miembro de la fracción vote en sentido contrario o se abstenga de votar de acuerdo con la línea del partido”. En su análisis, observa el comportamiento diferencial de las bancadas depende la materia que se trate, y por consiguiente, el grado de cohesión si se acentúa o no.

El PRD, según los datos presentados por la autora, aparece como el partido con el menor grado de cohesión, independientemente de la materia de que se trate, de acuerdo al promedio de diputados disidentes. Las iniciativas en materia económica y política son las que provocan mayores disidencias y controversias alejándose de la posición mayoritaria.

La necesidad de aprobar leyes secundarias y las reformas constitucionales, sin duda, llevó a que las bancadas parlamentarias del PRI y el PAN posean un alto grado de disciplina, por su mayor disposición a cooperar en las iniciativas. Para Casera, esto no es de sorprender ya que ambos partidos poseen mayor proximidad programática-ideológica, sobre todo en materia económica. Sin embargo, el PRD aparece como el partido con menor predisposición e inclinación a pactar acuerdos y formar coaliciones (Casera, 2000).

2.2.3 Liderazgos

El “perredismo”, como se ha denominado a la corriente ideológica del PRD, en sus primeros 10 años de vida tuvo tres principales figuras políticas: Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Los tres líderes, salieron del PRI porque ninguno encajaba con el perfil tecnócrata de los nuevos gobiernos de finales de 1980 y decidieron agruparse primero en la Corriente Democrática y luego, en el Frente Democrático Nacional para finalmente, participar de la fundación del PRD (Vela, 2021).

El primer líder del PRD, y a quien se le atribuyen las bases constitutivas y logradas en la conformación partidista es Cárdenas. En 1988, demandó un cambio en el modelo económico vigente y el establecimiento de un régimen democrático, siendo candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) a la presidencia. A partir de su candidatura, adquirió rasgos carismáticos y en el imaginario de la gente, la persona

calificada para la salvación de la situación que se atravesaba en México en aquel entonces (Benavente, 2005).

Cárdenas fue el primer coordinador nacional del partido, su llegada fue natural y contó con el apoyo suficiente para acceder a una segunda (1994) y tercera candidatura presidencial (2000), con su victoria como jefe de gobierno del Distrito Federal en 1997 (Vela, 2021).

Luego, en las elecciones del 2000, el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas comenzó a disiparse, ya que se vieron disminuidos los beneficios recibidos al tener que compartirlos con los partidos aliados. Por eso sus seguidores dejaron de considerarlo indispensable y le negaron la corroboración de la autoridad que ejercía y en la cual radica la legitimidad del poder carismático.

Luego, asumió el liderazgo del proyecto López Obrador presidiendo así la dirección del partido. Se propuso integrarlo territorialmente en el ámbito nacional a través de la creación de comités democráticos. De esta forma, a partir del triunfo del PRD en la capital del país en 1997, así como el número de escaños obtenidos en la Cámara de Diputados, que lo reubicaron como la segunda fuerza política del país, fortalecieron aún más el liderazgo de López Obrador. “Si hacemos un buen gobierno en el DF y como partido representamos con dignidad a los ciudadanos, vamos a seguir teniendo éxito, si no, fracasaremos” dijo el líder.

2.2.4 Desarrollo territorial

El primer triunfo del PRD en una elección fue en 1997, en el Distrito Federal, siendo el candidato electo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El mayor respaldo del partido en todo el país se encontraba en Ciudad de México, y Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de la ciudad electo democráticamente. Ese mismo año en las elecciones para el Congreso de la Unión, el PRD logró imponerse como la segunda fuerza política detrás del PRI. La Ciudad de México se convirtió en la base electoral del PRD, la ciudad más grande y con mayor peso político de todo el país, al ser la capital y donde residen los poderes de la Federación.

Es decir que, el partido comienza siendo capitalino y luego comienza a expandirse en el territorio convirtiéndose en nacional. Su desarrollo territorial dependía exclusivamente del desenvolvimiento del PRD en el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de López Obrador. Logrando con sus gestiones políticas, consagrarse como el

candidato natural del partido para las elecciones presidenciales del 2006.

2.2.5 Representación política

Antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista (PMS) que nace de la fusión de 6 fuerzas políticas de Izquierda a nivel Nacional: Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Patriótico Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC). Más adelante se unen a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Al PMS se suman ex miembros del PRI, denominados como Corriente Democrática que junto a organizaciones civiles se opusieron al partido gobernante y reclamaban elecciones democráticas. Así nace el Partido de la Revolución Democrática, como una coalición de diversos partidos políticos, movimientos y organizaciones de izquierda.

Se conforma una nueva alternativa electoral, que en 1989 obtendrá el 8% de los votos consiguiendo una representación parlamentaria de 41 diputados y 6 senadores. Estos resultados serán utilizados por el partido para reivindicar su movimiento contra las prácticas fraudulentas del gobierno.

En este sentido, los “neocardenistas” contaban con “una agenda económica y política discerniblemente diferente y una base social que incluía a elementos claves de los grupos de votantes tradicionales del PRI” (Craig y Cornelius, 1996:214 citado por López, 2005), como los campesinos y los obreros urbanos. Incluso parte de sus propuestas se centraban en el desarrollo del sector agrícola.

2.2.6 Nuevo Clivaje

La transición a la democracia en México estuvo centrada en una profunda transformación de las elecciones y el sistema de partidos. Dos procesos condensan este tránsito: en primer lugar, el paso de un sistema de partido hegemónico bajo el cual la competencia estaba generalmente limitada desde el poder y dominada por un partido al pluralismo de opciones partidistas y, en segundo, el paso de elecciones manipuladas a una competencia abierta, transparente y justa por los cargos públicos (Méndez, 2006b). El inicio preciso de la transición a la democracia en México continúa siendo un tema de amplia discusión.

Para cuando surge el PRD el sistema partidario de México era hegemónico y bipartidista, con una preeminencia del PRI y atravesando importantes retos democráticos. A partir de reformas electorales, y la posibilidad de la participación de nuevos partidos políticos en las contiendas electorales, comenzó una proliferación de nuevos movimientos, elevando la competitividad y fracturando la hegemonía del sistema partidario que había perdurado por décadas. “El fortalecimiento paulatino de los partidos de oposición, el desgaste del apoyo electoral del partido hegemónico, y los cambios en las reglas electorales entre 1990 y 1996, permitieron que en 1997 México fuera reconocido como una democracia electoral” (De Hoyos, 2007:14)

El PRD como partido desafiante, ha logrado imponerse en elecciones a diputados y senadores como mencionamos anteriormente. En el caso del presidencialismo mexicano, el poder ejecutivo requiere del apoyo legislativo para gobernar y la fragmentación del sistema partidario produce bloqueos. De esta manera, mientras el PRI gozó de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados tenía asegurada sus políticas, pero a partir de 1997 perderá la mayoría la presidencia del PRI y posteriormente la del PAN en el 2000. Esto evidencia como los partidos de espectro ideológico izquierda-derecha lograron ampliar su electorado e imponerse en el sistema partidario como oposición a los partidos del status quo, haciendo, incluso, más difícil la construcción de acuerdos y la formación de alianzas que apoyen al gobierno de turno (De Hoyos, 2007).

3. Conclusiones

Luego del análisis comparativo de los dos casos escogidos, se pueden observar que cumplen con las características propuestas por Leiras (2005) para los partidos desafiante de oposición, pudiendo ser considerados como tales.

Con respecto al crecimiento electoral, tanto el PT como el PRD se afianzaron en un inicio de forma autónoma, sin coaliciones con partidos tradicionales. En cuanto a la posición parlamentaria también, actuaron como oposición solitaria y en algunos casos por oposición en coalición, pero no formando parte de un bloque parlamentario del gobierno. Por el contrario, siempre fueron firmes opositores.

En el PT nos encontramos con una alta disciplina parlamentaria debido a su rígido estatuto del partido, con sanciones impuestas a líderes que no acaten y cumplan con las normas o con las directrices y lineamientos que el partido decide en instan-

cias de deliberación democrática. Por el contrario, en PRD contó con una disciplina parlamentaria intermedia, en gran medida debido a la amplia integración de fuerzas y movimientos del partido.

Lula, es el gran líder del PT con un amplio recorrido de militancia sindical y política. Siendo el principal candidato que logra el mayor reclutamiento de votos. En el PRD, se fue dando el desarrollo de diferentes líderes, cada uno con su rasgo distintivo: Cárdenas, el primero, quien fue el responsable de constituir las bases del partido y el líder que mayor respaldo electoral obtenía, y por último, López Obrador, actual líder del partido, y quien, a partir de lograr el triunfo en la Ciudad de México, se encargó de que su gestión y gobierno sea la carta de presentación en todo el país para poder competir luego en elecciones presidenciales.

Otra de las variables, es el desarrollo territorial de los partidos. Ambos comienzan siendo regionalista o capitalino pero en el transcurso de amplias contiendas electorales, culminan instaurándose como nacionales.

La representación política de dichos partidos también presenta diferencias, ya que en el caso del PT los lazos con la sociedad civil son muy fuertes porque justamente el partido se constituye dentro de esta; con el amplio apoyo de movilizaciones y organizaciones sociales, y un actor fundamental: el sindicalismo. El PRD, presenta vínculos más bien intermedios. Nace a partir de una necesidad de la sociedad civil por la realización de elecciones democráticas, y también es conformado por un vasto abanico de fuerzas de izquierda representando en su mayoría a obreros urbanos y campesinos.

Por último, la instauración de un nuevo clivaje de competencia. Tanto el PT como el PRD fueron capaces de generar un nuevo escenario en sistema de partidos agregando ejes de competencia novedosos. En Brasil, nos encontramos con un sistema de partidos fragmentado, en su mayoría, de centro y de derecha que gobernaban desde los comienzos de la transición democrática. El PT patea el tablero político en los años 90, tomando un rol protagónico en las configuraciones electorales legislativas y gubernamentales, desafiando el status quo de los partidos tradicionales. En México, en estos mismos años, primaba un sistema de partido hegemónico encabezado por el PRI, partido que dominó el juego político electoral durante décadas con la instauración de gobiernos autoritarios. El PRD, viene a desafiar esa hegemonía del PRI. Tal es así, que las elecciones del año 1997, cuando el PRD gana la gobernación del Distrito Federal, son consideradas las primeras elecciones justas, competitivas y transparentes logrando así, la instauración definitiva de la democracia, luego de una larga transición.

4. Bibliografía

BORGES, A., SANCHES FILHOS, A. y ROCHA, C. (2011), "La conexión subnacional: geografía del voto y coaliciones electorales en el federalismo brasileño", en *Revista SAAP* (ISSN 1666-7883) Vol. 5, N° 2, pp. 323-357, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BORJAS BENAVENTE, A. (2005), "Liderazgos carismáticos e institucionalización política: el caso del Partido de la Revolución Democrática", en *Artículos CONfines*, España.

CASAR, M. A. (2000), "Coaliciones y cohesión partidista en un congreso sin mayoría: la Cámara de Diputados de México, 1997-1999", en *Política y Gobierno* Vol N°1, pp. 183-20, México.

CASTRO BERARDI, R. (2004), "Lula: un liderazgo emergente", en *Revista enfoques*, N°2, Santiago de Chile.

LIMA BEZERRA, G. M. (2012), "*A Oposição nos Governos FHC e Lula: Um Balanço da Atuação Parlamentar na Câmara dos Deputados*", Porto Alegre, Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito para obtenção do título de mestre.

LÓPEZ, S. (2004), "Partidos Desafiantes en América Latina", [Tesis final de Licenciatura en Ciencia Política]. UDELAR. FCS. ICP. Mimeo, Uruguay.

LÓPEZ MIJARES, A. (2010), *La especificidad democrático-representativa de Acción Nacional*, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México.

NAVARRETE VELA, J. P. (2021), *Balance del liderazgo en el Partido de la Revolución Democrática: 1898-2019*, Apuntes electorales, México.

MÉNDEZ DE HOYOS, I. (2007), *El sistema de partidos en México: fragmentación y consolidación*, ITESM, México.

ROMA, C. (2006), *Organizaciones de partido en Brasil: el PT y el PSDB bajo perspectiva comparada*, Ediciones Universidad de Salamanca, México.

SAMUELS, D. (2004), *Las bases del PT: Ideología versus personalismo en su apoyo electoral*, Ediciones Universidad de Salamanca, México.

Nardi, Isabella (2024). "El Partido de los Trabajadores de Brasil y el Partido por la Revolución Democrática de México como partidos desafiantes de oposición en los años '90", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 295-308.

UN ESTUDIO SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN CHILE (1989-2009) Y BRASIL (2002-2018)

Amparo Rodríguez
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

En el siguiente artículo se analizarán algunos aspectos de los sistemas de partidos de Chile y Brasil, considerando principalmente la fragmentación, la polarización y la volatilidad. El análisis tiene como punto de partida las elecciones presidenciales en las que fuerzas de centro-izquierda acceden a la presidencia luego del retorno de la democracia, hasta las elecciones presidenciales que traen alternancia efectiva. En el caso de Chile, esta llegada se dió de forma temprana, en las elecciones fundacionales de 1989, con el triunfo de Patricio Aylwin (Partido Demócrata Cristiano-Concertación). Esto marcará el punto de partida del estudio, a lo que también se suman los procesos electorales de 1993, 1999 y 2005, en los que la Concertación logra sostenerse en el ejecutivo. Este período se interrumpe en las elecciones de 2009 con la victoria de Se-

bastián Piñera (Renovación Nacional-Coalición para el Cambio) en la cual se dió una alternancia hacia la coalición de derecha. En el caso de Brasil, se tomará como punto de partida para el análisis las elecciones de 2002, en las que Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores - Alianza “Lula Presidente”) es electo presidente. Considerando además los procesos 2006, 2010 y 2014 en los que el partido logró mantener el ejecutivo. El recorte temporal alcanza el proceso electoral de 2018, que trajo la victoria de Jair Bolsonaro, (Partido Social Liberal - Alianza “Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos”), generando una alternancia en el gobierno de dicho país.

El criterio elegido para la selección de las variables se pensó en función de la afirmación del autor Michael Coppedge (2000) en el texto *La diversidad dinámica de los sistemas de partidos latinoamericanos*, donde sostiene que para estudiar el cambio de los sistemas de partidos en América Latina es necesario observar la polarización, fragmentación y volatilidad de dichos sistemas. Para operacionalizar la polarización se observará “la dispersión del voto hacia afuera del centro relativo al sistema de partidos” (Coppedge, 2000:121) y para medir la fragmentación se observará la cantidad efectiva de partidos que compitieron en cada elección (Coppedge, 2000:112). En cuanto a la volatilidad, se observará el porcentaje de votos obtenido por las principales fuerzas en las elecciones presidenciales a lo largo del periodo seleccionado y se introducirá el concepto de volatilidad intrabloque (Moreira, 2006), a fin de observar los cambios al interior de la coalición o alianza que compite. Dado el alcance del trabajo, en todos los casos las variables se analizarán sobre las elecciones al Ejecutivo.

En efecto, este trabajo constituye un estudio de área; situado en el Cono Sur, enfocado en el plano nacional. Los casos fueron elegidos por su similitud, la llegada de una fuerza de centro izquierda al ejecutivo; aunque presentan diferencias en sus sistemas de partidos, que serán analizadas a lo largo del trabajo. Como hipótesis inicial se sostiene que los niveles de polarización, fragmentación y volatilidad son más significativos en el caso de Brasil que en el de Chile.

El contenido se sistematiza en tres apartados y cada uno de ellos responde al análisis de una de las tres variables en ambos casos. Al final, se esboza una conclusión.

2. Fragmentación

Como fue señalado en la introducción, para medir los niveles de fragmentación se observará el número de partidos y coaliciones que compitieron en cada elección

presidencial. Para ello, se utilizarán los datos publicados en el sitio web del Tribunal Superior Electoral de Brasil y en el sitio web del Servicio Electoral de Chile.

En relación al caso chileno se observa que, debido a su diseño institucional, los partidos se organizan en coaliciones que se han mantenido relativamente estables para el periodo estudiado.

En las primeras elecciones presidenciales a analizar, las de 1989, compitieron diecisiete partidos, pero organizados en tres grandes coaliciones: la Concertación de Partidos por la Democracia (conformada por el Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Humanista de Chile, Partido Los Verde, Partido Social Democracia de Chile, Partido Amplio de Izquierda Socialista y Partido Radical Socialista Democrático), Democracia y Progreso (integrado por la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y la Democracia Radical) y el Partido Liberal-Socialista Chileno (compuesto por el Partido Liberal, Partido Socialista Chileno, Avanzada Nacional, Partido Nacional y el Partido del Sur).

En las elecciones presidenciales de 1993 el número de partidos que compitieron se eleva a diecinueve, ordenados en el marco de cuatro coaliciones electorales y algunas fuerzas que se presentan de forma independiente: la Concertación (conformada ahora por el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Socialdemocracia) la Unión por el Progreso de Chile (ex Democracia y Progreso, conformada por Unión de Centro Centro, el Partido Nacional, el Partido del Sur, el movimiento político Confederación Liberal, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente), la Alternativa Democrática de Izquierda (Partido Comunista de Chile, Partido Comunista Chileno-Acción Proletaria, Movimiento de Acción Popular Unitaria, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y la Izquierda Cristiana), La Nueva Izquierda (Partido Humanista de Chile y Partido Los Verdes), el Movimiento Ecologista y el candidato José Piñera Echenique que se postuló como independiente.

En las elecciones presidenciales de 1999 compitieron doce partidos, concentrados en su mayoría en cuatro coaliciones: la Concertación de Partidos por la Democracia (Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal), Alianza (integrada por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente), La Izquierda (Partido Comunista de Chile y Nueva Alianza Popular), la Alianza Humanista Verde (Partido Humanista y Los Verdes), el partido Unión de Centro Centro y, por otro lado, se presenta la candidata independiente Sara Larrain.

En las elecciones del año 2005 el número de partidos que compitieron se reduce a nueve, agrupados en tres grandes coaliciones: nuevamente la Concertación (Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialdemócrata), Juntos Podemos Más (Partido Comunista de Chile, Partido Humanista y la Izquierda Cristiana) y Alianza. Esta última, por su parte, decidió utilizar la primera vuelta a modo de interna partidaria presentando un candidato el partido Unión Demócrata Independiente, y otro candidato el partido Renovación Nacional.

Por último, en el año 2009 compitieron por la presidencia trece partidos organizados en cuatro coaliciones: la Coalición por el Cambio (Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Chile Primero), la Concertación (Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata y Fuerza País), Nueva Mayoría para Chile (Partido Humanista, Partido Ecológico y Movimiento Amplio Social) y Juntos Podemos Más (Partido Comunista y la Izquierda Cristiana).

En relación al caso brasileño, en las primeras elecciones presidenciales analizadas del año 2002 compitieron dieciséis partidos, organizados en su mayoría en cuatro alianzas partidarias: Lula Presidente (Partido de los Trabajadores, Partido Liberal, Partido Comunista de Brasil, Partido Comunista Brasileño y Partido de la Movilización Nacional), Gran Alianza (Partido de la Social Democracia Brasileña y Partido del Movimiento Democrático Brasileño), Brasil Esperanza (Partido Socialista Brasileño, Partido General de los Trabajadores, Partido Laborista Cristiano y Partido Social Cristiano), Frente Laborista (Partido Popular Socialista, Partido Democrático Laborista y Partido Laborista Brasileño), el Partido de la Causa Obrera y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados.

En las elecciones del 2006, el número de partidos que compitieron disminuyó a trece, algunos de ellos compitieron en tres coaliciones, mientras que otros se presentaron de forma independiente: La Fuerza del Pueblo (PT, Partido Republicano Brasileño, PCdoB), Por un Brasil Decente (PSDB, Partido del Frente Liberal, Partido Popular Socialista) Frente de Izquierda (Partido Socialismo y Libertad, Partido Comunista Brasileño, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados), el Partido Democrático Laborista, el Partido Republicano Progresista, el Partido Socialdemócrata Cristiano y el Partido Social Liberal.

En las elecciones presidenciales del año 2010 compitieron veintiún partidos políticos y dieciséis de ellos se organizaron en dos alianzas partidarias: Que Brasil Siga Cambiando (PT, PMDB, PDT, PCdoB, PSB, Partido de la República, Partido Social Cristia-

no, PTC, PRB y el Partido Laborista Nacional) y Brasil Puede Más (PSDB, Demócratas, PPS, Partido de la Movilización Nacional, Partido Laborista de Brasil y el PTB). Por fuera de las mismas, presentaron candidatos el Partido Verde, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Socialdemócrata Cristiano, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, y el Partido Renovador Laborista Brasileño.

En las elecciones del 2014 compiten por la presidencia de Brasil veintiocho partidos agrupados, en su mayoría, en tres coaliciones: Con la Fuerza del Pueblo (PT, PMDB, PSD, Partido Progresista, PR, PDT, PRB, Partido Republicano de Orden Social, PcdoB), Cambia Brasil (PSDB, Partido de la Movilización Nacional, Solidaridad, Partido Ecológico Nacional, PTN, PTC, DEM, PtdoB, PTB), Unidos por el Brasil (PSB, PSL, Partido Humanista de la Solidaridad, PPS, Partido Patria Libre, Partido Republicano Progresista), a excepción del Partido Socialismo y Libertad, el Partido Social Cristiano, el Partido Verde y el Partido Socialdemócrata Cristiano.

Finalmente, en las elecciones presidenciales del año 2018, el número de partidos que compiten asciende a treinta y uno y veintiséis de ellos se enmarcan en ocho coaliciones: Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos (PSL y Partido Renovador Laborista Brasileño), El Pueblo Feliz de Nuevo (PT, PCdoB, PROS), Brasil Soberano (PDT y AVANTE), Para Unir Brasil (PSDB, PP, DEM, PR, PRB, SD, PTB, PSD y PPS), Esta es la Solución (MDB y PHS), Vamos Sin Miedo de Cambiar Brasil (PSOL, PCB), Cambio de Verdad (PODE, PSC, PTC, PRP), Unidos para Transformar Brasil (REDE, PV). Por su parte, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Partido Novo, Patriota, Partido Patria Libre y la Democracia Cristiana presentaron cada uno un candidato.

En función de los datos citados y siguiendo el mencionado criterio propuesto por Coppedge (2000), se puede sugerir que los dos son sistemas multipartidistas, que organizan sus elecciones para el ejecutivo en coaliciones o alianzas electorales. Sin embargo, se advierte que el de Brasil es marcadamente más fragmentado que el chileno: promedio efectivo de fuerzas que compitieron en las elecciones al ejecutivo es de 4 en Chile y de 8 en Brasil, y la diferencia se torna más significativa si se analiza el número de partidos, resultando en 14 para Chile y 21,8 para Brasil.

3. Polarización

En el siguiente apartado se procederá a analizar los niveles de polarización a partir de observar la dispersión del voto hacia afuera del centro relativo del sistema,

en cuanto a la dicotomía del espectro izquierda-derecha, a partir de los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales del período seleccionado a partir de los datos proporcionados por el Tribunal Superior Electoral para el caso de Brasil y en el Servicio Electoral de Chile para el caso de Chile.

En este sentido, comenzando nuevamente por Chile, se observa que en las elecciones presidenciales de 1989 la Concertación, fuerza conformada por partidos de centro y de centro izquierda, triunfó con el 55,17% de los votos seguida por la Coalición Democracia y Progreso con el 29,40 % y el Partido Liberal-Socialista chileno con el 15,43%.

Años más tarde, en las elecciones presidenciales de 1993, la Concertación logra un nuevo triunfo con un 57,98% de los votos. Luego es seguida por la Unión por el Progreso de Chile con el 24,42%, José Piñera Echenique con el 6,18%, el Movimiento Ecologista con el 5,55%, Alternativa Democrática de Izquierda con el 4,69% y La Nueva Izquierda con el 1,17%.

En 1999, vuelve a ganar la Concertación, pero ahora en segunda vuelta contra la Alianza, que es la ex Unión por Chile. Los resultados de la primera vuelta fueron un 47,96% para la Concertación, un 47,51% para la Alianza, un 3,19% para La Izquierda, un 0,51% para la Alianza Humanista Verde, un 0,44% para la candidata independiente Sara Larraín y un 0,38% para la Unión de Centro Centro. En la segunda vuelta, la Concertación triunfó con el 51,31 % de los votos frente al 48,69% de la Alianza. En este caso, se observa un claro crecimiento electoral de la Alianza que, siguiendo a la autora Moreira (2006), se puede pensar que es producto de su paulatino corrimiento hacia el centro y un aumento significativo de los niveles de polarización en comparación con las dos elecciones anteriores (2006:47).

En las elecciones presidenciales del 2005 gana la candidata de la Concertación, nuevamente enfrentada en un escenario de balotaje con el candidato de la Alianza. En la primera vuelta, la Concertación obtuvo el 45,96%, uno de los candidatos de la Alianza, Piñera, un 25,41%, el otro candidato de la Alianza, Lavín, un 23,23% y la coalición Juntos Podemos Más el 5,40% de los votos. Los resultados del balotaje fueron un 53,50% para la Concertación y un 46,50% para el candidato Sebastián Piñera de la Alianza Por Chile. Otra vez se puede observar cómo se replica el escenario de las elecciones anteriores.

Finalmente, las elecciones 2009 son las que traen alternancia con el triunfo de la Coalición Por el Cambio (ex Alianza) en segunda vuelta, frente a la Concertación. En

primera vuelta, la Coalición Por el Cambio obtuvo un 44,06%, seguido por la Concertación con un 29,60%, Nueva Mayoría para Chile con un 20,14%, y Juntos Podemos Más con un 6,21%. En la segunda vuelta, el margen entre la Coalición Por el Cambio y la Concertación se redujo dejando un resultado de un 51,61% para la primera y un 48,39% para la segunda. Se puede sugerir de la lectura de los porcentajes obtenidos por los candidatos en segunda vuelta que se mantiene el nivel de polarización de las dos elecciones anteriores.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el caso de Chile presenta una particularidad a tener en cuenta, resaltada tanto por Moreira (2006) como por Gamboa, López y Baeza (2013): el clivaje que caracteriza al sistema de partidos de Chile no es tanto la división ideológica entre los partidos de izquierda y derecha. Es más, incluso Gamboa et al (2013) destaca que existe una alta convergencia programática entre las principales coaliciones donde las características del modelo económico o el modelo de sociedad de Chile no presenta diferencias tan marcadas. Lo que constituye la línea divisoria principal entre la derecha y la izquierda y centro está relacionada a la postura que cada una asume frente a la dictadura militar de Augusto Pinochet, la configuración de las instituciones democráticas y el tratamiento del problema de los derechos humanos.

Entrando en las elecciones de Brasil, la elección presidencial del 2002 trajo el triunfo en segunda vuelta del candidato Lula Da Silva en el marco de la Coalición Lula Presidente frente al candidato José Serra de la Gran Alianza. En primera vuelta, Lula Presidente obtuvo el 46.44 %, Gran Alianza el 23.19 %, Brasil Esperanza el 17.87 %, el Frente Laborista el 11,97% seguidos del Partido de la Causa Obrera y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados con menos del 1% de los votos cada uno. El balotaje otorgó el triunfo a la Coalición Lula Presidente con un amplio margen al conseguir el 61.27 % frente al 38.72 % de la Gran Alianza.

Las elecciones presidenciales del año 2006 consagran la reelección de Lula con la coalición La Fuerza del Pueblo nuevamente en segunda vuelta con un 60,83% de los votos, ahora frente al candidato Alckmin de Por un Brasil Decente que obtuvo un 39,17% de los votos. Los resultados de la primera vuelta otorgaron un 48.61% a La Fuerza del Pueblo, un 41.64% a Por un Brasil Decente, un 6.85% al Partido Social Liberal, un 2.64% al Partido Democrático Laborista, un 0.13% al Partido Republicano Progresista, un 0.07% al Partido Socialdemócrata Cristiano y un 0.06% al Frente de Izquierda.

En las elecciones presidenciales del año 2010 gana la candidata de la coalición Que Brasil Siga Cambiando obteniendo el 56.05% de los votos cuando se enfrenta a un

balotaje con el candidato de Brasil Puede Más que obtiene el 43,95%. En la primera vuelta, los resultados habían sido de un 46,93% para Que Brasil Siga Cambiando, un 32.63% para Brasil Puede Más, un 19.34% para el Partido Verde, un 0.87% para el Partido Socialismo y Libertad, un 0.09% para el Partido Socialdemócrata Cristiano, el 0.08% para el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, y un 0.06% para el Partido Renovador Laborista Brasileño. Nuevamente se advierte un escenario sumamente polarizado, donde el voto se divide cerca del 50% a cada lado del espectro ideológico del sistema.

En 2014 logra la reelección Dilma Rousseff en la coalición Con la Fuerza del Pueblo en segunda vuelta frente al candidato Aécio Neves Da Cunha de Cambia Brasil. En la primera vuelta, Con la Fuerza del Pueblo recibió el 41.68% de los votos, Cambia Brasil el 33.62%, Unidos por el Brasil el 21.36%, el Partido Socialismo y Libertad el 1.55%, el Partido Social Cristiano 0.75%, el Partido Verde 0.61% y el Partido Socialdemócrata Cristiano 0.43%. Los resultados de la segunda vuelta arrojaron un 51.64% de los votos para Con la Fuerza del Pueblo y un 48.36% Cambia Brasil. Se puede sugerir que la polarización se acentúa en cada elección.

Los datos hasta 2014 permiten confirmar que en Brasil, tal como indica Moreira (2006), el “la dinámica gobierno-oposición se encuentra hoy mucho más alineada desde el centro a la izquierda del espectro ideológico que lo que fuera en el pasado” (2006:12). Así la competencia al ejecutivo descansa durante el periodo en los partidos más modernos del sistema, el PT y PSDB. En este sentido, Moreira (2006) indica que “Brasil parece encaminarse hacia una socialdemocracia de izquierda (si es que el partido que ostenta el nombre de “socialdemócrata” –el PSDB- puede ser considerado hoy una vertiente socialdemócrata “de derecha”); con competencia ideológica entre partidos y alternancia ideológica entre coaliciones” (Moreira, 2006:12). No obstante, como ya se viene analizando, esto se quiebra en 2018, con la reestructuración de las coaliciones que compiten al ejecutivo y los resultados alcanzados.

Las elecciones presidenciales del 2018 triunfa Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos en segunda vuelta con el 55.13% de los votos frente a El Pueblo Feliz de Nuevo que obtiene el 44.87%. En la primera vuelta, los resultados habían sido del 47.21% para Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos, 30.03% para El Pueblo Feliz de Nuevo, 12.78% para Brasil Soberano, 4.88% Para Unir Brasil, 2.57% para el Partido Novo, 1.29% para Patriota y 1.23% para Esta es la Solución.

Siguiendo a Coppedge (2000), se entiende que un sistema de partidos polarizado se caracteriza por una distribución bimodal del voto en el espectro izquierda-derecha

(2000:122). Este fue un rasgo que signó la totalidad de las elecciones ejecutivas del período analizado en Brasil y las últimas tres del período analizado en Chile. Dicho panorama derivó en la necesidad de una segunda vuelta o balotaje entre los dos primeros candidatos en la mayoría de los casos enfrentados en dos coaliciones, una de izquierda y centro-izquierda y una de derecha y centro-derecha. De esta manera, se puede sugerir que la polarización ideológica fue un rasgo significativo en este período en ambos casos, aunque de manera más acentuada en Brasil.

4. Volatilidad

La volatilidad es utilizada en gran medida como un indicador para conocer la institucionalización de sistemas partidarios, a partir del Índice de Pedersen (1983) que permite calcular el cambio neto en bancas (o votos) que tiene un partido político de una elección a otra y permite analizar qué tan volátil o estable es un sistema partidario (Cruz, 2016:169).

En el caso Chileno, Cruz (2016), calcula que el índice de volatilidad en las elecciones presidenciales para el periodo 1989-2014 es de 20.57%, lo cual es un porcentaje relativamente bajo en la región, asemejándose a los casos de mayor estabilidad (2016:180-181).

En lo que refiere a la alternancia de los partidos gobernantes en el caso de Chile, el triunfo sostenido de la Concertación a lo largo de 4 procesos electorales con porcentajes muy elevados da por resultado una baja volatilidad. Sin embargo, se advierte que existe alternancia intrabloque. Como señala Moreira (2006), los corrimientos ideológicos se producen en el seno de la coalición, en este caso, al modificarse los presidentes que pertenecen a partidos distintos de la coalición: Aylwin y Frei eran del Partido Demócrata Cristiano, mientras que Lagos pertenecía al Partido por la Democracia y Bachelet al Partido Socialista, dando cuenta de un corrimiento hacia la izquierda, al interior de la propia coalición.

Finalmente, la llegada de Sebastián Piñera con la Coalición Por el Cambio sí constituyó un cambio importante al traer alternancia efectiva del partido gobernante y, por lo tanto, aumentando la volatilidad.

El caso Brasileño, en consonancia con lo dicho hasta ahora presenta algunas diferencias. En primer lugar, hasta la década del 90' Brasil se encontraba entre los sistemas partidarios más volátiles de la región. No obstante, es justamente a partir

de este momento que comienza a estabilizarse presentando una disminución en la volatilidad (Cruz, 2016:185)

‘Esta evolución coincide con una dinámica -coalicional- de la competencia partidaria brasileira (Power, 2009). Concretamente, PSDB y PT se han posicionado como los principales contendientes en elecciones presidenciales desde mediados de los ‘90, mientras construyen coaliciones electorales amplias detrás de sus candidaturas a la primera magistratura brasileira; sus aliados, por su parte, presentaron candidatos propios al Congreso. Este punto no es menor: la reducción más marcada de la volatilidad se percibe en el análisis de los cargos legislativos, en paralelo a un aumento importante y sostenido en la fragmentación de la cámara’ (Meneguello en Cruz, 2016:184)

La mencionada baja de la volatilidad en el sistema de partidos de Brasil se torna visible al analizar las elecciones al ejecutivo en todo el período 2002-2014, donde se observa un triunfo sostenido de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores. En cuanto al análisis de las alianzas, si bien las coaliciones gobernantes cambiaron sus etiquetas partidarias en diversas elecciones (Coalición Lula Presidente, La Fuerza del Pueblo, Que Brasil Siga Cambiando y Con la Fuerza del Pueblo), la presencia de la alianza PT - PMDB ha permitido una cierta continuidad en la elección al ejecutivo. Sin embargo, esta continuidad y relativamente baja volatilidad no se refleja en el legislativo donde los partidos han realizado caminos diversos (Cruz, 2016:184).

Por su parte, en las elecciones de 2018, el triunfo de “Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos” representa un cambio en las preferencias del electorado dando fin al largo período de gobierno del PT y en la coalición que había permitido la estabilidad del periodo estudiado, aumentando entonces la volatilidad.

No obstante las similitudes, se sigue presenciando una mayor volatilidad que en el caso de Chile, fundamentalmente a la hora de analizar la composición de la coalición gobernante en ambos países. Si bien ambas alianzas -la Concertación en Chile y la encabezada por el PT en Brasil- se mantienen en el poder por un período prolongado, se observa que hubo muchos más cambios en los partidos que la conforman en Brasil que en Chile. En Chile se encuentran prácticamente los mismos partidos dentro de la coalición gobernante durante todo el período estudiado. A excepción de algunas pequeñas variaciones, el partido Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialdemócrata integraron la Con-

certación en todas las elecciones analizadas. En cambio, en Brasil los únicos partidos que se mantienen en la coalición gobernante son el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil y, de manera más limitada, el PMDB en 2010 y 2014, variando de manera significativa el resto de los partidos en cada elección.

Además, a diferencia del caso chileno, la alternancia intrabloque no existió en Brasil reservando siempre el cargo de presidente de la República para el Partido de los Trabajadores.

5. Conclusiones

De esta manera, se podría verificar la hipótesis inicial de que los niveles de polarización, fragmentación y volatilidad fueron mayores en el caso de Brasil que en el de Chile.

En el caso de la fragmentación, Brasil se destaca al presentar un sistema de partidos muy fragmentado donde, en el período analizado, el número de partidos que compiten por el ejecutivo crece en cada elección partiendo de dieciséis partidos en 2002 y alcanzando los treinta y un partidos en 2018. Por el contrario, en Chile se identifica una tendencia a la baja en la cantidad de partidos compitiendo diecisiete en las elecciones de 1989 y trece en las del 2009.

Por otro lado, la polarización fue una característica fundamental del sistema de partidos brasileño en todo el recorte temporal estudiado, teniendo que recurrir a una segunda vuelta en las cinco elecciones analizadas. Sin embargo, se advierte un aumento de la polarización año a año. En las elecciones del año 2002 y 2006, la coalición encabezada por el PT ganó las elecciones con más del 60% de los votos y veintidós puntos de diferencia con su adversario. En cambio, ese margen se reduce de manera significativa en las elecciones del 2010, 2014 y 2018 donde la diferencia entre ambos candidatos es de doce, tres y diez puntos.

Se observa una tendencia similar de aumento de la polarización en el caso de Chile. En las elecciones de 1989 y de 1993, donde la Concertación triunfó sobre su adversario con más de veinticinco puntos de diferencia y alcanzando el 55% de los votos, la polarización puede ser calificada de moderada. En cambio, en las elecciones de 1999, 2005 y 2009 el escenario es diferente. En los tres casos se requirió una segunda vuelta que arrojó resultados mucho más ajustados con solo tres y siete puntos de diferencia entre ambos candidatos, mostrando un contexto mucho más polarizado.

En cuanto a la volatilidad, y en función de los datos analizados, se puede inferir que la volatilidad para la elección al ejecutivo en el periodo estudiado fue baja en ambos casos. Las preferencias del electorado no cambiaron sustancialmente sino hasta la elección que trae alternancia efectiva: la de 2009 en Chile y la del 2018 en Brasil.

6. Bibliografía

COPPEDGE, M. (2000), "La diversidad dinámica de los sistemas de partidos latinoamericanos", en *PostData*, Buenos Aires, N° 6.

CRUZ, F. (2016), "Volatilidad y competitividad electoral en América Latina. Un estudio exploratorio de seis sistemas partidarios" en *Revista COLECCIÓN*, Buenos Aires, N° 26. Último acceso al sitio web: 26/10/2023. <<https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/6899/1/volatilidad-competitividad-electoral-america.pdf>>

AMBOA, R; LÓPEZ, M. A. y BAEZA, J. (2013), "La evolución programática de los partidos chilenos 1970-2009: de la polarización al consenso", en *Revista de ciencia política*, Santiago de Chile, Vol. 33, N° 2. Último acceso al sitio web: 30/11/2022. <<https://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v33n2/art02.pdf>>

MOREIRA, C. (2006), "Sistemas de partidos, alternancia política e ideología en el cono sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay)", en *Revista Uruguaya De Ciencia Política*, Montevideo, Vol 15, N° 1. Fecha de publicación electrónica: 30/10/2018. Último acceso al sitio web: 30/11/2022. <<http://rucp.cienciassociales.edu.uy/index.php/rucp/article/view/249>>

Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. (30 de noviembre de 2022). <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-eleicao-resultados/filtros?p100_current_page=1&session=3998877653022>

Servicio Electoral de Chile. (30 de noviembre de 2022). <<https://www.servel.cl/ecciones-presidenciales-resultados-globales/>>

Rodríguez, Amparo (2024). "Un estudio sobre los cambios en los sistemas de partidos políticos en Chile (1989-2009) y Brasil (2002-2018)", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 309-320.

PARTIDOS DESAFIANTES: EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (BRASIL) Y EL FRENTE AMPLIO (URUGUAY), UN ESTUDIO COMPARADO

Pilar Vilches Giovanardi

(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

1. Introducción

El fenómeno de estudio elegido para el presente artículo comprende a los denominados “Partidos desafiantes en América Latina”, término utilizado por Santiago López en su obra *“Partidos desafiantes en América Latina: representación política y estrategias de competencia de las nuevas oposiciones”* (2005). Los mismos son definidos por el autor como oposiciones emergentes en un contexto de transformaciones del sistema de representación, las cuales no han alcanzado el gobierno, pero compiten por él representando una alternativa a los partidos del statu quo ante la ciudadanía (López, 2005).

Respecto al contexto de transformaciones del sistema de representación, al analizar la situación política de América Latina durante los años ochenta y noventa es posi-

ble observar lo que muchos autores caracterizan como una crisis de representación en torno a los sistemas de partidos. En palabras de Novarro (1998), se trata de un “deterioro del prestigio de los partidos, los parlamentos y otras instituciones ante el electorado, y la pérdida de eficacia consecuente para formar consensos, seleccionar los liderazgos y administrar el poder político” (1998; 2). Dicha transformación es el resultado de lo que Cavarozzi y Casullo (2002) identifican como una doble transición simultánea: por un lado, la evolución del autoritarismo hacia la democracia y, por el otro, el reemplazo de la matriz estado-céntrica por una neoliberal. Las consecuencias de esta dinámica incluyen: una importante desafección política de la sociedad (engendrando niveles más altos de abstención), un incremento en la volatilidad electoral y una caída en los niveles de identificación de los votantes con los partidos del statu quo dada la pérdida de estructuras intermedias entre las dirigencias partidarias y la sociedad (López, 2004; Luna, 2007; Novarro, 1998).

Es aquí justamente donde radica la importancia de los partidos desafiantes emergentes, ya que afloran en una coyuntura propicia para dinamizar la competencia y representar lo que los partidos gobernantes tradicionales no estaban logrando incluir o mantener, presentándose como una alternativa sensata frente a ellos (López, 2005).

Los modelos utilizados en el presente artículo como referentes empíricos del concepto central de partidos desafiantes serán dos unidades de distintos casos nacionales, en concreto: el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Frente Amplio (FA) de Uruguay.

El estudio será de carácter sincrónico abarcando un período de tiempo que comienza desde que cada partido fue la única o la más importante oposición a los partidos tradicionales y finaliza cuando llegan al poder y abandonan su condición de partidos desafiantes, a saber: 1988 a 2002 para el PT brasileño y 1994 a 2004 para el FA uruguayo.

En miras a comparar estos dos actores se observarán seis variables con sus respectivos indicadores, de acuerdo a la propuesta de López (2005):

1. Pautas de cooperación y conflicto: se observará tanto el a) crecimiento electoral como como la b) Posición en el Parlamento
2. Fortaleza de las organizaciones: se considerará la c) disciplina parlamentaria
3. Desarrollo de liderazgos partidarios: para lo cual se tendrá en cuenta el d) desarrollo de liderazgos a nivel nacional

4. Nacionalización del partido: observando el e) Desarrollo territorial electoral
5. Capacidad de representación política: f) Raíces en la sociedad y en sus bases sociales
6. Impacto en la competencia interpartidaria: se considerará la capacidad del partido en la g) Instauración de nuevos clivajes en la competencia

Los casos seleccionados presentan similitudes y diferencias que serán desarrolladas a lo largo del artículo. Entre las principales similitudes entre los casos a analizar se pueden encontrar en la primera variable, en lo que respecta al crecimiento electoral continuo y ascendente; en la segunda, en referencia a la alta disciplina parlamentaria presente en ambos partidos; en la tercera, por la emergencia de liderazgos renovadores y moderados encarnados en las figuras de Lula Da Silva (Brasil) y Tabaré Vázquez (Uruguay); en la cuarta, dada la regionalización de los dos partidos en sus inicios, pero su notoria nacionalización tras la participación en sucesivas elecciones; en la quinta, porque adquieren una importancia vital en sus respectivos sistemas representativos; y, por último, en la sexta, dado que instauran nuevos clivajes en la competencia interpartidaria.

Por su parte, también se reconocen importantes diferencias: en lo que refiere al crecimiento electoral, observamos que mientras que el FA incluyó a diversas fracciones de los partidos tradicionales, el PT se coaligó con partidos alejados del statu quo; también en la posición parlamentaria, donde el FA emprendió una oposición autónoma, el PT se coaligó con otros partidos no tradicionales; respecto a la segunda variable, es posible advertir en el FA una mayor heterogeneidad que en el partido brasileño debido a su alta fraccionalización interna; finalmente, en la quinta variable, si bien ambas fuerzas han crecido desde el sur hacia arriba, el FA se despliega desde su capital.

A modo de hipótesis se sostiene que ambos partidos han logrado, en los períodos de tiempo estudiados, desafiar las estructuras tradicionales de cada caso y erigiéndose como partidos desafiantes exitosos.

2. Análisis de casos

En cuanto a la primera variable, se considerarán el crecimiento electoral y la posición en el Parlamento como indicadores del grado de oposición que el partido desafiante puede ejercer tanto en el escenario electoral como en el parlamentario.

Respecto al primer indicador, en ambos casos se advierte un crecimiento electoral continuo y ascendente. Sin embargo, mientras en sus inicios el PT prefirió competir aislado o coaligado con pequeños partidos de izquierda (Roma, 2006), el FA nació como una coalición de fuerzas partidarias y sociales diversas dentro del arco de la izquierda que, a mediados de la década del 90', incluyó a diversas fracciones de los partidos tradicionales (Altman & Castiglioni, 2008; Queirolo, 2006).

En este marco, para las elecciones de 1989 el PT se alió con el Partido Socialista Brasileiro (PSB) y el Partido Comunista do Brasil (PC do B), los miembros más “estables” dentro del partido hasta su triunfo en 2002, por lo que se los podría considerar el núcleo duro de la coalición (Shore & Lafuente, 2017), obteniendo el 17,2% de los votos en primera vuelta y el 47% en segunda. En 1994, se sumó a la alianza el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Socialista dos Trabalhadores (PSTU) y el Partido Verde (PV), alcanzando el 27%. En 1998 se presentó con el PSB, el PC do B y el Partido Democrático Trabalhista (PDT), alcanzando el 31,7%. Finalmente, se registra un cambio importante en 2002 cuando triunfa en las elecciones: allí se alió al PCB, al PC do B, al Partido da Mobilização Nacional (PMN) y al Partido Liberal (PL), un pequeño partido de derecha que contribuyó con la candidatura del vicepresidente, triunfando en segunda vuelta con el 61,3% (López, 2005; Roma, 2006).

Por su parte, el FA nació como una coalición formada por fuerzas partidarias y sociales diversas de la izquierda uruguaya que han acompañado al partido en algunas elecciones y en otras se han alejado por efecto de escisiones o alianzas entre las distintas facciones. Junto al FA en sí mismo, el Partido Comunista (PCU) y el Partido Socialista (PS) forman parte del núcleo duro, ya que se consideran los únicos miembros sólidos del partido a lo largo de los años (Yaffé, 2013b). Otras fuerzas que han acompañado a la agrupación son: el Partido Demócrata Cristiano, sectores escindidos de los partidos tradicionales como el Movimiento Pregón y el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (del Partido Colorado), el Movimiento Popular Nacionalista (del Partido Nacional), entre otros actores sociales (Queirolo, 2006). Para las elecciones de 1994 y 1999 el FA se adhirió a la plataforma electoral del Encuentro Progresista (EP), alcanzando el 30,6% y el 40,3% de los votos respectivamente. En 2004, la coalición se amplió para incluir a la Nueva Mayoría (NM) y ganar las elecciones con el 51,7% de los votos. (López, 2005; Pastore, 2010).

En cuanto al segundo indicador, ambos partidos crecieron ampliamente en el número de escaños parlamentarios y se opusieron a los presidentes de los partidos del statu quo. La diferencia estuvo en que el PT ejerció una oposición parlamentaria

coaligándose con pequeños partidos de izquierda mientras que el FA lo hizo de manera autónoma.

En el caso brasileño, el total de escaños (diputados federales y senadores) fue creciendo progresivamente: de 36 en 1990, 53 en 1994, 62 en 1998, hasta llegar a 101 en 2002 (Begoña Gerling Sarabia, 2012). Durante estos años, el PT formaba parte del bloque parlamentario de oposición junto con el PC do B y al PDT, considerados sus socios más “fieles”, y otros partidos de oposición más moderada como el PSB y el PPS (Lima Bezerra, 2012).

En el caso uruguayo, el crecimiento de los escaños parlamentarios para el FA también fue en ascenso: obtuvieron 40 en 1994, 52 en 1998 y 68 en 2004 (Corte Electoral de Uruguay, s.f.). Sin embargo, la oposición parlamentaria fue autónoma ya que el partido posee diversas facciones internas, pero en el Parlamento se presentó unificado, enfrentándose a colorados y blancos que formaban coalición y quizás estableciendo alianzas puntuales con la cuarta fuerza (y futura aliada): los nuevospacistas.

En cuanto a la fortaleza de las organizaciones, aunque el FA presenta una amplia heterogeneidad producto de su fraccionamiento interno, es posible advertir una alta disciplina parlamentaria en ambos partidos.

Por un lado, el PT se presenta como un partido fuerte, centralizado y disciplinado, donde se establece un control jerárquico de las decisiones y se prioriza la idea de que el mandato pertenece al partido más que a los representantes (Roma, 2006). De hecho, al calcular el nivel de disciplina del partido mediante la aplicación del Índice Rice a 137 votaciones en el Senado en el período 1989-1994, se obtuvo un elevado promedio de 96 (Chasqueti, 2004).

Por su parte, el FA presenta un alto nivel de fraccionalización producto de las nuevas divisiones nacidas dentro de su propia estructura y del desarrollo de su política de alianzas (la creación del Encuentro Progresista en 1994 y de la Nueva Mayoría en 2002). En efecto, el número de fracciones por elección se ubica en un promedio de 8 y se mantiene en alza hasta 2004, cuando superó las 10 (Yaffé, 2013a). No obstante, la dispersión ideológica moderada (de la izquierda típica hasta la centro-izquierda) se torna un factor favorable a la cohesión legislativa (Buquet & Chasqueti, 2005). Además, el reglamento que rige su bancada parlamentaria limita fuertemente el accionar individual de los legisladores, favoreciendo un desempeño armónico del colectivo (Chasqueti, 2010). Nuevamente, al aplicar el Índice Rice a 137 votaciones en el Senado para calcular el nivel de disciplina en el período 1985-2005, se obtiene

un alto promedio de 97 (Chasquetti, 2004).

Respecto al desarrollo de liderazgos partidarios, tanto en el PT como en el FA se aprecia la emergencia de figuras fuertes con gran alcance nacional que traen consigo una forma distinta y renovada de ejercer el liderazgo, combinando moderación programática y amplios apoyos dentro de sus respectivos partidos.

En el PT, desde los años 80' se estableció la *articulação*, un grupo encabezado por Lula Da Silva y los principales dirigentes sindicales que contaba con el apoyo de las bases populares y que se consolidaría en los años sucesivos como el centro dirigente del partido (Reis, 2007). El liderazgo de Lula fue indiscutido al interior del partido y no hizo más que reforzarse: para el año 2000 cerca del 80% de los miembros del partido que eran funcionarios electos formaban parte de la facción lulista (Samuels, 2004). De la misma forma, su liderazgo se manifestaría hacia afuera ya que se posicionó como el único candidato del PT a las elecciones presidenciales durante todos estos años.

En el caso del FA, la figura de Tabaré Vázquez fue creciendo desde la década de los 90' con el ejercicio del gobierno departamental de Montevideo, hasta transformarse en el candidato presidencial natural de la izquierda desde 1994 y líder del partido dos años después, desplazando a las figuras más destacadas de ese entonces: Líber Seregni y Danilo Astori (Yaffé, 2013a). Un hecho importante lo constituye la creación del Encuentro Progresista en 1994 (el cual Vázquez presidía), ya que le brindó una importante autonomía para implementar sus proyectos renovadores y su estrategia política más moderada (Yaffé, 2013b). Es así que, en lo sucesivo, contó con una amplia coalición de respaldo que le garantizaba la mayoría en la estructura del partido (Yaffé, 2013a).

Respecto a la nacionalización de los partidos, se observa el desarrollo territorial electoral que han tenido el PT y el FA en sus respectivos países para dar cuenta que ambos han admitido una regionalización en sus inicios; no obstante, tras participar en sucesivas elecciones, pueden ser considerados partidos nacionales.

De acuerdo con Lucca (2011), el desempeño electoral del PT en sus primeras elecciones estuvo concentrado principalmente en los centros industriales urbanos de San Pablo, siendo inexpresivo en el plano federal. Sin embargo, para la década del 90 esta situación cambia y el partido logra nacionalizarse, volviéndose relevante en 2/3 o más de los estados brasileños para las distintas instancias de representación electoral (legislativos estatales, gobierno de los estados, cámara federal, presidencia),

según los datos brindados por Celso Roma (2006).

El FA siguió una dinámica similar, naciendo como una fuerza montevideana para luego extenderse hacia el resto del país. En este sentido, la obtención de la intendencia de Montevideo en 1990 le permitió consolidarse como una fuerza estrictamente urbana y como partido predominante en el departamento más importante y poblado del país (Cruz, 2010). Pese a esto, a partir de 1994 el partido comienza a crecer ininterrumpidamente en el interior, pasando de una distribución de votos en elecciones nacionales Montevideo-Interior 65% - 35% en 1994 a una 50.3% - 49.7% en 2004 (Lanzaro, 2016).

Sobre la capacidad de representación política de los partidos, se toman en cuenta las raíces en la sociedad y en sus bases sociales. En relación a ello, se advierte que ambos partidos han tenido una importancia vital en el sistema representativo, siendo que: sus votos para los cargos ejecutivos y legislativos han crecido proporcionalmente, cuentan con una base social que se nutre de los movimientos sociales y sindicales, y han crecido desde el sur hacia arriba (con la salvedad de que en el caso del FA se despliega desde su capital).

Tal como demuestra Begoña Gerling Sarabia (2012), los escaños legislativos del PT crecieron junto a su desempeño en la arena ejecutiva: de 36 en 1990 a 101 en 2002. Asimismo, el partido estuvo acompañado desde sus orígenes por diferentes grupos de la sociedad civil como sindicatos, núcleos de base, sectoriales y otras organizaciones. Entre ellas es posible mencionar a la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Fuerza Sindical (FS), el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Confederación General de los Trabajadores (CGT) (Marroquín, 2013).

De la misma manera, según las estadísticas de la Corte Electoral de Uruguay (s.f.), el FA pasó de 40 escaños legislativos en 1994 a 68 en 2004, mostrando una tendencia ascendente como en los votos ejecutivos. Igualmente, esta combinación de partido y movimiento se complementó en sus inicios con el sindicalismo, las federaciones estudiantiles y otros actores sociales, presentándose como un representante popular y aliándose con los actores no gubernamentales especialmente en el ámbito de las políticas sociales (Altman & Castiglioni, 2008).

Por último, en referencia al impacto en la competencia interpartidaria, se parte de la clasificación de partidos políticos realizada por Coppedge (1997) para afirmar que tanto el PT como el FA han instaurado nuevos clivajes, estableciéndose como partidos seculares de izquierda pero adoptando una posición más moderada con el correr de los años en pos de maximizar su caudal electoral.

En el caso brasileño, los puntos programáticos fundamentales del partido petista en sus inicios estaban fuertemente ligados al socialismo, entre ellos: apuntar a una sociedad sin clases de explotados y explotadores, la anulación de la deuda externa, una reforma agraria radical, la no privatización de empresas estatales (Reis, 2007; Roma, 2006). Sin embargo, ya desde la campaña de 1994 comenzaría a moderar su discurso político y, en especial durante el año electoral de 2002, a adoptar una amplia estrategia de “búsqueda de votos”. El lema “Lulinha paz y amor”, la Carta a los brasileños de 2002 (donde Lula se oponía a soluciones radicales y unilaterales y se comprometía a mantener elementos “neoliberales” claves del programa económico de Cardoso) y la alianza con el Partido Liberal de derecha, expresaban bien ese cambio (Reis, 2007; Samuels, 2004).

Lo mismo sucedió en el caso uruguayo, donde el FA fue abandonando sus posiciones radicales originales a través de la combinación de moderación ideológica y programática con la construcción de alianzas con socios de centroizquierda (Yaffé, 2013a). De esta forma, sin abandonar la izquierda ni la oposición fuerte hacia los partidos tradicionales, el FA se fue expandiendo hacia el centro y, en su avance, logró construir una coalición mayor que involucró al EP primero y a NM después, pero siempre manteniéndose en el eje (Garcé & Yaffé, 2014). El lema “cambiemos” utilizado durante la campaña de 2004 del EP-FA-NM da cuenta precisamente de esta transformación (Altman & Castiglioni, 2006).

3. Conclusión

Para finalizar, se puede concluir que tanto el PT en Brasil como el FA en Uruguay se han posicionado como partidos desafiantes ya que han logrado un crecimiento continuo y ascendente a lo largo de los años, estableciéndose como oposiciones reconocidas por los partidos del statu quo e incluso muchas veces como fuerzas mayoritarias en el Parlamento.

Además, han sabido modificar sus estrategias de competencia, moderando sus programas y discursos, corriéndose hacia el centro del espectro ideológico y ampliando sus bases electorales, hasta alcanzar el poder y abandonar su condición de desafiantes.

Por todo esto, ambos casos pueden considerarse exitosos en tanto se volvieron actores relevantes y estables para las democracias nacientes. Relevantes porque han

logrado combinar una mayor institucionalización del sistema de partidos y nuevos ejes de competencia política interpartidaria, lo cual terminó fortaleciendo al sistema de representación política en su conjunto; y estables porque pudieron mantenerse como actores relevantes durante un período considerable, lo que denota una transformación en el sistema de partidos (López, 2005).

4. Bibliografía

ALTMAN, D., & CASTIGLIONI, R. (2006), "The 2004 Uruguayan elections: A political earthquake foretold", en *Electoral Studies*, Vol. 25, N° 1, 147-154. DOI: <https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2005.06.005>

ALTMAN, D., & CASTIGLIONI, R. (2008), "Uruguay: A role model for the Left?" en J. G. CASTAÑEDA, & M. A. MORALES (Ed.), *Leftovers. Tales of the Latin American Left*, Nueva York, Routledge.

BEGOÑA GERLING SARABIA, M. (2012), "*La institucionalización de los partidos de izquierda en América Latina: el caso del PT de Brasil, el FMLN de El Salvador y el MAS de Bolivia desde una perspectiva comparada*". [Tesis de licenciatura, Colegio de San Luis]. Repositorio Institucional de COLSAN.

BUQUET, D. & CHASQUETTI, D. (2005), "Elecciones Uruguay 2004: descifrando el cambio", en *Revista de ciencia política*, Vol. 25, N° 2, 143-152. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2005000200006>

CAVAROZZI, M. & CASULLO, E. (2002), "Los Partidos Políticos en América Latina Hoy: ¿Consolidación o Crisis?" en M. CAVAROZZI y J. M. ABAL MEDINA (comps.) *El Ase-dio a la Política: Los Partidos Latinoamericanos en la Era Neoliberal*, HomoSapiens Ediciones.

CHASQUETTI, D. (2004), "Presidente fuerte, partido fragmentado y disciplina legislativa en Uruguay: los desafíos institucionales del gobierno del Frente Amplio", en *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, Vol. 34, N° 1-2, 43-63. DOI: <http://doi.org/10.16993/iberoamericana.383>

CHASQUETTI, D. (2010), "*Carreras legislativas en Uruguay: Un estudio sobre reglas, partidos y legisladores en las Cámaras*". [Tesis de Doctorado, Universidad de la República].

COPPEDGE, M. (1997), "A Classification of Latin American Political Parties", en *Helen Kellogg Institute for International Studies*, Working Paper N° 244.

CORTE ELECTORAL. (s.f), *Estadísticas*. República Oriental del Uruguay. <<https://www.corteelectoral.gub.uy/estadisticas/estadisticas/estadisticas>>

CRUZ, F. (2010), "Relaciones e interacciones partidarias en coaliciones de gobierno. Los casos de la Alianza, la Concertación y el Frente Amplio", en *V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.

GARCÉ, A. & YAFFÉ, J. (2014), "*La era progresista: hacia un nuevo modelo de desarrollo: tercer acto*", Montevideo, Fin de Siglo.

LANZARO, J. (2016), "Frente Amplio: predominio político e implantación ideológica en una democracia plural y competitiva", en *Instituto de Ciencia Política*, 167–195.

LIMA BEZERRA, G. M. (2012), "*A Oposição nos Governos FHC e Lula: Um Balanço da Atuação Parlamentar na Câmara dos Deputados*". [Tesis de Maestría, Universidad Federal de Rio Grande do Sul].

LÓPEZ, S. (2004), "*Partidos desafiantes en América Latina*" [Tesis de Licenciatura, Universidad de la República]

LÓPEZ, S. (2005), "Partidos desafiantes en América Latina: representación política y estrategias de competencia de las nuevas oposiciones", en *Revista de ciencia política*, Vol. 25, N° 2, 37-64. DOI: <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2005000200002>>

LUCCA, J. B. (2011), "*Estudio comparado de la identidad partidaria sindical durante el gobierno de Lula da Silva, Brasil, 2003 - 2006 y de Néstor Kirchner, Argentina, 2003 - 2007*". [Tesis de doctorado, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales]. Repositorio DSpace.

LUNA, J. P. (2007), "Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y una propuesta de agenda", en *Política y gobierno*, Vol. 14, N° 2, 391-435.

MARROQUÍN, W. E. (2013), "Análisis comparado del desarrollo organizativo de dos partidos políticos de izquierda, de América Latina: el PT de Brasil y el FMLN de El Salvador", en *ECA: Estudios Centroamericanos*, Vol. 68, N° 733, 135–148. DOI: <https://doi.org/10.51378/ECA.V68I733.3331>

NOVARO, M. (1998), “La crisis de representación y las nuevas alternativas en la ciudad de Buenos Aires. Un análisis comparado sobre la centroizquierda en ciudades de América Latina”, en *XXI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos*, Chicago.

PASTORE, M. (2010), “El Frente Amplio y la calidad democrática en Uruguay”, en *V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política*. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.

QUEIROLO, R. (2006), “Las elecciones uruguayas de 2004: la izquierda como la única oposición creíble”, en *Colombia Internacional*, N° 64, 34-49.

REIS, D. A. (2007) *O Partido dos Trabalhadores: trajetória, metamorfoses, perspectivas*.

ROMA, C. (2006), “Organizaciones de partido en Brasil: el PT y el PSDB bajo perspectiva comparada”, en *América Latina Hoy*, Vol. 44, 153-184. DOI: <https://doi.org/10.14201/alh.2482>

SAMUELS, D. (2004), “From Socialism to Social Democracy: Party Organization and the Transformation of the Workers’ Party in Brazil”, en *Comparative Political Studies*, Vol. 37, N°9, 999–1024. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010414004268856>

SHORE, W. & LAFUENTE, A. (2-5 de agosto de 2017), “Coaliciones electorales en América Latina: un análisis de su institucionalización a partir del caso de Argentina, Chile y Brasil” [Ponencia] en XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: La política en entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática. Sociedad Argentina de Análisis Político & Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires.

YAFFÉ, J. (2013a), “Competencia interna y adaptación partidaria en el frente amplio de Uruguay”, en *Perfiles Latinoamericanos*, Vol. 21, N° 41, 71-94.

YAFFÉ, J. (2013b), “Consolidación y transformación partidaria. Institucionalización, liderazgo y capacidad de adaptación en el Frente Amplio de Uruguay”, en *Iberoamericana*, Vol. 13, N° 50, 7-26. DOI: <https://doi.org/10.18441/ibam.13.2013.50.7-26>

Vilches Giovanardi, Pilar (2024). “Partidos desafiantes: el Partido de los Trabajadores (Brasil) y el Frente Amplio (Uruguay), un estudio comparado”, en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 321-331.

EPÍLOGO: HAY QUE COMPARAR PARA COMPRENDER

Karolina Gilas
(Universidad Nacional Autónoma
de México, México)

El enfoque de la política comparada es una metodología fundamental dentro de la disciplina de la ciencia política. Este enfoque es fundamental para comprender la amplia gama de dinámicas, instituciones y comportamientos políticos que existen —y han existido— en todo el mundo y en distintos momentos. Mediante el análisis comparativo, las y los politólogos podemos identificar patrones y variaciones en los procesos políticos, contribuyendo al desarrollo de teorías que explican cómo funcionan y evolucionan los sistemas políticos en su conjunto, partes específicas de estos, o, en realidad, prácticamente cualquier otro fenómeno de interés para nuestro campo.

El enfoque comparativo tiene sus raíces en la búsqueda de la comprensión de la naturaleza y la función de las entidades políticas y su impacto en la sociedad. Como afirmó Lijphart (1971), “la política comparada es el estudio de las formas de las organizaciones políticas, sus propiedades y las consecuencias de los diferentes conjuntos de instituciones políticas” (p. 682). Esta definición subraya la importancia de la política comparada para examinar los aspectos estructurales y funcionales de los

sistemas políticos. Precisamente desde esta perspectiva se han realizado algunas de las aportaciones más importantes para la ciencia política, incluyendo

Una de las principales aportaciones de la política comparada es su capacidad para proporcionar información sobre las condiciones que fomentan la estabilidad democrática y los factores que precipitan el declive democrático. Por ejemplo, Linz y Stepan (1996) han argumentado que la consolidación de la democracia requiere no sólo elecciones libres y justas, sino también el desarrollo de una sociedad civil, el Estado de Derecho, una burocracia funcional y una sociedad económica que apoye la democracia. Mediante el análisis comparativo, los investigadores pueden evaluar cómo se manifiestan estos factores en diferentes contextos y su importancia relativa para el desarrollo democrático. La política comparada también permite poner a prueba las teorías políticas en diversos casos. Por ejemplo, la teoría de la modernización, que sugiere que el desarrollo económico conduce a la democratización, ha sido ampliamente probada a través de métodos comparativos. Estudios como los de Lipset (1959) han proporcionado apoyo empírico a esta teoría, mientras que otros han señalado importantes excepciones y complejidades (Przeworski et al., 2000).

Además, el enfoque comparativo tiene un valor incalculable en el estudio de las instituciones políticas y su impacto en el comportamiento político y los resultados de las políticas. El trabajo seminal de March y Olsen (1984) sobre el “nuevo institucionalismo” en la ciencia política hace hincapié en el papel de las instituciones en la configuración de las acciones y los resultados políticos. La política comparada permite a los estudiosos examinar cómo influyen las distintas disposiciones institucionales, como los sistemas electorales o las relaciones ejecutivo-legislativo, en la elaboración de políticas y la gobernanza.

El campo de la política comparada en América Latina ha sido fundamental en la contribución a la disciplina más amplia de la ciencia política al ofrecer un rico tapiz de experiencias y desarrollos políticos. Los diversos paisajes políticos de América Latina, marcados por una historia de colonialismo, olas de autoritarismo y democratización, convulsiones económicas y vibrantes movimientos sociales, proporcionan un terreno fértil para el análisis político comparado.

La importancia de la política comparada en América Latina puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, la región presenta una oportunidad única para estudiar los procesos de cambio de régimen y consolidación democrática. Como señalan O'Donnell, Schmitter y Whitehead (1986) en su obra seminal sobre las transiciones desde regímenes autoritarios, las experiencias de América Latina con la democrati-

zación a finales del siglo XX han sido fundamentales para comprender las complejidades y las diversas vías por las que evolucionan los regímenes políticos.

En segundo lugar, el desarrollo de la política comparada en América Latina ha estado estrechamente vinculado al examen del papel de las instituciones en el desarrollo político y económico. Los trabajos de estudiosos como Juan Linz y Alfred Stepan han sido cruciales para analizar las condiciones institucionales necesarias para la existencia de democracias estables en la región. Su análisis del presidencialismo frente al parlamentarismo, por ejemplo, ha suscitado un amplio debate sobre los diseños institucionales más propicios para la gobernabilidad democrática en América Latina (Linz & Valenzuela, 1994).

Además, el estudio de los movimientos sociales y sus implicaciones políticas ha sido un aspecto significativo de la política comparada en América Latina. La rica historia de movilización social de la región, desde los movimientos obreros hasta las campañas por los derechos de los indígenas, ha permitido comprender mejor la relación entre la sociedad civil y el cambio político. El levantamiento zapatista en México, por ejemplo, ha sido estudiado por sus implicaciones sobre los derechos indígenas y su desafío al Estado, reflejando temas más amplios de justicia social y representación política (Harvey, 1998).

En América Latina y en el mundo, la perspectiva comparada también ha resultado fundamental para las investigaciones feministas, interesadas en entender cómo las relaciones de poder de género se manifiestan y varían a través de diferentes contextos políticos. El método comparado permitió identificar cómo se construyen estas dinámicas de poder y cómo pueden diferir o coincidir en diversas culturas y sistemas políticos, reconociendo la heterogeneidad de las experiencias de las mujeres, desafiando la noción de que las mujeres constituyen un grupo homogéneo y subrayando la influencia de factores como la raza, la clase y la etnia en sus vidas políticas (Beckwith, 2005; Waylen, 2006).

La investigación comparativa feminista es también una herramienta poderosa contra el etnocentrismo en la ciencia política, promoviendo un entendimiento más profundo de las experiencias políticas de las mujeres más allá de los marcos occidentales. Al aplicar este enfoque, los estudios feministas lograron evaluar la relevancia de teorías políticas en distintos entornos y contribuir a la formulación de políticas que fomenten la igualdad de género, como las cuotas y la paridad en representación femenina en la política (Hawkesworth, 2006; Paxton & Hughes, 2016; Freidenberg y Gilas, 2022).

En términos de metodología, la política comparada ha evolucionado para incluir análisis cualitativos y cuantitativos. Los estudios de casos, el análisis histórico comparativo y los análisis estadísticos transnacionales forman parte del conjunto de herramientas metodológicas que permiten una comprensión global de los fenómenos políticos. Por un lado, el desarrollo de conjuntos de datos como la Encuesta Mundial de Valores y el Proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) ha facilitado la investigación comparativa cuantitativa, permitiendo una comprobación más sistemática y rigurosa de las hipótesis. Por el otro, el avance del análisis cualitativo comparado (QCA) permite a los investigadores comparar sistemáticamente fenómenos complejos e identificar combinaciones de condiciones causales que conducen a un resultado concreto, reconociendo que los fenómenos sociales son a menudo el resultado de múltiples factores que se entrecruzan (Ragin, 2014).

El enfoque de la política comparada, entonces, es indispensable para el campo de la ciencia política. Proporciona un marco estructurado para analizar y comprender las complejidades de los sistemas y comportamientos políticos en distintos contextos. Al permitir el examen transnacional e intertemporal de los fenómenos políticos, contribuye al desarrollo de teorías sólidas e informa la práctica del análisis político. A pesar de los recientes avances en los métodos de investigación experimentales, análisis de *Big Data*, modelos de ML (*Machine Learning*), etnografía digital y análisis de redes, el método comparado sigue siendo el fundamento de la investigación en ciencia política. Solo al comparar logramos comprender más a profundidad el mundo político y social.

Más allá de cualquier duda, el método comparativo constituye un pilar esencial dentro del campo de la ciencia política, especialmente en un contexto globalizado donde los fenómenos políticos trascienden las fronteras nacionales. La enseñanza de este método en la currícula de ciencia política resulta entonces crucial, y por varias razones. Primero, el método comparativo permite a las y los estudiantes entender y explicar cómo y por qué diferentes sistemas políticos operan y evolucionan. Facilita la identificación de patrones, procesos y relaciones causales entre fenómenos políticos, a la vez que promueve una comprensión más profunda de la política a través de la lente de diversas experiencias nacionales y culturas.

Segundo, este método promueve el pensamiento crítico y analítico, habilidades esenciales para cualquier científico social. Permite a las y los estudiantes cuestionar supuestos y generalizaciones simplistas, alentar el escrutinio de datos y teorías, y desarrollar argumentos más sólidos y matizados basados en evidencia comparativa.

Tercero, el método comparado es esencial para la teorización en ciencia política. A través de la comparación, las y los estudiantes pueden desarrollar, probar y refinar teorías políticas, contribuyendo al cuerpo de conocimiento científico con perspectivas innovadoras e integradoras que abarcan diversas realidades políticas. Comparar les permite comprender el proceso de la investigación en sí mismo, y a los fenómenos políticos del mundo que les rodea.

El presente volumen, *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, editado por Juan Bautista Lucca, Cintia Pinillos, María Laura Sartor Schiavoni y Esteban Iglesias, profesores de la carrera de ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es, en este contexto, un libro único.

Esta publicación, que recopila investigaciones realizadas por estudiantes de ciencia política, representa un recurso valioso que trasciende los beneficios pedagógicos inmediatos y se adentra en el ámbito del desarrollo profesional y académico. La experiencia de la investigación y la posterior publicación proporciona una oportunidad inigualable para que las y los estudiantes apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos en el aula, profundizando su comprensión de los métodos científicos y las teorías políticas. A través de este proceso, las y los estudiantes adquieren habilidades analíticas y metodológicas que son fundamentales para su futura carrera como politólogas y politólogos.

La elaboración de trabajos que serán sometidos a la evaluación y el escrutinio del proceso editorial y académico desafía a las y los estudiantes a alcanzar un nivel de rigurosidad y claridad en su escritura, así como una solidez en su argumentación que va más allá de lo que se espera en los trabajos de curso. La retroalimentación que reciben durante este proceso es invaluable, ya que les permite refinar su pensamiento crítico y su habilidad para comunicar ideas complejas de manera efectiva.

Además, la publicación de sus investigaciones en un volumen académico confiere a las y los estudiantes una visibilidad y un reconocimiento que no se limitan al ámbito universitario, sino que se extienden a la comunidad científica y, potencialmente, a tomadores de decisiones y practicantes en el campo de la política.

El volumen también sirve como un testamento del compromiso de la institución educativa con la investigación aplicada y con la formación de una nueva generación de científicos políticos. A su vez, refleja un esfuerzo por democratizar el conocimiento, permitiendo que las voces emergentes y los nuevos enfoques teóricos encuen-

tren un espacio en el discurso académico dominado tradicionalmente por académicos más establecidos.

Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada, una colección de estudios realizados por estudiantes de ciencia política, se centra en tres temáticas críticas dentro del ámbito político latinoamericano y global: elecciones, partidos políticos y sistemas de partidos, desde una perspectiva comparada. Estas áreas reflejan no solo el dinamismo de las democracias contemporáneas, sino también sus desafíos inherentes, tales como la aparición de opciones electorales radicales, el papel de los partidos en la transformación política y los cambios en los sistemas de partidos frente a las fuerzas desinstitucionalizadoras.

La primera sección aborda las elecciones, un pilar de la democracia representativa. Aquí, los trabajos reflejan un interés en cómo eventos electorales recientes, como las elecciones argentinas durante la administración de Macri y las elecciones de 2023 en México, Paraguay y Argentina, pueden ser comprendidos dentro de los marcos políticos y sociales más amplios. Este análisis incluye, implícitamente, la evaluación de cómo los procesos electorales reflejan y modelan la representación política y la participación ciudadana en democracias tanto consolidadas como en transición.

La segunda sección se sumerge en los partidos políticos, que son instrumentos fundamentales para la articulación de intereses y la agregación de demandas políticas en la sociedad. Los capítulos en esta sección exploran una variedad de partidos y movimientos políticos en América Latina, desde el Movimiento Al Socialismo en Bolivia hasta el Frente Amplio en Uruguay, y cómo han evolucionado desde sus orígenes hasta llegar al poder o cómo se han mantenido como fuerzas políticas relevantes. Estos estudios pueden ilustrar cómo los partidos políticos se adaptan, se transforman y, en algunos casos, perpetúan dentro de sus respectivos sistemas políticos.

La tercera y última sección examina los sistemas de partidos, que reflejan el entramado y la dinámica de competencia política en un estado. El enfoque en los sistemas de partidos desinstitucionalizados en Perú y Ecuador y el estudio de partidos desafiantes en Brasil y Uruguay ofrece una perspectiva crítica sobre cómo los partidos emergentes pueden desafiar a los actores establecidos y cómo esto afecta la estabilidad y la institucionalidad de los sistemas de partidos.

El análisis de estos temas no solo es relevante para entender el estado actual de las democracias en la región, sino que también ofrece un rico terreno para la exploración de teorías políticas contemporáneas. Las contribuciones en este libro propor-

cionan un terreno fértil para la discusión académica y la investigación futura, ofreciendo aportaciones empíricas y teóricas que pueden servir como referencia para comprender las complejidades y singularidades de la política latinoamericana.

Para el campo de la ciencia política, el volumen enriquece la literatura existente, aportando perspectivas frescas y datos empíricos que pueden ser de interés tanto para académicos como para profesionales del área. Los trabajos contenidos en el libro pueden servir de base para futuras investigaciones, promoviendo así un ciclo virtuoso de indagación y descubrimiento. En resumen, este volumen no solo representa un logro académico para las y los estudiantes involucrados, sino que también constituye una contribución significativa a la disciplina de la ciencia política y al entendimiento de los procesos políticos en la región y más allá.

La culminación de este volumen es testimonio del ardor intelectual y el compromiso con la excelencia académica por parte de las y los estudiantes que han aportado su investigación a este compendio. Cada capítulo es un reflejo de incontables horas de estudio, análisis y escritura meticulosa. Las y los estudiantes han navegado por la complejidad de teorías y metodologías con destreza, demostrando no solo su capacidad para la investigación rigurosa, sino también su pasión por contribuir al cuerpo de conocimiento en el campo de la ciencia política. Su trabajo evidencia una madurez académica admirable y una curiosidad intelectual que, sin duda, augura futuras contribuciones significativas al ámbito de las ciencias sociales.

Las y los profesores y editores que han guiado este proceso merecen un reconocimiento especial por su dedicación al cultivo del talento y la erudición. Han actuado no solo como instructores, sino como mentores, editores y, a menudo, como colegas, en el proceso de investigación. Sus conocimientos, paciencia y perspicacia han sido cruciales en la transformación de ideas iniciales en estudios refinados y dignos de publicación. Han proporcionado una plataforma para que las voces emergentes sean escuchadas, desempeñando un papel indispensable en la construcción de una comunidad académica más inclusiva y diversa.

Este volumen, por lo tanto, no es solo una colección de trabajos estudiantiles; es una celebración de la colaboración académica y del incansable esfuerzo de todos los involucrados. Las y los estudiantes y sus profesores-editores han establecido un estándar de excelencia e integridad que resonará en futuras generaciones y que fortalecerá las bases de la ciencia política como disciplina comprometida con el avance del conocimiento y la comprensión de nuestra realidad política. Las y los profesores que han impulsado a sus estudiantes a emprender este esfuerzo les han dejado

una de las lecciones más valiosas para la ciencia política: les enseñaron que hay que comparar para comprender.

Bibliografía

BECKWITH, K. (2005). A Common Language of Gender? *Politics & Gender*, 1(1), 128-137.

CARDOSO, F. H., & FALETTO, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press.

COPPEDGE, M., GERRING, J., KNUTSEN, C. H., LINDBERG, S. I., SKAANING, S. E., TEORELL, J., & ZIBLATT, D. (2020). *V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v10*. Varieties of Democracy (V-Dem) Project.

FREIDENBERG, F., & GILAS, K. (Eds.). (2022). *La construcción de democracias paritarias en América Latina: Régimen electoral de género, actores críticos y representación descriptiva de las mujeres (1990-2022)*. INE, IIJ-UNAM e IIDH/CAPEL.

HAWKESWORTH, M. (2006). *Globalization and Feminist Activism*. Rowman & Littlefield.

HARVEY, N. (1998). The Zapatista effect: The Internet and the rise of an alternative political fabric. *Journal of International Affairs*, 51(2), 621-640.

MARCH, J. G., & OLSEN, J. P. (1984). *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life*. *American Political Science Review*, 78(3), 734-749.

LIJPHART, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682-693.

LINZ, J. J., & STEPAN, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Johns Hopkins University Press.

LINZ, J. J., & VALENZUELA, A. (Eds.). (1994). *The Failure of Presidential Democracy*. Johns Hopkins University Press.

LIPSET, S. M. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development

and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53(1), 69-105.

O'DONNELL, G., SCHMITTER, P. C., & WHITEHEAD, L. (Eds.). (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy*. Johns Hopkins University Press.

PRZEWORSKI, A., ALVAREZ, M. E., CHEIBUB, J. A., & LIMONGI, F. (2000). *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990*. Cambridge University Press.

PAXTON, P., & HUGHES, M. M. (2016). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. CQ Press.

RAGIN, C. (2014). *The comparative method. Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. University of California Press.

WAYLEN, G. (2006). You Still Don't Understand: Why Troubled Engagements Continue between Feminists and (Critical) IPE. *Review of International Studies*, 32(1), 145-164.

Gilas, Karolina (2024). "Epílogo: Hay que comparar para comprender", en *Elecciones, partidos y sistemas de partidos en perspectiva comparada*, compilado por J. B. Lucca, C. Pinillos, M. L. Sartor Schiavoni y E. Iglesias. UNR Editora, Rosario. Páginas 332-340.

ELECCIONES, PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS EN PERSPECTIVA COMPARADA

Juan Bautista Lucca, Cintia Pinillos,
María Laura Sartor Schiavoni
y Esteban Iglesias
COMPILADORES

Organiza: Cátedra de Elecciones y Partidos Políticos. Cátedra de Política Comparada I y Centro de Estudios Comparados (CEC)

